



Informe sobre el estado de situación de Los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador 2015





Informe sobre el estado de situación de los derechos de la niñez y la adolescencia en El Salvador 2015

Consejo Directivo del CONNA (Junio 2015-junio 2017)

Presidente del Consejo Directivo

Ing. Roberto de Jesús Solórzano

Viceministro de Hacienda

Representantes de Instituciones del Estado

Propietarios (as)

Lic. Carlos Cáceres Chávez

Ministro de Hacienda

Lic. Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde

Ministro de Justicia y Seguridad Pública

Ing. Carlos Mauricio Canjura

Ministro de Educación

Licda. Sandra Guevara

Ministra de Trabajo y Previsión Social

Dra. Violeta Menjívar

Ministra de Salud

Licda. Sonia Elizabeth Cortez de Madriz

Procuradora General de la República

Suplentes

Ing. Luis Roberto Flores Hidalgo

Viceministro de Justicia y Seguridad Pública

Lic. Francisco Castaneda

Viceministro de Educación

Lic. Oscar Armando Morales

Viceministro de Trabajo y Previsión Social

Dr. Julio Robles Ticas

Viceministro de Salud

Licda. Sara del Carmen Guardado Gómez

Procuradora General Adjunta

Representación de COMURES

Licda. Zoila Milagro Navas

Presidenta de COMURES

Representantes de la Sociedad Civil

Propietarios (as)

Licda. Alicia del Carmen Ávila de Parada

Fundación Educación y Cooperación, EDUCO

Licda. María Martta Portillo de Álvarez

Fundación Pro Obras de Promoción Humana
Siervas de Dios Madre Dolores Medina

Dr. Adolfo Vidal Cruz

PLAN International, INC.

Licda. Gloria Guadalupe Ventura de Huevo

Iglesia Evangélica Amor y Esperanza

Suplentes

Ing. José Luis Sanabria Bonilla

Fundación de Apoyo Familiar, FUNDAFAM

Licda. Celia Yaneth Medrano

Asociación de Desarrollo Voces Madres de Niñas,
Niños y Adolescentes con Discapacidad

Lic. José Francisco Lira Alvarado

Asociación de Municipios Microrregión del
Bálsamo

Lic. Francisco Javier Carranza Ramírez

Fundación Silencio, FUNDASIL

**Directora Ejecutiva y
Secretaria del Consejo Directivo**

Licda. Zaira Lis Navas Umaña

Licda. Zaira Lis Navas Umaña
Directora Ejecutiva del CONNA

Coordinación y revisión:

Lic. Manuel Santos
Licda. Carolina Manzano

Sistematización de la información:

Licda. Carmen Blanco
Lic. Alejandro Arce
Lic. Luis Ventoza
Licda. Ana Silvia Aráuz

Portada: Tarjeta elaborada por mujeres adolescentes del Programa de Filigrana del Centro para la Inserción Social de Ilopango. ISNA.

Este documento ha sido producido por el CONNA. Todos los derechos reservados. Se autoriza la reproducción y difusión del material contenido en este producto para fines educativos u otros fines no comerciales sin previa autorización escrita de los titulares de los derechos del autor, siempre que se especifique la fuente.

Índice General

Siglas y Acrónimos	10
Presentación	11
Introducción	13
1. Caracterización Socio Demográfica y Entorno Social de las Niñas, Niños y Adolescentes.....	15
2. Derechos de Supervivencia y Crecimiento Integral.....	19
2.1 Avances en el cumplimiento de los derechos de supervivencia y crecimiento integral	20
a) Derecho a la vida.....	20
b) Derecho a una vida digna	28
c) Derecho a la salud	32
d) Derecho a la lactancia materna	40
e) Derecho a un medio ambiente sano	41
2.2 Acciones de política pública para el cumplimiento de los derechos de supervivencia y crecimiento integral	43
2.3 Principales retos y desafíos en el cumplimiento de los derechos de supervivencia y crecimiento integral	46
3. Derechos de Protección.....	51
3.1 Amenazas y vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.	52
a) Derecho a la integridad personal.....	52
b) Protección frente a la trata	57
c) Protección especial frente al traslado y la retención ilícitos.....	58
d) Derechos de las personas adolescentes sujetos a responsabilidad penal	62
e) Adolescentes privados de libertad	66
f) Trabajo infantil y protección frente al trabajo.....	68
g) Trabajo permitido.....	70
3.2 Instancias de protección ante vulneraciones y amenazas a los derechos de niñas, niños y adolescentes.....	73
3.3 Acciones de política pública y mecanismos de coordinación para la protección a derechos de niñas, niños y adolescentes.....	77
3.4 Principales retos y desafíos para garantizar la protección especial ante vulneraciones y amenazas a derechos	81
4. Derechos al Desarrollo	87

4.1	Avances en el cumplimiento de los derechos al desarrollo	88
a)	Derecho a la identidad y a la identificación	88
b)	Derecho a ser criado en familia.....	91
c)	Derecho a la educación y cultura	96
4.2	Acciones de política pública en favor del cumplimiento de los derechos al desarrollo	115
4.3	Principales retos y desafíos para el cumplimiento de los derechos al desarrollo	119
5.	Derechos de Participación	123
5.1	Avance en el cumplimiento de los derechos de participación	125
a)	Derecho de petición.....	125
b)	Derecho a opinar y ser oído.....	127
c)	Acceso a la información	127
d)	Protección frente a información nociva o inadecuada	128
e)	Libertad de reunión y de asociación	129
f)	Obligación de los medios de comunicación	130
5.2	Acciones de política pública en favor del cumplimiento de los derechos de participación	132
5.3	Principales retos y desafíos para el cumplimiento de los derechos de participación.....	133
	Conclusiones	135
	Bibliografía	135

Índice de Gráficos

Gráfico 1. Población de 0 a 17 años por rango de edad y sexo, 2015.....	15
Gráfico 2. Tasa anual de homicidios, 2011-2015	21
Gráfico 3. Homicidios en niñas, niños y adolescentes por tipo de arma utilizada, 2013-2015	22
Gráfico 4. Suicidios en niñas, niños y adolescentes por sexo y rango de edad, 2014-2015	23
Gráfico 5. Tipo de suicidio de niñas, niños y adolescentes según sexo, 2014-2015	24
Gráfico 6. Tendencias de las tasas de mortalidad en niñas y niños, 2009-2015	25
Gráfico 7. Razón de mortalidad materna, 2009-2015.....	26
Gráfico 8. Porcentaje de cobertura de inscripción prenatal y posnatal de mujeres de 10 a 49 años, 2009-2015	27
Gráfico 9. Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en mujeres de 10 a 49 años, 2009-2015	28
Gráfico 10. Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema por zona, 2011-2015	29
Gráfico 11. Hogares salvadoreños por condición de pobreza multidimensional según presencia de niñas y niños, 2014.....	30
Gráfico 12. Porcentaje de hogares con niñas, niños y adolescentes clasificados como pobres por tipo de privaciones, 2014.....	31
Gráfico 13. Número y porcentaje de niñas y niños con bajo peso al nacer, 2009-2015.....	33
Gráfico 14. Cobertura de inscripción infantil de niñas y niños antes de los 28 días y un año de edad en el Sistema Nacional de Salud, 2009-2015	33
Gráfico 15. Cobertura de vacunación en niñas y niños menores de 1 año, 2010-2015	34
Gráfico 16. Principales causas de morbilidad en niñas y niños de 0 a 9 años, 2014-2015	35
Gráfico 17. Casos confirmados de dengue por grupos de edad, 2015	36
Gráfico 18. Porcentaje de recién nacido de madres (VIH+) infectados con VIH, 2009-2015	37
Gráfico 19. Nivel de abastecimiento de medicamentos en la red de servicios de salud, 2009-2015	38
Gráfico 20. Porcentaje de partos en adolescentes atendidos en el SNS, 2009-2015	39
Gráfico 21. Casos de maltrato en niñas, niños y adolescentes, 2009-2015.....	53
Gráfico 22. Niñas, niños y adolescentes víctimas de agresiones sexuales, 2014-2015	54
Gráfico 23. Niñas, niños y adolescentes víctimas de violación por grupos de edad y sexo, 2014-2015	55
Gráfico 24. Niñas, niños y adolescentes víctimas de violación a nivel departamental, 2014-2015.....	56
Gráfico 25. Niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de trata, Juntas de Protección 2012-2015	58
Gráfico 26. Niñas, niños y adolescentes emigrantes retornados por grupos de edad, 2012-2015	59
Gráfico 27. Casos de niñas, niños y adolescentes emigrantes retornados atendidos en Juntas de Protección, 2015.	60
Gráfico 28. Niñez y adolescencia migrante retornada por sexo, 2015.....	60
Gráfico 29. Niñas, niños y adolescentes retornados acompañados y no acompañados según sexo, julio 2014-diciembre 2015.....	61
Gráfico 30. Motivos o causas de migración en niñas, niños y adolescentes atendidos en CAIM, julio 2014- diciembre 2015	62
Gráfico 31. Edad mínima de responsabilidad penal en la región.....	63
Gráfico 32. Adolescentes privados de libertad por departamento, 2015.....	66
Gráfico 33. Tasas de ocupación, trabajo infantil y trabajo permitido en la población de 5 a 17 años, 2010-2015	69
Gráfico 34. Trabajo Infantil, según sexo, grupos de edad por zona geográfica y asistencia escolar 2012-2015	69
Gráfico 35. Trabajo Infantil por sexo y según rama de actividad económica, 2015.....	70

Gráfico 36. Atención y emisión de permisos laborales para adolescentes por el MTPS, 2012-2015	72
Gráfico 37. Casos conocidos en Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, 2012-2015	74
Gráfico 38. Niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de amenazas o vulneraciones a sus derechos, recibidas en Juntas de Protección 2015, por sexo y grupo etario.	75
Gráfico 39. Número de reintegros familiares, 2010-2014.....	76
Gráfico 40. Número de medidas de colocación familiar, 2010-2014.....	76
Gráfico 41. Niñas, niños y adolescentes en situación de abandono de madre y padre desconocidos inscritos en forma tardía, 2014-2015.....	89
Gráfico 42. Nacimientos y captura de información para inscripciones de recién nacidos en hospitales nacionales, junio 2015-mayo 2016.....	90
Gráfico 43. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que viven sin uno o ambos padres, 2011-2015.....	91
Gráfico 44. Reintegros familiares reportados en los JENA, 2011-2014	93
Gráfico 45. Colocaciones familiares reportadas en los JENA, 2011- Oct. 2014.....	93
Gráfico 46. Niñas, niños y adolescentes bajo medida de acogimiento institucional por grupo de edad y sexo (a mayo de 2016).....	94
Gráfico 47. Periodicidad en la revisión de medida judicial de acogimiento en instituciones privadas (hasta abril 2015)	95
Gráfico 48. Centros educativos por sector, 2009-2015	97
Gráfico 49. Centros escolares por nivel educativo y sector, 2015	98
Gráfico 50. Tasa de crecimiento de oferta de centros escolares y matrícula en educación inicial, 2009-2015	101
Gráfico 51. Matrícula inicial en el nivel de Educación Inicial por sector, 2009-2015	101
Gráfico 52. Matrícula en el nivel de educación inicial por subniveles y sector, 2015	102
Gráfico 53. Tasas netas de cobertura de Educación Parvularia según sexo, 2010-2015.....	103
Gráfico 54. Tasas netas de cobertura de Educación Básica, según sexo, 2010-2015	104
Gráfico 55. Tasas netas de cobertura en Educación Media, según sexo, 2010-2015	105
Gráfico 56. Tasas netas de cobertura por nivel educativo, 2010-2015.....	105
Gráfico 57. Promedio de notas de la PAES por asignatura, 2010-2015	106
Gráfico 58. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes aprobados en Básica y Media por sexo, sector y zona, 2015.	107
Gráfico 59. Cantidad y porcentaje de estudiantes repitentes en Básica y Media, 2010-2015.....	108
Gráfico 60. Deserción escolar en Educación Básica y Media, 2010-2015	110
Gráfico 61. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 4 a 17 años que no asisten a la escuela según sexo, 2015	111
Gráfico 62. Tasa de analfabetismo de niñas, niños y adolescentes por sexo, 2009-2015.....	112
Gráfico 63. Matrícula final por modalidad educativa flexible, (2011, 2013-2014).....	112
Gráfico 64. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Sistema Regular de Educación por nivel educativo, 2015	113
Gráfico 65. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Sistema Regular de Educación por tipo de discapacidad, 2015	114
Gráfico 66. Distribución de estudiantes con discapacidad en el Sistema de Educación Especial por nivel y sexo, 2015	114
Gráfico 67. Número de solicitudes realizadas por niñas, niños y adolescentes a la PGR, por sexo y rango de edad, 2013-2015.....	126
Gráfico 68. Solicitudes realizadas por niñas, niños y adolescentes a la PGR, por tipo de solicitud y según sexo, 2015	126
Gráfico 69. Temas periodísticos de los medios salvadoreños en torno a la niñez y la adolescencia.	131

Índice de Tablas.

Tabla 1. Violaciones en niñas, niños y adolescentes según sexo y relación con el agresor, 2015	55
Tabla 2. Adolescentes procesados y tipos de medidas decretadas en los Juzgados de Menores, por sexo y tipo de medida decretada, 2012-2015.	64
Tabla 3. Adolescentes presentes a diciembre 2015, en centros de inserción social de ISNA por rango de edad y sexo	65
Tabla 4. Adolescentes presentes a diciembre de 2015 en el Programa Medio Abierto de Inserción Social de ISNA, por zona, grupo de edad y sexo.....	65
Tabla 5. Adolescentes atendidos en resguardos a nivel nacional, por zona geográfica y años, 2011-2015..	67
Tabla 6. Estimado de sub-registro de nacimiento en países seleccionados de Centro América. Porcentaje y tendencias 2005 y 2012.	88
Tabla 7. Niñas, niños y adolescentes que egresaron de los centros de acogimiento institucional de ISNA por reintegro y colocación familiar, 2010-2015.....	92
Tabla 8. Porcentaje de centros educativos por sector y según zona, 2015.....	98
Tabla 9. Porcentaje de estudiantes por causas de abandono del centro educativo, 2010-2015.	109
Tabla 10. Asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes según rango de edad, 2015	110
Tabla 11. Acciones de prevención realizadas por la DEPRT, por tipo de medio y periodo, 2011-2016	129

Siglas y Acrónimos

ACNUDH	Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
CAIM	Centro de Atención Integral para Migrantes
CDN	Convención sobre los Derechos del Niño
CFDL	Colectiva Feminista para el Desarrollo Local
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CIS	Centro de Inserción Social
CNA	Comisión Nacional Antidrogas
CNJ	Consejo Nacional de la Judicatura
CNSCC	Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia
CONAIPD	Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad
CONNA	Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia
CSJ	Corte Suprema de Justicia
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería
DIGESTYC	Dirección General de Estadística y Censos
ECOS	Equipos Comunitarios de Salud
EHPM	Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples
ENS	Encuesta Nacional de Salud
FESAL	Encuesta Nacional de Salud Familiar
FGR	Fiscalía General de la República
FISDL	Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
IML	Instituto de Medicina Legal
INJUVE	Instituto Nacional de la Juventud
ISNA	Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia
ISSS	Instituto Salvadoreño del Seguro Social
ITIGES	Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia

ITS	Infecciones de Transmisión Sexual
JENA	Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia
LEPINA	Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería
MARN	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales
MIGOBDT	Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial
MINEC	Ministerio de Economía
MINED	Ministerio de Educación
MINSAL	Ministerio de Salud
MJSP	Ministerio de Justicia y de Seguridad Pública
MOPTVDU	Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano
MTPS	Ministerio de Trabajo y Previsión Social
ODM	Objetivos de Desarrollo del Milenio
OIM	Organización Internacional para las Migraciones
OIT	Organización Internacional del Trabajo
OMS	Organización Mundial de la Salud
PESS	Plan El Salvador Seguro
PNC	Policía Nacional Civil
PNPNA	Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia
PQD	Plan Quinquenal de Desarrollo (2014-2019)
RIISS	Red Integrada e Integral de los Servicios de Salud
SEM	Sistema de Emergencias Médicas
SID	Sistema de Información y Denuncias
SNS	Sistema Nacional de Salud
SPSU	Sistema de Protección Social Universal
STPP	Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia
UNICEF	Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Presentación

En 2013, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) desarrolló un primer ejercicio participativo para la recopilación, sistematización y análisis de información acerca de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador. Este ejercicio definido como diagnóstico orientó la formulación de la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia y permitió elaborar el Primer Informe de Estado de Situación de la Niñez y Adolescencia 2013.

A cinco años del funcionamiento del CONNA, este segundo Informe pretende dar cuenta de los avances y desafíos para el Estado, la familia y la sociedad en sus roles de garantes y corresponsables en el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. La instalación del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia y la voluntad política de las autoridades en el último quinquenio han generado las condiciones para dar paso a la implementación de la Política Nacional de la Niñez y Adolescencia y su respectivo Plan Nacional de Acción 2014-2017.

Dichos instrumentos de gestión contienen lineamientos y directrices que han contribuido a la ampliación en las coberturas de servicios y programas, el desarrollo de

adecuaciones institucionales al enfoque de derechos de niñez y adolescencia como la instalación de mecanismos de protección; y esto es precisamente de lo que da cuenta el presente Informe, la materialización de los servicios públicos expresados en indicadores de país relacionados con el derecho a la vida, integridad personal, salud, lactancia materna, identidad, educación y cultura, a vivir en familia, a opinar y ser escuchado, a la protección especial, entre otros. Con la finalidad de hacer un balance entre los avances y las brechas aún existentes relacionadas con las condiciones de vulnerabilidad que enfrenta la población menor de 18 años en el país.

El entorno social, político y económico en el que se desarrolla las familias, las diversas manifestaciones de violencia social, el involucramiento de las niñas y niños en el fenómeno de la migración irregular y los limitados recursos para la sostenibilidad de los programas sociales son algunos de los nuevos escenarios que enfrentan todos los integrantes del Sistema de Protección de Niñez y Adolescencia, razón por la cual es necesario redoblar los esfuerzos en la promoción de una cultura de respeto de los derechos humanos y en brindar respuestas más efectivas acordes a la realidad de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador.

Introducción

El Estado salvadoreño al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) y con la aprobación y vigencia de Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA), ha realizado en los últimos seis años adecuaciones legislativas, programáticas y presupuestarias orientadas al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en particular, la adopción de medidas que han favorecido el acceso al derecho de la educación, la salud y la protección social.

La consideración que hace la CDN de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos en contraposición al ser objetos de tutela por parte del Estado, ha sido el cambio fundamental que caracteriza el paradigma de la protección integral y sobre el que se fundamenta el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia en El Salvador. La incorporación en forma progresiva del concepto de integralidad propuesta por la CDN y la instalación de un cambio de paradigma en la visión de las niñas y niños adoptado en la LEPINA, ha requerido principalmente de adecuaciones en las instituciones, en las políticas públicas y por ende en la asignación de recursos.

En este sentido, el Informe sobre el Estado de Situación de los derechos de la Niñez y Adolescencia 2015, da cuenta de la situación en que se encuentran los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador, mediante la descripción y análisis de datos e indicadores provenientes de registros administrativos, encuestas e informes especiales; las adecuaciones normativas como la oferta de políticas públicas, planes, estrategias y programas dirigidos a esta población, sin dejar de establecer los principales retos y desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Protección y que requieren de atención prioritaria en la agenda de país.

Se abordan metodológicamente los cuatro grupos de derechos establecidos en la

LEPINA: Supervivencia y crecimiento integral, Protección, Desarrollo y Participación, haciendo una descripción de los principales avances y las acciones de política pública que han contribuido al cumplimiento de los derechos; proceso que incorporó en su análisis una amplia información sobre indicadores y una serie de datos con la finalidad de tener mayor precisión sobre los avances y restricciones relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia a nivel nacional.

Este informe da respuesta a una de las competencias del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), relacionada con la recopilación y análisis de la información sobre la situación de los derechos y deberes de la niñez y adolescencia y hacerla del conocimiento público (LEPINA, Art. 135 numeral 14). De igual forma, abona al cumplimiento de la recomendación del Comité de los Derechos del Niño realizada en 2010 al Estado salvadoreño sobre: la necesidad de desarrollar un sistema amplio de reunión de datos sobre la aplicación de la Convención. Dichos datos deben abarcar a todos las niñas y niños menores de 18 años, estar desglosados por sexo, edad, zonas rurales y urbanas, origen étnico, discapacidad, carácter de víctima de la violencia, etapa de la vida (en particular, primera infancia y adolescencia) y otros indicadores pertinentes, y estar fácilmente accesibles y disponibles para el público en general.

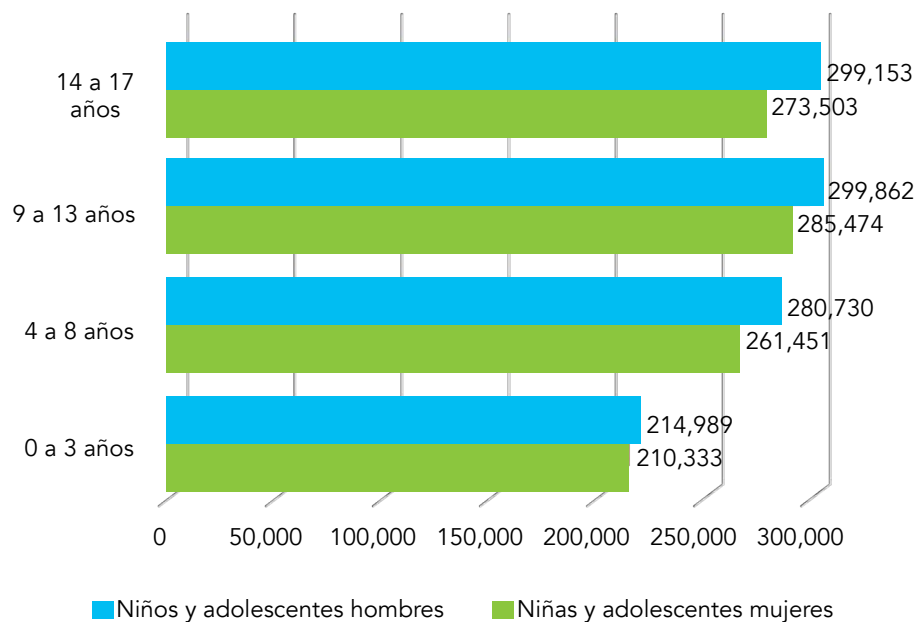
El informe inicia con una caracterización demográfica y entorno social en el que viven las niñas, niños y adolescentes; seguido de la descripción de los avances en el cumplimiento de los derechos para cada una de las cuatro áreas que establece la LEPINA, las acciones de política pública y los principales retos y desafíos, finalizando con un balance sobre las situaciones pendientes que requieren una atención prioritaria por el Estado salvadoreño, la familia y la sociedad en su conjunto.



Caracterización Socio Demográfica y Entorno Social de las Niñas, Niños y Adolescentes

La población de niñas, niños y adolescentes entre 0 y menos de 18 años de edad constituye una proporción relevante de la población salvadoreña, representando para 2015, el 32.9% (2,125,495)¹. El 48.5% son niñas y adolescentes mujeres y el 51.5% niños y adolescentes hombres. Por área geográfica, el 57% se concentra en el área urbana y el 43% en el área rural (DIGESTYC, 2016, p.45.)

Gráfico 1. Población de 0 a 17 años por rango de edad y sexo, 2015



Fuente: elaboración propia con base en EHPM 2015 (DIGESTYC, 2016, p.45)

¹ Según la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), la población total de El Salvador para 2015, fue de 6,559,911 habitantes (DIGESTYC, 2016, p. 1)

A nivel de grupos etarios, la mayor concentración de niñas, niños y adolescentes se encuentra en el rango de 9 a 13 años, representan el 27.5% del total de esta población. El resto de grupos se distribuye de la siguiente manera: entre los 0 y los 3 años el 20%; entre los 4 y 8 años el 25.5% y de los 14 a los 17 años el 26.9%. La población masculina superó a la femenina en los cuatro grupos.

Según el Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad (CONAIPD) la tasa de prevalencia de personas con discapacidad correspondiente a la población entre 0 a menos de 18 años es del 3.1%, es decir, que de cada 100 niñas, niños y adolescentes 3 presentan alguna discapacidad. Esta incidencia es ligeramente mayor

en los niños y adolescentes hombres con un 3.3% en comparación al 2.8% de niñas y adolescentes mujeres. Asimismo, esa incidencia se observa con mayor predominio en el área urbana (CONAIPD, 2016, p. 19).

En América Latina, países como: El Salvador, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y la República Bolivariana de Venezuela, se encuentran en un momento denominado “Transición demográfica plena”, ya que han logrado descensos considerables de fecundidad desde los años ochenta. Lo anterior significa que estos países cuentan con el denominado “bono demográfico”, el cual:

...hace referencia a una fase en que el equilibrio entre edades resulta una oportunidad para el desarrollo. Ocurre cuando cambia favorablemente la relación de dependencia entre la población en edad productiva (jóvenes y adultos) y aquella en edad dependiente (niños y personas mayores), con un mayor peso relativo de la primera con relación a la segunda. Una mayor proporción de trabajadores no solo representa una reducción del gasto en personas dependientes, sino que tiende a impulsar el crecimiento económico a través del incremento en el ingreso y la acumulación acelerada del capital.

Pero los beneficios asociados a este período no se dan de manera automática. Dependen más bien de la adopción de políticas macroeconómicas que incentiven la inversión productiva, aumenten las oportunidades de empleo y promuevan un ambiente social y económico estable, propicio para un desarrollo sostenido...En particular requieren fuertes inversiones en capital humano, especialmente en la educación de los jóvenes, para que las generaciones cuantitativamente mayores sean también cualitativamente más productivas (Saad, Miller, Martínez y Holz, 2012, p.28)

No obstante, para que este fenómeno constituya una oportunidad para el desarrollo humano del país, no solo depende de las políticas macroeconómicas, sino también de políticas sociales que den respuesta a las diversas limitaciones y privaciones que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, tales como la pobreza, la inseguridad y violencia, falta de acceso a servicios de salud y educación de calidad, explotación laboral, entre otras.

Según el método de medición multidimensional de la pobreza centrado en privaciones², en 2012, el 60.4%

² Es una metodología que analiza la pobreza a partir de

de las niñas, niños y adolescentes tenían privación en sus derechos sociales y económicos, un 37.3% vivía en condiciones de insuficiencia de ingresos y al menos una privación severa o moderada en alguno de éstos. En la niñez y adolescencia, que experimentaba dificultades, eran evidentes limitaciones relacionadas

la identificación de privaciones que afectan a las niñas, niños y adolescentes, desde una óptica multidimensional y complementaria a los análisis tradicionales de pobreza por ingresos. Una medición multidimensional de las privaciones que afectan a la niñez y adolescencia puede ser generada a partir de al menos cinco enfoques distintos: el enfoque de las necesidades básicas insatisfechas, el enfoque de privación relativa, el método integrado de medición de la pobreza, el enfoque de capacidades y el enfoque de derechos.

con la vivienda, escasez de agua y saneamiento, sin posibilidades para una nutrición apropiada, falta de acceso a información y educación adecuada; debido a que no asistía a la escuela, evidenciaba cierto atraso en relación a sus estudios respecto al sistema educativo o se encontraba en situación de trabajo infantil (STTP, UNICEF, 2014).

Los familiares o responsables con recursos económicos limitados conciben el trabajo infantil como una práctica normal y socialmente aceptada. Al respecto, es importante mencionar que para 2015, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) reportó 140,700 niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil (DIGESTYC, 2016, p. 45). Situación que además de interferir en el desarrollo físico y mental también afecta el goce de varios derechos.

También es importante señalar que la migración infantil es una problemática que ha crecido significativamente en los últimos años. La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reportó 4,944 niñas, niños y adolescentes retornados en 2014, cifra que en 2015 aumentó en un 52.6%, hasta alcanzar 7,545 niñas, niños y adolescentes retornados. Entre las principales causas de la migración se identifican: la reunificación familiar, la falta de oportunidades, la pobreza y el contexto de violencia que se traduce en amenazas a su integridad personal.

Como parte de las acciones que el Estado realizó debido al incremento de la niñez migrante en forma irregular, en 2014, las Juntas de Protección atendieron 2,860 casos de niñez y adolescencia retornada y de enero a diciembre de 2015 fueron 4,928 los casos atendidos.

Otro de los problemas apremiantes de la sociedad salvadoreña está relacionado con la violencia e inseguridad, la cual se traduce en violación al derecho a la vida e integridad personal. En relación a esta problemática se debe mencionar que 2015 cerró con 731 homicidios de menores de edad, de las cuales el

86,5% tenía entre 15 y 17 años y el 77.4% muertes fueron causadas con armas de fuego (IML, 2016).

En cuanto a la realidad educativa, el Ministerio de Educación (MINED) reportó en 2015 que las tasas netas por nivel educativo alcanzaron el 2.10% en el nivel Inicial; el 57.5% en Parvularia; 86.2% en Básica y 37.9% en Educación Media. En este sentido, resulta imperativo aumentar la cobertura y calidad de la educación en todos los niveles, con alta prioridad para la población de primera infancia y en Educación Media. Esto constituye uno de los principales desafíos del Plan Quinquenal de Desarrollo (PQD) 2014-2019, del Plan El Salvador Educado y también del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación³.

En cuanto a los derechos de participación de niñas, niños y adolescentes, se ha avanzado en el fomento de la organización a nivel local, la formación en derechos y el ingreso a espacios de participación ciudadana, en los que sus puntos de vista son escuchados cuando se abordan problemáticas de su interés. Sin embargo, estas iniciativas resultan insuficientes cuando lo que se pretende es el establecimiento y consolidación de espacios de auténtica participación de la niñez y adolescencia y para el desarrollo de un liderazgo significativo en sus comunidades.

Atención especial requiere la protección frente a la información nociva o inadecuada, debido a la exposición continua y sistemática de contenidos sexuales y violentos, caracterizados por el uso de lenguaje discriminatorio y peyorativo, incompatible con la madurez física, mental y emocional de las niñas, niños y adolescentes.

En este contexto y con base a las cuatro áreas de derechos establecidas en la LEPINA, a continuación, se presenta un análisis sobre los principales avances y la situación de los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador.

³ Plan Estratégico de MINED para el periodo 2014-2019



Derechos de supervivencia y crecimiento integral

Bajo el conjunto de derechos relativos a la supervivencia y crecimiento integral se encuentran todos aquellos que tienen como objetivo garantizar y preservar la vida de la persona. La supervivencia como tal, no considera únicamente la vida en el sentido físico, sino la vida con dignidad, es decir, en condiciones sociales, económicas y ambientales que promuevan el bienestar de la población.

Respecto de estos derechos, el Estado tiene obligaciones particulares en comparación con las responsabilidades de la familia y la sociedad, ya que éstas últimas requieren el apoyo sustancial del Estado en la superación de las causas generadoras de la desigualdad social que pone en riesgo los derechos universales básicos (Buaiz, 2013, p. 176).

En este sentido, la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (LEPINA) desarrolla en su Libro I, Título I, los derechos de supervivencia y crecimiento integral en 21 artículos (Art. 16 al 36), los cuales abordan el derecho a la vida, protección de las personas por nacer, a un nivel de vida digno y adecuado, salud, lactancia materna y a un medio ambiente sano. Así mismo, a las garantías que el Estado debe brindar con relación a la atención médica de emergencia para la niña, adolescente o mujer embarazada y la prevención del embarazo precoz.





2.1. Avances en el cumplimiento de los derechos de supervivencia y crecimiento integral

Dado que en este apartado se presentan indicadores de salud, es importante aclarar que el análisis de los mismos constituye una tarea compleja debido a la falta de uniformidad de las fuentes de información. Al respecto, cabe mencionar que la Encuesta Nacional de Salud Familiar (FESAL) 2008 fue la última desarrollada en esta materia y los datos del Ministerio de Salud (MINSAL) tuvieron ajustes metodológicos derivados de la revisión que hizo la DIGESTYC en 2014 a las estimaciones y proyecciones de población nacional. Esto dificulta el análisis comparativo a través de los años en términos de avances o retrocesos en dichos indicadores. En este sentido, el análisis de los mismos relativos a esta materia debe realizarse con base a los cambios metodológicos vinculados con la generación de información a nivel de país.

Por otro lado, la reciente Encuesta Nacional de Salud (ENS), denominada Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS por sus siglas en inglés), desarrollada en 2014 por el MINSAL y el Instituto Nacional de la Salud (INS) en colaboración con la DIGESTYC, contribuyó a ampliar el análisis sobre las tendencias de dichos indicadores y sus

determinantes sociales, principalmente en la salud de las niñas y niños menores de cinco años y la salud sexual y reproductiva.

a) Derecho a la vida

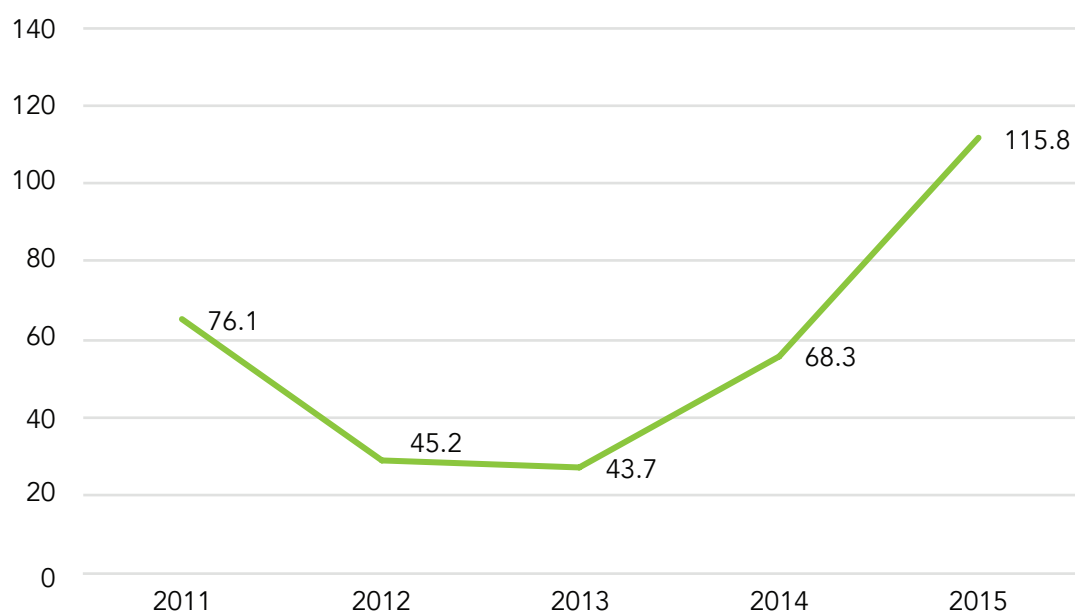
El derecho a la vida está reconocido por la LEPINA desde el momento de la concepción y constituye un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos, vinculándose al carácter humano y a la dignidad de las personas.

Uno de los principales fenómenos sociales que afecta este derecho es la violencia, impactando la vida de las personas directa e indirectamente. En forma directa, los homicidios y lesiones son violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal. Por otra parte, la inestabilidad social y económica impacta de forma indirecta en las condiciones de vida y seguridad de la población. Estos daños físicos y emocionales se profundizan particularmente en las niñas, niños y adolescentes, limitando un completo y normal desarrollo bio-psico-social y, en consecuencia, su bienestar.

La violencia en sus diferentes manifestaciones resulta un fenómeno social preocupante. Datos del Instituto de Medicina Legal (IML) reportan que en 2015 la tasa de homicidios a nivel nacional presentó un incremento drástico, al cerrar con 115.8 muertes por 100 mil habitantes, mientras que en 2014 fue de 68.3. El total de homicidios a nivel nacional para 2015 alcanzó los 6,653 casos, de los cuales el 91.2% fueron del sexo masculino y el 8.6% femenino (IML, 2016b).

Gráfico 2. Tasa Anual de homicidios, 2011-2015

Tasa anual x 100,000 habitantes. Calculada con base en censo poblacional DIGESTYC, 2007

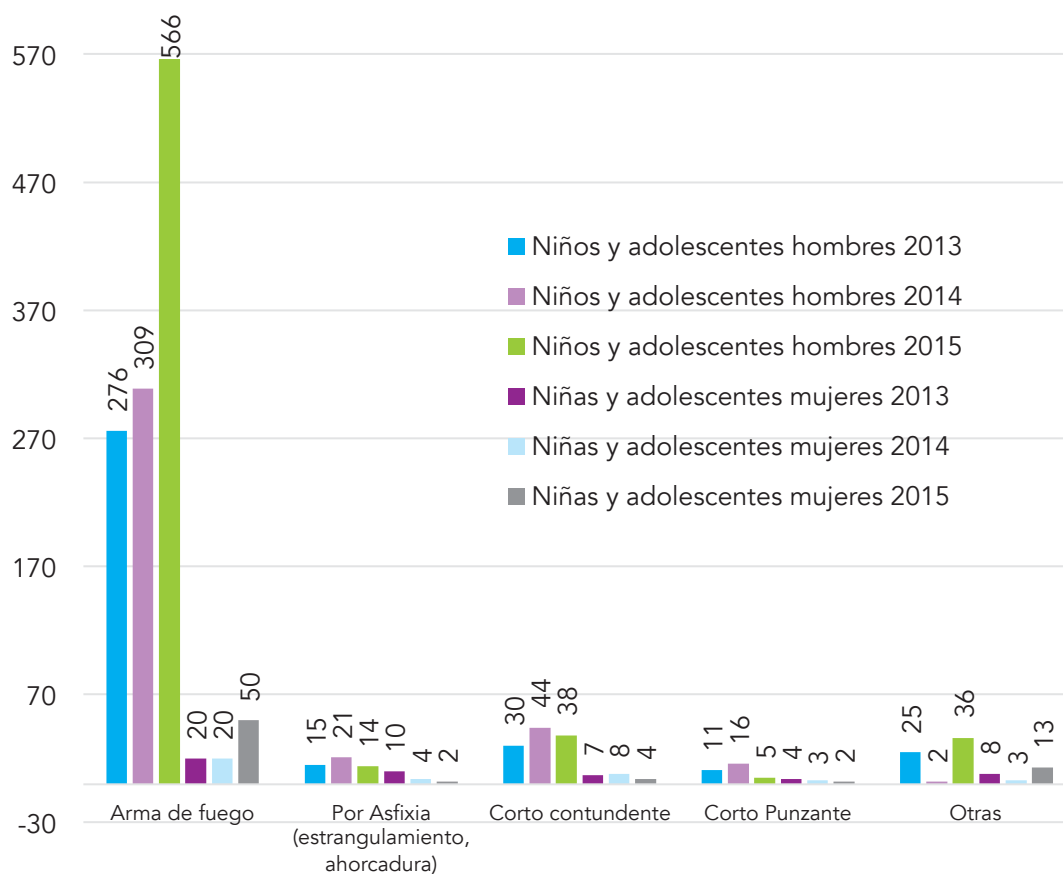


Fuente: Elaborado con base en IML (2016b)

En el caso de las niñas, niños y adolescentes, en 2014 se reportaron 431 homicidios, es decir, un incremento de 291 casos respecto al 2013. Al cierre de 2015, se reportaron 731 homicidios, un aumento de 300 casos en relación al 2014. En términos porcentuales, los homicidios en este grupo etario representaron el 10.9% del total a nivel nacional.

Las cifras reflejan que la población de 15 y menos de 18 años ha sido la más afectada en el periodo 2012 - 2015, ya que llegó a representar más del 85% del total de los homicidios en niñas, niños y adolescentes. Este grupo etario es altamente vulnerable a la presión que ejercen las personas adultas encaminadas al cometimiento de delitos e incorporación a las estructuras delincuenciales.

Gráfico 3. Homicidios en niñas, niños y adolescentes por tipo de arma utilizada, 2013-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del IML, para cada año.

Como ya se mencionó en este documento, en los homicidios de niños, niñas y adolescentes, prevalece el arma de fuego como principal objeto con el que se comete el delito. En 2014, el 76.5% de los homicidios de niñas, niños y adolescentes fueron cometidos con estas armas y para 2015 este porcentaje se incrementó al 84.3%. En su mayoría las víctimas fueron adolescentes hombres (Ver gráfico 3).

En este contexto, conviene resaltar el siguiente comentario sobre el uso de las armas de fuego, contenido en la Declaración del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) relativo a la violencia en contra de los niños, niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe (2008):

Si bien erradicar el comercio ilegal de armas es un componente crucial de la lucha contra la violencia armada, es importante no mirar la violencia relacionada con armas de fuego en forma aislada. Existen vínculos estrechos entre la violencia armada y otras formas de violencia. Por ejemplo, presenciar violencia en el hogar o ser víctimas del abuso físico o sexual puede condicionar a los niños o adolescentes a ser víctimas o perpetradores de violencia armada y es esencial comprender estos factores para formular políticas y programas efectivos para prevenir la violencia (UNICEF, 2008).

Adicionalmente, UNICEF (2008) también agrega “La violencia contra los niños y niñas daña profundamente no solo a las víctimas sino también a sus familias, amigos y comunidades. Sus efectos se ven no solo en la muerte, lesión o discapacidad sino también en términos de la calidad de vida”.

Como parte de las medidas estatales ante esta situación, el Plan El Salvador Seguro (PEES) ha incluido, entre sus principales acciones, la reforma de la Ley de Regulación y Control de Armas de fuego, Explosivos y Artículos Similares, para prohibir la portación de armas y aplicar vedas en municipios seleccionados. Estableció como meta la reducción de 20% anual de delitos cometidos con armas de fuego (CNSCC, 2015).

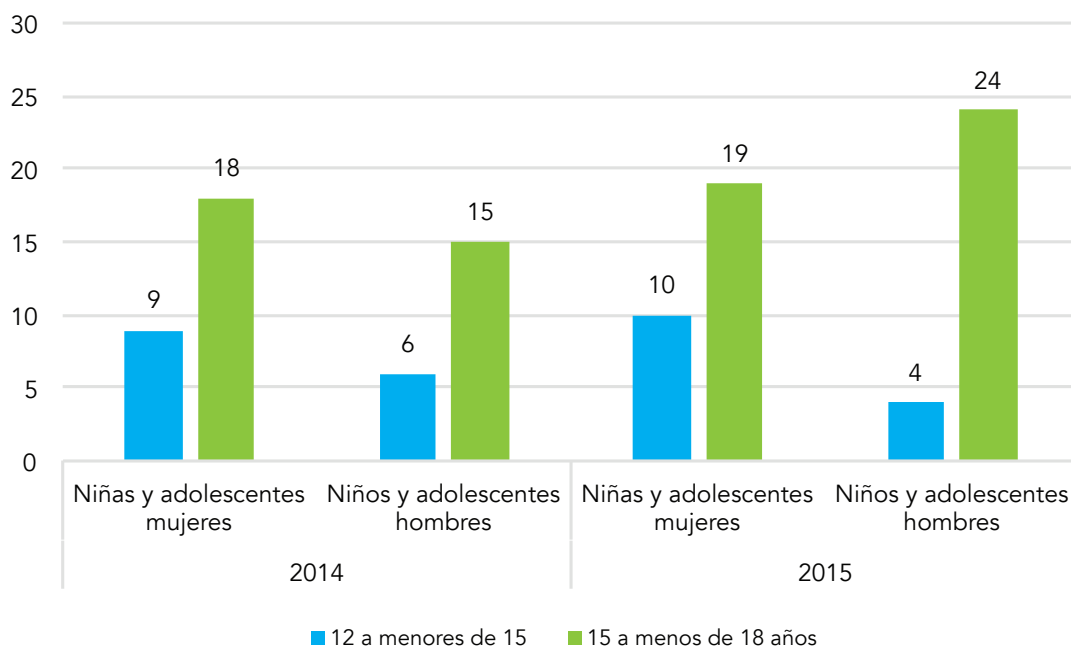
Otro efecto negativo directo sobre el derecho a la vida lo constituye el suicidio. El Salvador no está al margen de esta problemática. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el suicidio como un problema grave de salud pública, al considerarlo como un “Trastorno multidimensional, el cual resulta de una compleja interacción de factores biológicos,

genéticos, psicológicos, sociológicos y ambientales” (OMS, 2000, p.6).

Asimismo, la OMS considera como factores de riesgo que inciden en el comportamiento suicida, elementos asociados a la diversidad sexual e identidad de género, la escasa protección por parte de los familiares, la autoridad excesiva o inadecuada de los padres o cuidadores, agresiones familiares, sentimiento de inferioridad, abuso de alcohol o drogas, trastornos alimentarios, entre otros (OMS, 2001).

En 2014, el IML reportó 48 muertes de niñas, niños y adolescentes por suicidio, esta cifra representó el 11% de los 431 que constituyeron el total. De estos 48, el 56% fueron suicidios de adolescentes mujeres. En 2015, los suicidios en adolescentes se incrementaron a 57 y la composición por sexo mostró siempre el predominio de los casos de adolescentes mujeres (51%). Sin embargo, los adolescentes hombres mostraron un incremento que debe llamar la atención, ya que puso en evidencia un incremento de 15 casos en 2014 a 24 en 2015.

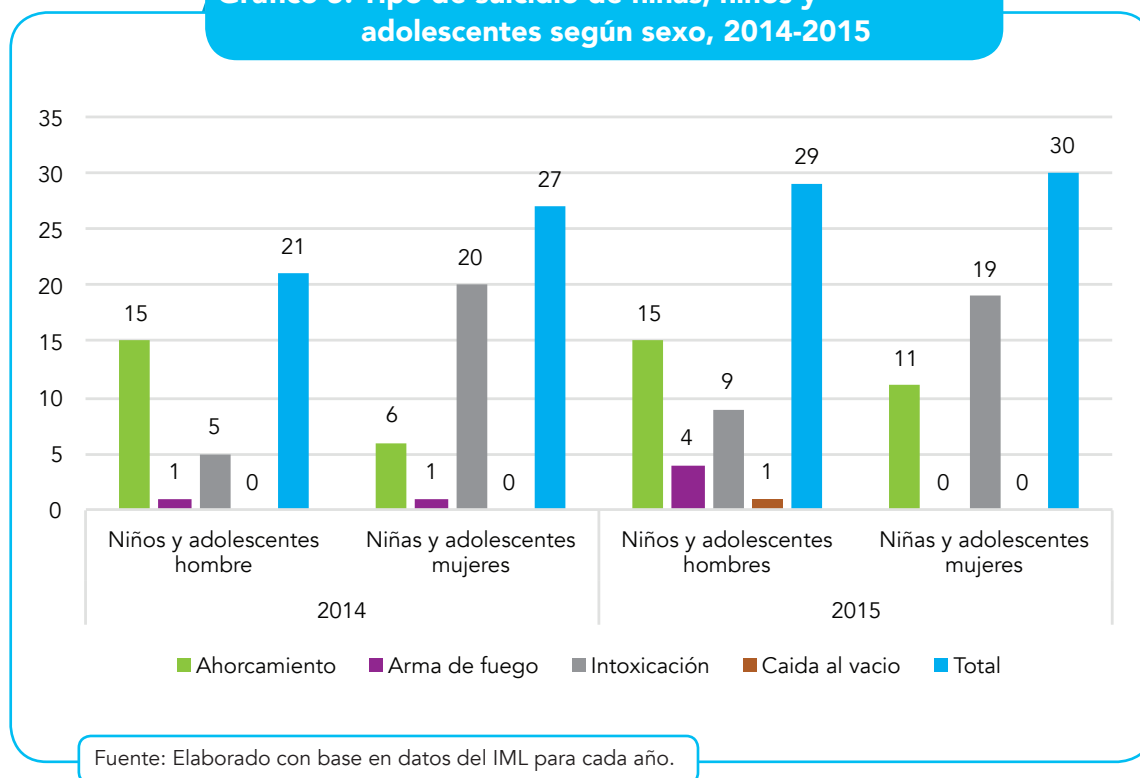
Gráfico 4. Suicidios en niñas, niños y adolescentes por sexo y rango de edad, 2014-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del IML para cada año.

Al igual que en el caso de los homicidios, el rango etario en el que se encuentra mayor incidencia en la privación al derecho a la vida es el de 15 a menos de 18 años. Con base en este comportamiento, la OMS reconoce el suicidio como una de las cinco causas principales de mortalidad en la franja comprendida entre los 15 a 19 años de edad a nivel mundial (OMS, 2001, p.7).

Gráfico 5. Tipo de suicidio de niñas, niños y adolescentes según sexo, 2014-2015



El 52.1% de suicidios de adolescentes ocurridos en 2014 correspondieron a intoxicaciones por compuestos químicos y el 43.7% al ahorcamiento. En 2015 el procedimiento fue similar, el 47.4% ocurrieron por intoxicación y el 44.1% por ahorcamiento. Este patrón está vinculado a la facilidad que tiene la población para adquirir en el mercado sustancias tóxicas incluidas como insumos para la actividad agrícola o de uso en el hogar.

El acceso a los medios para quitarse la vida es un factor importante de riesgo y determinante en la consumación o fracaso en el suicidio. Un intento previo es un factor predictivo de un posterior acto suicida mortal, sobre todo, en los seis meses siguientes al primer intento (OMS, 2002, p.25).

Un aspecto a resaltar es que el tipo de suicidio pareciera estar vinculado al sexo, dado que en las

adolescentes mujeres prevalece el suicidio por intoxicación, mientras que en los adolescentes hombres prevalece el ahorcamiento.

Por otra parte, el derecho a la vida no solo incluye las condiciones necesarias para que el ser humano la conserve, sino también comprende las que se requieren para que la vida misma surja, desde la concepción, el nacimiento y durante los primeros años de vida en la que las niñas y niños presentan los mayores niveles de vulnerabilidad. En este sentido, la atención integral durante el periodo de gestación de la madre, constituye una garantía para el goce de este derecho fundamental.

En 2015, la red hospitalaria del MINSAL registró el fallecimiento de 1,218 niñas y niños menores de 5 años; 1,041 (85%) fueron niñas y niños menores de 1 año, de los cuales el 61% ocurrieron antes de haber

cumplido 28 días de nacido (periodo neonatal). En comparación con 2014, esto representó un incremento del 4.8% del total de muertes en menores de 5 años.

Entre las principales causas de mortalidad neonatal se encuentra el nacimiento prematuro, lo cual representó el 28.3% y las malformaciones congénitas con un 25%; predominando las malformaciones del sistema nervioso y del sistema cardiovascular (MINSAL, 2016, p.70). Según MINSAL (2016), este grupo presenta la mayor cantidad de muertes, debido al alto componente biológico que lo acompaña, así como a las múltiples inequidades que impactan en el hogar y las condiciones de vida de la madre durante el periodo de gestación.

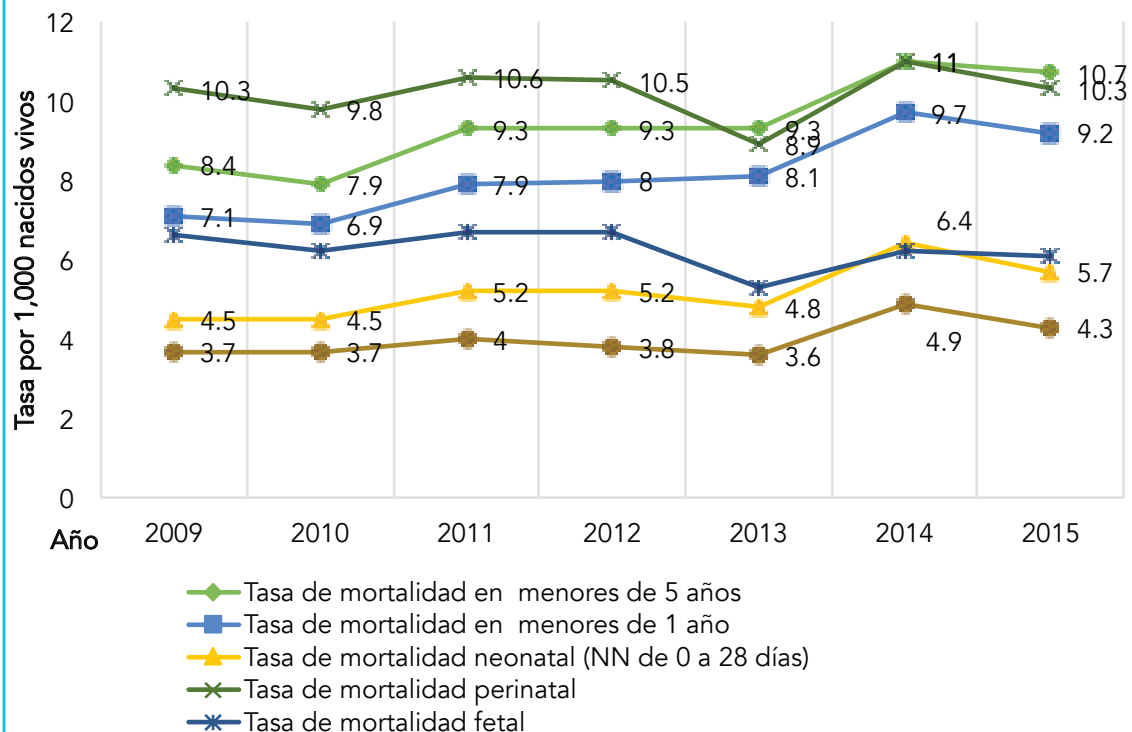
En cuanto a las principales causas de muerte en menores de 5 años, se encuentran las malformaciones congénitas, diarrea, neumonía y la desnutrición

proteica-calórica⁴ severa, causas biológicas que se ven agravadas por desigualdades sociales que impactan directamente en la salud de las niñas y niños.

Asimismo, el Grupo de Trabajo Interagencial Regional para la Reducción de la Morbilidad y Mortalidad Neonatal reconoce, entre los factores maternos que afectan la salud neonatal, a la desnutrición materna, la edad de la madre (menores de 18 años o mayores de 35), haber tenido más de 5 partos, un intervalo breve entre los nacimientos, hemorragia durante el tercer trimestre del embarazo y complicaciones en el parto; infecciones maternas de transmisión sexual y régimen alimentario deficiente de la madre, entre otros. (OPS/OMS, UNICEF, USAID, ACCESS, BASIC, CORE Group y SNL/Save The Children/USA, 2007).

⁴ Se produce por una nutrición deficiente crónica donde predomina especialmente el déficit calórico y cantidad insuficiente de todos los nutrientes.

Gráfico 6. Tendencias de las tasas de mortalidad en niñas y niños, 2009-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2015) y (2016)

A partir de 2000, la mortalidad en niñas y niños en sus diferentes mediciones, mostraba una tendencia a la baja, sin embargo, para los últimos años, los comportamientos han mostrado leves incrementos, especialmente en 2014, debido a los ajustes metodológicos en el cambio de denominador utilizado para su cálculo (Proyecciones de población elaboradas por DIGESTYC). De 2014 a 2015, el comportamiento continuó a la alza, especialmente en las tasas en menores de cinco años, de un año y perinatal (niños nacidos muertos o fallecidos antes de los 7 días de nacidos).

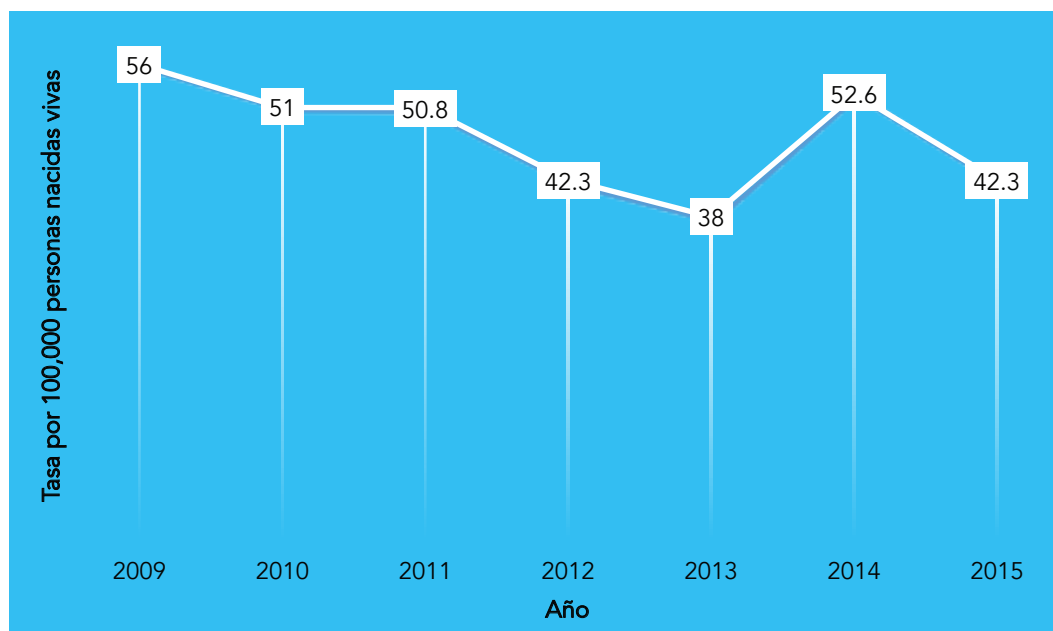
En relación con la razón de mortalidad materna, en 2009 fue de 56.0 por 100 mil personas nacidas vivas. A partir de ese año, se han presentado disminuciones significativas en este indicador, hasta reducirlo a 38 en 2013, la tasa más baja presentada en los últimos años.

Los esfuerzos realizados en la ampliación de los servicios de salud a través de los Equipos

Comunitarios de Salud (ECOS), el fortalecimiento de la Red Intrahospitalaria y las coberturas en la atención prenatal, contribuyeron a que El Salvador cumpliera la meta establecida en el objetivo número cinco contenido en el Desarrollo del Milenio (ODM): Mejorar la salud materna, con el cual se aumentó la atención prenatal, la alta cobertura de parto institucional, controles posparto y de planificación familiar. Esto se traduce en un 98% de niños y niñas nacidos en un establecimiento público y el 95% de cobertura en atención prenatal (al menos cinco controles durante su embarazo) (MINSAL, 2015).

Al igual que en el caso de la tasa de mortalidad infantil, la mortalidad materna se incrementó en 2014, pasando a 52.6 por 100 mil personas nacidas vivas, debido al ajuste metodológico mencionado anteriormente. En 2015, esta tasa vuelve a disminuir a 42.3 muertes por 100 mil personas nacidas vivas.

Gráfico 7. Razón de mortalidad materna, 2009-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2016)

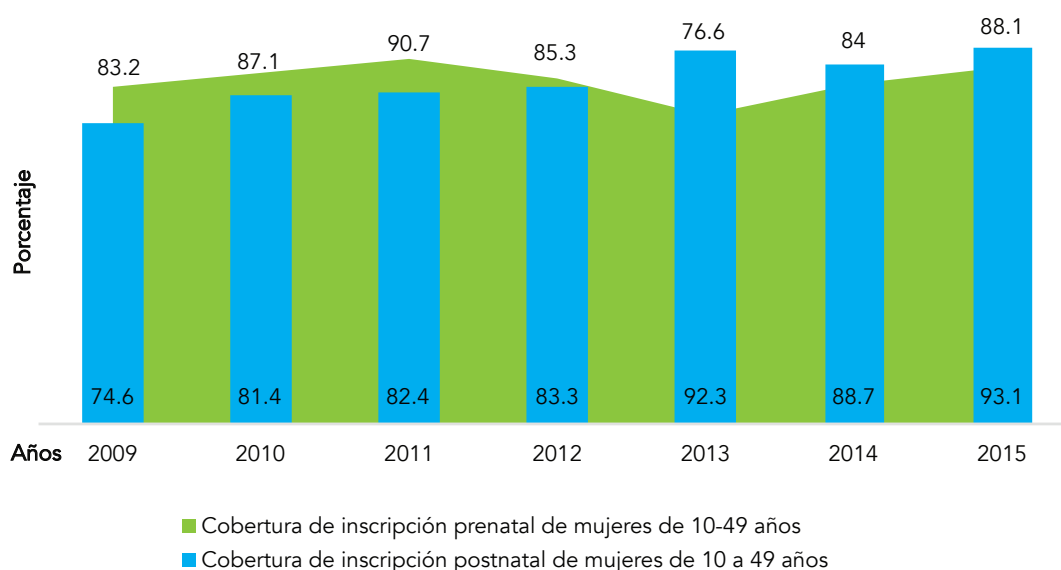
Entre las principales causas directas de mortalidad materna se encuentran los trastornos por hipertensión durante el embarazo, las hemorragias y la sepsis puerperal. En 2014, el 78% de las muertes maternas se debieron a estas razones. Como causas indirectas se encontraron las enfermedades crónicas y el auto envenenamiento (MINSAL, 2015). Para ese mismo año, el 65% de los fallecimientos maternos se concentró en el grupo de 15 a 29 años, el 70% se clasificaron como muertes prevenibles.

A fin de garantizar el derecho a la vida de la persona por nacer, el Sistema Nacional de Salud (SNS) ha redoblado sus esfuerzos para ampliar la cobertura en servicios de salud prenatal, lo cual se evidencia mediante los controles periódicos y sistemáticos de las embarazadas a fin de vigilar la evolución del proceso de gestación, identificar factores de riesgo,

detectar y tratar oportunamente las complicaciones, referir al nivel de mayor complejidad cuando es necesario, brindar educación y consejería de acuerdo a las necesidades de la mujer. Todos estos esfuerzos encaminados a generar las condiciones para un parto saludable para la madre y su hijo o hija.

La cobertura de inscripción prenatal de mujeres entre los 10 y 49 años se ha sostenido en los últimos seis años, la cual ha oscilado entre el 83% y el 90%. En 2015 alcanzó el 88.1%. En cuanto a las coberturas postnatales el crecimiento ha sido continuo y sostenido, ya que ha pasado del 74.6 en 2009 al 96.1 en 2015. Es importante mencionar que desde 2013, las coberturas postnatales son mayores a las prenatales incidiendo directamente en las coberturas de inscripción de niños y niñas menores de un año.

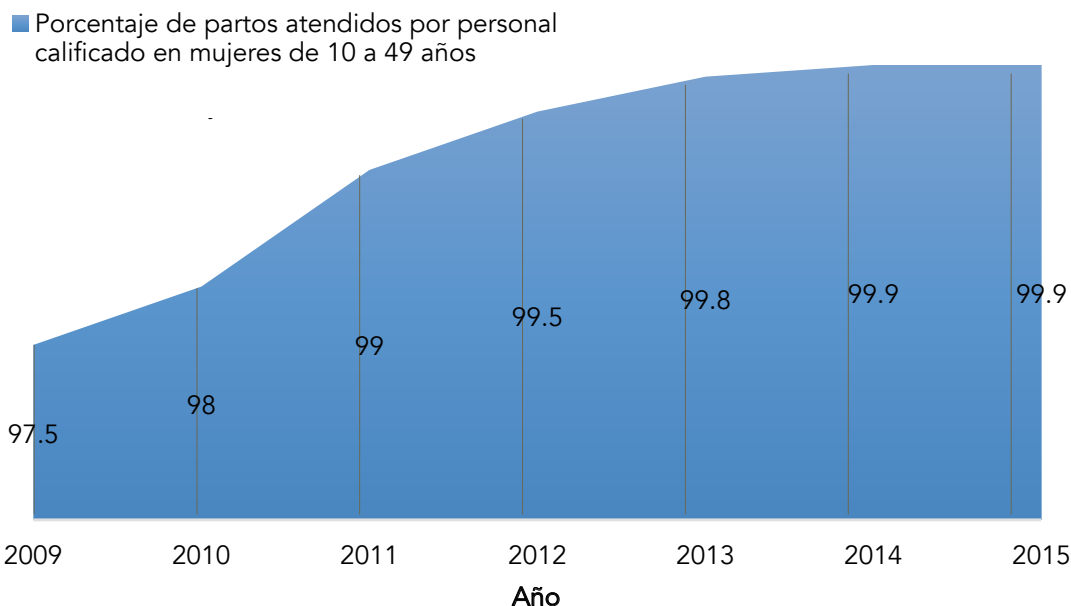
Gráfico 8. Porcentaje de cobertura de inscripción prenatal y posnatal de mujeres de 10 a 49 años, 2009-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2016)

Cabe destacar que el incremento de las atenciones maternas a través de la Red Integral e Integrada de los Servicios de Salud (RIISS), la atención de personal especializado, las mejoras en la infraestructura hospitalaria y la cobertura a nivel territorial por

medio de los ECOS ha incidido directamente en el incremento de atención en los partos institucionales muy cercana al 100%. Como resultado, se tiene un efecto positivo en la reducción de las tasas de mortalidad materna.

Gráfico 9. Porcentaje de partos atendidos por personal calificado en mujeres de 10 a 49 años, 2009-2015

Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2016)

b) Derecho a una vida digna

Tener una vida digna significa vivir en condiciones materiales, físicas y ambientales que posibiliten a la persona desarrollarse integralmente, potenciar capacidades que propicien el ejercicio de sus derechos básicos universales. En la LEPINA, este derecho comprende la alimentación nutritiva y balanceada, vivienda digna, segura e higiénica, servicios públicos esenciales, vestuario adecuado limpio y suficiente, recreación y esparcimiento sano.

Una de las situaciones principales que vulnera los derechos referidos es la pobreza, condición que repercute en el crecimiento y desarrollo de las niñas y niños, con efectos graves a lo largo de su vida sobre todo cuando éstas no han sido satisfechas en los primeros años. Los diferentes enfoques con los que se ha venido abordando la pobreza han llevado al reconocimiento de que es una condición multidimensional, por lo que su análisis no se reduce a la medición por nivel de ingreso, sino a la consideración de diversas privaciones que limitan los derechos de las personas en esta condición.

Por privaciones se entiende el incumplimiento o la ausencia del ejercicio de los derechos sociales y económicos en dimensiones básicas que pueden limitar el desarrollo de la niñez y adolescencia: vivienda, saneamiento, agua, educación, información, nutrición y trabajo infantil (STPP y UNICEF, 2014).

En este sentido, el Estado es responsable de garantizar la prestación de servicios básicos que contribuyan a la reducción de estas privaciones.

Como muestra de lo referido, en 2015 se evidencia una amplia cobertura de servicios básicos a nivel nacional. El 86.6% de los hogares contaban con abastecimiento de agua por cañería⁵, el 95.4 % poseía servicio de alumbrado eléctrico⁶ y el 97.5% disponía de servicio sanitario⁷(DIGESTYC, 2016). Este tipo de servicios y las instalaciones mejoradas de saneamiento son fundamentales por su incidencia directa en la calidad de vida de las niñas y niños, principalmente en su salud.

5 Incluye cañería dentro y fuera de la vivienda, tubería por poliducto en buen estado, cañería del vecino, pila, chorro público o cantarera, chorro común y acarreo cañería del vecino.

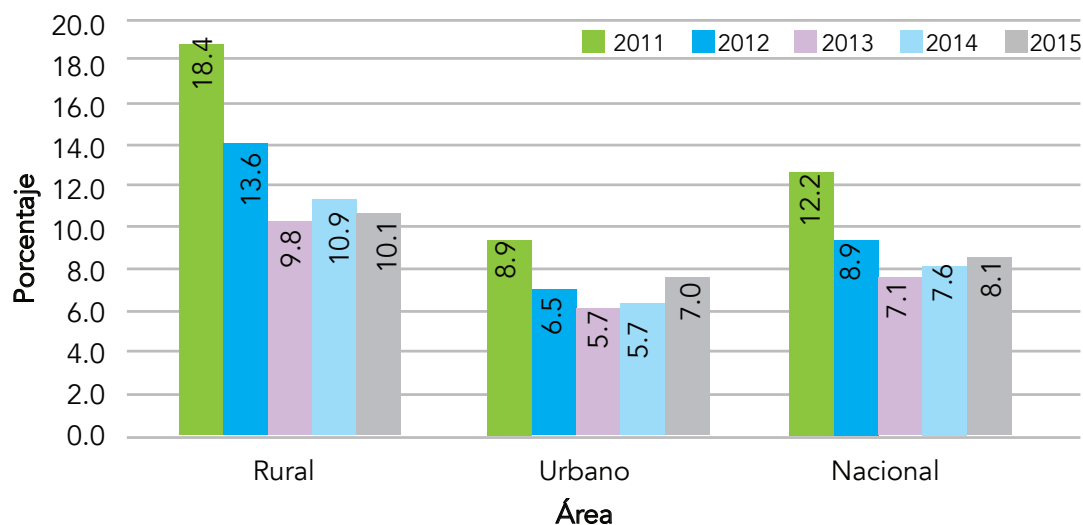
6 Incluye la tenencia de energía eléctrica (alumbrado eléctrico propio) y conexión eléctrica del vecino.

7 Incluye tenencia propia y acceso mediante un familiar o amigo.

Concebida la pobreza en términos de ingreso, la EHPM 2015 reportó que el 34.9% de los hogares a nivel nacional vivían en condiciones

de pobreza relativa y extrema, siendo los hogares del área rural los más afectados por la pobreza extrema.

Gráfico 10. Porcentaje de hogares en situación de pobreza extrema por zona, 2011-2015



Fuente: Elaboración con base en datos de MINEC-DIGESTYC. EHPM de cada año.

En el último quinquenio, se produjo una reducción significativa de este nivel de pobreza en la zona rural, al pasar del 18.4% al 10.1%. Descenso generado en virtud de la implementación de los programas del Sistema de Protección Social Universal (SPSU), entre los que se encuentran el apoyo temporal al ingreso, pensión básica universal, bonos de salud, promoción de empleo intensivo en obra pública, vaso de leche, dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares y gratuidad de la educación.

Estudios recientes de la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) y UNICEF, con base a los datos de la EHPM de 2014, evidenciaron una “Infantilización de la pobreza”, reflejada con mayor proporción en los hogares con niñas, niños y adolescentes en comparación a viviendas donde solo habitan personas adultas. Los resultados mostraron que, para ese año, en 8 de cada 10 hogares en condición de pobreza por nivel de ingreso habitaba una niña, niño o adolescente (STPP y UNICEF, 2015, p.7).

La implementación de políticas y programas sociales a fin de superar las brechas de pobreza y desigualdad en El Salvador ha supuesto redefinir

la conceptualización y medición de la pobreza, lo que requiere pasar de un enfoque estrictamente monetario a uno multidimensional, coherente con el enfoque de derechos humanos, el cual coloca a la persona en el centro de las políticas públicas considerando los ámbitos esenciales para su desarrollo y bienestar. Esta nueva medición parte del concepto de pobreza como “La privación de los recursos, capacidades y acceso efectivo de las personas a gozar de sus derechos y tener una mejora continua de su nivel de vida”, definido en la Ley de Desarrollo y de Protección Social (STPP y UNICEF, 2015, p.4).

Esta metodología de medición multidimensional establece cinco dimensiones⁸ y 20 indicadores, a partir de los cuales se constituyen umbrales para determinar si un hogar presenta privaciones y, según el número de éstas, clasificar los hogares en pobres o no pobres⁹. La implementación de esta metodología

⁸ En El Salvador las dimensiones definidas fueron: 1) Educación; 2) Condiciones de vivienda; 3) Trabajo y seguridad social; 4) Salud, servicios básicos y seguridad alimentaria y 5) Calidad del hábitat.

⁹ Se considera que un hogar es pobre si uno o más de sus miembros presentan más de 7 privaciones en los indicadores establecidos.

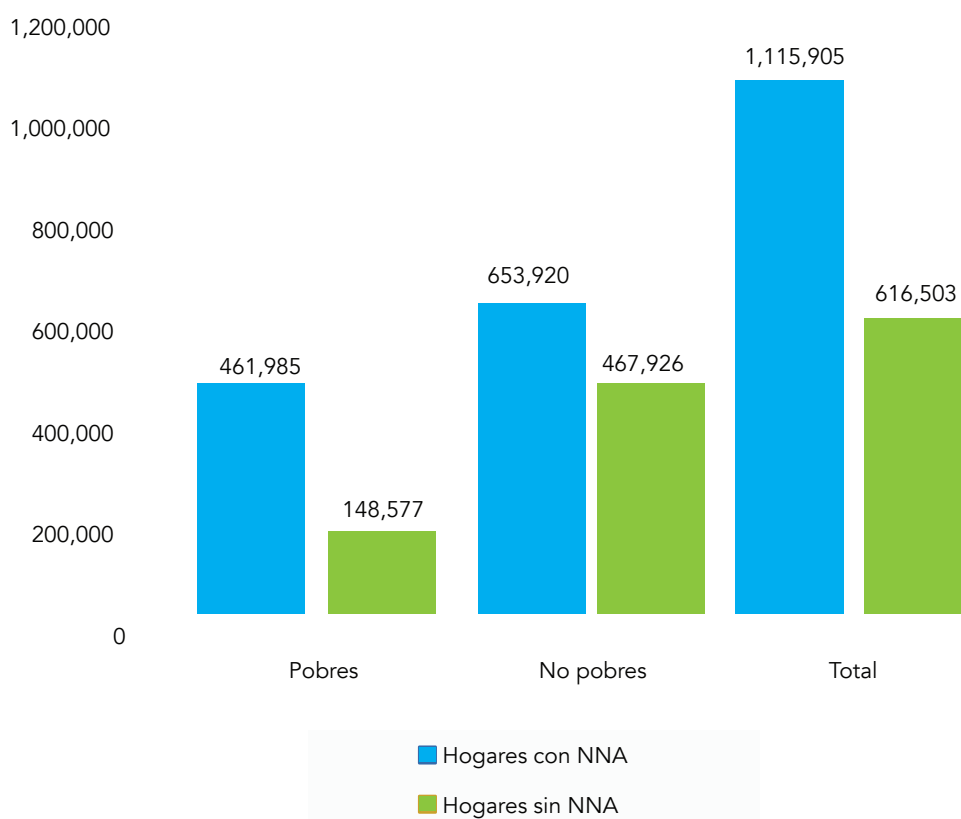
determinó en 2014, que de 1, 722,075 hogares el 35.2% se clasificaron como pobres, presentando mayores desafíos para las zonas rurales con el 58.5% de los hogares en esta condición. A nivel departamental la mayor incidencia de la pobreza fue en La Paz, Ahuachapán, La Unión, Morazán y Usulután (STPP y MINEC-DIGESTYC, 2015).

La situación de pobreza que vive la niñez y la adolescencia salvadoreña también puede estimarse a través de la medición multidimensional enfocada en los hogares en donde hay presencia de niñas, niños y adolescentes. Los resultados del ejercicio realizado por STPP y UNICEF, con datos de la EHPM

de 2014, reflejaron que en el 64.2% (1 115,572) de hogares del país habita al menos una niña, niño o adolescente.

Asimismo, se identificó que la incidencia de la pobreza en los hogares es mayor para aquellos en los cuales hay presencia de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, del total de hogares con niños, niñas y adolescentes, el 41.1% se encontraban en situación de pobreza multidimensional, en contraste con un 24.1% de hogares sin niñas, niños y adolescentes en la misma condición de pobreza (STPP, UNICEF, 2015, p. 8).

Gráfico 11. Hogares salvadoreños por condición de pobreza multidimensional según presencia de niñas y niños, 2014



Fuente: Elaborado con base en STPP y UNICEF (2014)

Las privaciones relacionadas con trabajo infantil, cuidado temprano inadecuado, riesgo educativo, inasistencia escolar, están presentes en el 100% de los hogares con niñas, niños y adolescentes que han sido clasificados como pobres, según la metodología multidimensional (STPP y UNICEF, 2015).

Gráfico 12. Porcentaje de hogares con niñas, niños y adolescentes clasificados como pobres por tipo de privaciones, 2014.



Fuente: Elaborado con base en STPP y UNICEF (2015)

La alimentación nutritiva y balanceada es una de las condiciones esenciales para garantizar el derecho a una vida digna. El de la alimentación está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida adecuado y está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 (ACNUDH, 2010, p.1).

Asimismo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General N°12 sobre el derecho a la alimentación, establece que éste “Se ejerce cuando todas las personas, ya sea solas o en común con otras, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” (ACNUDH, 2010, p.3).

Las condiciones que reflejan una inadecuada nutrición y privaciones al derecho a la alimentación de niñas y niños son la desnutrición y la prevalencia del sobrepeso. En el caso de la desnutrición crónica en menores de 5 años, El Salvador mostró avances significativos reduciendo de 21% a 14% en el periodo de 2008 a 2014. Por otro lado, la prevalencia de sobrepeso se incrementó en 2% respecto a lo reportado en la encuesta FESAL 2008, llegando a 6.4% en 2014 (MINSAL-INS, UNICEF, 2015, p.3).

A su vez el estudio de estado nutricional en el ámbito escolar encontró que a nivel nacional, la prevalencia de sobrepeso fue del 13.3%; la obesidad¹⁰ 10% y el retardo en talla o desnutrición crónica del 11.4 % (MINSAL, 2014, p.133).

Culturalmente se concibe que una niña o niño con sobrepeso goza de buena salud. Sin embargo, se ha comprobado que la obesidad en la niñez está vinculada a complicaciones diversas de la salud, entre las cuales se incluyen un mayor riesgo de enfermedades prematuras, la propensión a convertirse en personas adultas con sobrepeso y mayores posibilidades de ser diagnosticados con un factor de riesgo adicional de enfermedad cardiovascular, tensión arterial alta o colesterol en la sangre (OMS, 2014, p.40). Estas complicaciones

están relacionadas, en la mayoría de los casos, con la dieta poco saludable y falta de ejercicio físico.

A la familia le corresponde garantizar el derecho a la alimentación adecuada de las niñas y niños, sin embargo, factores asociados a las condiciones económicas, la inadecuada educación nutricional y la falta de responsabilidad parental, afectan el goce de este derecho.

c) Derecho a la salud

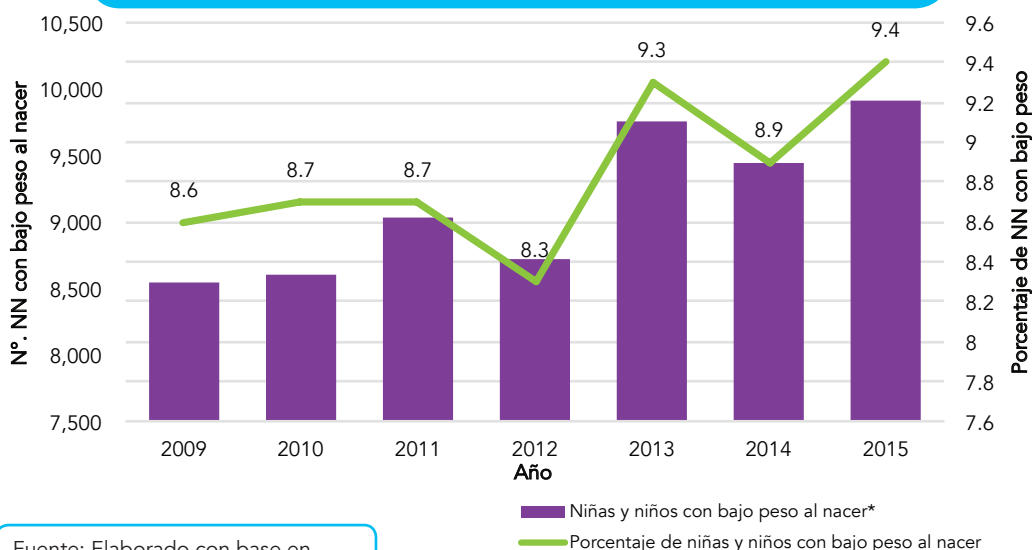
La salud es un bien público y un derecho fundamental de las niñas, niños y adolescentes. Debe entenderse integralmente como la interacción del medio ambiente, el agua en calidad y cantidad adecuadas, aspectos económicos y el sistema de atención sanitaria. La Convención de los Derechos del Niño (CDN) reconoce “El derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud”, que le permita desarrollar al máximo sus capacidades en lo biológico, psicológico, moral, económico, ambiental y sanitario” (Buaiz, 2013, p.193).

Para garantizar este derecho, es de vital importancia disponer de una adecuada atención en salud durante todo el ciclo de desarrollo biológico, psicológico y neuronal de las niñas, niños y adolescentes. Esto implica también garantizar una atención especializada desde la gestación, en la cual puede detectarse cualquier riesgo de afectación en los primeros años de vida y contribuir a las demás etapas del desarrollo.

Un factor importante que evidencia el estado de salud de la madre y del recién nacido es el peso al nacer. Condición que se ve comprometida cuando la niña o el niño, nacen con un peso inferior a los 2.5 kg, factor que se asocia principalmente al estado nutricional de la madre, el nacimiento prematuro y con el embarazo en adolescentes o en mayores de 35 años.

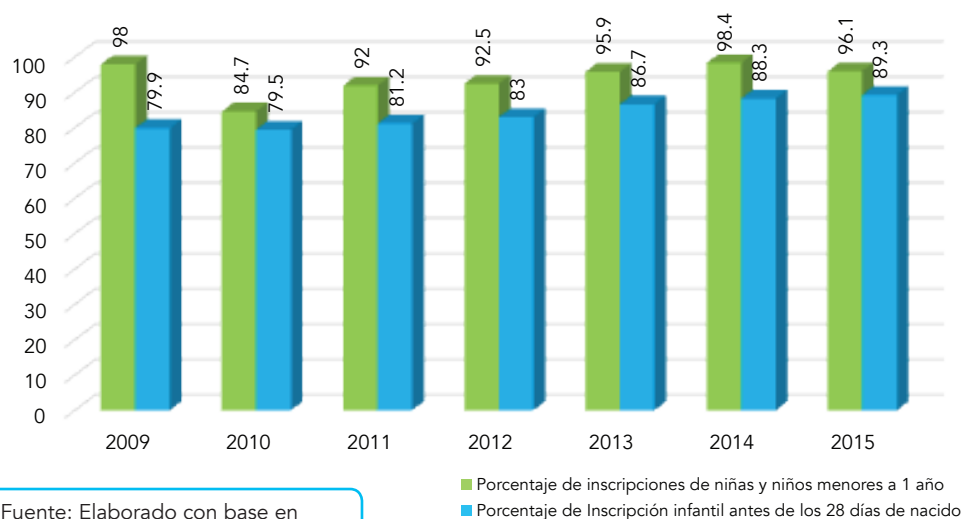
El porcentaje de niñas y niños con bajo peso al nacer muestra un incremento de 8.6% en 2009 a 9.4% en 2015, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los esfuerzos existentes, en materia de seguridad alimentaria y nutricional, salud sexual reproductiva y prevención del embarazo en adolescentes.

¹⁰ Acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud

Gráfico 13 Número y porcentaje de niñas y niños con bajo peso al nacer, 2009-2015

Con la reforma del sector salud, se ha implementado un modelo de atención integral que aborda a la persona en su entorno familiar y comunitario. El MINSAL cuenta con 815 establecimientos organizados en la RIIS, inversión y ampliación de la infraestructura en 5 redes regionales, 17 redes departamentales y 68 micro redes intermunicipales de establecimientos de salud (MINSAL, 2016).

Adicionalmente, se ha consolidado la estrategia de Equipos Comunitarios de Salud Familiar con un total de 575 ECOS familiares y especializados en 184 municipios lo que ha permitido ampliar la cobertura de los servicios a la niñez y adolescencia en términos de atenciones infantiles y maternas, partos intrahospitalarios, inmunización, lactancia materna, atenciones preventivas y consultas curativas (MINSAL, 2016).

Gráfico 14 Cobertura de inscripción infantil de niñas y niños antes de los 28 días y un año de edad en el Sistema Nacional de Salud, 2009-2015

La inscripción infantil en niñas y niños menores de 1 año se ha mantenido entre valores del 92% al 98% en el periodo 2009-2015, alcanzando su mayor valor en 2014 con el 98.4%. De igual forma, la inscripción infantil antes de los 28 días de edad, oscila entre el 80% y 89% para el mismo periodo, mostrando una tendencia creciente que representa un incremento del 10% en la cobertura de inscripciones.

El programa ampliado de inmunización que desarrolla el MINSAL tiene como prioridad acciones encaminadas a lograr coberturas universales de vacunación, con la finalidad de disminuir las tasas de morbilidad y mortalidad causadas por enfermedades inmuno prevenibles (MINSAL, 2014, p.111). Se dispone de uno de los cuadros básicos de vacunación más completos de la Región, por lo que el Salvador ha iniciado su proceso de certificación de la eliminación de sarampión-rubeola y la erradicación del virus de la poliomielitis (MINSAL, 2016, p.15).

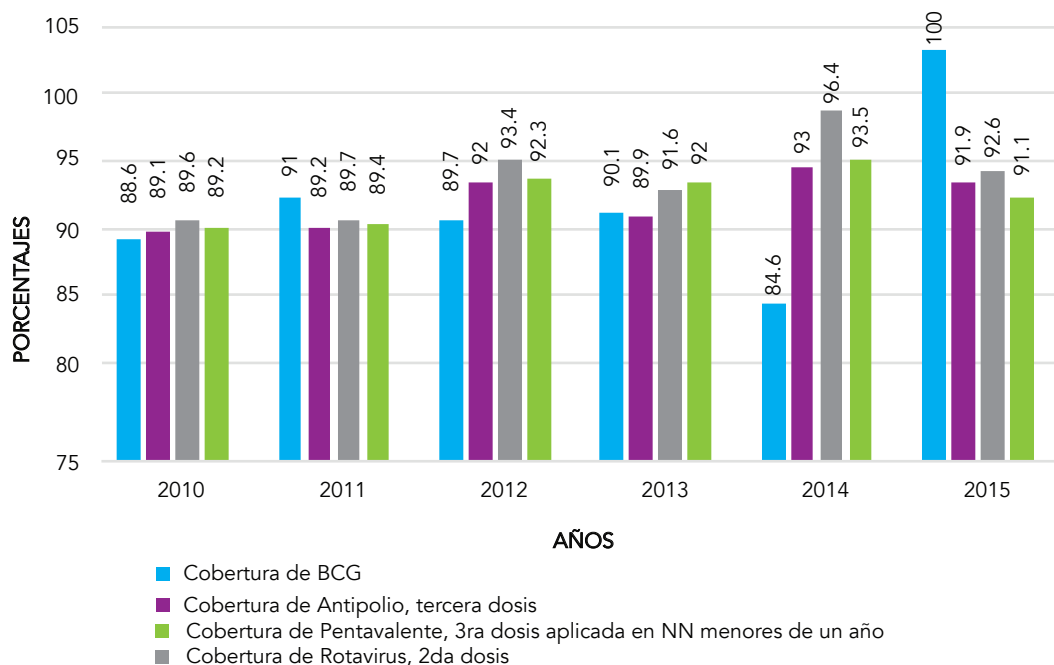
El programa introdujo la vacuna contra el neumococo a niñas y niños menores de 1 año, el refuerzo a niños y niñas de 1 año y la vacunación contra la influenza para las mujeres embarazadas. Esta acción contribuye significativamente a garantizar el derecho a la vida y la salud de las niñas y niños en sus primeros años de vida.

La cobertura de vacunación en niñas y niños menores de un año se incrementó en el periodo 2010-2015, hasta reportarse coberturas útiles¹¹ por arriba del 90% para 2015 (MINSAL, 2016). De tal manera que cuentan con protección ante enfermedades como la tuberculosis, poliomielitis, rotavirus, difteria, tosferina, tétano, hepatitis B, Influenza tipo B. El 100% de las niñas y niños menores de un año tienen cobertura de BCG¹².

11 Cobertura útil es aquella que alcanza un porcentaje de cumplimiento igual o mayor al 90%

12 Vacuna que previene formas invasoras de tuberculosis.

Gráfico 15. Cobertura de vacunación en niñas y niños menores de 1 año, 2010-2015



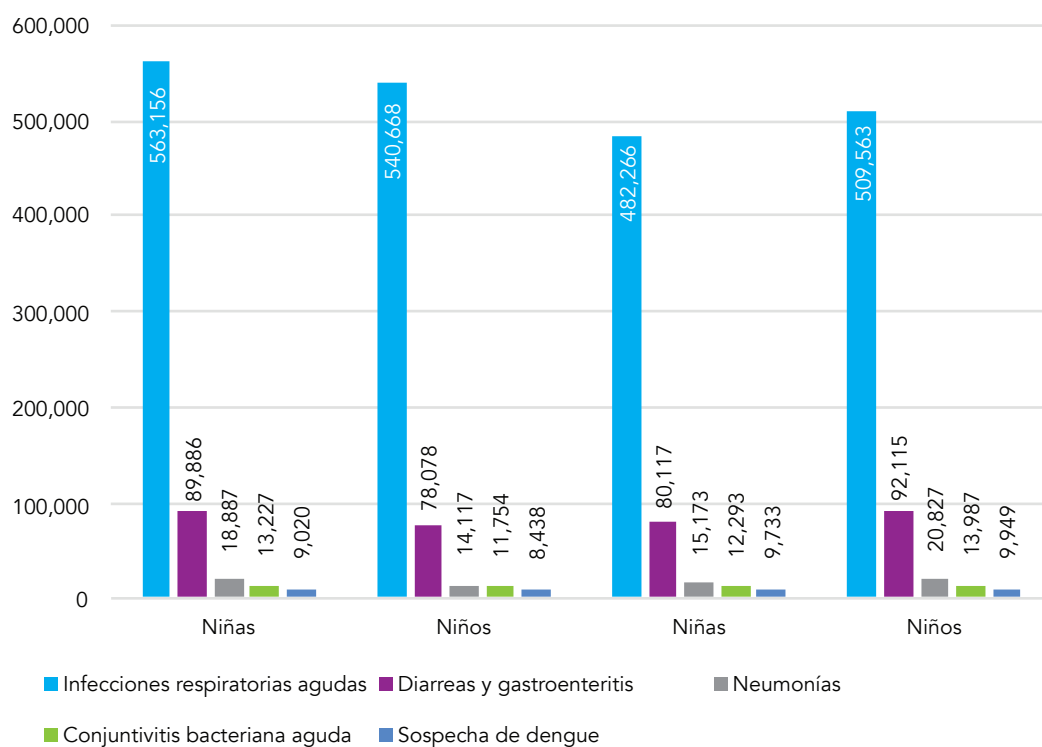
Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2016, p.207)

El análisis de la morbilidad¹³ infantil permitió verificar que las infecciones de las vías respiratorias, infecciones gastrointestinales, neumonías, conjuntivitis bacteriana y el dengue, constituyen las principales afectaciones en la salud de las niñas

y niños, principalmente en los menores de cinco años. El padecimiento de estas enfermedades está íntimamente ligado a las condiciones del entorno donde vive, condiciones sanitarias, contaminación ambiental y prácticas higiénicas de la familia. en su mayoría prevenibles.

¹³ La morbilidad está referida a la proporción de personas que enferman en un sitio y tiempo determinado

Gráfico 16 Principales causas de morbilidad en niñas y niños de 0 a 9 años, 2014-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2014a) y (2015a).

Para la población entre 10 y 19 años, las principales causas de morbilidad siguen siendo las mismas que en el rango de 0 a 9 años, no obstante, la incidencia de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales tienden a disminuir, debido a que su sistema inmunológico está mejor preparado para combatir las enfermedades.

El dengue es una de las enfermedades cuya incidencia se ha incrementado en los últimos años a nivel mundial. En El Salvador, se ha convertido en una enfermedad endémica¹⁴ que se alterna en periodos

¹⁴ Endémico: propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones.

cíclicos de epidemias¹⁵. Sin embargo, se puede prevenir con la participación activa de todos los actores de la comunidad. Las acciones de promoción y prevención con énfasis en la eliminación de los criaderos de zancudos a partir del acceso al agua potable y la adecuada disposición de los desechos son factores claves para modificar la incidencia de dicha enfermedad (MINSAL, 2012).

En El Salvador existen condiciones económicas, políticas, sociales, migratorias y ambientales que

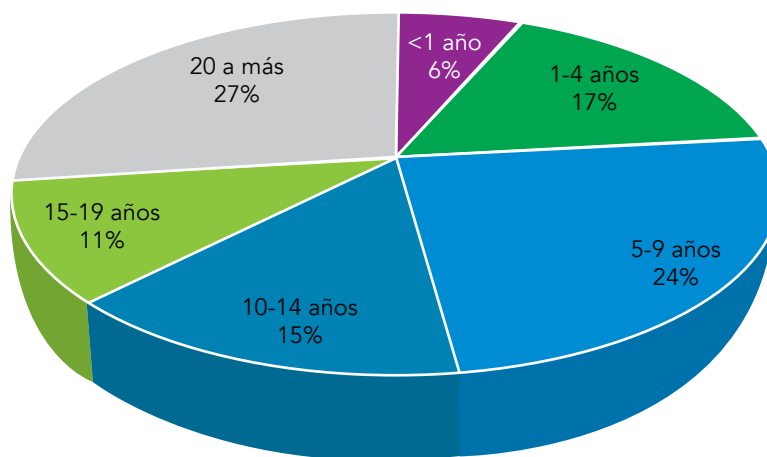
¹⁵ Epidemias: enfermedad que se propaga durante algún tiempo por un país, acometiendo simultáneamente a gran número de personas.

propician el desarrollo del mosquito y factores de riesgo que facilitan la transmisión de la enfermedad. Entre éstas cabe mencionar:

- La migración sostenida del campo a la ciudad
- Los hacinamientos poblacionales precarios
- El acceso deficiente a servicios básicos: agua potable, tren de aseo, aguas servidas.
- El calentamiento global e inviernos irregulares, entre otros.

A nivel nacional el contagio por dengue ha tenido mayor incidencia en las niñas, niños y adolescentes. De 9,986 casos confirmados en 2015, el 73% correspondieron a este sector de la población. A su vez, el grupo etario que concentra la mayor cantidad de contagios es el de 5 a 9 años (24% del total de casos). Para todos los grupos etarios comprendidos entre 0 y 19 años, las tasas de incidencia del dengue son superiores a la tasa promedio nacional (115×100 mil habitantes). Sobre esto es importante mencionar que la tasa de menores de un año corresponde a 536 por 100 mil habitantes, es decir, 3 veces más que el promedio nacional (MINSAL, 2016a, p.12).

Gráfico 17 Casos confirmados de dengue por grupos de edad, 2015



Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2015a)

El MINSAL, como parte de su labor de prevención, ha coordinado con diversas instituciones del gobierno central y de las municipalidades, la intensificación de campañas para concientizar a la población sobre la importancia de la limpieza en pilas, barriles, eliminación de desechos que puedan contener agua en centros educativos, centros de trabajo y en las comunidades.

El análisis de la incidencia de esta enfermedad por departamento orienta a que las acciones de

prevención se focalicen en la Zona Oriental del país y en San Salvador, zonas que presentan mayor cantidad de casos y las tasas más altas a nivel nacional (MINSAL, 2016a, p.12).

De igual forma, no puede obviarse la afectación del chikungunya en la salud de las niñas y niños. Enfermedad de tipo viral que aparece en 2014, transmitida por zancudos, provocando fiebre y fuertes dolores articulares, musculares, de cabeza, náuseas, cansancio y erupciones cutáneas. Esta

enfermedad provocó que 38,938 personas entre los 0 y 19 años presentarán dificultades para moverse y, por tanto, el desarrollo normal de sus actividades escolares y recreativas, entre otras. Dentro del grupo de riesgo están las niñas y niños menores de un año, así como mujeres embarazadas, quienes presentan mayores riesgos de infección grave para el neonato previo al parto y durante éste (MINSAL, 2014b, p. 5).

Los niños, niñas y adolescentes también pueden verse afectados por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), enfermedad transmitida principalmente a través de la madre, que puede constituirse en una afectación directa a la salud y calidad de vida del neonato.

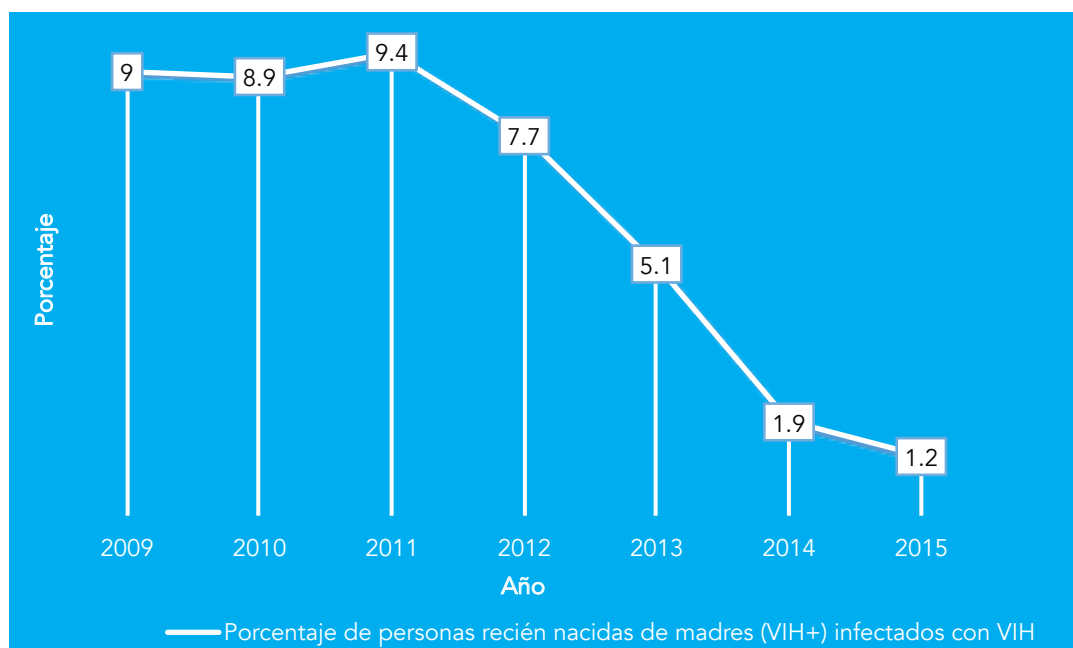
El VIH fue diagnosticado por primera vez en El Salvador en 1984. Desde ese año a 2015 el acumulado de casos de personas con VIH fue de 32,120, de los cuales 20,174 (63 %) son hombres y 11,856 (37 %) mujeres. Del total de casos acumulados 9,416

(29.3%) están en fase de VIH avanzado (MINSAL, 2016, p. 99).

El Sistema Nacional de Salud, en coordinación con diversos actores vinculados a la prestación de servicios a la población con VIH, impulsó el *Plan estratégico nacional multisectorial de respuesta al VIH-Sida e ITS 2011-2015*, con prioridad a la atención, prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Como resultado de esta intervención, se evidencia una tendencia decreciente de nuevos casos por año.

Con relación a los casos nuevos, la reducción experimentada desde 2011 ha sido del 30%, ya que pasó de 1,703 en 2011 a 1,191 en 2015. De igual manera, el porcentaje de niñas y niños recién nacidos de madres VIH+ infectados con VIH se ha reducido de 9.4% a 1.2% en el mismo periodo. A estas reducciones han contribuido el acceso universal a la prueba de VIH y el tratamiento en mujeres que son VIH+ durante el periodo de gestación.

Gráfico 18. Porcentaje de recién nacido de madres (VIH+) infectados con VIH, 2009-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2016)

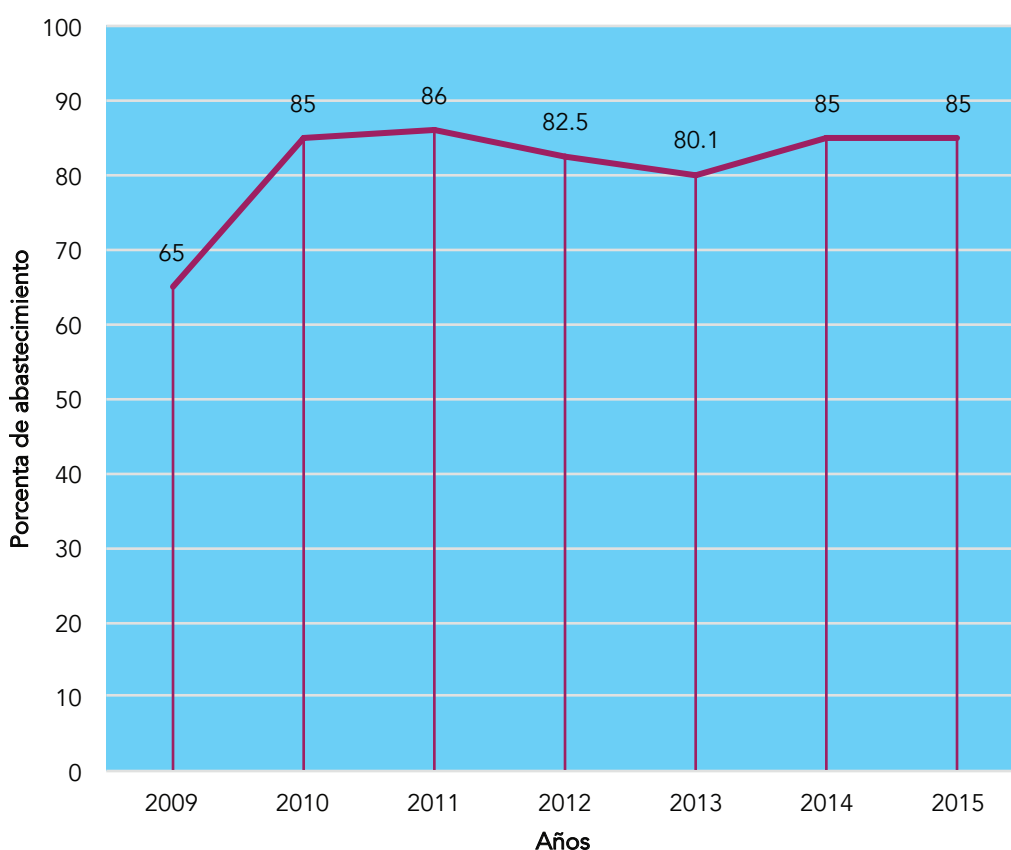
En 2015 se diagnosticaron 154 embarazadas con VIH de las cuales 97 % fueron vinculadas y 92 % retenidas para ser atendidas en los hospitales que cuentan con atención en VIH, se registró el nacimiento de 2 niñas con VIH cuyas madres fueron diagnosticadas posparto tardío (MINSAL, 2016, p.100). Los niños, niñas y adolescentes infectados con VIH son remitidos al Hospital Benjamín Bloom para que reciban atención oportuna y adecuada por parte de equipos de salud multidisciplinarios.

Cuando la salud de niñas y niños se ve afectada, una de las obligaciones del SNS es facilitar el acceso a los servicios requeridos para el tratamiento y la

recuperación de la misma. Así lo establece la LEPINA en su Art. 25 y la Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (PNPNA) contempla, entre sus líneas de acción, la provisión de medicamentos y tratamientos médicos a todos los niños, niñas y adolescentes, especialmente para quienes padecen enfermedades crónicas.

En este sentido, el SNS ha promovido acciones orientadas a garantizar los niveles de abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, todavía constituye un desafío cubrir toda la demanda. Principalmente, en los casos que el medicamento es altamente especializado y de costos elevados.

Gráfico 19. Nivel de abastecimiento de medicamentos en la red de servicios de salud, 2009-2015



Fuente: Elaborado con base en datos del MINSAL (2014), (2015) y (2016)

En 2012, el MINSAL reportó un promedio de cobertura del 82.5% en el abastecimiento de medicamentos en la red de hospitales a nivel nacional; para 2015 el promedio alcanzó el 85%.

Embarazo en adolescentes

La LEPINA establece en el Art. 24 que *“Toda niña o adolescente embarazada es considerada en un estado de alto riesgo obstétrico y perinatal, por tanto, deberá recibir atención médica de manera integral de las instituciones de salud”*. El embarazo en esta etapa de la vida constituye uno de los mayores riesgos para la salud de la madre, dado que se encuentra en una edad en la que no ha alcanzado la suficiente madurez física y emocional para asumir la maternidad y porque, en la mayoría de casos, son las adolescentes quienes asumen solas toda la responsabilidad que demanda la atención de sus hijas e hijos.

En El Salvador, el embarazo en niñas y adolescentes es una problemática de causas estructurales como la pobreza, exclusión, discriminación y patrones patriarcales arraigados en la cultura que condiciona a la mujer, desde sus etapas más tempranas de la vida, a un rol meramente reproductivo (UNFPA, 2016, p.5).

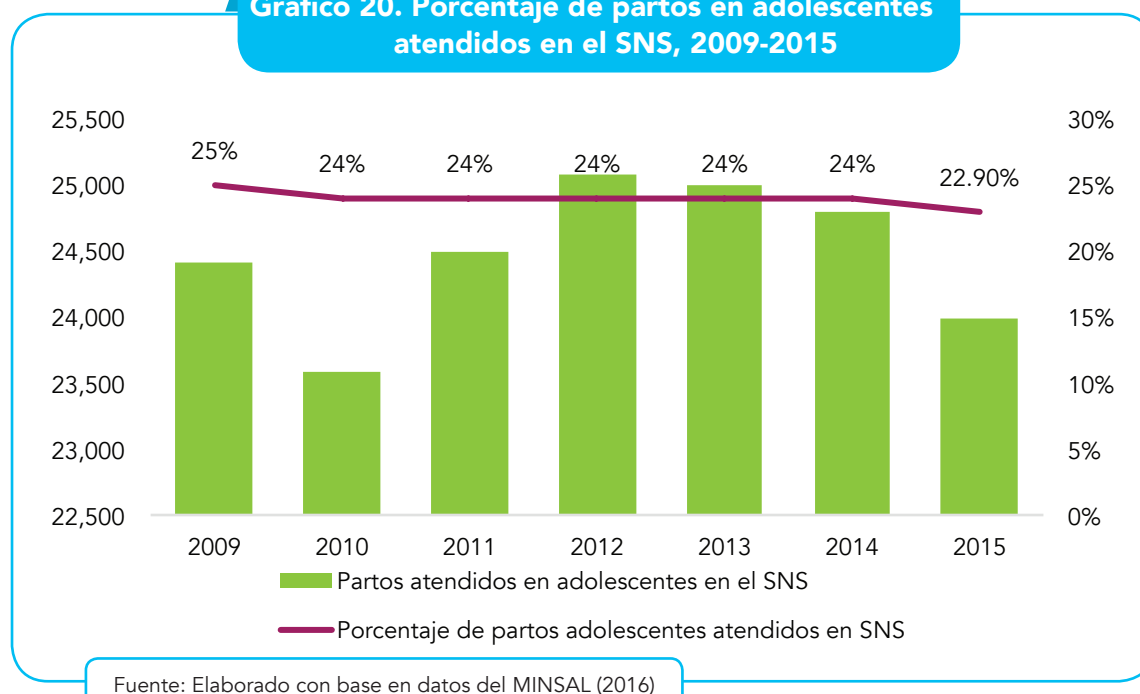
En la mayoría de los casos, embarazos son producto de circunstancias que están fuera del control de la

niña y la adolescente, impidiéndole tomar decisiones claves sobre su vida, debido que el contexto de violencia que enfrenta en el entorno familiar y social en el que viven, las coloca en situaciones de vulnerabilidad en cuanto a sus derechos (MINSAL, INS, 2015).

El Salvador ha avanzado en el fortalecimiento de la atención y protección de niñas y adolescentes embarazadas, sobre todo en virtud de la creación de la Política Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la implementación de los Servicios Amigables de Salud para Adolescentes y Jóvenes, la incorporación de la Educación Integral para la Sexualidad (EIS) en la currícula nacional y la creación del Plan Nacional de Educación *El Salvador Educado*, en el que se incluyen elementos para la prevención del embarazo en adolescentes. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, entre 2013 y 2015, uno de cada tres embarazos ha sido en adolescentes (UNFPA, 2016, p.2).

En 2015, los partos en la población de 10 a 19 años representaron el 22.9% de todos los atendidos en el Sistema Nacional de Salud (SNS), equivalentes a 23,990.

Gráfico 20. Porcentaje de partos en adolescentes atendidos en el SNS, 2009-2015



En 2015, el MINSAL reportó 13,179 inscripciones prenatales en niñas y adolescentes entre los 10 y 17 años, de las cuales el 11% tenían entre 10 y 14 años (MINSAL, 2016b). Situación que resulta preocupante, no solo por el alto riesgo que representa para la vida de estas niñas y adolescentes, sino también, porque la relación sexual con personas menores de edad es tipificada como delito en la legislación nacional.

En este contexto, las instituciones de servicios en salud sexual y reproductiva han redoblado esfuerzos. En 2015, se implementó el Plan Intersectorial para la Atención Integral de Adolescentes y Jóvenes 2015-2019 (Alianza Intersectorial), con el cual se atendieron a 20,000 adolescentes; se capacitaron a 75 promotores juveniles de salud y círculos educativos integrados por adolescentes embarazadas en 30 Unidades Comunitarias de Salud Familiar. Se desarrolló el Plan de Prevención del Embarazo en Adolescentes y el proyecto “Promoción de la salud sexual y reproductiva en contextos de riesgo y vulnerabilidad (condición de pobreza, procesos migratorios, personas viviendo con VIH y contextos de violencia de género) en El Salvador” (MINSAL, 2016, p.86).

De igual forma, en el ámbito educativo se han desarrollado programas de sensibilización en educación integral de la sexualidad, con una cobertura de 2,450 docentes; 43,500 estudiantes y 31,667 madres, padres y responsables de estudiantes. Sin embargo, aún se requieren acciones para reducir significativamente el alto número de embarazos en adolescentes mediante la educación en salud sexual y reproductiva en el ámbito familiar y el involucramiento de diversos sectores de la sociedad (MRREE, 2014).

d) Derecho a la lactancia materna

La OMS establece que la lactancia materna es la forma ideal de aportar a las niñas y niños los nutrientes necesarios para un crecimiento y desarrollo saludable. Sin duda, ésta proporciona la alimentación ideal que contribuye a disminuir la morbilidad y la

mortalidad infantil, establece vínculos afectivos entre la madre y sus hijos y proporciona beneficios sociales y económicos a la familia y al país (MINSAL, 2011).

El Art. 28 de la LEPINA concibe este derecho como una obligación del Estado, de padres, madres, representantes, responsables, empleadores e instituciones privadas que brindan servicios de salud a informarse de la ventajas de la lactancia materna y de las consecuencias de la sustitución de ésta por los sucedáneos de la leche materna; a proveerla al menos hasta los seis meses de edad; a informar e informarse sobre el riesgo de transmisión de enfermedades a través de la lactancia materna; y a implementar mecanismos que faciliten en la jornada laboral la lactancia materna, así como, generar los espacios para que la madre empleada o trabajadora pueda amamantar a la niña y niño durante los primeros seis meses de vida, entre otras.

Para garantizar este derecho se han implementado diversas iniciativas en el país. Entre ellas, la extensión de licencia por maternidad a 16 semanas, aprobación de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna, con el objetivo de garantizar el crecimiento y desarrollo integral del lactante a través de la nutrición adecuada. El reglamento de esta normativa entró en vigencia en junio de 2015. La conformación de la Comisión Nacional de Lactancia Materna (CONALAM), integrada por el ISSS, MTPS, MINED, MINSAL, CONNA, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Colegio Médico de El Salvador y la Universidad de El Salvador (UES). También se ha integrado el Comité Intersectorial de Lactancia Materna (CILAM), el cual se encuentra trabajando en la elaboración del respectivo Plan Nacional.

También se ha equipado a la Red Nacional de Bancos de Leche Humana del Hospitales Nacional de la Mujer, San Juan de Dios de Santa Ana y San Juan de Dios de San Miguel. Éstos reportaron 9,009 donantes en 2015, quienes generaron una producción de 2,595 litros de leche colectada y 1,899 litros pasteurizados, con lo cual se benefició a 685 recién nacidos prematuros y de bajo peso. Esto significó una cobertura del 100 % de niñas y niños

que nacieron antes de tiempo y con peso menor a 2,000 gramos en el Hospital Regional San Juan de Dios de Santa Ana y del 55.5 % en los menores de 1,500 gramos en el Hospital Nacional de la Mujer (MINSAL, 2016, p.85).

En 2015, también se inauguraron ocho nuevos centros recolectores de leche humana (siete en la Región de Salud Metropolitana y uno en el Hospital Regional del ISSS de Santa Ana), contando a la fecha con 31 Centros Recolectores¹⁶. (MINSAL, 2016).

Los esfuerzos antes descritos han significado para El Salvador el reconocimiento internacional de la Red Global de Bancos de Leche Humana, a la iniciativa de expandir al Primer Nivel de Atención el funcionamiento de los centros recolectores. De acuerdo con el Informe sobre tendencias mundiales de lactancia materna (WBTI) 2015, El Salvador es el segundo país de la región de las Américas con mejores indicadores en lactancia materna, con un puntaje de 105/150.

Adicionalmente, con la implementación del programa *Madre Canguro*, se favorece la termorregulación de las niñas y niños que nacen en forma prematura, permite un crecimiento adecuado, e implica una ganancia de peso efectiva del bebé a través del contacto piel a piel y una lactancia materna exclusiva.

Por otro lado, ante el nuevo marco regulatorio que garantiza el derecho a la lactancia materna, el sector empleador debe implementar mecanismos que faciliten la lactancia materna durante la jornada laboral. Esta obligación no se trata de un deber concedido a la madre trabajadora, sino un derecho de su hija o hijo que la propia trabajadora está en deber de exigir y al cual no puede renunciar bajo ninguna forma y justificación (Buaiz, 2013, p. 213).

e) Derecho a un medio ambiente sano

La LEPINA en su Art. 35 establece que *“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano, ecológicamente sustentable y adecuado para su desarrollo. El Estado tiene el deber de prever en la política medioambiental, programas permanentes dirigidos a promover la participación de la niña, niño y adolescente en la protección, conservación y disfrute de los recursos naturales y reducir riesgos resultantes de los peligros ambientales”*. Adicionalmente, resalta la importancia de la cooperación de la sociedad y las familias en la implementación de programas educativos vinculados con el manejo adecuado de los desechos sólidos, el reciclaje de basura y el monitoreo de la calidad del agua potable suministrada a la comunidad.

Los lineamientos referidos se fortalecieron con la reforma a la Ley General de Educación (Art. 13), la cual amplía el mandato del MINED, estableciendo que debe fomentar en todo el sistema educativo: *“La protección y sustentabilidad ambiental, la gestión ecológica del riesgo, la adaptación y mitigación del cambio climático”*.

La necesidad urgente que tiene el país en materia de protección y conservación del medio ambiente ha quedado evidenciada en la Política Nacional del Medio Ambiente, cuyo principal objetivo es revertir la degradación ambiental y reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático (MARN, 2012, p.1).

La política referida establece que El Salvador posee una baja calidad ambiental debido al manejo inadecuado de los desechos sólidos y tóxicos, abuso de agroquímicos en la agricultura, al anacrónico o nulo tratamiento de aguas residuales provenientes de la industria, agro industria y hogares, que contaminan los ríos, lagos y lagunas. A esto suman las condiciones de operación de rastros municipales, contaminación del aire generada por el transporte vehicular y prácticas agrícolas inadecuadas.

Con la prohibición de los botaderos de basura a cielo abierto, el volumen de desechos depositados disminuyó de 1,611 toneladas diarias en 2007 a 800

¹⁶ Diecisiete ubicados en establecimientos del Primer Nivel de Atención, ocho en la Red Nacional de Hospitales de la Región de Salud Oriental, cinco en la fábrica Fruit of The Loom de El Salvador y uno en el Hospital Regional del ISSS de Santa Ana.

en 2011(MARN, 2012, p.9). El manejo inadecuado de los residuos sólidos afecta directamente la salud y el medio ambiente en el que viven las niñas y niños, con repercusiones directas en la salud, debido a la presencia de enfermedades respiratorias y gastrointestinales.

De igual forma, el monitoreo a la calidad del agua posibilita mejores condiciones de salud para las niñas, niños y sus familias. En 2011, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), llevó a cabo un monitoreo de 55 ríos. De los 123 sitios muestreados, un 38% resultó de mala o pésima calidad, el 17% podía potabilizarse a través de métodos convencionales y un 26% resultó apta para riego. Lo anterior está relacionado con el vertido de aguas residuales sin tratar. Esta problemática encarece la potabilización, limita su uso en la producción y representa un serio riesgo para la salud de la población.

Lo anterior significa que las fuentes subterráneas han sufrido un fuerte deterioro. Los acuíferos de San Salvador y la planicie central han sido sobreexplotados y luego abandonados. Estas condiciones, junto a la mala calidad del recurso hídrico, propician que las familias se expongan al consumo de agua contaminada, situación a la que se agrega las prácticas inadecuadas en cuanto al manejo y almacenamiento en el hogar. Esto significa mayor vulnerabilidad para las niñas y niños ante posibles enfermedades (MARN, 2012, p.11).

En relación con la contaminación por desechos sólidos, en 2014 el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales decretó emergencia ambiental en el municipio de Mejicanos, debido a la recolección deficiente de los mismos. También brindó apoyo técnico a la Municipalidad de Soyapango por las mismas razones, debido que son

municipios con alta concentración de habitantes. Las supervisiones han continuado en coordinación con las autoridades de la municipalidad de San Salvador, con el propósito de evitar la acumulación de desechos en la Planta de Transferencia Aragón (MARN, 2015, p.51-52).

También han sido acciones claves la destrucción del 90% de los desechos tóxicos incluidos en el Inventario Nacional de Plaguicidas y tierras contaminadas con plaguicidas, mediante la remoción, retiro y disposición final de desechos y sustancias agroquímicas de la ex planta Quimagro, en el municipio de San Luis Talpa (La Paz), los cuales han sido asociados con las afectaciones directas a la salud de la población expuesta a esas sustancias (MARN, 2015, p.50).

En cuanto a la gestión del riesgo y adaptación al cambio climático, un avance estratégico de país generado en 2015 fue la elaboración del primer Plan Nacional de Cambio Climático, el cual establece acciones claves y prioritarias para hacer frente a los efectos que éste provoca. El fortalecimiento de la red de monitoreo de fenómenos naturales ha posibilitado la emisión de alertas tempranas y oportunas que favorecieron a la población que habita en zonas de riesgo; de manera especial a los grupos que requieren mayor protección, niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores (MARN, 2015, p.6).

Cabe destacar los avances en el monitoreo a la calidad del aire en el Área Metropolitana de San Salvador, al fenómeno de la sequía y sobre los Puntos de Calor para enfrentar los incendios forestales. Estas acciones contribuyen, sin duda, a revertir la degradación ambiental y a reducir la vulnerabilidad ante el cambio climático en el país, ya que afectan directamente la calidad de vida de las niñas, niños y sus familias.



2.2. Acciones de política pública para el cumplimiento de los derechos de supervivencia y crecimiento integral

La implementación de programas y proyectos que derivan de políticas sociales ha contribuido a garantizar el derecho a la vida, salud y a trabajar por la existencia de un medio ambiente sano para el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes. Vale destacar entre estas acciones, las realizadas por el Sistema Nacional de Salud, las cuales han fortalecido y cualificado los servicios en forma conjunta con otras instituciones públicas:

- a) *Construcción y equipamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos para Neonatos del Hospital Benjamín Bloom.* Esta Unidad constituye un esfuerzo para garantizar el derecho a la vida de niñas y niños recién nacidos en forma prematura. Fue inaugurada a finales de 2013 y cuenta con equipo especializado: 28 incubadoras de doble pared, 18 ventiladores neonatales, 2 incubadoras de transporte, 18 monitores neonatales de signos vitales, entre otros (MINSAL, 2014).
- b) *Formación de personal para la atención de las emergencias pediátricas.* Promovida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Hospital de Niños de Texas. A través de las cuales, el MINSAL ha podido proporcionar a los profesionales responsables de atender las emergencias pediátricas en 9 hospitales de la región oriental, quienes cuentan con equipo médico y de simulación.
- c) *Atenciones en el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).* La reforma de salud planteó ocho prioridades para estructurar el Sistema Nacional Integrado de Salud, siendo una de ellas la instalación del SEM. La prioridad de éste es salvar vidas y prestar atención en emergencia de forma coordinada con todas las instituciones de salud, a fin de optimizar los recursos y evitar duplicidad de esfuerzos. El Sistema que inició en 2013 ha permitido la atención pronta a quienes han requerido servicios de urgencia.

Desde su inicio hasta abril de 2015, el SEM ha brindado atención a 41,619 demandas, es decir, el envío de asistencia con ambulancias, incluyendo el traslado de personas recién nacidas en estado crítico. De la misma forma, se ha fortalecido el funcionamiento del Centro Coordinador que permita hacer los procesos fluidos, con atención de calidad de los responsables de impartirla (MINSAL, 2015).

- d) *Ampliación del número de Hogares de Espera Materna.* Instalaciones cuya función principal es el alojamiento temporal de madres con riesgo obstétrico originarias de comunidades rurales y con difícil acceso a los servicios de salud. A 2015 se contaban con 21 Hogares distribuidos en los departamentos de Ahuachapán (2), Sonsonate (2), Santa Ana (1), La Libertad (2), San Salvador (1), Chalatenango (2), La Paz (2), Cuscatlán (1), Cabañas (1), Usulután (1), San Miguel (2), Morazán (2), La Unión (2). Contar con estos servicios ha mejorado el acceso a servicios hospitalarios a mujeres en situación de riesgo, permitiendo la vigilancia en el último mes de embarazo (MINSAL, 2015).
- e) *Implementación de la Estrategia código rojo en hospitales de maternidad.* Dicha estrategia tiene como objetivo dar respuesta, en forma rápida y oportuna, a las mujeres que presenten complicaciones por hemorragia durante el período de post parto, esfuerzo que ha contribuido a la reducción de la mortalidad materna. En las 28 maternidades de la red hospitalaria se han integrado equipos multidisciplinarios para dar respuesta rápida y oportuna a las complicaciones por hemorragias obstétricas. También en 2015 el MINSAL proporcionó lineamientos a fin de asegurar la disponibilidad de los recursos indispensables para el manejo de este tipo de complicaciones (MINSAL, 2015).
- f) *Distribución de micronutrientes en polvo para reducir la anemia en niños y niñas.* Dicha estrategia se implementó a finales de 2013, con el objetivo de reducir en 10 puntos porcentuales la prevalencia de anemia en niños y niñas de 6 a 24 meses de edad, la cual para entonces era de 42%. El MINSAL inició la distribución de estos micronutrientes a familias de 14 municipios priorizados (San Miguel, Usulután y Morazán) y se amplió el proyecto de recuperación nutricional para niñas y niños con desnutrición aguda, moderada y severa desde los 6 meses hasta los 9 años en los mismos municipios, con una cobertura de 14,000 niños y niñas en 2015 (MINSAL, 2016).
- g) *Continuidad del Programa comunidades solidarias rurales y urbanas (bono escolar y de salud).* El programa comunidades solidarias rurales fue creado en 2005 bajo el nombre de Red Solidaria, con el fin de brindar atención integral a las personas y familias en situación de extrema pobreza y exclusión social. Esta iniciativa fue ampliada y comprende acciones para el fortalecimiento del capital humano mediante incentivos a la matrícula, asistencia y estabilidad educativa, ampliación de la oferta de servicios de educación y salud para niñas y niños de 0 a 5 años de edad. Comprende además el mejoramiento de la infraestructura social básica. En 2014 este programa incluyó la intervención en 100 municipios con comunidades rurales, atendiendo a 80,000 familias a través de un bono de salud y educación. Adicionalmente, se amplió la cobertura a 25 municipios de la zona urbana, con una cobertura de 5,600 personas jóvenes. Se mejoraron de manera integral 8 asentamientos urbanos precarios y en el 2015 la proyección fue incorporar 13 asentamientos adicionales (STPP, UNICEF, 2014, p.46). Estas iniciativas se enmarcan en el Sistema de Protección Social Universal con fundamento en la Ley de Desarrollo y Protección Social.

- h) *Ampliación de servicios básicos en hogares en situación de pobreza.* Un mayor acceso y disponibilidad de la población a servicios básicos mejora las condiciones y la calidad de vida de las familias en condición de pobreza, principalmente en aquellos hogares con presencia de niñas, niños y adolescentes. La construcción de infraestructura para el acceso a servicios de agua, energía eléctrica, salud y educación requiere inversión permanente. En 2014, el costo en servicios básicos desarrollados por el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) fue de \$41, 174,957 USD, del cual el 24.7% consistió en inversión en agua potable y saneamiento, el 17.1% en salud y el 11.2% en electrificación; el restante 47.5% fue utilizado en educación. Con esta inversión se alcanzaron coberturas de 83.8% en electricidad y 70.7% en agua potable, en los 100 municipios de pobreza extrema, severa y alta. (FISDL, 2015, p. 30).
- i) *Unidades de atención integral de la salud de las personas afectadas por violencia.* La estrategia de creación de espacios para la atención de víctimas de violencia, pretende mejorar la detección, prevenir y atender a niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia en todas sus formas. Por ejemplo, la prevención de riesgos en adolescentes entre los 10 y 14 años, relacionados con la violencia, el consumo de drogas y alcohol, las enfermedades de transmisión sexual y el VIH, entre otras. Esta estrategia se desarrolla a nivel nacional, con la participación de entidades como la Fiscalía General de la República (FGR), Policía Nacional Civil (PNC) y la Comisión Nacional Antidrogas (CNA).
- j) *Plan de intervención en salud mental en la niñez, la adolescencia y ante el fracaso escolar.* Este Plan establece el proceso de evaluación que permite el abordaje psicosocial para las niñas, niños y adolescentes que presentan menor rendimiento escolar y problemas de comportamiento, los cuales pueden ser determinantes sociales para el apareamiento de la violencia. Este Plan incluye la atención de niñas, niños y adolescentes entre los 9 y 16 años de los municipios de Santa Ana, Colón, Ciudad Delgado, Mejicanos, Soyapango, entre otros.
- k) *Planes y programas ministeriales para la adaptación al cambio climático.* El Programa Nacional de Restauración de Ecosistemas y Paisajes fue iniciado por el MARN en 2012 con una proyección de 6 años, en la búsqueda de una adaptación al cambio climático. Es el primer esfuerzo en el país que busca articular de manera sustantiva el accionar de tres ministerios con presencia territorial amplia: el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano y el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Para lo cual se definieron tres líneas de acción: el desarrollo de una agricultura resiliente al clima y amigable con la biodiversidad, el desarrollo sinérgico de la infraestructura física con la infraestructura natural y la restauración y conservación inclusiva de ecosistemas críticos como son los manglares y humedales. Estas acciones incluyen la reducción de la vulnerabilidad y por ende contribuyen a garantizar la vida de las niñas, niños y adolescentes que habitan en zonas de alto riesgo.



2.3. Principales retos y desafíos en el cumplimiento de los derechos de supervivencia y crecimiento integral

Al tener en consideración las acciones que ha implementado el Estado salvadoreño en los últimos cinco años para garantizar los derechos básicos y universales a la población, principalmente los esfuerzos a garantizar el derecho a la vida, la salud, las mejoras en las condiciones y la calidad de vida de las niñas, niños y adolescentes; aún persisten retos y desafíos que requieren atención prioritaria por parte de las instituciones responsables de la implementación de políticas sociales:

- a. En 2015 el 84% de los homicidios de niñas, niños y adolescentes se cometieron con armas de fuego. De ahí que se haya constituido en una de las acciones principales contra el derecho a la vida. Esta situación refuerza la necesidad de reformar la Ley de Regulación y Control de Armas de fuego, Explosivos y Artículos Similares, a fin de prohibir la portación de armas y la aplicación de vedas en los municipios seleccionados por el Plan El Salvador Seguro. Esta medida es contemplada en el Eje 1, con la meta de reducir al 20% anual los delitos cometidos con este tipo de armas.
- b. Entre 2014 y 2015 se reportó un mayor número de suicidios en niñas y adolescentes mujeres. De aquí la importancia de realizar un estudio actualizado y específico sobre el suicidio en adolescentes, con la finalidad de conocer la relación que existe con otros fenómenos de alta prioridad para el país como es el embarazo a edades tempranas.
- c. El aumento de la inversión pública en servicios de salud, infraestructura, equipamiento, suministros y la cobertura

en medicamentos constituye una demanda permanente a nivel nacional. Esto requiere de un análisis comparativo de la inversión en este sector, tomando en consideración criterios y estándares internacionales y regionales, con relación a la inversión en otros sectores de la administración pública, con la finalidad de buscar incrementos en las asignaciones presupuestarias para el sector salud.

- d. Las afectaciones en la salud de las niñas y niños, generadas por la nutrición, evidencian la necesidad de implementar programas para que las familias adopten patrones vinculados con una alimentación nutritiva y balanceada, con énfasis en las mujeres embarazadas, a fin de disminuir las condiciones de bajo peso al nacer. Este factor está estrechamente relacionado al embarazo en adolescentes y a la nutrición inadecuada durante el periodo de gestación.
- e. La obesidad y el sobrepeso en la niñez, al igual que la desnutrición, merecen particular atención, debido a las implicaciones en etapas posteriores, por ejemplo, la aparición de enfermedades crónicas. Esto requiere promover estilos de vida saludable, modificar hábitos alimenticios encaminados a evitar el consumo de bebidas gaseosas, consumo excesivo de grasa y comidas preparadas, incluir frutas y verduras en la dieta diaria y el desarrollo de actividades físicas.
- f. La reciente aprobación de reformas a la Ley General de Educación¹⁷ estableció regulaciones para los cafetines escolares, la cual debe ser fortalecida a través de una revisión integral de normas y políticas que articulan temas como salud, nutrición, familia, sistema educativo, regulación de la alimentación escolar y control de la publicidad, tomando en consideración el principio de corresponsabilidad establecido en la LEPINA. Es decir, asumir las tareas que

son propias y de responsabilidad de la familia y la comunidad con los apoyos adecuados del Estado.

- g. De igual forma, el Sistema Nacional de Salud debe continuar con los esfuerzos para la reducción de la mortalidad infantil y materna, así como también asegurar las altas tasas de inscripción y atención en servicios de salud, dado que son garantías para la supervivencia de niñas y niños en sus primeros años de vida. La atención implica una mejora efectiva en la condición de su salud y las de la madre.
- h. La atención de partos por personal calificado tiene un alto grado de cobertura, por lo que los esfuerzos deben encaminarse a garantizar la inscripción prenatal y postnatal para prevenir factores de riesgo para las madres como al recién nacido. Asimismo, deben mantenerse las altas coberturas de vacunación, lo que contribuye a prevenir la mortalidad y morbilidad causada por enfermedades inmunoprevenibles, contribuyendo de esta manera a garantizar el derecho a la salud.
- i. La identificación oportuna de problemas en el desarrollo físico y mental de niñas y niños en los primeros días de vida pueden minimizar cualquier riesgo y afectación a su salud. De ahí la necesidad de un mayor nivel de inversión en el programa de tamizaje neonatal, con la finalidad de detectar a temprana edad cualquier tipo de discapacidad.
- j. En relación con la población adolescente, deben fortalecerse los servicios de salud con prioridad en el derecho a la educación sexual y reproductiva. Las dimensiones e impactos del fenómeno del embarazo en adolescentes constituyen una prioridad para el Estado salvadoreño, debido a su incremento en los últimos años y las múltiples consecuencias directas en la vida de las niñas y adolescentes mujeres en su proyecto de vida.

17 D.L. N° 166 de fecha 05 de noviembre de 2015, publicado en Diario Oficial N° 218, Tomo 409 del 26 de Noviembre de 2015

Entre las consecuencias del embarazo en adolescentes están las relacionadas a la deserción escolar, ausencia de oportunidades, profundización o aumento de la pobreza; las cuales deben ser enfrentadas con estrategias articuladas entre las instituciones, sin considerar que este problema es de exclusiva responsabilidad del Sistema Nacional de Salud. Los esfuerzos del MINED, a través de la Educación Integral de la Sexualidad, tiene su fundamento en la medida que orienta a las y los adolescentes sobre sus derechos humanos, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos; desde un enfoque de género, diversidad, inclusión y desarrollo humano, con la finalidad de que puedan tomar decisiones libres, responsables y decidir sobre los aspectos que conciernen a la sexualidad y su futuro.

En este sentido, es necesario hacer efectiva la Estrategia 1.4 establecida en la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (PNPNA) 2013-2023: *Fortalecer y ampliar la cobertura de servicios de educación y atención integral en salud sexual y reproductiva con enfoque de género, de derechos y con base científica como parte de los servicios de salud*, particularmente mediante estrategias y acciones articuladas entre el MINED y MINSAL.

- k. La cobertura de medicamentos a nivel nacional oscila en el 85%, un esfuerzo importante a pesar de las limitaciones presupuestarias del Estado salvadoreño. Sin embargo, es necesario garantizar la mayor cobertura posible, sobre todo en los casos de las niñas, niños y adolescentes que requieren medicamentos especializados para el tratamiento de enfermedades crónicas como la epilepsia, diabetes infantil, VIH y síndrome nefrótico.
- l. En relación con el derecho a la lactancia materna, es necesario continuar con la implementación de la Ley de Promoción, Protección y Apoyo a la Lactancia Materna. Atención especial se requiere de parte del MINSAL y el MTPS, a través de las supervisiones en los lugares de trabajo, para el cumplimiento de las disposiciones de Ley. Las instituciones del sector público deben dar la pauta en cuanto al cumplimiento de obligaciones laborales, tales como la habilitación de espacios higiénicos al interior de los centros de trabajo para que las madres puedan extraerse y conservar la leche materna (lactarios) y el otorgamiento del tiempo para la lactancia ya estipulado por la Ley.
- m. Entre los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema, la exclusión social y la vulnerabilidad de las familias, es importante destacar la implementación de los programas sociales como las Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas, mediante bonos de salud, educación y el mejoramiento de asentamientos urbanos precarios, desarrollados en el marco del SPSU. Entre 2014 y 2015, con una inversión de 17.8 millones de dólares, se incrementaron casi 3 y 2.3 puntos porcentuales en la cobertura de agua potable y electrificación respectivamente (STPP, 2015). En este sentido, debe continuarse con la inversión en programas sociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población, garantizando el acceso a servicios de agua potable, vivienda digna, servicios de salud integral, la seguridad alimentaria y nutricional.
- n. La familia, por su parte, ejerce un rol fundamental en la protección integral de niñas y niños, siendo responsabilidad de las madres, padres y cuidadores cumplir con los controles de niña y niño sano, garantizar su sistema de vacunación para la prevención de enfermedades, suministro de vitaminas y minerales necesarios para su crecimiento y desarrollo físico.

De igual manera, en el seno familiar puede brindarse la orientación y educación en materia de salud sexual y reproductiva, tomando en consideración las facultades y el desarrollo de cada niño y niña. Esto permite contar en la etapa de la adolescencia con información adecuada para tomar decisiones, prevenir los embarazos y las infecciones de transmisión sexual, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 32 de la LEPINA, en relativo a tener acceso a información y educación en salud sexual y reproductiva, de forma prioritaria por su padre y madre.

- o. Vivir en un entorno limpio y saludable requiere que las familias adopten prácticas que garanticen en los hogares una

disposición adecuada de los desechos, el uso apropiado del agua y condiciones higiénicas que contribuyan a prevenir enfermedades en niñas y niños. En el ámbito comunitario, es necesario crear y fortalecer la organización de las comunidades en la prevención y atención a problemas de salud, en especial las enfermedades transmitidas por vectores.

Para finalizar, el Estado salvadoreño debe seguir profundizando en la implementación de políticas públicas y sociales con mayores niveles de coordinación y articulación de parte de las instituciones ejecutoras, a fin de evitar duplicidad en los esfuerzos, ampliar las coberturas en el ámbito territorial y hacer más efectivos los recursos limitados disponibles.





Derechos de Protección

Los derechos de protección son los relacionados con la identificación de situaciones que representan amenazas o vulneraciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes y, por lo tanto, requieren de un abordaje especial mediante mecanismos que se activen con el objeto de prevenir, atender y reparar dichas situaciones.

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) indica, en su preámbulo, la necesidad de proporcionar a la niñez una protección especial, cuando sus derechos fundamentales están amenazados o vulnerados de diversas maneras. Se considera que ante tales circunstancias o hechos se requieren medidas especiales de protección, con base a lo enunciado por medio de instrumentos internacionales de derechos humanos y de la niñez. Por ejemplo, en los artículos 19 y 39 de la CDN, se reconoce el derecho de protección de niños, niñas y adolescentes contra toda forma de violencia.

En consonancia con la CDN, la LEPINA desarrolla estos derechos en el Título II denominado “Derechos de Protección”, compuesto por 35 artículos organizados en dos capítulos que hacen referencia a situaciones concretas de amenaza o vulneración a derechos. El Capítulo I “Derecho a la Integridad Personal” desarrolla estos derechos en los artículos del 37 al 56. Entre ellos cabe destacar: la defensa frente al maltrato, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes; protección ante la privación de libertad, internamiento e institucionalización; auxilio contra la trata de niñas, niños y adolescentes, así como, el derecho a la protección frente al abuso y explotación sexual.

El Capítulo II denominado “Protección de la Persona Adolescente Trabajadora” comprende los artículos 57 al 71, estipulando prohibiciones y medidas especiales de protección en dicho ámbito. Los y las adolescentes pueden desempeñarse en labores que no sean consideradas como actividades y trabajos peligrosos¹⁸.

18 Acuerdo No 241 “Listado de actividades y trabajos peligrosos en los que no podrán ocuparse niños, niñas y adolescentes”, MTPS, 2014.



3.1 Amenazas y vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Las niñas, niños y adolescentes se enfrentan a un conjunto de hechos, delitos y violencia que pueden ocurrir en el hogar, la calle, el vecindario y la comunidad; son conocidos como “inseguridad ciudadana”. Este tipo de amenazas y vulneraciones, de carácter estructural y coyuntural, generan afectaciones directas a su integridad personal (CONNA, 2015). El Estado tiene la obligación de garantizar y proteger el derecho a la seguridad e integridad personal de las niñas, niños y adolescentes, ante cualquier modalidad de delincuencia y de violencia que se manifieste dentro del hogar, como la violencia intrafamiliar, la explotación y el abuso sexual, entre otros (CONNA, 2015).

a) Derecho a la integridad personal

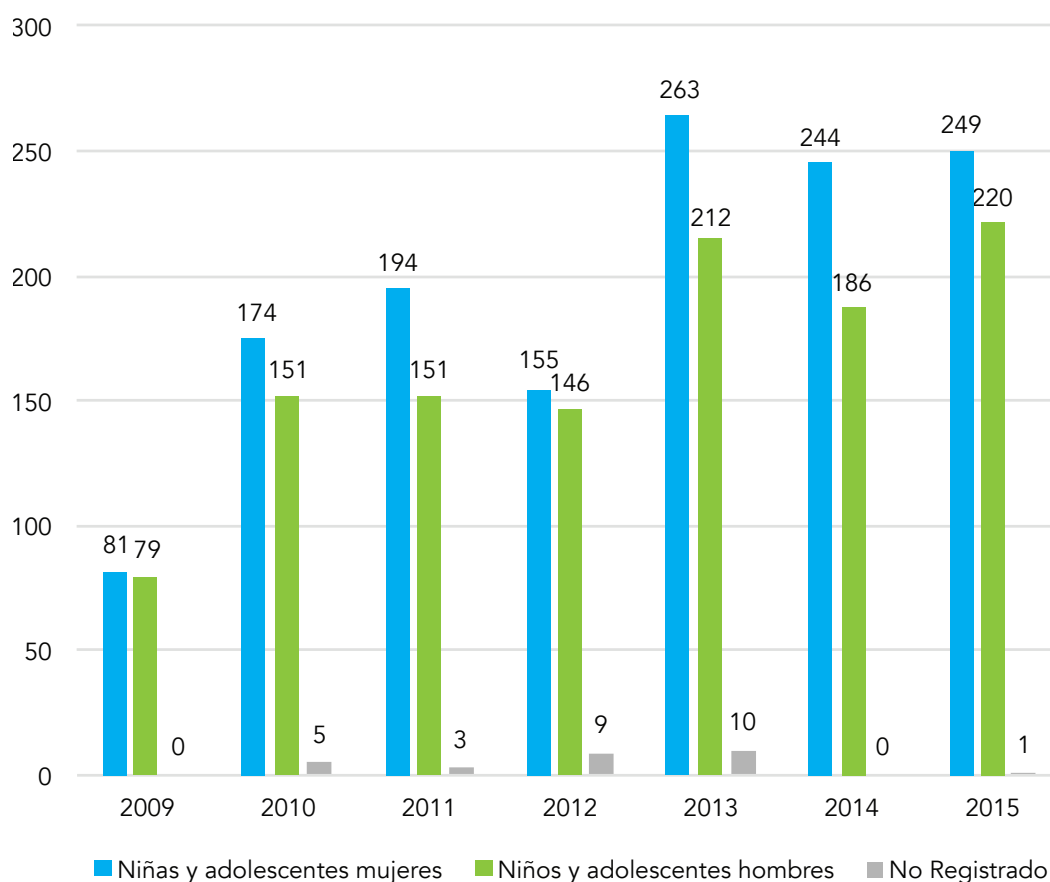
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, la cual

comprende la integridad física, psicológica, cultural, moral, emocional y sexual, tal como lo establece el Art. 37 de la LEPINA. El maltrato es concebido como toda acción u omisión que provoque o pueda provocar dolor, sufrimiento o daño a la integridad o salud física, psicológica, moral o sexual de una niña, niño o adolescentes, por parte de cualquier persona, incluidos sus padres, madres, parientes, cuidadores, cualesquiera que sean los medios utilizados (Art. 38 de la LEPINA). En consecuencia, no pueden ser sometidos a ningún tipo de violencia, como es el abuso, el maltrato, torturas, tratos inhumanos, crueles y degradantes. Sin embargo, el castigo físico y corporal en nuestro país es uno de los métodos más utilizados y asumidos históricamente para “corregir” la conducta de las niñas y niños, ocasionando profundas cicatrices emocionales y traumas que repercuten en etapas posteriores de su vida.

Si se aborda esta problemática desde el ámbito privado, es decir, de la violencia al interior del hogar, no solo la sufren las mujeres, sino también las niñas, niños y adolescentes, ya sea como víctimas de maltrato o como testigos de la violencia que se manifiesta entre las personas adultas. La experiencia demuestra que la violencia intrafamiliar es un proceso, es decir, se trata de un encadenamiento progresivo, constante y prolongado en el tiempo de agresiones ejercidas por quien detenta el poder, con el fin de mantener el dominio, control y sometimiento de su víctima (Ministerio del Interior, Uruguay y UNFPA, 2012, p.15).

El maltrato y la violencia ejercida en niñas, niños y adolescentes permanece invisible en ciertas ocasiones y no se conoce su verdadera magnitud porque la mayoría de los hechos ocurren al interior del hogar. A veces, la población opta por guardar silencio y mantenerse al margen, considerando que se trata de asuntos de carácter privado, donde no les compete involucrarse. Con frecuencia las niñas, niños y adolescentes víctimas esconden su realidad sin denunciarla por temor a represalias, debido al desconocimiento o falta de confianza en las instituciones que prestan apoyo en este tipo de escenarios (Ministerio del Interior, Uruguay, UNFPA, 2012).

Gráfico 21. Casos de maltrato en niñas, niños y adolescentes, 2009-2015



Fuente: Elaborado con base en datos de la FGR para todos los años.

La FGR reportó para 2015 un total de 470 casos de maltratos en niñas, niños y adolescentes, de los cuales el 53% fueron cometidos en contra del sexo femenino con un comportamiento creciente en los últimos tres años. Situación que puede estar asociada a un incremento en las denuncias, como también a las referencias de casos que han reportado las Juntas de Protección a la FGR, dado que más del 50% de los casos que han ingresado a partir de 2013 a dichas instancias de protección están asociados a amenazas y vulneraciones al derecho de la integridad personal, principalmente por maltrato físico, psicológico y sexual.

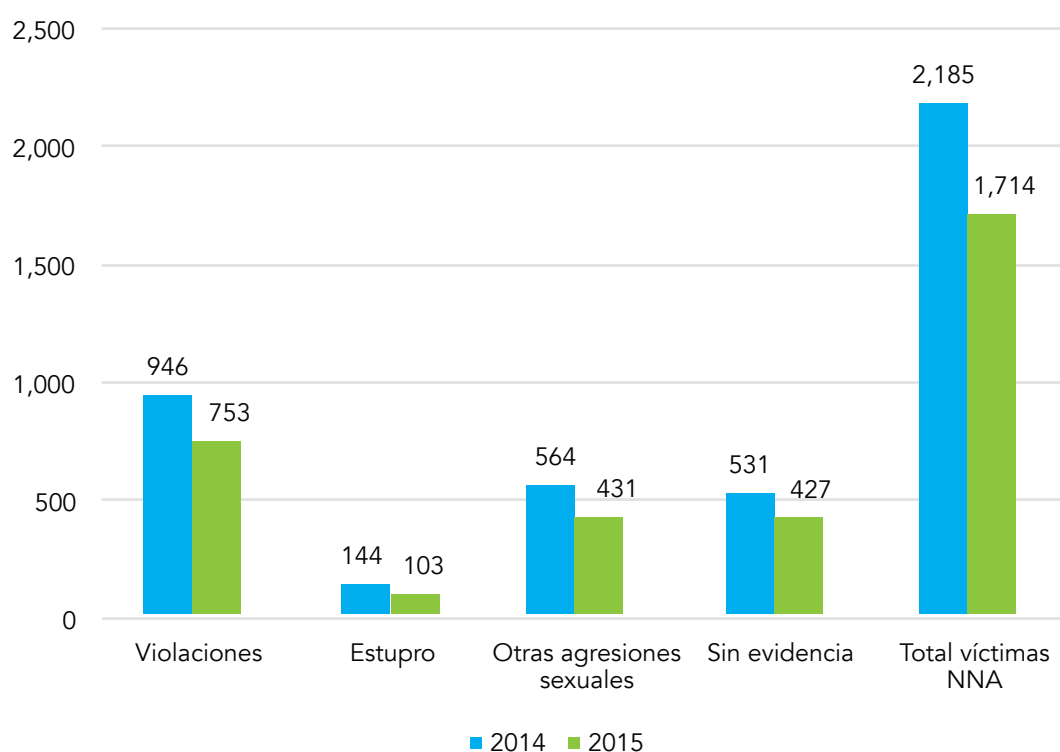
Por otro lado, preocupación principal merecen las amenazas o vulneraciones a la integridad sexual debido a los daños físicos, psicológicos y emocionales de larga duración que se producen en la vida de las niñas, niños y adolescentes.

La LEPINA define en su Art. 55 el abuso sexual como toda conducta tipificada en el Código Penal, que atente contra la libertad e integridad sexual de una niña, niño o adolescente para sacar ventaja o provecho de cualquier clase o índole y la explotación sexual como cualquier forma de abuso sexual mediante retribución en dinero o en especie, con intermediación o sin ella, existiendo o no alguna forma de proxenetismo¹⁹.

En 2015, el IML reportó la realización de 2,267 reconocimientos médicos por violación, estupro y otro tipo de agresiones. De este total 1,714 (75.6%) fueron en niñas, niños y adolescentes, lo que evidencia que en esta clase de agresiones la edad es uno de los factores de riesgo con mayor peso.

¹⁹ Proxenetista se refiere a la persona o grupo de personas que utilizan a niños, niñas y adolescentes para que estas realicen actividades sexuales a cambio de una remuneración económica o ventaja económica. (UNICEF, 2005, p.1)

Gráfico 22. Niñas, niños y adolescentes víctimas de agresiones sexuales, 2014-2015



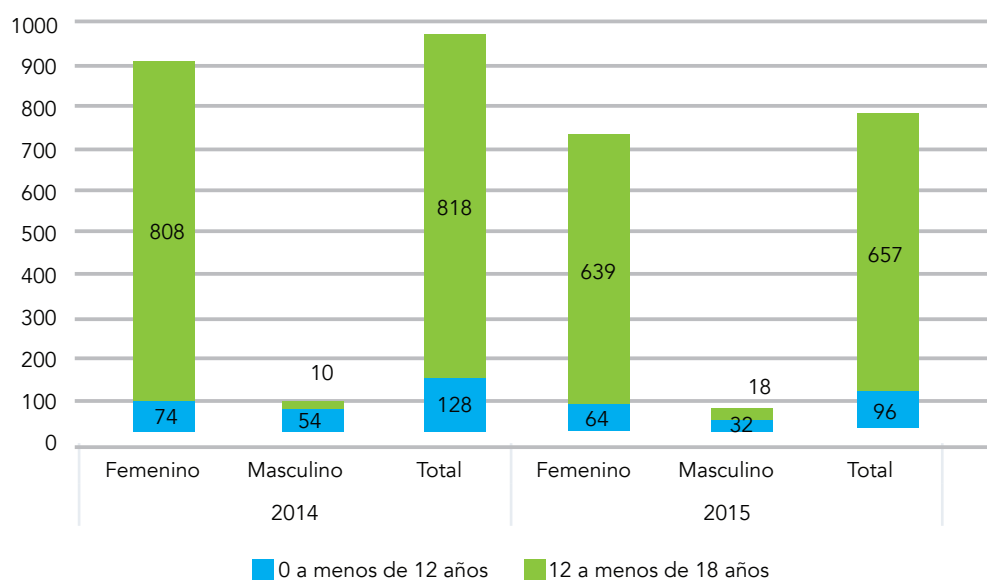
Fuente: Elaboración con base en datos de IML, 2014 y 2015.

Nota: Sin evidencia corresponde a casos en los que el reconocimiento del IML no pudo recoger evidencia física de la agresión.

Según la información del IML, la agresión sexual que tiene una mayor afectación en las niñas, niños y adolescentes es la violación. En 2015 se reportaron 753 niñas, niños y adolescentes víctimas de violación,

valor que refleja una disminución de 193 víctimas con relación a 2014. Más del 80% de las violaciones ocurrieron en adolescentes mujeres entre los 12 y 17 años.

Gráfico 23. Niñas, niños y adolescentes víctimas de violación por grupos de edad y sexo, 2014-2015



Fuente: Elaborado con base en datos de IML, 2014 y 2015

Los principales agresores sexuales son personas allegadas a las víctimas, por ejemplo, los novios (26%) y personas conocidas (24%). Este comportamiento se encuentra asociado a patrones culturales de violencia

hacia las mujeres en razón de género. Asimismo, la violación sucede con mayor frecuencia en entornos próximos a la víctima, siendo los principales en "casa conocida" (35.4%) y en "casa propia" (26.7%).

Tabla 1. Violaciones en niñas, niños y adolescentes según sexo y relación con el agresor, 2015

Relación víctima agresor	Niñas y adolescentes mujeres	Niños y adolescentes hombres	Total	Porcentaje
Novio	196	0	196	26%
Conocido(s)	167	21	188	25%
Desconocido(s)	109	7	116	15%
Compañero de vida*	58	0	58	8%
Padrastro	47	2	49	7%
Padre	36	1	37	5%
Otros	89	20	109	14%
Total	702	51	753	100%

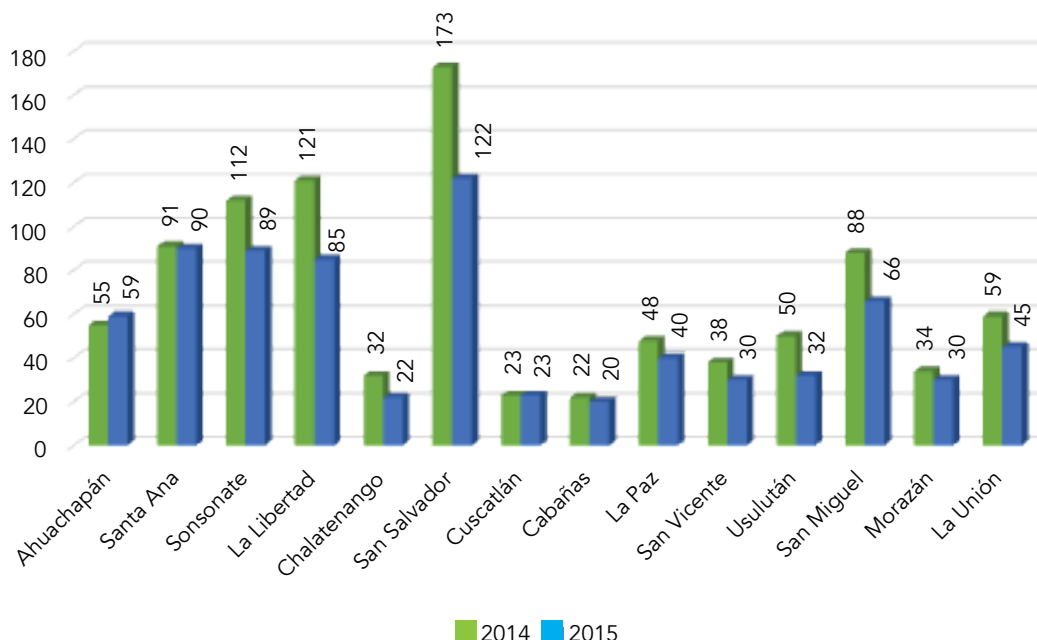
Fuente: Elaborado con base en datos estadísticos del IML, 2015

*Válido únicamente para adolescentes mujeres.

Como producto del delito referido, el IML reportó embarazos en 64 niñas y adolescentes mujeres en 2014 y 65 en 2015, condición que es una vulneración concreta a los derechos de las niñas y las adolescentes en razón de las diversas afectaciones que enfrentan a nivel personal, familiar, educativo y social. Ejemplo

de ello lo constituye el daño psicológico y emocional, posible deterioro de las relaciones familiares, la discriminación y presión social, deserción escolar y modificación de su proyecto de vida al asumir una responsabilidad para la cual aún no está preparada.

Gráfico 24. Niñas, niños y adolescentes víctimas de violación a nivel departamental, 2014-2015



Fuente: Elaboración propia con base en datos de IML, 2014 y 2015.

Analizando el comportamiento de este mismo delito a nivel departamental, se encuentra una mayor incidencia en San Salvador, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y San Miguel. A nivel de región, puede observarse que en los dos últimos años la zona occidental del país registró una proporción considerable de los casos de violación, representando entre el 27% y 31% de los mismos a nivel nacional.

Existen otras agresiones sexuales que no constituyen violación, pero que implican el uso de la violencia y el contacto físico para la satisfacción sexual del agresor, incluyendo entre otros, los tocamientos, los besos hacia la víctima, de ésta para el agresor

o hacia un tercero (CNJ, 2006). En 2015, el IML reportó 431 niñas, niños y adolescentes víctimas de otras agresiones sexuales, concentrándose el 70% en el grupo etario de 0 a 12 años, siendo las niñas en edades de 5 a 9 años las más afectadas.

Al igual que en la violación se identifican como agresores principales las personas conocidas con el 23.7%. Sin embargo, en este tipo de agresión la figura del padrastro, del vecino y el padre tienen un mayor peso dentro del conjunto de principales agresores, lo que confirma que las niñas y niños de estas edades presentan una mayor exposición a este tipo de amenazas al interior de sus hogares.

Para 2014 y 2015, el IML reportó 144 y 103 casos de Estupro²⁰ respectivamente. Como producto de esta agresión sexual en 2014 resultaron 24 adolescentes embarazadas y 11 en 2015. Al igual que en la violación, en la mayoría de los casos, el responsable es el novio con 56.6% (2014). Asimismo, esta agresión también sucede en alguna casa conocida o en la propia.

b) Protección frente a la trata

El Artículo 41 de la LEPINA define la trata como la "Captación, transporte, traslado, acogida o la recepción de niñas, niños o adolescentes, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, rapto, fraude, engaño, abuso de poder, de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una niña, niño y adolescente o de alguna persona que tenga autoridad sobre éstos, con fines de explotación. Esta explotación incluirá como mínimo: la utilización de la prostitución ajena u otras formas de aprovechamiento sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a este tipo de servidumbre o la extracción de órganos".

A finales de 2014 fue aprobada la Ley Especial contra la Trata de Personas²¹, cuyo objetivo es "La detección, prevención, persecución y sanción del delito de trata de personas, así como la atención, protección y restitución integral de los derechos de las víctimas, personas dependientes o responsables procurando los mecanismo que posibiliten este propósito" (Art.1).

La Ley referida profundiza y amplía en sus definiciones el concepto de explotación al que hace referencia la LEPINA, tomando en consideración las diferentes modalidades que ha adquirido el delito de trata. Esta definición la desarrolla en el concepto de explotación

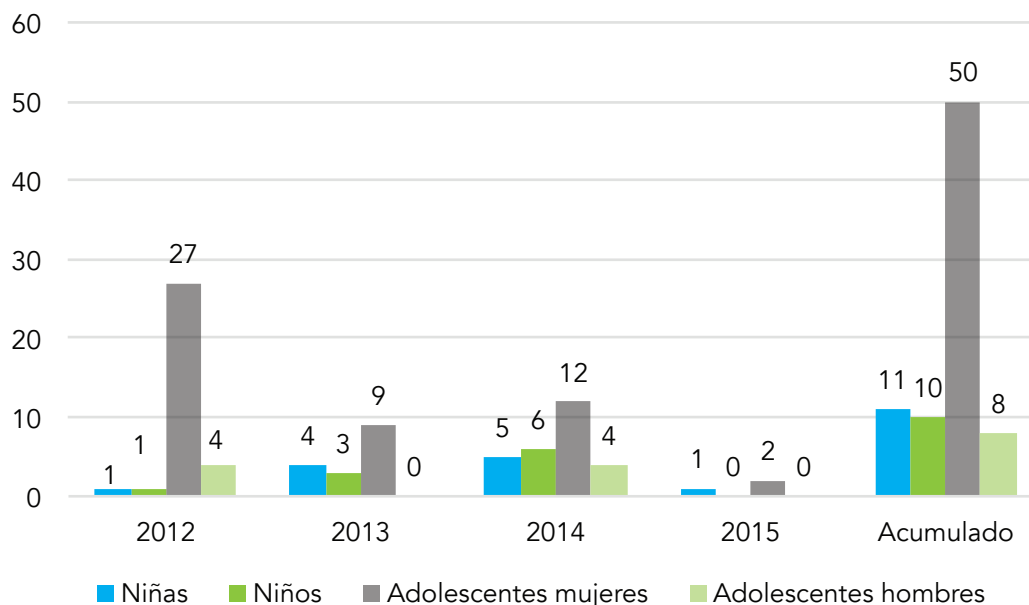
humana (Art. 3): "Cuando una persona dispusiere de la integridad física de otra para realizar actividades de explotación sexual en su distintas modalidades: explotación sexual comercial en el sector del turismo, esclavitud, servidumbre, trabajado forzado, adopción fraudulenta, así como para extraer, traficar, fecundar u obtener ilícitamente órganos, tejidos, fluidos, células, embriones humanos o para la utilización de personas en la experimentación clínica o farmacológica; así como la utilización de niñas, niños o adolescentes en actividades criminales". Importante llamar la atención sobre la modalidad de la utilización de niñas, niños y adolescentes en actividades criminales, sobre todo por el contexto de violencia delincuencia y de crimen organizado que enfrenta el país.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que los niños, niñas y adolescentes son utilizados sistemáticamente y manipulados dentro de las estructuras criminales. Son engañados, coaccionados, abusados y explotados por los adultos que tienen rangos de mayor liderazgo y dominio en la organización criminal. La coerción, el engaño y las amenazas para que se integren o colaboren con el grupo y las consecuencias negativas si no lo hacen. Las normas estrictas de funcionamiento interno con ejercicio de la violencia, como forma de disciplina interna incluyendo modos extremos como las "ejecuciones"; los riesgos constantes de violación de los derechos fundamentales como la vida y la integridad personal al llevar a cabo las acciones dentro del grupo; y los riesgos que entraña, para la vida y la integridad, la decisión de querer dejar el grupo. Todos estos son elementos que configuran situaciones de abuso y explotación (CIDH, 2015).

En 2012, las Juntas de Protección del CONNA brindaron atención y protección a 33 niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, siendo el 82% adolescentes mujeres. En 2015 se brindó atención y protección a 3, de las cuales todas eran del sexo femenino.

20 El Estupro constituye el acceso carnal por vía vaginal o anal, mediante engaño, con persona mayor de 15 años y menor de 18 años de edad. (Art. 163, Código Penal de El Salvador)

21 Decreto Legislativo N° 824 de 16 de octubre de 2014, publicado en el D.O. N°213 Tomo N° 405 de 14 de noviembre de 2014.

Gráfico 25. Niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de trata, Juntas de Protección 2012-2015

Fuente: Sistema de Información de Denuncias (SID)/CONNA, 2015

De acuerdo con datos de la FGR en 2015, se reportaron 26 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de trata. El 92% son niñas y adolescentes mujeres. La edad de las adolescentes que se constituyen mayormente vulnerables a este delito oscilan entre los 11 a los 17 años, con el 76% de las víctimas reportadas.

Es importante aclarar que la diferencia entre los datos y porcentajes de las diferentes fuentes obedece a que los casos reportados por las Juntas de Protección han sido tramitados como presuntas vulneraciones a derechos, a diferencia de los datos proporcionados por la FGR que corresponden a casos ya tipificados como delito.

La trata constituye una de las peores violaciones a los derechos humanos en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes, razón por la cual es considerada una forma de esclavitud moderna que ha sido objeto de creación de un tratado específico²² (CONNA, 2015, p.104).

²² Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo), ratificado por El Salvador.

Las Juntas de Protección, al igual que toda autoridad que ha tenido el conocimiento de la posible comisión de un delito, deben, además de seguir el procedimiento administrativo de protección a su cargo, dar el aviso correspondiente a la FGR.

c) Protección especial frente al traslado y la retención ilícitos

El Artículo 43 de la LEPINA dispone que “Se prohíbe el traslado y la retención ilícitos de niñas, niños y adolescentes, aun cuando dicha práctica tenga como origen el ejercicio de la autoridad parental, la guarda y cuidado personal, el régimen de visitas o las normas sobre autorización para salir del país. En consecuencia, el Estado garantizará la erradicación de dicha práctica”.

El tráfico ilícito de niñas, niños y adolescentes está asociado con la gestión de transportar o facilitar la movilización de las personas de un país a otro con cualquier finalidad (CONNA, 2015). En este sentido, la migración irregular es un fenómeno social difícil de magnificar debido a que los registros están relacionados con la población migrante retornada a sus países de origen y no precisamente la que

emigra, dadas las condiciones y formas ilegales en que se trasladan y viajan de un lugar a otro.

La migración irregular de niñas, niños y adolescentes tiene orígenes multicausales en El Salvador, entre las que se destacan:

- Separación del padre, madre o de ambos, razón por la cual inician la travesía hacia Estados Unidos de América en busca de la reunificación familiar.
- Falta de oportunidades y condiciones de pobreza.
- Contexto de violencia social, que se traduce en amenazas hacia la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito local.

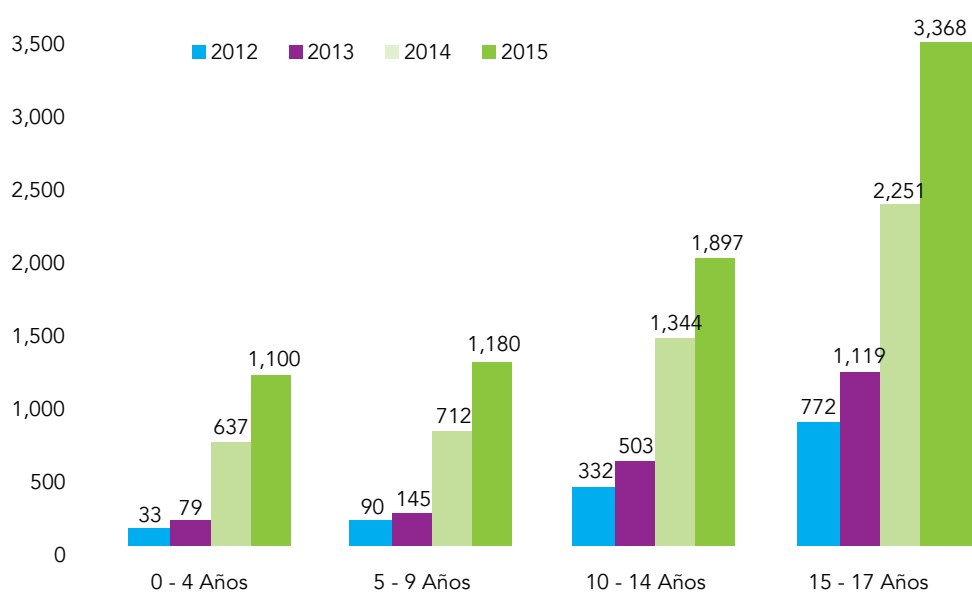
Las condiciones de vulnerabilidad y los peligros extremos, que enfrenta la población salvadoreña y centroamericana en la travesía hacia los Estados Unidos de América, se ven acrecentados en su peligrosidad por las acciones del crimen organizado en las rutas de paso, particularmente por los cárteles de la droga y las redes de trata y tráfico de personas, cuyos integrantes cometen delitos graves contra la población migrante; tales como homicidios, graves daños físicos y psicológicos,

desapariciones, secuestros, extorsiones, tráfico de órganos y sometimiento a la trata en sus diversas manifestaciones entre los que se incluye la explotación sexual o laboral. Las personas más vulnerables ante este tipo de delitos son las niñas, niños y adolescentes no acompañados, así como las mujeres.

Durante 2015, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) reportó 52,188 personas retornadas por migración irregular, de las cuales 7,545 (14.5%) fueron niñas, niños y adolescentes. Entre 2012 y 2015, esta población retornada se incrementó considerablemente al igual que el aumento significativo de la proporción que representa dentro del total de retornos. En términos de cantidad, el aumento fue mayor al 500% en relación con las 1,238 niñas, niños y adolescentes retornados en 2012. Con relación a la proporción, ha pasado de constituir el 4% en 2012 al 14% en 2015.

La mayor parte de los menores de 18 años retornados son niños y adolescentes hombres, los cuales en 2015 representaron el 61.2%. De igual forma, la proporción de niñas y adolescentes mujeres también ha mostrado crecimiento en el periodo 2012- 2015, pasando del 29.2% al 38.7% respectivamente.

Gráfico 26. Niñas, niños y adolescentes migrantes retornados por grupos de edad, 2012-2015

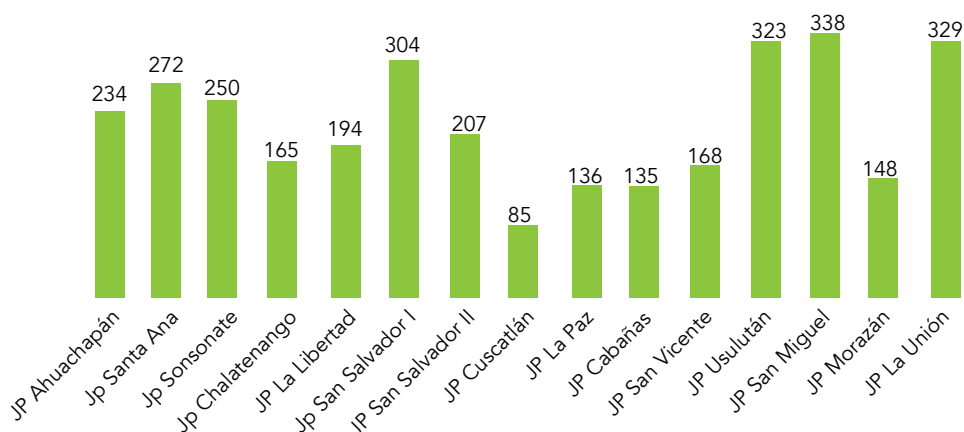


Fuente: Elaboración propia con base en datos de DGME para todos los años.

Los datos de la DGME indican que de las niñas, niños y adolescentes que migran, la mayoría tiene edades entre los 10 y los 17 años. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos cuatro años. Sin embargo, en 2015 experimentó un aumento considerable la cantidad que viajó de forma irregular, principalmente hacia los Estados Unidos de América.

Los municipios que reportan mayor número de niñas, niños y adolescentes retornados se concentran en la zona oriental del país y en los departamentos de San Salvador (17.8%), San Miguel (12.7%), Usulután (11.4%) y La Unión (9.2%).

Gráfico 27. Casos de niñas, niños y adolescentes migrantes retornados atendidos en Juntas de Protección, 2015.

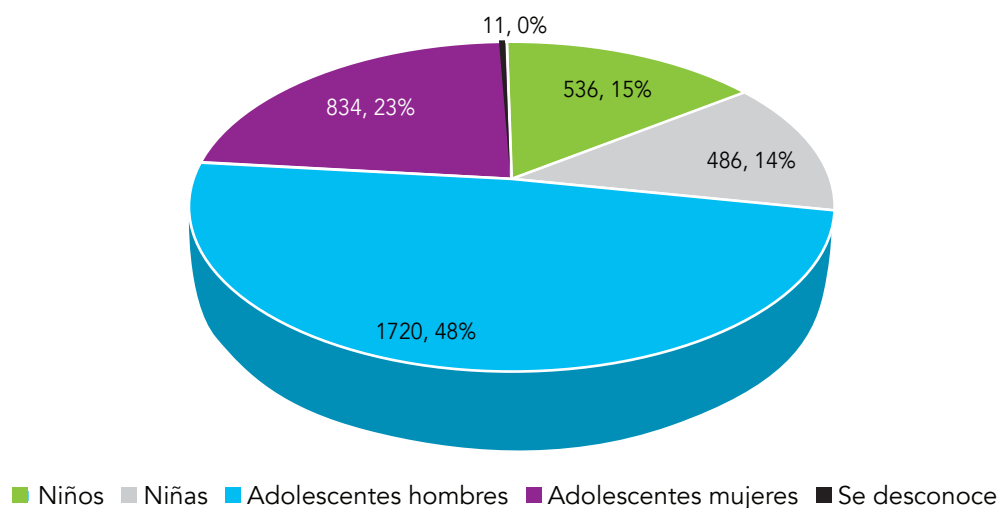


Fuente: Sistema de Información de Denuncias (SID)/CONNA, 2015.

En 2015, las Juntas de Protección recibieron 3,288 casos de niñas, niños y adolescentes por presuntas vulneraciones al derecho de protección frente al

traslado y retención en forma ilícita. El mayor número de casos se presentó en los departamentos de San Miguel (10.2%), La Unión (10%) y Usulután (9.8%).

Gráfico 28. Niñez y adolescencia migrante retornada por sexo, 2015



Fuente: Sistema de Información de Denuncias (SID)/CONNA, 2015.

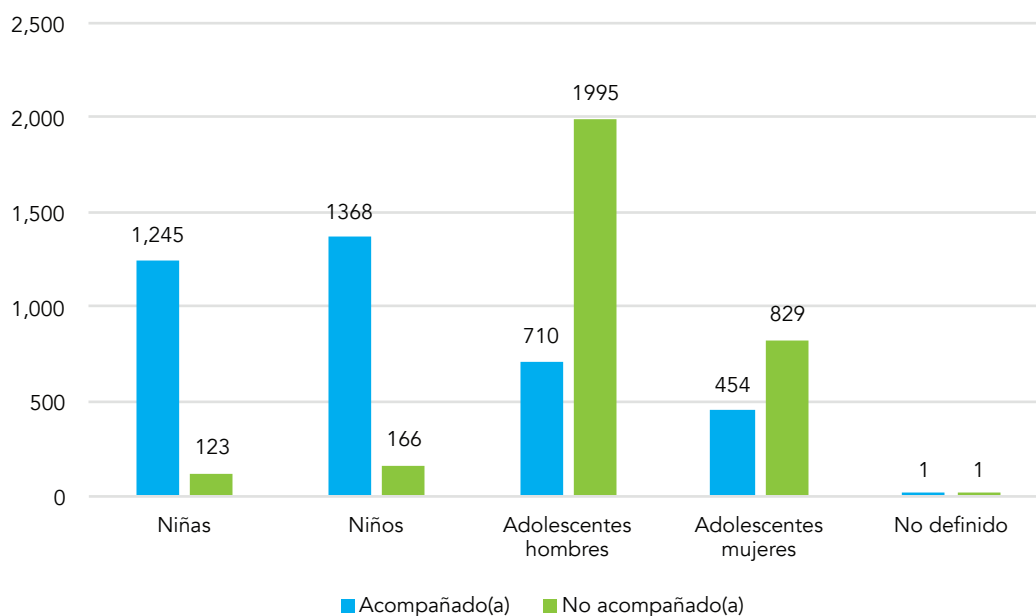
De 3,587 niñas, niños y adolescentes retornados (acompañados y no acompañados) que se atendieron en Juntas de Protección, la mayoría eran adolescentes hombres con el 47.95% y adolescentes mujeres, el 23.3%.

A partir de julio de 2014, el CONNA designó un equipo multidisciplinario de apoyo a las Juntas de Protección, en el Centro de Atención Integral para Migrantes (CAIM). Este equipo es responsable de realizar las entrevistas individuales para obtener la información del contexto social y familiar de la niña, niño o adolescente; verificar la documentación y la idoneidad de la familia responsable para hacer efectiva la entrega de la población retornada. También tiene la responsabilidad de contactar a las familias, en caso de no haber sido notificadas antes de la llegada del niño o niña y asignar el caso a las Juntas de Protección, cuando se haya detectado, a través de la entrevista, amenazas o vulneración ocurridas durante el retorno; si no cuenta con padre, madre o responsable o éstos constituyen amenaza

a sus derechos, para que se dicte la medida de protección correspondiente.

El equipo multidisciplinario referido entrevistó en el 2015 a 6,892 niñas, niños y adolescentes retornados, de los cuales 4,239 (61.5%) eran niños y adolescentes hombres y 2,651 (38.4%) niñas y adolescentes mujeres. El patrón cultural que se ha perpetuado en el fenómeno de la migración irregular ha sido la búsqueda de mejores oportunidades (sueño americano), mayoritariamente por la población masculina y con ello garantizar la provisión y el aseguramiento económico de las familias en el país de origen. No así en el caso de las mujeres adolescentes, población que tiene menor porcentaje de participación en la migración irregular por factores asociados a su condición de género. En muchos de los casos porque asumen las tareas de cuidado de hermanos y hermanas menores, las labores propias del hogar ante la ausencia de los padres y madres que han migrado y los riesgos asociados a ser víctimas de abusos y cualquier tipo de violencia durante el trayecto.

Gráfico 29. Niñas, niños y adolescentes retornados acompañados y no acompañados según sexo, julio 2014-diciembre 2015

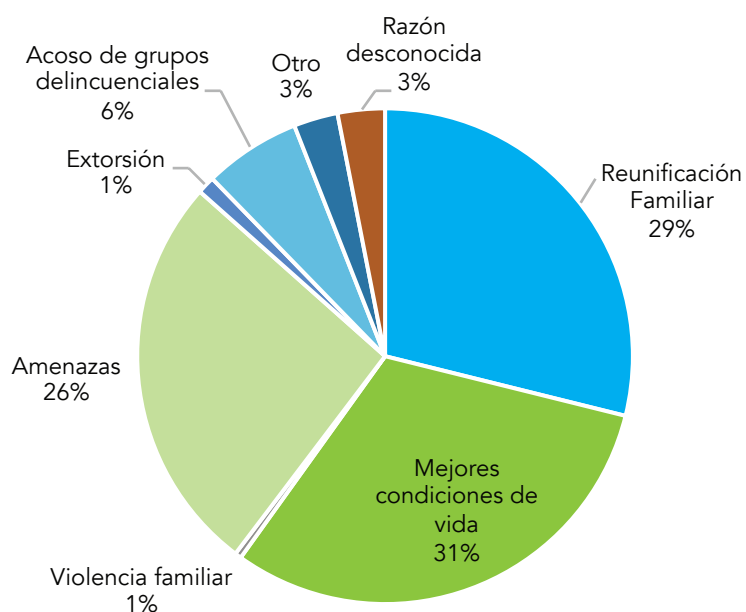


Fuente: Sistema de Información de Denuncias (SID)/CONNA, 2015.

Es importante señalar que la población de niñas, niños y adolescentes retornados que llega al CAIM ingresa al país vía terrestre proveniente de las fronteras sur y norte de México, territorio donde fueron detenidos, encontrados perdidos o abandonados por los mismos “coyotes”. Durante el período descrito, el 55% fueron niños, niñas y adolescentes que viajaban acompañados y un 45 % lo hacían sin la compañía de alguien que les brindara protección.

En relación a las causas o motivos principales por los que viajaron en forma irregular, el 31 % manifestó que era por mejorar sus condiciones de vida, el 29 % por la reunificación familiar, el 26% debido a amenazas o encontrarse en situación de riesgo a causa de la violencia, un 6% por acoso de grupos delincuenciales, entre otras.

Gráfico 30. Motivos o causas de migración en niñas, niños y adolescentes atendidos en CAIM, julio 2014- diciembre 2015



Fuente: CONNA, SINAES, 2015.

La migración irregular afecta a las niñas, niños y adolescentes en todos los aspectos de su vida, por lo que requieren de un acompañamiento personal que contribuya a superar dichos efectos. Por lo general, regresan con sentimientos encontrados, frustración por no haber completado su viaje, o con la alegría de regresar sin haberse constituido en víctimas durante el retorno. Tienen dificultades para reincorporarse a la escuela, debido a lo avanzado del ciclo escolar y sin contar con la posibilidad de recuperar el tiempo que se ausentaron. También experimentan sentimientos de culpa, ya que les preocupa lo que puedan pensar sus padres, responsables o amigos por no haber alcanzado el objetivo de llegar a su destino

y la incertidumbre frente la decisión de quedarse o intentar realizar el viaje de nuevo (MRREE, 2011, p.71).

d) Derechos de las personas adolescentes sujetos a responsabilidad penal

De acuerdo con las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores “Reglas de Beijing” (1985), un menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de haberlo cometido (regla 2.2.c). Este concepto es aplicable a lo que hoy en

día se denomina adolescente en conflicto con la ley o sujeto a responsabilidad penal.

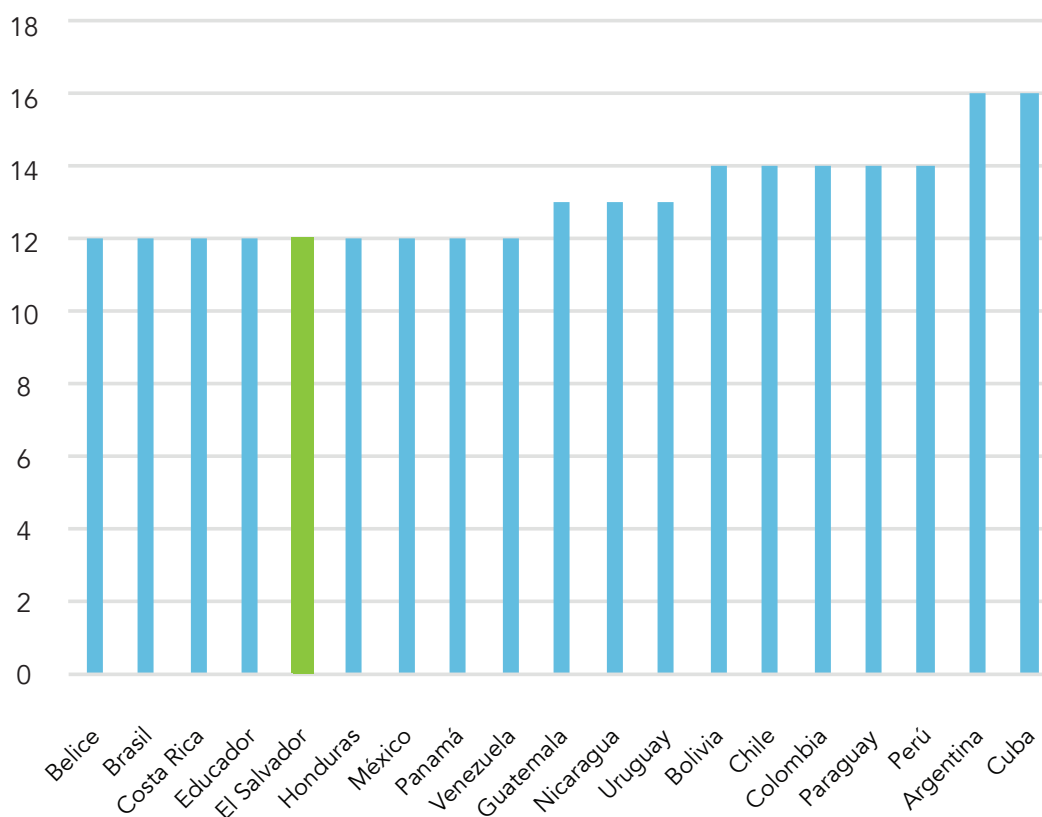
En El Salvador rige desde 1950 el principio constitucional según el cual debe existir un régimen penal diferenciado para los menores de edad (consignado actualmente en el artículo 35 de la Constitución Política de la República), lo cual es desarrollado en la Ley Penal Juvenil, cuyo artículo 2 dispone que la misma deberá ser aplicada a las personas mayores de 12 años y menores de 18.

Lo que caracteriza la responsabilidad penal juvenil son los derechos y garantías del debido proceso a las y los adolescentes a quienes se acuse de haber participado en la comisión de una infracción a la Ley Penal. A fin de dar una mayor protección a la población adolescente, estos derechos y garantías son reconocidos con mayor intensidad. Por ejemplo,

el proceso debe tener un plazo de duración más breve. Sin embargo, lo que verdaderamente caracteriza al Sistema Penal Juvenil es que la sanción penal tendrá preponderantemente una finalidad educativa y de inserción social, propiciando que el adolescente repare el daño causado, realice actividades comunitarias o se capacite profesionalmente y sólo frente a la comisión de delitos graves se aplique la pena de privación de libertad como último recurso y por el tiempo más breve posible (UNICEF, 2012, p.1).

Como ya se mencionó, la Ley Penal Juvenil prevé la aplicación de un procedimiento penal con garantías, el cual se aplica ante la comisión de delitos por adolescentes entre los 12 y los 17 años. El Salvador está ubicado entre los países de la región con adolescentes, de más corta edad, sometidos a la justicia penal juvenil.

Gráfico 31. Edad mínima de responsabilidad penal en la región



Fuente: UNICEF (2015).

En este contexto, se percibe que los delitos atribuidos a maras o pandillas son cometidos principalmente por adolescentes. Sin embargo, las estadísticas de estos hechos ponen en evidencia que las infracciones son cometidas en mayor proporción

por adultos. Confirman esta aseveración los datos correspondientes al año 2014, durante el cual fueron imputados 67,440 adultos por delitos, frente a 8,240 adolescentes inculminados durante ese mismo año (CONNA, 2016, p.7).

Tabla 2. Adolescentes procesados y tipos de medidas decretadas en los Juzgados de Menores, por sexo y tipo de medida decretada, 2012-2015.

Año	Adolescentes procesados			Medida decretada					
	Mujer	Hombre	Total	Medida de internamiento		Total	Medidas no privativas de libertad*		Total
				Mujer	Hombre		Mujer	Hombre	
2012	458	4,699	5,157	89	890	979	221	2,117	2,338
2013	408	4,267	4,675	83	745	828	243	2,431	2,674
2014	577	5,463	6,040	27	227	254	65	814	879
2015	400	4,572	4,972	17	335	352	80	1,055	1,135
TOTAL				216	2,197	2,413	609	6,417	7,026

Fuente: CSJ, Movimiento ocurrido en las instancias con competencia penal menores, para cada año.

Con base a los datos de la CSJ, consignados en la Tabla 2, el promedio de adolescentes procesados por los Juzgados Especializados de Menores entre 2012 y 2015, fue de 5,211. En 2014 se reportó un incremento significativo, ya que pasaron de 4,675 en 2013 a 6,040. La mayoría de los adolescentes procesados son jóvenes hombres (91.2%).

Existen cinco delitos que configuran el 50% de procesos que involucran a los adolescentes: posesión y tenencia de sustancias ilegales (14%); tenencia, portación o conducción ilegal de armas de fuego (12%); extorsión (9%); agrupaciones ilícitas (7%) y homicidio agravado (7%).

La Tabla 2 también evidencia que los jueces de menores tienden a privilegiar las medidas que no implican la privación de libertad. En el periodo referido dictaron 9,439 medidas judiciales, de las cuales el 74.4% fueron no privativas de libertad y solo el 25.6% de internamiento.

En materia penal juvenil deben destacarse tres avances: a) no existe mora judicial, b) se han de-

sarrollado iniciativas de especialización de jueces y fiscales en materia de justicia penal juvenil y c) la creación de las primeras oficinas resolutorias alternativas de conflictos, de la Corte Suprema de Justicia, en las que aplica el enfoque de justicia restaurativa. Pese a que la Ley establece un requisito de especialidad para los operadores que trabajan en el sistema penal juvenil, aún falta especialización en algunos de éstos, como es el caso de la PNC y la PGR. De igual forma, existen evidencias que los malos tratos hacia las y los adolescentes, por parte de algunos miembros de la PNC y la Fuerza Armada, han continuado. Por ejemplo, el abuso de la fuerza policial en cateos, cacheos, operativos, retenes y otros dispositivos militares (UNICEF, 2014, p. 123).

La ejecución y organización de programas para la implementación de las medidas dictadas por los Tribunales de Menores y de Ejecución de las Medidas al Menor corresponde al ISNA. Esta entidad tiene bajo su administración cuatro centros de inserción social (CIS) para adolescentes que cumplen medidas de internamiento y otras que no implican la privación de libertad. La Dirección General de Centros Intermedios del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP)

es responsable de aplicar la medida de internamiento en los casos de personas que hayan cumplido los 18 años de edad, que requieran un tratamiento especializado o que su permanencia en los centros implique un perjuicio para los menores de edad.

En 2015, la población adolescente atendida por el ISNA en el Programa de Inserción Social alcanzó los 2,881 adolescentes y jóvenes, de los cuales, 1, 465 (50.8%) fueron atendidos en

los Centros de Inserción Social y 1,416 (49%) a través de medidas alternativas. Del total de atenciones 1,508 (52.3%) fueron brindadas a adolescentes entre los 12 y menores de 18 años.

Los principales delitos por los cuales la población adolescente ingresa al programa de inserción social del ISNA es la extorsión (27.4%); el comercio, posesión, tráfico y tenencia de drogas (20.8%); el homicidio (19.2%) y la tenencia, portación o conducción de armas de guerra (7.11%) (ISNA, 2016, p.13).

Tabla 3. Adolescentes presentes a diciembre 2015, en Centros de Inserción Social de ISNA por rango de edad y sexo

Centro de Inserción Social ISNA	12 a menos de 14 años		14 a menos de 16 años		16 a menos de 18 años		Total
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	
CIS El Espino	-	2	-	25	-	120	147
CIS Ilobasco	-	-	-	9	-	34	43
CIS Tonacatepeque	-	2	-	29	-	136	167
CIS Femenino	-	-	10	-	24	-	34
Total	-	4	10	63	24	290	391

Fuente: ISNA, GPI/SIPI/bd movimientos 2015

A diciembre de 2015, la población que se encontraba cumpliendo medidas de internamiento en los cuatro Centros de Inserción Social fueron 391 adolescentes; el

80% era población entre los 16 y menores de 18 años y el 91% de todos los internos a esa fecha eran adolescentes hombres.

Tabla 4. Adolescentes presentes a diciembre de 2015 en el Programa Medio Abierto de Inserción Social de ISNA, por zona, grupo de edad y sexo

Medio Abierto	12 a menos de 14 años		14 a menos de 16 años		16 a menos de 18 años		Total
	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	
Medio Abierto Central/Paracentral	0	1	4	29	19	97	150
Medio Abierto Occidental	0	2	1	12	2	54	71
Medio Abierto Oriental	0	1	5	20	6	101	133
Total	0	4	10	61	27	252	354

Fuente: ISNA, GPI/SIPI/bd movimientos 2015

De igual forma, a diciembre de 2015 los adolescentes que cumplían medidas alternativas en medio abierto eran 354, siendo la población masculina, el 89.5% y el 87.3% entre los 16 a 18 años.

e) Adolescentes privados de libertad

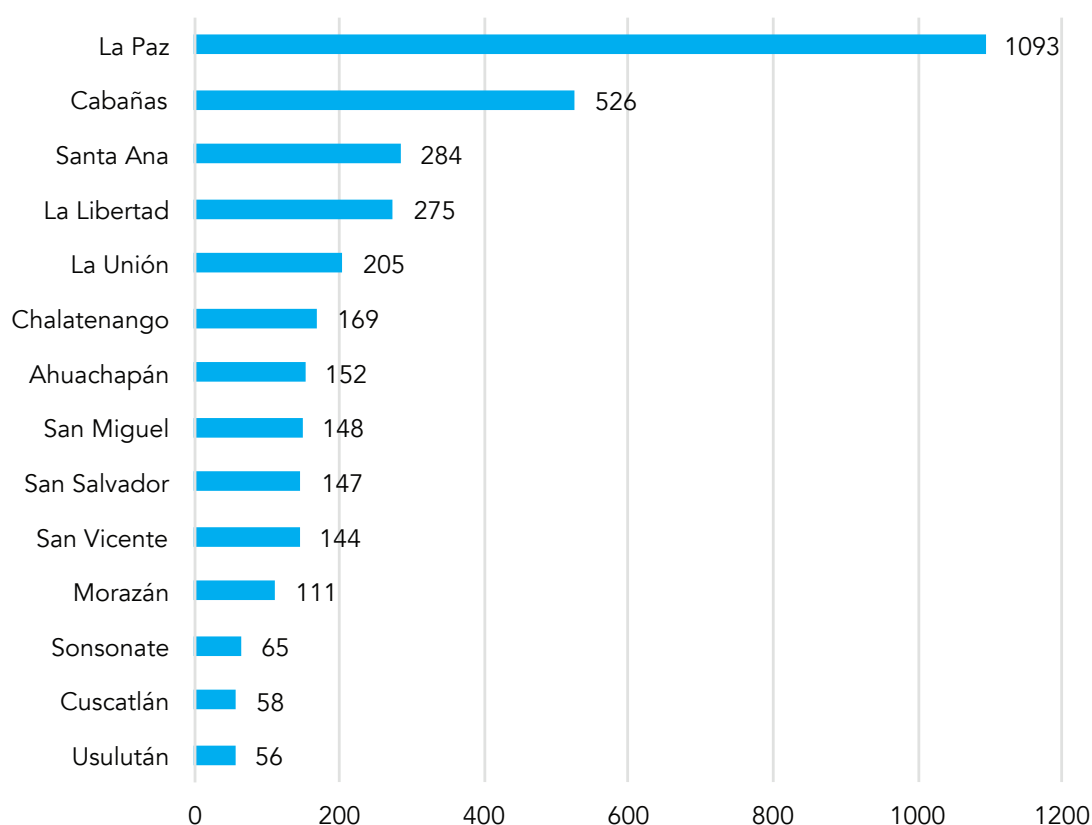
Según las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (1990), por privación de libertad se entiende “Toda forma de detención o encarcelamiento, así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al menor por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública” (Regla 11.b).

La privación de libertad en una persona menor de 18 años debe decidirse como último recurso

y por el período mínimo necesario, limitándose a casos excepcionales. De igual forma, se efectuará en condiciones y circunstancias que garanticen el respeto de los Derechos Humanos de la población adolescente, facilitándoles la realización de una serie de actividades y programas que contribuyan a su desarrollo y sus posibilidades como parte de la sociedad.

La LEPINA dispone en su artículo 40 que “Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser privados de su libertad, de forma arbitraria o ilegal sin más límites que los que la Ley determine”. El mismo artículo establece que las medidas de privación de libertad o internamiento que las autoridades determinen estarán fundamentadas y respetarán los plazos impuestos.

Gráfico 32. Adolescentes privados de libertad por departamento, 2015



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la PNC, 2015.

En 2015, la PNC reportó 3,433 detenciones de adolescentes. La mayor parte de éstas ocurrieron en los departamentos de La Paz (31.8%) y Cabañas (15.3%). Usulután reportó el menor número de adolescentes detenidos (1.6%). Entre los delitos más frecuentes cometidos por los y las adolescentes están el robo, lesiones y la extorsión.

Es importante recordar que la PNC no es la institución a la que la Ley atribuye la función de resguardar a la población adolescente capturada en flagrancia, sino el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA), de acuerdo a los artículos 53, 58 y 130 inciso segundo de la Ley Penal Juvenil. En este sentido, el ISNA participa de la administración o sostenimiento de los resguardos de Santa Ana, Sonsonate, Credisa, Centro de San Salvador y San Miguel, en coordinación con las alcaldías y la PNC, realiza visitas a las subdelegaciones de la PNC de Monserrat, Apulo, Ciudad Futura, Canizal y Panchimalco, con el propósito de obtener información sobre los adolescentes con medidas administrativas (ISNA, 2014, p.80).

En cuanto a las atenciones que se brindan a la población con medidas administrativas de resguardo, el objetivo principal ha sido garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los adolescentes detenidos por la autoridad administrativa en un resguardo y que se encuentran a la espera de la judicialización de su proceso. El programa vinculado desarrolla tres componentes: alimentación y nutrición, asistencia jurídica y salud. Éstos se han implementado en coordinación con actores directos e indirectos del subsistema de justicia penal juvenil: la PNC, la PGR, los juzgados de menores, la FGR, el MJSP y el MINSAL (ISNA, 2014, p.81).

Según los datos del ISNA, de 2011 a 2015, se atendieron 25,609 adolescentes en detención administrativa, principalmente en la zona central del país. Cabe destacar la reducción de 3,810 adolescentes menos, atendidos por parte de ISNA en 2015, en comparación a los 8,438 en 2011, reducción coherente con las reglas para la protección de menores de edad privados de libertad de las Naciones Unidas.

Tabla 5. Adolescentes atendidos en resguardos a nivel nacional, por zona geográfica y años, 2011-2015

Zona Geográfica	2011	2012	2013	2014	2015	Total
Occidente	1,366	955	1,293	1,522	1675	6,811
Central	5,725	2,207	1336	1,265	1218	11,751
Oriental	1,347	1,024	1,530	1,411	1735	7,047
Total	8,438	4,186	4,159	4,198	4,628	25,609

Fuente: ISNA, Memorias de Labores de cada año.

A pesar de las atenciones brindadas, el ISNA reconoce la imposibilidad de satisfacer el estándar legal sobre administración de resguardos, entre otros factores, debido a la limitación presupuestaria que tiene el Instituto para cubrir la totalidad de funciones que la LEPINA le establece (ISNA, 2014, p.80).

Para garantizar los derechos de los adolescentes en medida administrativa de resguardo el ISNA plantea

la necesidad de contar con un centro de resguardo administrado por dicha entidad, debido a que en la actualidad los resguardos policiales no cumplen las condiciones y estándares internacionales requeridos para garantizar los derechos en la detención administrativa. Entre los aspectos que el ISNA ha identificado como vulneraciones a los derechos se tiene el incumplimiento del término de la detención administrativa y la falta de observancia a una serie

de condiciones y estándares internacionales, tales como ausencia de espacios físicos destinados a la población adolescente, especialmente para las de sexo femenino, que les permitan permanecer separados de los adultos y también por sexo; falta de condiciones sanitarias básicas debido a la carencia de servicios sanitarios, agua potable, atención médica, servicio de alimentación, entre otras (ISNA, 2015, p 23).

f) Trabajo infantil y protección frente al trabajo

El trabajo infantil es una actividad económica realizada por niñas, niños o adolescentes ya sea bajo condición de asalariada, independiente, familiar no remunerada y otras, que les priva de su infancia, impide o limita su desarrollo, capacidades y violenta su dignidad (OIT).

El término trabajo infantil también se refiere a la participación de niñas, niños y adolescentes en formas de trabajo prohibidas y, a nivel general, en tipos de trabajo que es preciso eliminar por ser social y moralmente indeseables, a partir de las orientaciones de la legislación nacional, del Convenio N° 138 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la edad mínima de admisión al empleo (1976); del Convenio N° 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (1999); así como las recomendaciones No. 146 (1973) y No. 190 (1999) que los complementan.

El trabajo infantil incluye todo trabajo peligroso realizado por niñas, niños o adolescentes y además aquellos que son realizados por personas que no han cumplido la edad permitida por la legislación para trabajar (14 años). Todas las niñas, los niños y adolescentes están protegidos por ley ante la posibilidad de ser explotados u obligados a trabajar.

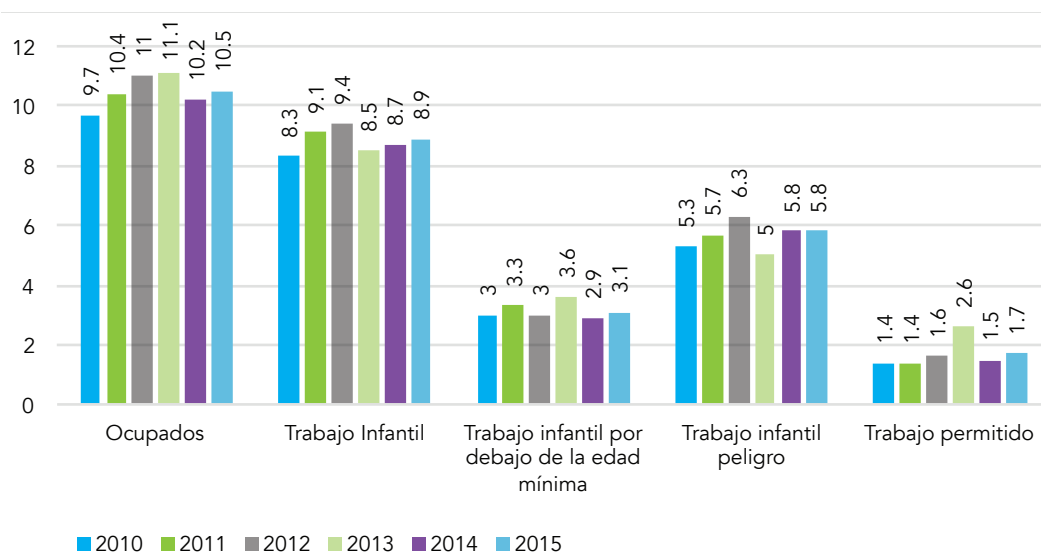
La CDN en su artículo 32 dispone que todos los estados partes tendrán que adoptar la legislación para salvaguardar a las niñas, niños y adolescentes de todo tipo de explotación o de trabajo forzado, para ello expone diferentes medidas de protección. La LEPINA asume este compromiso en el capítulo II, Protección de la Persona Adolescente Trabajadora y los aborda desde el Artículo 57 hasta el Artículo 71. En dicho capítulo se exponen diferentes medidas nacionales para la protección frente al trabajo y en el trabajo.

Entre las principales causas que se asocian a la condición de trabajo infantil en El Salvador, la pobreza es considerada la de mayor peso. Las niñas, niños y adolescentes que trabajan, por lo general, pertenecen a hogares con mayores privaciones económicas y la incorporación temprana al trabajo infantil limita sus posibilidades para lograr su pleno desarrollo. De igual forma, influyen las diversas formas de abandono, patrones de carácter cultural asociados a la permisibilidad social del trabajo infantil, como la falta de oportunidades que enfrentan las personas adolescentes.

La EHPM de 2015 reportó que de los 1, 587,456 niñas, niños y adolescentes con edades entre 5 a 17 años, 140,700 estaban en situación de trabajo infantil, lo que equivale a una tasa del 8.9% (DIGESTYC, 2016a). Lo anterior refleja una disminución de 909 que salieron de la situación de trabajo infantil en relación con 2014 y, a su vez, un incremento de 0.2% en relación con el año anterior.

El trabajo infantil es mayoritariamente masculino (73.4%) y al desagregar por el tipo de trabajo infantil realizado, se encuentra que casi 6 de cada 100 entre los 5 y 17 años realizan trabajo infantil peligroso y casi 3 de cada 100 están por debajo de la edad mínima para trabajar.

Gráfico 33. Tasas de ocupación, trabajo infantil y trabajo permitido en la población de 5 a 17 años, 2010-2015

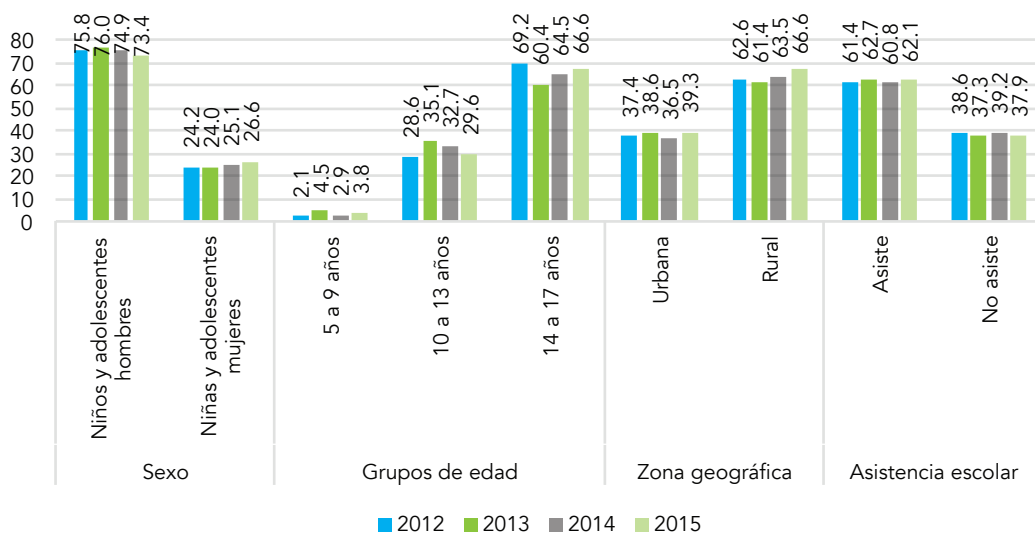


Fuente: Elaborado con base en datos de DIGESTYC (2016a)

El análisis de los datos de las niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil, en el periodo 2010 - 2015, evidencia una situación homogénea, con tasas que rondan entre el 8.3 y el 9.4. A partir de 2012 se observa una tendencia a la

reducción en la tasa de trabajo infantil peligroso y, a partir del 2013, la reducción de la tasa de trabajo infantil por debajo de la edad mínima hasta pasar de 3.6 a 3.1 en 2015.

Gráfico 34. Trabajo Infantil, según sexo, grupos de edad por zona geográfica y asistencia escolar 2012-2015



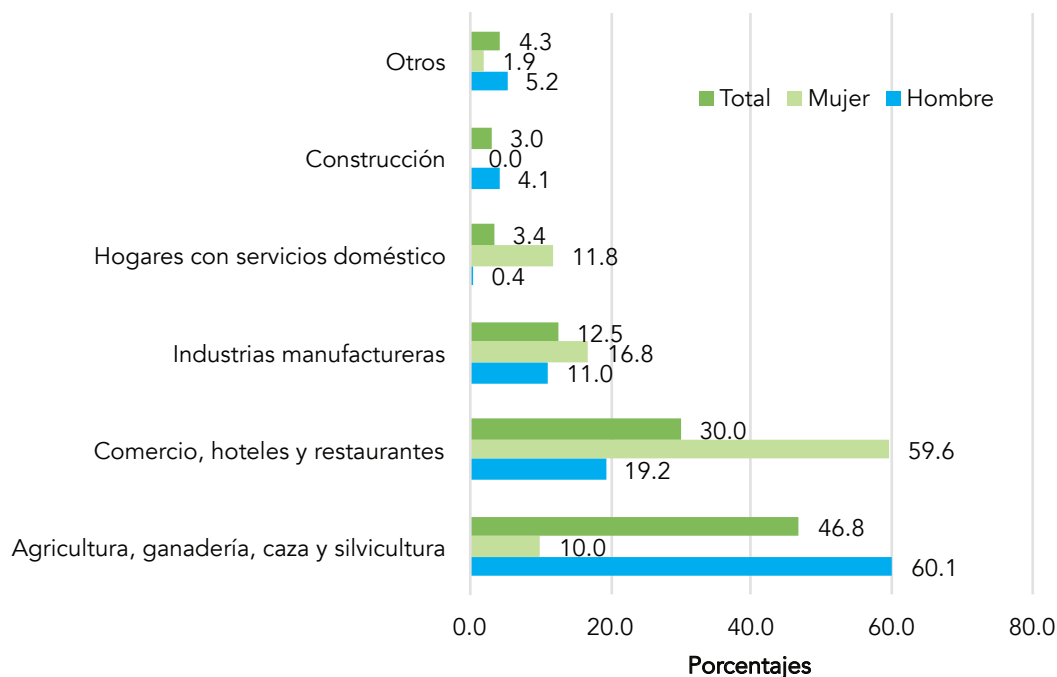
Fuente: Elaborado con base en MINEC-DIGESTYC, EHPM, varios años.

El gráfico 35, muestra que entre 2012 y 2015 más del 70% del trabajo infantil fue desarrollado por niños y adolescentes hombres. El grupo de edad con mayor participación en el trabajo infantil son las y los adolescentes entre los 14 y 17 años. La mayor parte del trabajo infantil se concentra en la zona rural y más del 30% que están en situación de trabajo infantil no reciben educación formal.

Al analizar las principales ramas en las cuales laboran las niñas, niños y adolescentes, se encuentran algunas

diferencias en razón del género. La mayoría de niños y adolescentes hombres desempeñan actividades en el ramo de agricultura, ganadería, caza y silvicultura (60.1%); mientras que las niñas y adolescentes mujeres en el sector de comercio hoteles y restaurantes (59.6%). Otra diferencia considerable se encuentra en actividades vinculadas a los hogares con servicios domésticos y en la construcción. En la primera, el porcentaje de niños y adolescentes hombres se reduce a 0.4%, mientras que en la segunda no se reporta niñas o adolescentes mujeres.

Gráfico 35. Trabajo Infantil por sexo y según rama de actividad económica, 2015



Fuente: Elaborado con base en DIGESTYC (2016a)

g) Trabajo permitido

Es obligación del Estado brindar protección frente al trabajo a adolescentes hombres y mujeres. La LEPINA dispone en el artículo 57 que: "Los adolescentes tienen el derecho a ser protegidos ante toda práctica laboral que, dentro del sector formal e

informal de la economía, ponga en riesgo el ejercicio de sus derechos. Para tales efectos, el Estado y la sociedad formularán las políticas, planes, programas y medidas de protección tendientes a erradicar el trabajo de las niñas, niños y adolescentes que no han cumplido la edad mínima para trabajar.

**“El Órgano Ejecutivo en el ramo de Trabajo y Previsión Social deberá desarrollar campañas, inspecciones y acciones permanentes en los lugares de trabajo, con el fin de sancionar a los patronos por el incumplimiento a la presente disposición”.
(Art. 57 , Inciso final LEPINA)**

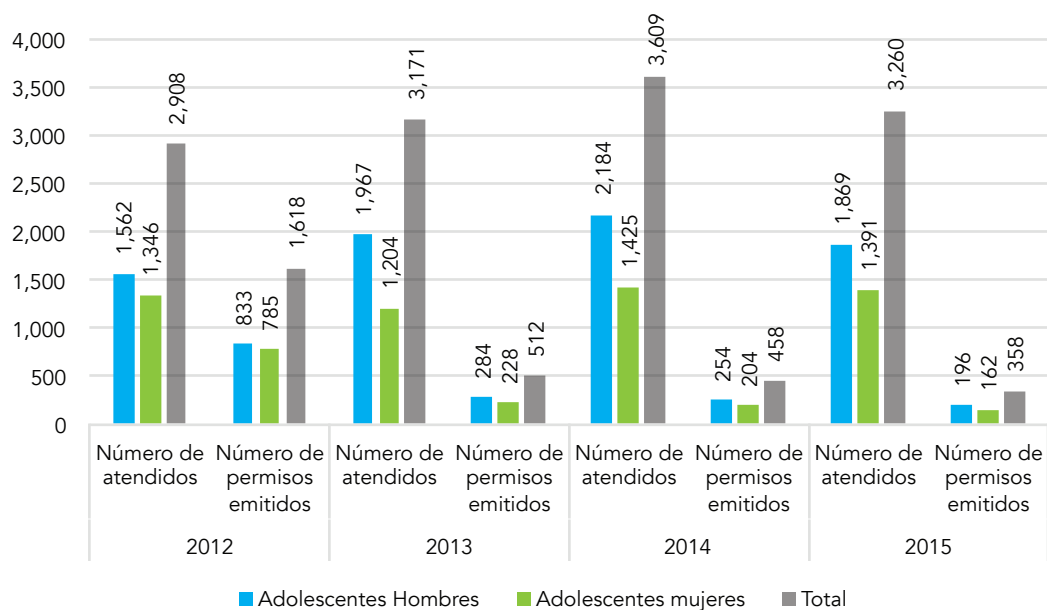
El ministerio encargado de brindar los permisos para que las y los adolescentes puedan ejercer alguna actividad laboral es el MTPS. Dicha población puede desempeñarse en cualquier trabajo, exceptuando aquellos considerados como peligrosos conforme al Acuerdo No. 241 “Listado de actividades y trabajos peligrosos en los que no podrán ocuparse niños, niñas y adolescentes” (MTPS, 2014).

Resulta importante destacar que:

- La jornada laboral de los adolescentes menores de dieciséis años, en cualquier clase de trabajo, no podrá ser mayor de 6 horas diarias, ni de 34 horas semanales (Art. 60 LEPINA);
- Está prohibido el trabajo nocturno. (Art. 60 LEPINA), y
- Las personas mayores de 16 años podrán realizar trabajos o labores domésticas como empleadas. (Art. 64 LEPINA)

Los requisitos para los y las adolescentes que solicitan un permiso laboral son:

- Cumplir con la edad mínima requerida de 14 años, para ser autorizado como un adolescente trabajador (Art. 59 LEPINA).
- 3 fotografías recientes (de frente).
- Partida de nacimiento original y copia.
- Constancia de estudios vigente, para garantizar la asistencia del adolescente a la escuela. (Art. 62 literal c) LEPINA).
- Resultados de exámenes de laboratorio: general de heces, general de orina y serología. Dichos exámenes servirán para que al adolescente le pueda ser practicado un examen médico que certifique que se encuentra en condiciones adecuadas para desempeñar el trabajo (Art. 68 LEPINA).
- Hoja patronal, emitida por la empresa contratante debidamente firmada y sellada por el departamento de Recursos Humanos.

Gráfico 36. Atención y emisión de permisos laborales para adolescentes por el MTPS, 2012-2015

Fuente: Elaborado con base en datos del MTPS 2015.

Entre 2012 y 2015 se incrementó el número de solicitudes atendidas en el MTPS, pero los permisos emitidos se redujeron. Para 2015, la mayor cantidad de permisos solicitados fueron para laborar en el Comercio (51.2% de las solicitudes) y la mayor cantidad de permisos concedidos fueron en el sector Servicios (49.4% de los permisos otorgados). Por área geográfica, San Salvador, es el departamento con la mayor cantidad de servicios solicitados y entregados, 2,497 (76.6%) y 256 (71.5%) respectivamente.





3.2. Instancias de protección ante vulneraciones y amenazas a los derechos de niñas, niños y adolescentes

La LEPINA dispone de procedimientos administrativos y judiciales favorables a niñas, niños y adolescentes, los cuales a su vez se constituyen en medios para canalizar avisos y denuncias relacionadas a las amenazas y vulneraciones a sus derechos, creando también las autoridades competentes para la aplicación de estos procedimientos.

Asimismo, establece que cuando las autoridades administrativas o judiciales identifiquen que las amenazas o vulneraciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes se constituyan en delitos, deberán hacerlo del conocimiento de la Fiscalía General de la República para la debida persecución penal.

Las Juntas de Protección de la Niñez y de la Adolescencia son dependencias administrativas departamentales del CONNA, con autonomía técnica, cuya función primordial es la protección de los derechos individuales de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito local. Dichas instancias velan por la aplicación de medidas administrativas de protección ante amenazas o vulneraciones de

los derechos, para lo cual tienen facultades que les permiten dictar medidas administrativas de protección e imponer las sanciones respectivas a las personas particulares o funcionarios públicos que infrinjan la Ley en detrimento de los derechos de la niñez y la adolescencia (Art. 159 de la LEPINA).

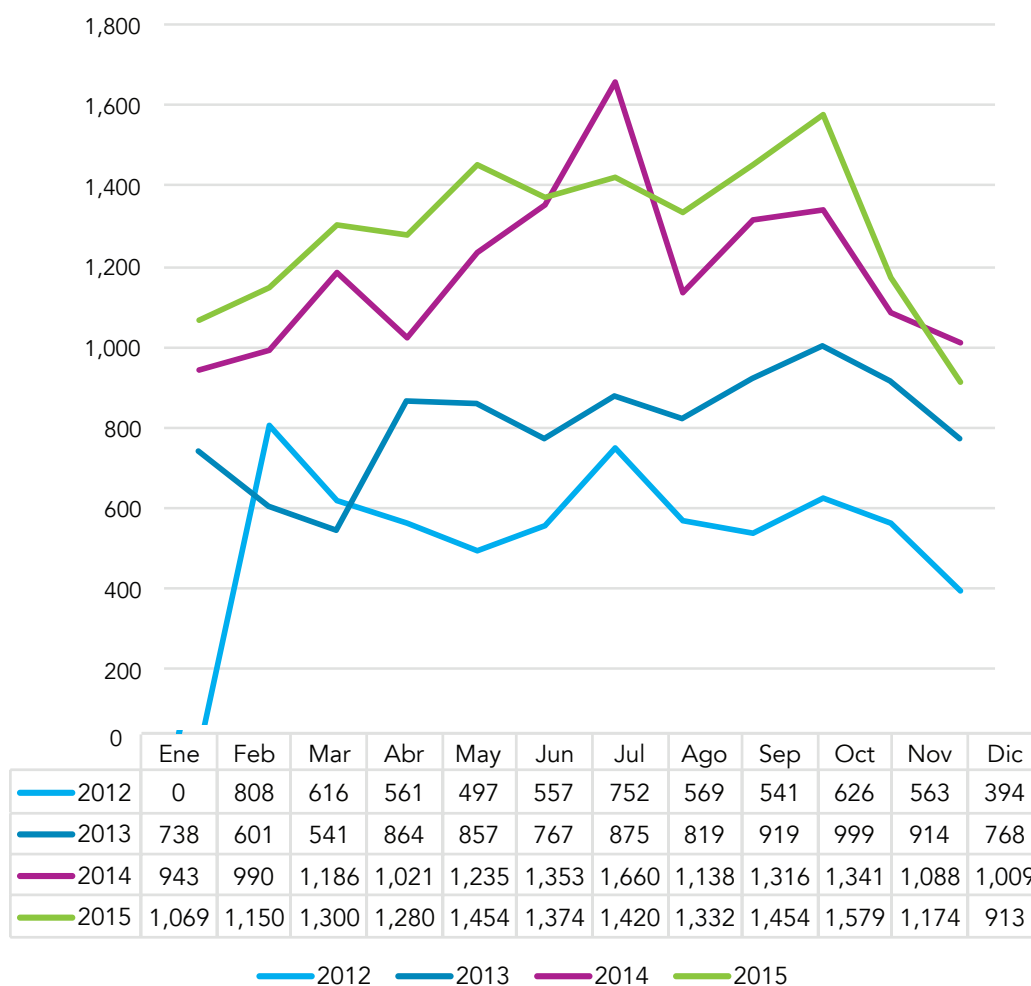
Ante las Juntas de Protección, las personas pueden presentar las denuncias, dar aviso o proporcionar información para investigar las amenazas o vulneraciones a los derechos individuales de niñas, niños y adolescentes, lo que da inicio al procedimiento administrativo de protección, el cual se impulsa de oficio hasta finalizarlo. El procedimiento garantiza la reserva de la información brindada y la protección del derecho a la identidad de la víctima.

Asimismo, en la aplicación del procedimiento establecido en la LEPINA, la Junta de Protección considera el desarrollo progresivo de las niñas, niños y adolescentes y le asegura el derecho a que su opinión sea escuchada y tomada en cuenta y a recibir información sobre el estado en que se encuentra el procedimiento que se le aplica (CONNA, 2013).

Para asegurar una investigación seria y responsable, la Junta de Protección cuenta con un equipo multidisciplinario que evalúa la situación de la víctima

e investiga su entorno familiar y social, siempre que el caso lo amerite.

Gráfico 37. Casos conocidos en Juntas de Protección de la Niñez y Adolescencia, 2012-2015

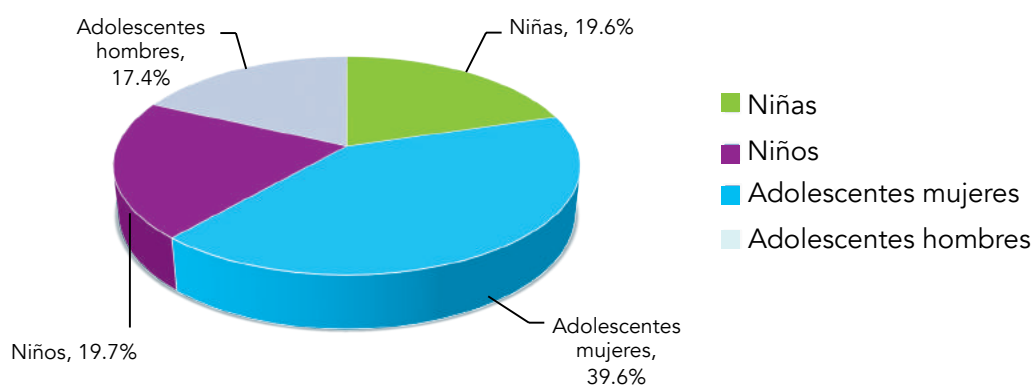


Fuente: Sistema de Información de Denuncias (SID)/CONNA, 2012-2015.

En 2015, estas sedes administrativas recibieron un total de 15,499 casos por presuntas amenazas o vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes. En su mayoría, los hechos reportados fueron amenazas o vulneraciones al derecho a la integridad personal, principalmente maltrato físico,

psicológico y sexual (46.76% del total de casos); a la protección frente al traslado y retención ilícitos (16.51%) y al derecho a la salud (16.24%). El total de presuntas víctimas ascendió a 17,930, dictándose 8,738 medidas administrativas de protección.

Gráfico 38. Niñas, niños y adolescentes presuntas víctimas de amenazas o vulneraciones a sus derechos, recibidas en Juntas de Protección 2015, por sexo y grupo etario.



Fuente: Sistema de Información de Denuncias (SID)/CONNA, 2015.

De las 17,930 presuntas víctimas de amenazas o vulneraciones a derechos, el 40% fueron afectaciones en adolescentes mujeres, el 20% en niños, el 20% en niñas y el 18% en adolescentes hombres.

Como parte de la labor de las Juntas de Protección, para el mismo año se dictaron 4,052 medidas cautelares²³; 8,738 medidas administrativas de protección; en 1,158 casos se dictaron medidas de acogimiento de emergencia²⁴ y se realizaron 3,139 audiencias únicas²⁵.

Tal como se observa en el gráfico 39, en la medida que fueron instalándose las Juntas a nivel departamental, el número de denuncias se incrementó, hasta recibir en 2015 un promedio de 1,290 casos mensuales a nivel nacional.

23 Medidas de protección dictadas en cualquier etapa del procedimiento administrativo antes de la audiencia única, para la adecuada protección de niñas, niños y adolescentes. Pueden ser: orden de tratamiento médico, orden de matrícula, evaluación psicológica, entre otras.

24 Es una medida excepcional y provisional emitida en situaciones de extrema urgencia en favor de una niña, un niño o un adolescente, la cual consiste en la separación de su entorno familiar y por la cual se confía su cuidado a personas idóneas por medio de acogimiento familiar o al ISNA, a través de acogimiento institucional, con un máximo de quince días continuos.

25 Constituye la etapa donde se exponen los hechos de las posibles vulneraciones a derechos de niñas, niños y adolescentes de forma oral ante los miembros de la Junta de Protección. Al finalizar la audiencia los miembros de Junta dictan medidas de protección o declaran la no vulneración a derechos.

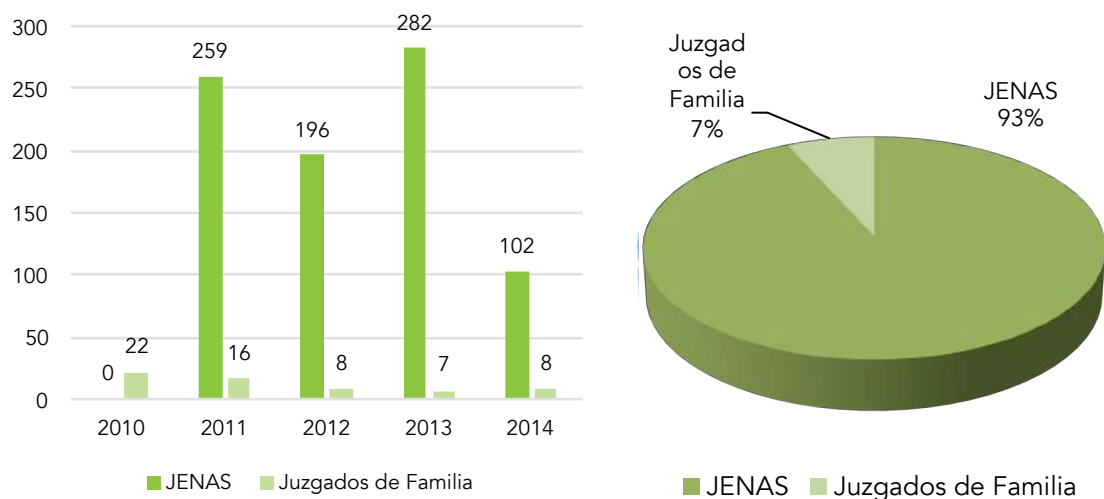
Por otro lado, mediante el Decreto Legislativo 306²⁶, se crearon los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia (JENA) como instancias de protección en el ámbito judicial. El artículo 1 de dicho Decreto ordena la creación en San Salvador de “Una Cámara de Segunda Instancia, que se denominará Cámara Especializada de la Niñez y Adolescencia, la cual tendrá competencia a nivel nacional, con sede en la ciudad de San Salvador y conocerá, en segunda instancia, de los asuntos a que se refiere la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia”.

Asimismo, el artículo 2 del Decreto ordena la creación de 3 juzgados especializados con sede en San Salvador, Santa Ana y San Miguel. A partir de esta fecha los juzgados referidos fueron creados para garantizar y salvaguardar, desde la función judicial, los derechos de la niñez y de la adolescencia, siendo los órganos facultados para emitir resoluciones en esta materia, a excepción de aquellos casos cuya tramitación había sido iniciada por los tribunales de familia.

Para el periodo comprendido entre 2010-2014, dichos Juzgados emitieron 839 medidas de reintegro familiar²⁷ y 61 los Juzgados de Familia.

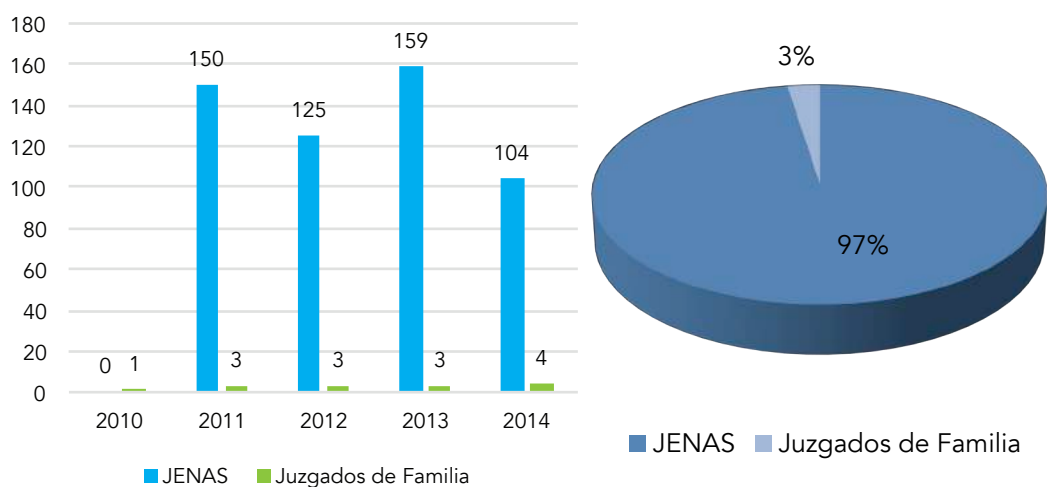
26 Publicado en el Diario Oficial del 9 de abril de 2010

27 Reintegro de la niña, niño o adolescente en su familia de origen, poniendo con ello fin a la medida de acogimiento familiar o institucional.

Gráfico 39. Número de reintegros familiares, 2010-2014

Fuente: Elaborado con base en datos de CSJ, 2015

Durante el período 2010 - 2014, los JENA dictaron 538 medidas de colocación familiar²⁸ y los juzgados de familia 14.

Gráfico 40. Número de medidas de colocación familiar, 2010-2014

Fuente: Elaborado con base en datos de CSJ, 2015

²⁸ Consiste en la ubicación de una niña, niño o adolescente con un pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad (Art. 125 de la LEPINA).



3.3. Acciones de política pública y mecanismos de coordinación para la protección a derechos de niñas, niños y adolescentes.

La seguridad personal de las niñas, niños y adolescentes está relacionado con la obligación del Estado de garantizar la vida e integridad de la persona ante cualquier manifestación de violencia o delincuencia. Sin embargo, existen algunos hechos que ocurren en el mismo hogar como es el caso de la violencia intrafamiliar, la explotación y el abuso sexual que provoca que las niñas, niños y adolescentes en esas circunstancias enfrentan mayor inseguridad en sus propias casas que fuera de éstas (CONNA, 2015, p. 85); hechos que han sido descritos anteriormente como graves amenazas y vulneraciones a sus derechos.

La respuesta del Estado para garantizar la seguridad personal y ciudadana ha centrado sus esfuerzos en acciones de tipo reactivo, dejando de lado la prevención de la violencia y la protección más inmediata del hogar, lugar donde las relaciones de

poder someten a las niñas, niños y adolescentes a tratos denigrantes, al maltrato físico e incluso casos de tortura y modalidades de esclavitud contemporánea como es la explotación laboral y sexual (CONNA, 2015).

El ámbito familiar es uno de los espacios en los cuales suceden las vulneraciones referidas, por lo tanto, se requiere una intervención del Estado que contribuya a erradicar patrones de violencia que han sido internalizados como forma de resolver conflictos. También existe una serie de acciones de política pública orientadas a desarrollar mecanismos de protección ante vulneraciones y amenazas al derecho de integridad personal de las niñas, niños y adolescentes y programas dirigidos al fortalecimiento de la familia con énfasis en la convivencia pacífica, la tolerancia y el respeto a la diversidad en el ámbito familiar, comunitario y educativo.

En este sentido, en 2012 se creó el Gabinete de Gestión para la Prevención de la Violencia²⁹ y se aprobó la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia³⁰ ENPV (2013), esfuerzo que permitió la actualización de la Estrategia Nacional de Prevención Social de la Violencia en Apoyo a los Municipios (ENPSV 2009 – 2010). Estas herramientas incluyeron procesos de consulta y se construyeron con enfoque de derechos, seguridad humana y ciudadana, lo que representó un quiebre en el abordaje de la violencia de años anteriores. Estas iniciativas contaron con el apoyo de la USAID y el PNUD.

En 2014 se creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia³¹ (CNSCC), como un espacio de consulta permanente e incidencia para promover y facilitar el diálogo, la construcción y concertación alrededor de políticas públicas relacionadas con la justicia, seguridad ciudadana y convivencia, procurando el diálogo y suscripción de acuerdos nacionales sostenibles a nivel territorial, regional y nacional. Del CNSCC surgió el Plan El Salvador Seguro³² PESS (CNSCC, 2015), instrumento de gestión pública articulado a otros instrumentos nacionales que establecen directrices para la implementación de acciones prioritarias y urgentes encaminadas a enfrentar la violencia y la criminalidad. Por ejemplo, el Plan Quinquenal de Desarrollo, la Estrategia de Seguridad Centroamericana (ESCA), FOMILENIO II y la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte.

Dentro de sus ejes de intervención³³, la prevención de la violencia es una herramienta clave que establece

acciones de intervención en forma articulada, interinstitucional e intersectorial para recuperar el control del territorio, a través de acciones focalizadas en los grupos poblacionales (familias) que viven en condiciones de mayor exclusión y vulnerabilidad a la violencia y la criminalidad (prevención secundaria) (CNSCC, 2015, p. 40).

Las acciones implementadas por las instituciones para brindar protección a la integridad personal, prevenir la violencia y la atención de grupos en condiciones de especial vulnerabilidad son diversas. Cabe mencionar entre ellas las siguientes:

- a) Alerta Ángel Desaparecido. La Fiscalía General de la República cuenta con herramientas tecnológicas de reacción inmediata ante el conocimiento de hechos delictivos cometidos en contra de la niñez y adolescencia. El sistema denominado “Alerta Ángel Desaparecido” (A.A.D.) es similar al sistema de alerta AMBER³⁴, el cual consiste en que ante el cometimiento de un hecho delictivo de privación de libertad, trata de personas y similares o sexual, en el que la víctima sea una niña, niño o adolescente, previo a la calificación que se establezca según requisitos de protocolos o manuales de actuación correspondiente, se da a conocer de inmediato a la población en general de tal hecho por medio de mensajes de teléfono celular, medios publicitarios y de comunicación. Como por ejemplo en pantallas electrónicas ubicadas en las vías públicas, radio y televisión, en internet por medio de redes sociales, con el fin de obtener con prontitud la ubicación y rescate (FGR, 2014)

Dicho sistema es coherente con la Línea de Acción 2.3.7 de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (PNPNA), la cual establece la creación e implementación de estrategias de seguridad pública que contribuyan a dar respuesta inmediata ante amenazas o vulneraciones a derechos, como la desaparición de niñas, niños y adolescentes (Alerta AMBER), lesiones, asesinatos, violencia sexual, abandono, trata, entre otros.

- b) Programa Familias Fuertes. A partir de 2011, con la finalidad de lograr un mayor impacto

29 Creación del Gabinete de Gestión para la Prevención de la Violencia, publicado en Diario Oficial N° 167, tomo N° 396 del lunes 10 de abril de 2012, disponible en: <http://www.diariooficial.gob.sv/diarios/do-2012/09-septiembre/10-09-2012.pdf>

30 Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, disponible en: <http://www.conna.gob.sv/?wpdmpo=estrategia-nacional-de-prevencion-de-la-violencia>

31 Instaurado el 29 de septiembre de 2014 mediante Decreto Ejecutivo No.62.

32 Plan El Salvador Seguro, disponible en: <http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf>

33 Ejes de intervención: 1. Prevención de la violencia; 2. Control y persecución penal; 3. Rehabilitación y reinserción; 4. Atención y protección a víctimas; 5. Fortalecimiento institucional.

34 Por sus siglas en inglés: America's Missing Broadcasting Emergency Response (AMBER).

y cobertura en la prevención de conductas de riesgo en la población adolescente, el MJSP, el MINSAL y el MINED implementan una respuesta intersectorial en forma coordinada denominada Familias Fuertes³⁵ con el apoyo técnico de la OPS.

Familias Fuertes favorece el desarrollo de una dinámica familiar que permite la promoción de factores de protección y la prevención de conductas de riesgo, en particular aquellas relacionadas con el consumo de alcohol, tabaco y drogas, las prácticas sexuales no seguras y otros problemas conductuales que podrían originar violencia en todas sus formas, entre ellas violencia escolar e intrafamiliar.

Los objetivos de este programa están orientados a apoyar a padres, madres o tutores a aprender habilidades de crianza que contribuyan al desarrollo de la persona adolescente: educar en formas efectivas de disciplina; brindar orientaciones saludables para el futuro y enseñarles habilidades para enfrentar el estrés y las presiones de grupo. Se basa en el diálogo, los conceptos de amor y límites, que a su vez son la base para evitar conductas de riesgo y otros problemas conductuales al haberse establecido principios claros y aceptados por todos sus miembros (OPS, 2012).

Dicho Programa es coherente y contribuye con los lineamientos 2.1.1, 2.1.4 y 2.1.5 de la PNPNA (CONNA, 2014).

- c) La PNC también desarrolla programas preventivos y educativos contra el uso y abuso de drogas, la violencia y el fomento de los valores en niñas, niños y adolescentes. DARE es un programa internacional y sus siglas en inglés significan: educación, resistencia contra el uso y abuso de drogas y la violencia. Está dirigido principalmente a centros educativos con niñas y niños entre los 9 y 12 años que estudian de 4° a 6° grado. Cuenta con el apoyo de docentes, padres y madres de familia y las comunidades e incluye la prevención de la violencia, con el propósito de evitar el involucramiento en las pandillas que puedan

operar tanto en los centros educativos o en las comunidades donde residen. En el periodo de junio 2009 a mayo 2013, brindó cobertura a 866 centros educativos y 90,206 estudiantes (PNC, 2013, pp. 23-24).

De igual forma, el Programa de Educación Preventiva Contra el Abuso de Drogas (PEPAD) se imparte a estudiantes de Educación Básica y Bachillerato entre los 13 y menores de 18 años. También se desarrolla entre miembros de comunidades con la finalidad de reforzar los conocimientos relacionados con la prevención del consumo de drogas. Las jornadas de trabajo se realizan junto a padres, madres, responsables y personal docente con el propósito de que todos puedan asumir el rol que les compete en el desarrollo integral de sus hijos, hijas y estudiantes. En el periodo de junio de 2014 a mayo de 2015 se brindó cobertura a 25,788 en 187 centros escolares (PNC, 2015a).

A través del Programa protegiendo con valores mediante la actividad atlética deportiva se atendieron a 98,190 niñas, niños y adolescentes entre 2012 y 2015.

Los programas antes referidos han contribuido a la implementación de la Línea de Acción 2.1.4 de la PNPNA, la cual hace alusión al diseño, ejecución y fortalecimiento de estrategias y programas de prevención de la violencia social dirigidos a niñas, niños y adolescentes, con énfasis en el fomento de la convivencia pacífica, la tolerancia y respeto a la diversidad en el ámbito familiar, comunitario y educativo.

- d) La campaña “Marca mi vida” implementada en 2014 por el CONNA, para promover el respeto a la integridad física, psicológica y sexual de las niñas, niños y adolescentes y fomentar un cambio basado en la protección integral, el afecto y la comunicación en el ámbito familiar, como la campaña “La protección comienza en el hogar” en 2015, la cual busca prevenir la violencia y construir cultura de paz desde la familia. Han sido dos esfuerzos significativos para orientar y fortalecer el rol de la familia como principal responsable de la protección de niños y niñas. De igual forma, en 2015 con el lanzamiento del programa radial “Habla conmigo”, se ha

35 Familias Fuertes es un programa inspirado en el Strengthening Families Program de la Universidad Estatal de Iowa, que trata de intervenciones primarias efectivas para prevenir las conductas de riesgo en adolescentes.

contribuido al fortalecimiento de las familias en su función de protección, socialización, promoviendo pautas de educación basadas en el diálogo, el respeto y la disciplina en forma positiva.

Estas estrategias comunicacionales son coherentes con las Líneas de Acción 2.1.1 y 2.1.4 de la PNPNA (CONNA, 2014).

- e) En materia de protección por migración irregular se instaló en 2013 la mesa de coordinación para la protección y atención de niñez y adolescencia migrante, integrada por CONNA, ISNA, DGME, MINSAL, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y otras organizaciones. Con esta articulación interinstitucional se ha contribuido a la atención inmediata en el CAIM a niñas, niños y adolescentes emigrantes retornados, mientras son entregados a sus padres, madres, responsables o representantes legales. Dicho mecanismo de coordinación permitió la elaboración del “Protocolo de protección y atención a niñez y adolescencia emigrante” y en 2014 se elaboró la “Cartilla de ruta de atención y protección a niñez y adolescencia emigrante acompañados, no acompañados y/o separados que retornan al país” por la vía terrestre y aérea.

Otro esfuerzo ha sido la creación de programas de orientación y apoyo para las familias afectadas por la migración a nivel local por parte del ISNA a través de los Centros de Atención de Niñez, Adolescencia y Familia (CANAF), que contribuyen a la restitución de derechos de la niñez y la adolescencia retornada por medio de la atención en salud mental, orientación socio-familiar, apoyo a la educación desde el entorno familiar y comunitario. Este esfuerzo, cuenta con el apoyo de la Alianza U.S. Committee for refugees and immigrants/USCRI-ISNA y se gestiona ante diversas instituciones cooperantes para lograr replicarla en diversas zonas del país. A la fecha se han instalado dos CANAF en la zona oriental (San Miguel y Usulután).

Las medidas antes descritas son coherentes y contribuyen a la implementación de las líneas de acción 2.3.4. y 2.3.6 de la PNPNA, referidas a la ejecución de protocolos de intervención interinstitucional de atención especializada frente a amenazas y vulneraciones en la niñez

y adolescencia migrante retornada, como la creación de programas con enfoque de derechos que garanticen la protección inmediata y el seguimiento respectivo en el proceso de su incorporación al ámbito familiar (CONNA, 2014).

- f) Con relación a la protección frente al trabajo infantil, se cuenta con *la Hoja de ruta para hacer de El Salvador un país libre de trabajo infantil, sus peores formas* y programación operativa para el período 2015-2017 (MTPS, 2015a), con base en las prioridades establecidas en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. Ésta es ejecutada por el Comité Nacional para la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, coordinado por el MTPS. También la OIT desarrolló el Programa: Erradicando del Trabajo Infantil en El Salvador a través del Empoderamiento Económico y la Inclusión Social, con financiamiento del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de América en el período de 2010-2015, orientado a fortalecer la capacidad de diversas instituciones gubernamentales en la planificación e incorporación de intervenciones contra el trabajo infantil y acciones estratégicas para su abordaje.

De enero 2013 a diciembre 2015, las Juntas de Protección recibieron 150 denuncias relacionadas al trabajo infantil y sus peores formas, referidas a comercio informal e inducción a la mendicidad. Se destaca que el *Protocolo Interinstitucional para el retiro y prevención de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil*³⁶ elaborado en 2013 (OIT, 2013), constituye una herramienta valiosa pues define los ámbitos de intervención, tanto del MTPS como de las Juntas de Protección en materia de trabajo infantil. En ese marco, se dictaron 201 medidas de protección y 13 acogimientos de emergencia.

Las intervenciones en esta materia contribuyen a la implementación de las líneas de acción 1.6.1, 1.6.3 y 2.3.4 de la PNPNA (CONNA, 2014).

36 Protocolo que busca establecer acciones concretas para el retiro de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo infantil y que no alcanzan la edad mínima de admisión; o de los adolescentes que estén ejecutando trabajos peligrosos o insalubres, a fin de restablecer sus derechos.



3.4. Principales retos y desafíos para garantizar la protección especial ante vulneraciones y amenazas a derechos

En El Salvador, las condiciones de exclusión social y pobreza son factores de carácter estructural que impiden un proceso de desarrollo adecuado para las niñas, niños y adolescentes. No contar con una vivienda adecuada, las condiciones de hacinamiento e insalubridad, ausencia o deficiencia de servicios básicos como la salud y educación en las comunidades, la falta de empleo y el fenómeno de la migración, entre otros, son factores de riesgo que las familias enfrentan en sus intentos por que se cumplan sus derechos básicos y fundamentales.

Las condiciones referidas generan un ambiente familiar hostil y tenso, en el que los malos tratos y las conductas violentas son asumidos como patrón cultural y natural para resolver conflictos, sin considerar que constituyen amenazas y vulneraciones a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en tanto afectan directamente su integridad personal y su dignidad humana. La violencia al interior del hogar tiende a ser un detonante que en ocasiones expulsa sobre todo a los niños y adolescentes hombres fuera de su débil entorno familiar en busca de otros

grupos que le puedan brindar mayor “seguridad y protección”.

La incorporación a maras y pandillas es una de las expresiones más evidentes de la dinámica social excluyente para la mayoría de las familias pobres.

La violencia, en sus diversas expresiones (maltrato y castigo físico, trato humillante, abuso sexual, explotación laboral, entre otras) afecta directamente a la niñez y adolescencia cuya condición de víctimas no es equiparable a la del resto de la población. Sin embargo, la violencia generada por maras o pandillas plantea otro tipo de afectaciones, por ejemplo, la cooptación o manipulación por las estructuras delincuenciales para la participación en actividades delictivas (vigilancia y cobro de extorsión), víctimas de actos violentos por estar vinculados o ser familiar de integrantes de maras o pandillas, desplazamiento o migración irregular, deserción escolar, violencia sexual e incorporación de adolescentes a dichas estructuras delincuenciales (CONNA/CTC, 2016, pág. 2).

En este sentido, al Sistema Nacional de Protección cuya finalidad es garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes, le corresponde buscar alternativas para protegerlos de manera integral ante amenazas y vulneraciones a sus derechos, destacando como principales retos y desafíos lo siguiente:

a. El fortalecimiento a la familia y la comunidad.

La PNPNA, en sus líneas de acción 2.1.4 y 2.1.5 establece la creación de programas de prevención de la violencia con énfasis en el fomento de la convivencia pacífica y del fortalecimiento a las familias. De igual forma, el PESS orienta a que las intervenciones institucionales potencien programas para el uso adecuado del tiempo libre, la prevención en el consumo de drogas y la generación de habilidades para la vida.

Una familia fuerte en sus relaciones de convivencia cuenta con las herramientas para el desarrollo integral y la protección de sus hijas e hijos; propicia el desarrollo psicológico y social en forma positiva y apoya en situaciones de violencia y amenaza en sus derechos. La institucionalidad debe, por tanto, orientar sus intervenciones en la promoción de un cambio cultural basado en el buen trato, la disciplina positiva, la construcción de relaciones afectivas y la convivencia pacífica en el ámbito familiar y comunitario.

A nivel territorial, los gobiernos locales deben trabajar en la creación y el fortalecimiento de los espacios comunitarios para la convivencia familiar y la implementación de acciones culturales, recreativas y deportivas de manera sistemática.

b. En lo relacionado a la atención y protección a las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violencia, una de las principales deudas del Estado salvadoreño es la ausencia de programas especializados para la atención y protección a víctimas, principalmente, las asociadas a la violencia

delincuencial generada por maras y pandillas y la violencia sexual.

Todos los instrumentos de gestión pública vigentes como la Política de Niñez y Adolescencia y su respectivo Plan Nacional de Acción, El Plan El Salvador Seguro y el Plan Quinquenal de Desarrollo, han establecido la creación y el fortalecimiento de mecanismos y programas especializados para la protección y atención de víctimas o en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, su cumplimiento es de alta prioridad para la institucionalidad del Sistema Nacional de Protección, debiendo asegurar su financiamiento.

De igual manera, es necesario establecer los protocolos y las rutas de articulación para la atención y orientación de las víctimas; fortalecer y revisar la implementación de los ya creados para tal fin, y la especialización de los equipos técnicos que brindan atención directa a las víctimas de este tipo de violencia.

Atención especial merece la alta incidencia de violencia sexual ejercida en las niñas y las adolescentes mujeres por sus novios y personas conocidas en su entorno familiar y comunitario. Las agresiones sexuales, las violaciones y el estupro, constituyen violaciones graves a sus derechos humanos y estas agresiones tienen como resultado embarazos, generándoles nuevas y múltiples vulneraciones a sus derechos.

El Artículo 55 de la LEPINA establece que se requiere de programas permanentes y gratuitos de prevención y atención integral a las víctimas agredidas sexualmente. El Estado tiene la responsabilidad de garantizar estos programas, sin embargo, se requiere del compromiso de la familia, de las entidades de atención y de la sociedad para protegerlos ante dichas vulneraciones. Frente a esto, es prioritario ampliar los servicios de salud sexual

y reproductiva, una educación integral de la sexualidad que brinde orientación sobre la afectividad y relaciones entre los géneros en la etapa de la adolescencia, con la finalidad de contribuir a un cambio de paradigma y práctica cultural que termine con el ciclo de la violencia sexual.

- c. Atender la migración irregular en sus causas estructurales. La migración al igual que la reunificación familiar constituyen un derecho, pero la forma irregular en la que se produce pone en riesgo la vida de las niñas, niños y adolescentes. El fenómeno de la migración responde a factores de carácter estructural aún pendientes de resolver. En 2014, con el incremento significativo de la población en los centros de detención en las fronteras del sur de Estados Unidos, se alertó sobre el fenómeno migratorio de niñas y niños, el cual requiere atención de manera articulada entre las instituciones del Sistema Nacional de Protección y del Sistema de Protección Social Universal, principalmente, por las condiciones estructurales que lo generan, entre las que se incluyen los escasos ingresos familiares y elevados niveles de violencia.

La niñez y adolescencia retornada solo evidencia una parte de la dimensión y gravedad del fenómeno migratorio, refleja también las debilidades y limitaciones existentes en los países receptores y de tránsito relacionadas con las condiciones de acogida y el trato que reciben, así como la salida diaria desde El Salvador. En este sentido, las instituciones involucradas en el retorno requieren de mayores esfuerzos de articulación. Algunas de las funciones que deben revisarse y ajustarse a las dimensiones y complejidades del fenómeno son el trabajo consular, el proceso de documentación, -incluida la emisión de pasaportes-, así como, la labor de recepción y el seguimiento en el proceso de la reincorporación al ámbito familiar, educativo y comunitario.

Si bien el Estado salvadoreño desarrolla gestiones ante las autoridades de los países de destino y tránsito para que prevalezcan los principios universales del interés superior del niño, el derecho de no devolución y el derecho a mantener relaciones con sus familias, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño, debe primar sobre la condición de migrante. Esta situación demanda la adopción de medidas permanentes bajo un abordaje integral y el esfuerzo conjunto de diversos actores de la vida nacional, por lo que es prioritaria la implementación de políticas públicas que generen los medios de vida para las familias, oportunidades para el desarrollo y crecimiento de las niñas, niños y adolescentes, de forma que su proyecto de vida se construya en su comunidad.

Ante el fenómeno migratorio de niñas y niños, también se hace necesaria la modernización de los registros informáticos, especialmente la implementación de un registro único que incorpore datos biométricos, con la finalidad de facilitar el proceso de detección y ubicación en el extranjero de la población migrante.

- d. Implementar la Ley Especial contra la Trata de Personas y la formulación de la Política Nacional en la materia. Dada la complejidad en la que sucede el delito de trata cometido en niñas, niños y adolescentes que, por lo general, implica formas extremas de vulneración de derechos. Los casos que se logran conocer a nivel judicial y en el Sistema Nacional de Protección son mínimos respecto de la ocurrencia real del fenómeno. Ante ello, la Política Nacional contra la Trata debe incorporar la creación e implementación de un modelo de atención integral que incluya la prevención, el combate y la restitución integral de derechos a las víctimas de este delito. Dicho modelo demanda altos niveles de articulación, bajo la responsabilidad del Consejo Nacional Contra la Trata de Personas

(CNCTP) creado por Ley y presidido por el MJSP, con la Secretaría Ejecutiva y el Comité Técnico como instancias operativas para su implementación.

- e. Redoblar los esfuerzos para la erradicación del trabajo infantil y sus peores formas. Las cifras de trabajo infantil, aunque evidencian tendencias a la baja en los últimos tres años, continúan siendo un reto dado que reflejan situaciones que deben ser erradicadas progresivamente. Los avances más significativos se han producido en el sector de la industria. Sin embargo, como fenómeno tiende a adoptar nuevas modalidades, tales como la utilización de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos, explotación económica y mendicidad. Diversas actividades en el ámbito de la calle (malabarismo, limpieza de vidrios de vehículos, ventas de golosinas, entre otras) que vulneran y ponen en riesgo su seguridad e integridad personal. Esto requiere actualizar el conocimiento que se tiene hasta el momento sobre el fenómeno, en especial, el análisis sobre las condiciones a las que las niñas, niños y adolescentes trabajadores están expuestos en el ámbito de la calle y a partir de esto, definir nuevas modalidades de intervención y alternativas de protección.
- f. El trabajo infantil priva a la niñez y adolescencia de su infancia y dignidad, es nocivo para su desarrollo físico y mental, interfiere en su escolarización y les somete a condiciones que dañan su integridad física, salud, seguridad y moralidad, ya que realizan actividades peligrosas. Por ello, el Estado, la sociedad, las familias, la empresa privada, los integrantes del Sistema Nacional de Protección y las organizaciones sociales deben trabajar para garantizar la protección social de la niñez y adolescencia, mediante la atención en salud, acceso y permanencia

en las escuelas, condiciones de vida digna, nutrición, saneamiento y agua potable, es decir, de todos sus derechos universales básicos.

En relación al trabajo permitido, la disminución de permisos otorgados por el MTPS, si bien es reflejo de un mayor celo y vigilancia en el cumplimiento de la normativa en su otorgamiento, reduce las posibilidades de ejercer la supervisión sobre el trabajo que realizan las y los adolescentes y limita el goce de sus prestaciones y seguridad social cuando se incorporan a la informalidad y a la invisibilidad laboral. La obtención de los permisos podría ser relativamente fácil si se cumplen los requisitos y se amplía su emisión en las oficinas regionales y departamentales del MTPS. La denegatoria o las dificultades para su obtención implica incorporarse en actividades laborales precarias.

Es necesario fortalecer las coordinaciones y articulaciones entre el MTPS, el MINSAL, el MINED y el CONNA, a fin de prevenir y proteger ante amenazas y vulneraciones a derechos de las personas adolescentes trabajadoras.

- g. Mejorar las condiciones de adolescentes sujetos a la responsabilidad penal. Las condiciones y la situación de las personas adolescentes detenidas en bartolinas policiales, como los que cumplen medidas de privación de libertad en los Centros de Inserción Social, debe ser analizada con todas las instituciones que tienen competencia en la materia, en aras de cumplir con los estándares internacionales que rigen y norman los procedimientos de las personas adolescentes que enfrentan la justicia penal. Esto requiere, entre otras, las adecuaciones presupuestarias para la construcción o habilitación de un centro de resguardo bajo la administración del ISNA,

según lo establecido en el Art. 58 de la Ley Penal Juvenil.

La etapa de la detención administrativa es crucial, ya que dichas condiciones son determinantes para alejar o mantener a esta población en los círculos de la delincuencia. Posiblemente, se requieran de reformas legales e institucionales, pero es necesaria la humanización en el trato hacia las y los adolescentes detenidos con el fin de incentivarlos a salir de la dinámica de la violencia. Esta fase es clave en tanto puede ser orientada la persona sobre la red de servicios sociales de los que puede hacer uso estando en libertad, de no prosperar los procesos penales iniciados, que son la mayoría de casos.

De igual forma, deben adecuarse y mejorarse los servicios básicos con los que cuenta la población que cumple con medidas de internamiento. Esto implica trabajar por modificar las condiciones de insalubridad y hacinamiento, la prestación de los servicios de salud preventiva y salud mental, la formación técnica y ocupacional, entre otras.

- h. Los gobiernos locales, las entidades de atención a la niñez y adolescencia, las iglesias, están llamados a invertir en acciones positivas para que las niñas, niños y adolescentes gocen de espacios físicos para el desarrollo de procesos formativos y de recreación en forma sistemática. Estas acciones deben ir en pro de la difusión de sus derechos y deberes.





Derechos al Desarrollo

Los derechos al desarrollo están relacionados a las condiciones necesarias para que las niñas, niños y adolescentes puedan desenvolverse y crecer de manera plena en la familia y la sociedad; contribuyendo a mejorar la calidad de vida desde sus primeros años. El desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes como derecho tiene rango constitucional, ya que el artículo 34 de la Constitución de la República establece que para garantizar este derecho deben existir condiciones familiares y ambientales que lo propicien.

De igual forma, el Artículo 1 de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo establece que “Es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un proceso de crecimiento económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él” (ONU, 1986). Su disfrute pleno posibilita a las niñas, niños y adolescente vivir, crecer y lograr el desarrollo máximo de su personalidad y potencial como seres humanos.

Como parte del derecho al desarrollo la Constitución de la República en el Artículo 53 establece que la educación y la cultura son inherentes a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.

La LEPINA retoma estos derechos en el Título III del Libro I, en dos capítulos: el primero – denominado “De la personalidad”- el cual incluye los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad e identificación, a conocer a su madre y padre, a vivir y ser criado en familia y a mantener relaciones personales con ellos. En el capítulo dos “Educación y Cultura” se reconoce el derecho a la educación, la gratuidad y la obligatoriedad de la misma, a la cultura, al descanso, a la recreación, al esparcimiento, al deporte y al juego.



4.1. Avances en el cumplimiento de los derechos al desarrollo

a) Derecho a la identidad y a la identificación

El derecho a la identidad y el derecho a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento son derechos fundamentales que proporcionan el reconocimiento jurídico y social del niño, niña y adolescente como sujeto de derechos, responsabilidades y perteneciente a un estado, territorio, sociedad y familia. Aspectos necesarios para preservar y fortalecer la dignidad individual y colectiva, así como para el goce de otros derechos.

Los artículos 73 y 74 de la LEPINA reconocen el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes en todos los elementos que la constituyen³⁷ y asimis-

mo, la obligación del Estado a la inscripción de todos los nacimientos en forma inmediata y gratuita en el Registro del Estado Familiar, como una forma de garantizar este derecho.

En El Salvador no se cuenta con información reciente del sub registro de los nacimientos, no obstante, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), elaborado por María del Carmen Tamargo (Tamargo, 2014), presenta una estimación sobre el porcentaje de sub registro para varios países de América Latina, identificando en el caso de El Salvador que en 2005 era de 9.8% y para 2012 éste había aumentado al 11.7%, tendencia contraria a la de otros países de Centroamérica que muestran una permanencia o reducción.

37 Al nombre, la nacionalidad, a sus relaciones paternas y maternas filiales, y a la obtención de documentos públicos de identidad conforme a la Ley.

Tabla 6. Estimado de sub-registro de nacimiento en países seleccionados de Centro América. Porcentaje y tendencias 2005 y 2012.

PAISES	Año 2005	Año 2012	Tendencia
EL SALVADOR	9.8%	11.7%	↑
GUATEMALA	15.0%	10.0% - 12.0%	↔
HONDURAS	12.0%	4.0%	↓
PANAMA	20.1%	2.2%	↓

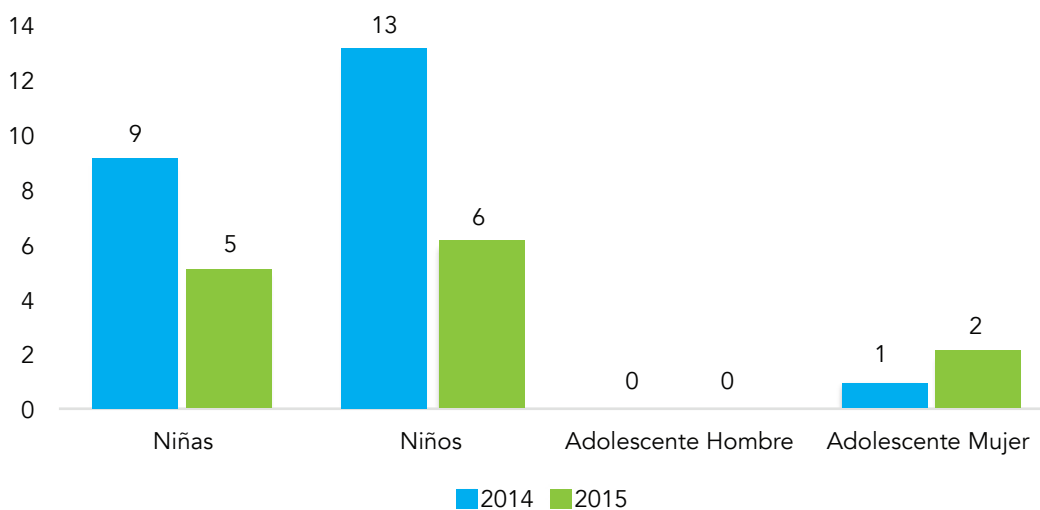
Fuente: (Tamargo, 2014)

Por el contrario, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud (ENS) desarrollada en 2014, reflejan un 98.5% de niñas y niños menores de 5 años con nacimiento registrado al momento de la encuesta (MINSAL, INS, DIGESTYC y UNICEF, 2015, pág. 18); por lo que puede inferirse que el sub registro oscila entre 1% y 2%.

No todas las inscripciones en el Registro Civil se realizan de manera inmediata, algunas niñas, niños son registrados de manera tardía. Un dato que refleja esta realidad es el número de niñas, niños y adolescentes atendidos por la Procuraduría General de la República (PGR) para el asentamiento tardío de partida de nacimiento.

En 2015, la Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia de la PGR atendió a 12,813 niñas, niños y adolescentes por solicitudes recibidas en la fase administrativa. De ese total, el 6.8% fue por asentamiento tardío de partida de nacimiento (PGR, 2015). De 2014 a 2015 la cantidad de asentamientos tardíos atendidos en las procuradurías auxiliares disminuyeron de 1,212 a 874 respectivamente. Asimismo, la referida Unidad de la PGR tramitó ante el Registro del Estado Familiar la inscripción de 7 niñas y 6 niños en situación de abandono o de madre y padre desconocidos, 10 casos menos que los recibidos en 2014 (PGR, 2015).

Gráfico 41. Niñas, niños y adolescentes en situación de abandono de madre y padre desconocidos inscritos en forma tardía, 2014-2015



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la PGR, 2014 y 2015

Los programas y proyectos que se implementan desde el Estado para disminuir el nivel de sub registro de nacimiento son tres: las ferias de identidad, los festivales del Buen Vivir y el Registro Civil Hospitalario.

A partir de 2010, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) ha realizado las "Ferias de Identidad" como una estrategia para acercar los servicios de asesoría, incluyendo el registro de

nacimientos. Trabajo en coordinación con los gobiernos municipales, las organizaciones no gubernamentales (ONG's), universidades y la PGR. Asimismo, en junio de 2014 amplió su asesoría mediante la participación en los festivales para el Buen Vivir en el marco del Programa Gobernando con la Gente.

Producto de este trabajo, el RNPN reportó que entre junio de 2014 y mayo de 2015 se promovió la inscripción

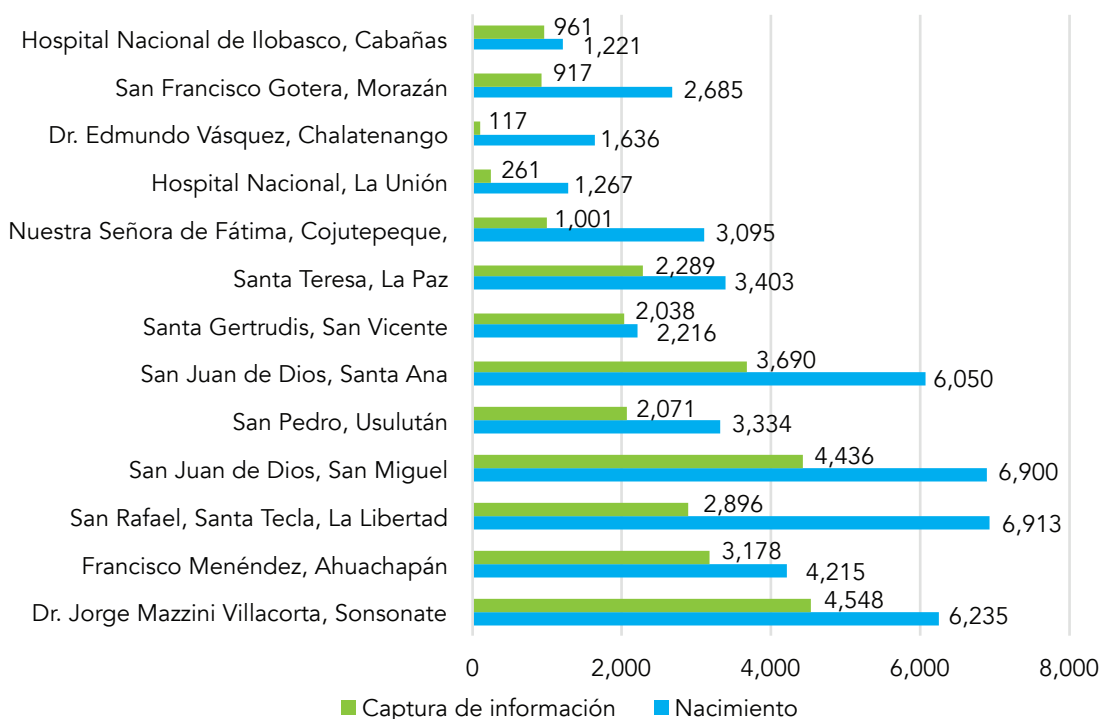
ción de 212 nacimientos tardíos y 58 casos de reconocimiento voluntario paterno. (RNPN, 2015, p. 21).

En relación con la disminución del sub registro se cuenta con el proyecto de Fortalecimiento del Registro Civil Hospitalario, a través del cual se instalaron oficinas del RNPN en 13 hospitales nacionales, brindando charlas de sensibilización a padres y madres sobre la importancia del derecho a la identidad de las niñas y niños y capturando

información de recién nacidos, para ser trasladada a los Registros del Estado Familiar de las alcaldías correspondientes para su debida inscripción y obtención de la partida de nacimiento.

Entre junio de 2015 y mayo de 2016, dichas oficinas registraron 49,170 nuevos nacimientos, de los cuales se capturó información del 58%, correspondiendo a 14,673 nacimientos de niños (51,28%) y 13,930 (48.72%) nacimientos de niñas (RNPN, 2016, p. 19).

Gráfico 42. Nacimientos y captura de información para inscripciones de recién nacidos en hospitales nacionales, junio 2015-mayo 2016



Fuente: Elaboración propia con base en RNPN (2016).

Otro programa relevante para la garantía de este derecho es el de Asentamiento y Reconocimiento de Niños y Niñas cuando uno o ambos padres se encuentran privados de libertad, impulsado también por el RNPN en coordinación con la Dirección General de Centros Penales (DGCP), la PGR y la cooperación de las alcaldías municipales. En 2014, el programa logró el asentamiento de 166 niños y niñas y entre junio 2015 y mayo 2016, se reportó el registro

de la partida de nacimiento de 63 niñas y 49 niños, como el reconocimiento de 35 niños y 40 niñas por parte de sus padres (RNPN, 2016).

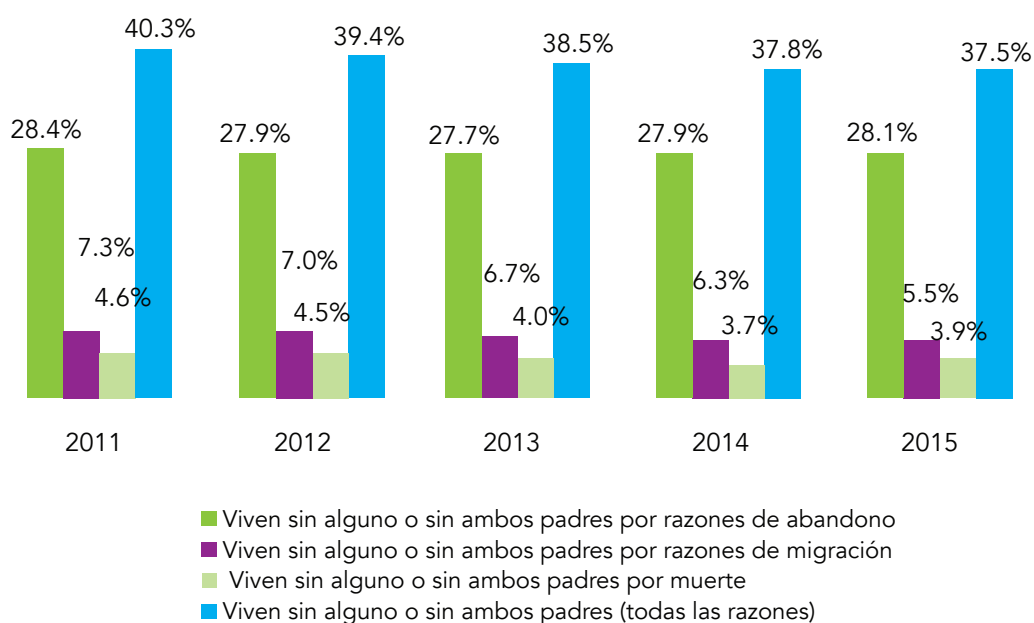
Sin duda, estas iniciativas garantizan el derecho a la identidad de niñas y niños, es decir, el derecho a tener un nombre, una nacionalidad, a la relación filial con su padre y madre, y a la identificación tal como lo establece la ley.

b) **Derecho a ser criado en familia**

La LEPINA reconoce en el Artículo 80 el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir, ser criados y desarrollarse en su familia de origen nuclear o ampliada. Este derecho, enfatiza la importancia de la familia como el medio natural para el crecimiento, el bienestar y la protección de la niñez y adolescencia. Analizando la información que provee la EHPM,

desde 2011 el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que vivían sin uno o ambos padres ha mostrado una leve tendencia a la baja, pasando del 40% al 37.5% en 2015. Sin embargo, este valor aún refleja que 796,938 niñas, niños y adolescentes viven sin uno o ambos padres, es decir, casi 4 de cada 10 niños y niñas en nuestro país carecen de uno o ambos padres.

Gráfico 43. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes que viven sin uno o ambos padres, 2011-2015



Fuente: Elaboración con base en MINEC-DIGESTYC, EHPM para cada año.

El análisis de las causas identifica que en el 28.1% de los casos, la carencia de uno o ambos padres fue por motivos de abandono; el 5.5% por causa de la migración y un 3.9% por la muerte de alguno o de ambos padres (DIGESTYC, 2016, p. 46).

El abandono como causa principal de la ausencia de uno o ambos progenitores presenta un comportamiento homogéneo en términos porcentuales durante el periodo entre el 27.7% y 28.4%. Por otra parte, la migración como una de las razones de la privación de este derecho, presenta una tendencia hacia la baja, pasando del 7.3% en 2010 al 5.5% en 2015.

Relevante destacar que el padre es el principal ausente en cada una de las tres razones que se expresan, de manera que para 2015, el 73.9% de los niños, niñas y adolescentes que vivían sin uno o ambos padres, carecían de la presencia y cuidado de la figura paterna.

Las directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado aprobadas en 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas establecen que "Cuando la propia familia del niño no puede, ni siquiera con un apoyo apropiado, proveer al debido cuidado del niño, o cuando lo abandona o renuncia a su guarda, el Estado es responsable de proteger los derechos

del niño y de procurarle un acogimiento alternativo adecuado, con las entidades públicas locales competentes o las organizaciones debidamente habilitadas de la sociedad civil o a través de ellas” (ONU, 2010).

En la preservación del derecho a ser criado en familia, la LEPINA persigue que las medidas de acogimiento familiar e institucional de las niñas, niños y adolescentes tengan un carácter temporal y excepcional. En tal sentido, contempla en su artículo 125 la colocación familiar, la cual consiste en la ubicación de una niña, niño o adolescente con un

pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad y en su artículo 131 literal a), el reintegro de la niña, niño o adolescente en su familia de origen (reintegro familiar), como causa de terminación del acogimiento familiar e institucional.

De 2010 a 2015, el ISNA reportó que 1,475 niñas, niños y adolescentes fueron reintegrados o colocados en familias; un 49.1% fueron niñas y adolescentes mujeres y un 50.8% niños y adolescentes hombres. El 59% (864) de los egresos de los centros de acogimiento institucional del ISNA se dieron por reintegro familiar y el 41% por colocación familiar.

Tabla 7. Niñas, niños y adolescentes que egresaron de los centros de acogimiento institucional de ISNA por reintegro y colocación familiar, 2010-2015

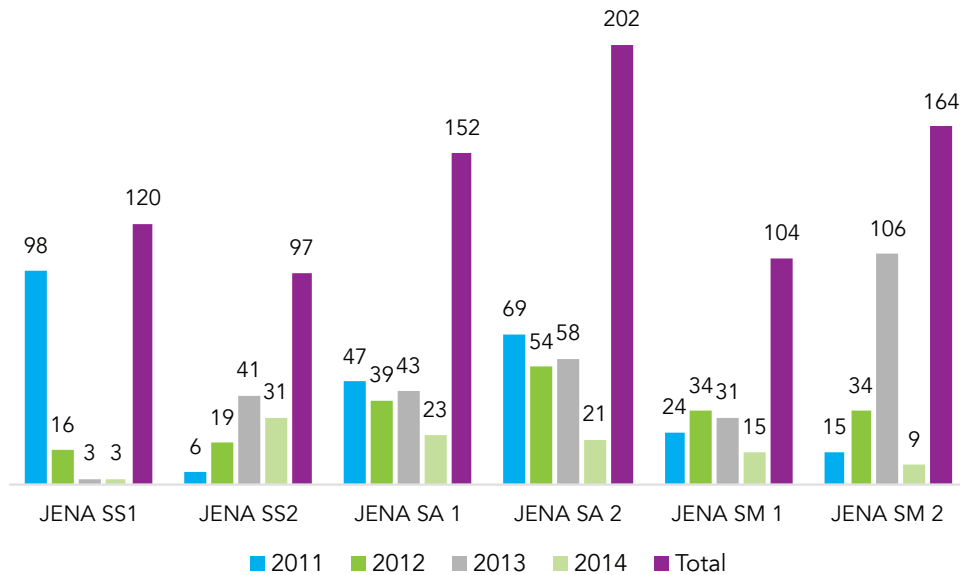
Año	Causa de egreso	Niña y adolescente mujer	Niño y adolescente hombre	Total
2010	Reintegro familiar	61	191	252
	Colocación familiar	10	0	10
2011	Reintegro familiar	84	42	126
	Colocación familiar	9	4	13
2012	Reintegro familiar	28	45	73
	Colocación familiar	1	0	1
2013	Reintegro familiar	4	105	109
	Colocación familiar	0	0	0
2014	Reintegro familiar	99	134	233
	Colocación familiar	149	20	169
2015	Reintegro familiar	44	27	71
	Colocación familiar	236	182	418
Total		725	750	1,475

Fuente: ISNA/GPI/Sistema de Información para la Infancia/Base de movimientos de atenciones anuales de restitución de derechos, años 2010 al 2015.

Entre 2011 y octubre de 2014, la cantidad de reintegros familiares reportados por los

JENA fueron 839 casos y 538 colocaciones familiares.

Gráfico 44. Reintegros familiares reportados en los JENA, 2011-2014

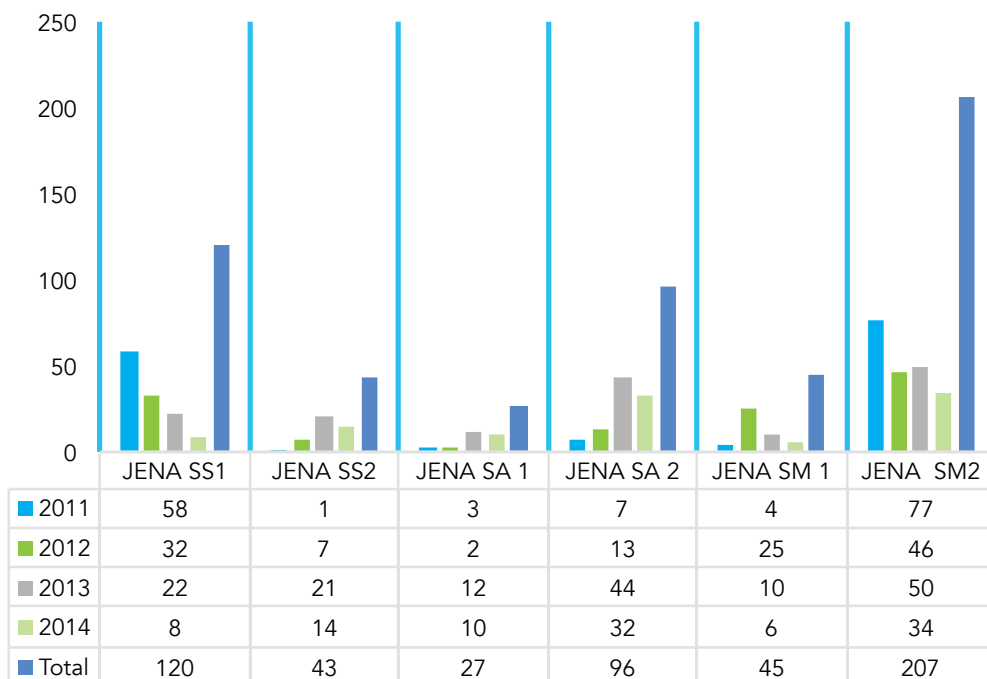


Fuente: Elaboración con base en datos de los JENA, para cada año

La mayor cantidad de reintegros familiares se han determinado por el JENA de Santa Ana (354), y el JENA de San Miguel (268). El mayor número de

colocaciones familiares ha sido otorgado por el JENA de San Miguel (252) y JENA de San Salvador (163).

Gráfico 45. Colocaciones familiares reportadas en los JENA, 2011- Oct. 2014



Fuente: Elaboración con base en datos remitidos por cada JENA.

Con el fin de garantizar el derecho a vivir en familia, en 2015 los Juzgados de Familia decretaron la adopción de 43 niñas, niños y adolescentes. De éstas, 15 eran niñas, 13 niños, 6 adolescentes hombres y 6 adolescentes mujeres. Todas fueron adopciones nacionales y en 24 (55.8%) se otorgaron a una sola persona (individual), 17 (39.5%) a parejas (conjunta) y 2 (4.6%) no determinadas³⁸ (CONNA, 2016a, pp. 64-66).

Atendiendo a la competencia de vigilar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes sujetos a adopción (Núm. 13 del Art. 135 de la LEPINA), el CONNA hizo una verificación en 16 casos durante el período de junio 2014 a mayo de 2015. Dicho proceso incluyó, tanto la obtención de información sobre los hechos reportados y el estado actual del trámite, como las medidas adoptadas para garantizar los derechos de las niñas y niños. En el proceso colaboraron las instancias competentes en materia de adopción y en la protección de niñez

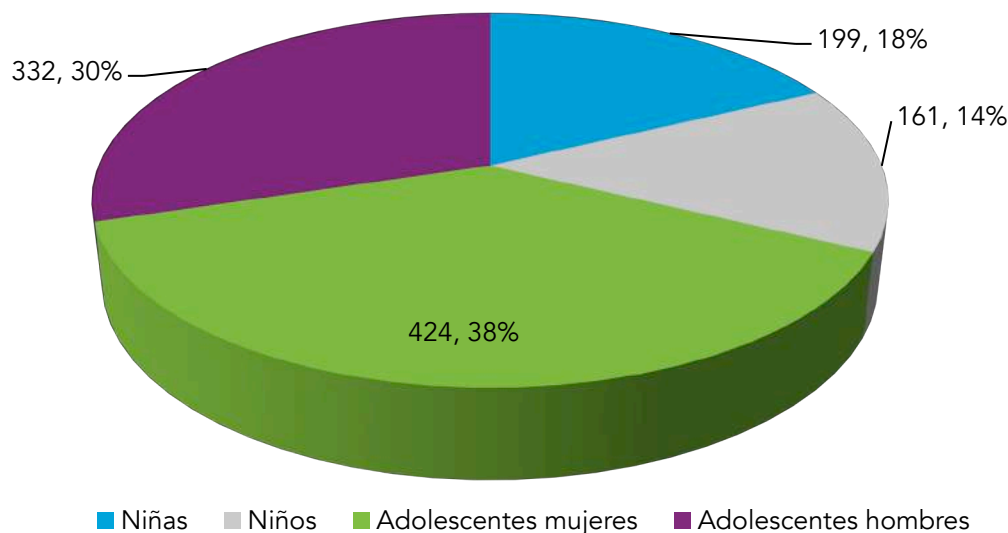
³⁸ La categoría no determinada se establece cuando no se cuenta con la información requerida para clasificar la adopción en conjunta o individual.

y adolescencia: PGR, ISNA, Juzgados de Familia, JENA y Juntas de Protección.

Como resultado de la verificación, se señalaron vulneraciones a derechos de 18 niñas, niños y adolescentes, por separación de grupo de hermanos, retardación en el trámite administrativo para declararles adoptables o asignarles familia, procedimientos calificados como engorrosos por las personas interesadas en adoptar, así como el incumplimiento de disposiciones legales para adopciones internacionales, entre otros (CONNA, 2015a, p. 47). Asimismo, se identificó la existencia de diversidad de criterios en la aplicación de la normativa vigente en materia de adopción por las instancias administrativas y judiciales, en particular, en lo referido a la declaratoria de adoptabilidad, lo que originó desprotección a algunas niñas, niños y adolescentes, violentándose el interés superior y su derecho a vivir en familia (CONNA, 2015a, p. 48).

A mayo de 2016, el total de niñas, niños y adolescentes bajo medidas de acogimiento institucional eran

Gráfico 46. Niñas, niños y adolescentes bajo medida de acogimiento institucional por grupo de edad y sexo (a mayo de 2016)



Fuente: CONNA, Subdirección de Registro y Vigilancia, Departamento de supervisión

1,116; el 76% (853) en centros privados y el 24% (263) en centros públicos administrados por el ISNA. Las principales causas de ingreso por las que se dictaron dichas medidas son el abuso físico o sexual, el abandono y negligencia de progenitores o responsables (CONNA, 2016a, p. 67).

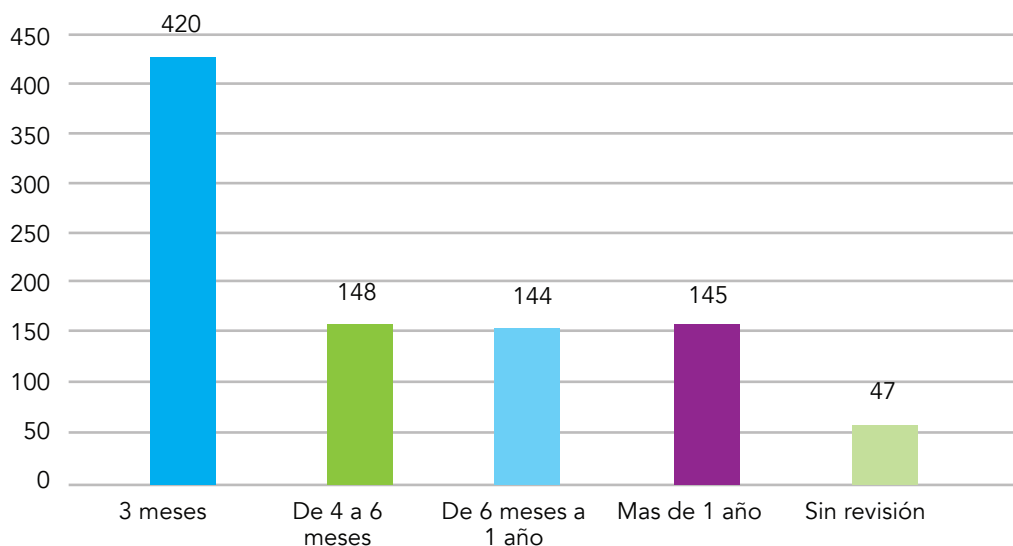
La población en acogimiento institucional, por categoría de edad y sexo se distribuye según lo expuesto en el Gráfico 47.

En relación con las medidas de acogimiento, entre junio 2015 y mayo 2016, el CONNA realizó visitas de supervisión a 19 centros de acogimiento, con el objetivo de garantizar el cumplimiento efectivo

y protección de los derechos de 136 niñas, niños y adolescentes bajo esta medida de protección. Las recomendaciones emitidas por el CONNA contribuyeron al cumplimiento de los derechos de acceso a la educación formal y formación vocacional, a la identidad, a vivir en condiciones dignas en los centros de acogimiento, a la recreación y cultura, la salud integral, así como, a vivir en familia (CONNA, 2016a, p. 67)

La periodicidad con la cual se revisa la medida judicial de acogimiento por los juzgados competentes varía de 3 meses a más de un año. De la población acogida en centros privados (904), se reportó que a un 5% no se le había revisado dicha medida.

Gráfico 47. Periodicidad en la revisión de medida judicial de acogimiento en instituciones privadas (hasta abril 2015)



Fuente: CONNA, Subdirección de Registro y Vigilancia, Departamento de supervisión. Con base en información proporcionadas por Entidades de Atención privadas.



c) Derecho a la educación y cultura

La educación constituye el origen del desarrollo social y cultural de las personas, por tanto, es considerado a nivel mundial como un derecho fundamental para el ejercicio y goce de otros derechos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)³⁹ establece en su Art. 13, que los estados parte deben reconocer el derecho de todas las personas a la educación, como parte de los derechos sociales que junto a los derechos políticos contribuyen al ideal humano de ser libre del temor y de la miseria. En este mismo artículo establece el fin último hacia el cual los estados deberían orientarla: "...la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales. Conviene, asimismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas

para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz" (ONU, 1966).

La Convención sobre los Derechos del Niño (1989) reconoce también este derecho en forma implícita o explícita en al menos cinco de sus artículos: 18, 23, 28, 29 y 30. En el Art. 28 establece que la educación es un derecho de todas las niñas, niños y adolescentes y recomienda una serie de estrategias que contribuyan a garantizar su efectividad; el Art. 29 retoma y amplía los propósitos de la educación planteados en el PIDESC y cómo éste derecho contribuye a un desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

La LEPINA en su Art. 81 establece que "La niña, niño y adolescente tienen derecho a la educación y cultura. La educación será integral y estará dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes

39 Ratificado por el Salvador el 30 de noviembre de 1979.

y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial". La norma salvadoreña no solo menciona que es un derecho para toda la niñez y adolescencia, sino también que es gratuita y obligatoria.

La institución directamente responsable con la garantía de este derecho es el Ministerio de Educación (MINED), razón por lo que la fuente principal para el análisis de este derecho proviene de las estadísticas e indicadores que genera a partir del censo inicial y final que realiza anualmente.

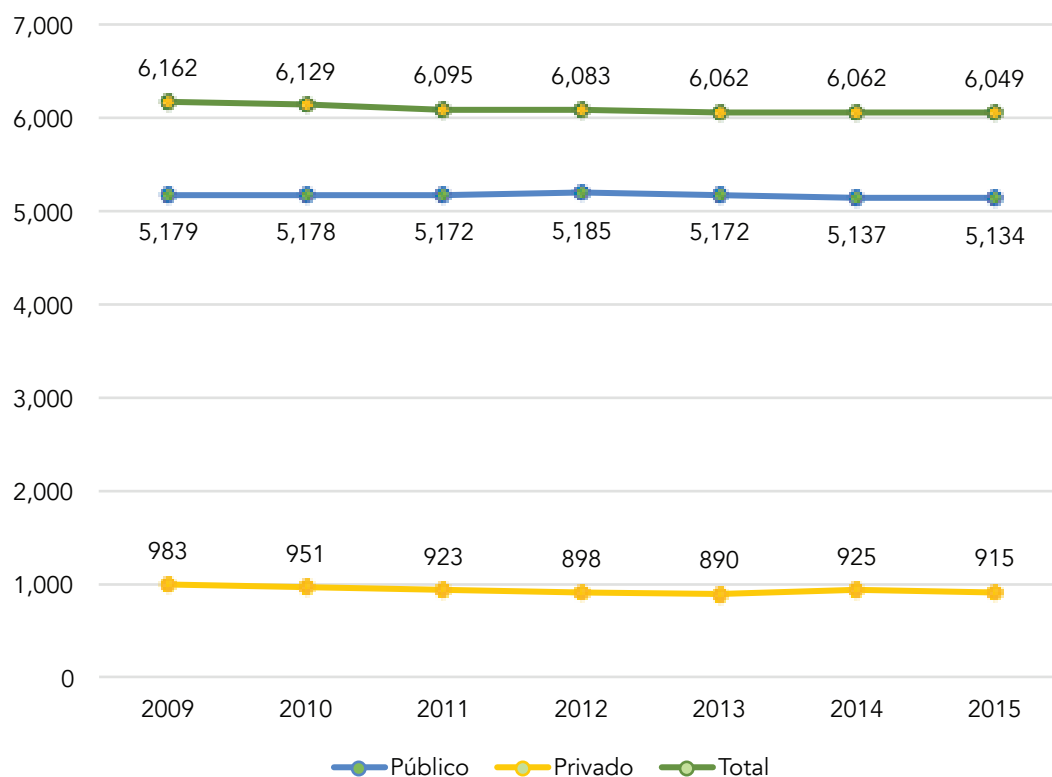
El MINED definió nueve apuestas estratégicas para el quinquenio 2014-2019, busca alcanzar la educación de calidad con inclusión y equidad social desde una concepción de desarrollo humano que establece el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, (MINED, 2015, p. 5). Estas apuestas se recogen en el Plan Nacional de Educación en Función de la

Nación 2014-2019, el cual retoma y profundiza los esfuerzos iniciados con el Plan Social Educativo Vamos a la Escuela, encaminado a la mejora en la calidad educativa y la cobertura desde un enfoque de derechos humanos y política social (MINED, 2015, p. 5).

Para 2015, este Ministerio reportó que la oferta educativa estaba compuesta por 6,049 centros que prestaban servicios de educación a las niñas, niños y adolescentes en los diferentes niveles dentro del Sistema Regular⁴⁰ (MINED, 2016). Entre 2009 y 2015, esta oferta mantuvo un comportamiento bastante homogéneo con una tendencia a la baja que representó 113 centros educativos menos para 2015; disminución principalmente manifiesta en el número centros educativos privados.

⁴⁰ Corresponde a los centros escolares que brindaron información en el Censo Escolar 2015 y no incluye centros educativos de Educación Especial y Superior.

Gráfico 48. Centros educativos por sector, 2009-2015



Fuente: Elaboración con base en datos del MINED (2015a) y (MINED, 2016)

En su composición por sector, el 85% de los centros educativos son del sector público y el 15% pertenece al sector privado. Con relación a su ubicación, el

66% de los centros educativos se encuentran en la zona rural, en comparación a un 34% de centros educativos en la zona urbana (MINED, 2016).

Tabla 8. Porcentaje de centros educativos por sector y según zona, 2015

Zona Sector	Urbana	Rural	Total
Público	21%	64%	85%
Privado	14%	2%	15%
Total	34%	66%	100%

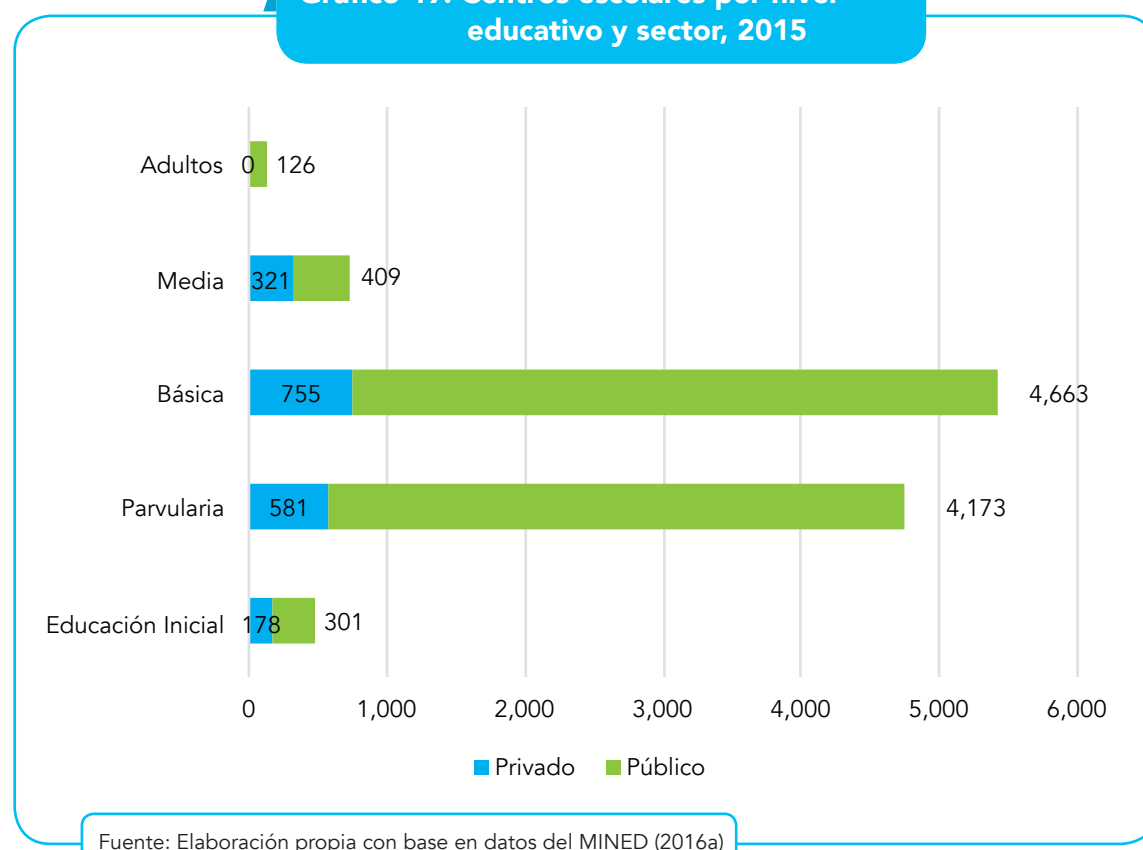
Fuente: Elaboración con base en datos del (MINED, 2016)

A nivel departamental, esta oferta se concentra en 5 de los 14 departamentos: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, San Miguel y Chalatenango agrupando más del 50% de la oferta de centros educativos (MINED, 2016a). La oferta de los diferentes niveles educativos también está concentrada principalmente

en Educación Básica, con 5,418 centros educativos que atienden este nivel (89.6%). Le sigue la oferta del nivel de Parvularia, presente en el 78.6% de los centros educativos⁴¹ (MINED, 2016a).

⁴¹ Los porcentajes de la oferta de los diferentes niveles no suma el 100% debido a que un centro escolar puede ofrecer varios niveles, como se explicará más adelante.

Gráfico 49. Centros escolares por nivel educativo y sector, 2015



Al interior de los centros escolares, existe una cantidad de secciones educativas bajo la modalidad de aulas regulares y de aulas integradas. Para 2015, los centros educativos contaban con 61,574 secciones, de las cuales 50,904 eran aulas regulares (83%) y 10,670 aulas integradas (17%) (MINED, 2016b). Esta composición porcentual por tipo de secciones se ha mantenido estática para todo el periodo de 2009 a 2015.

Adicional a los centros educativos que componen el Sistema Regular, existían 31 centros especializados con 218 secciones de educación especial que atienden a niños, niñas y adolescentes con diversos tipos de discapacidad. La oferta de estos servicios ha sido provista principalmente por el sector público con el 94% de estos centros (MINED, 2016c).

Otro elemento esencial de la oferta educativa es la planta docente nacional. Para 2015 el número de docentes del Sistema Regular ascendió a 57,143, de los cuales 39,614 eran mujeres (69%) y 17,529 hombres (MINED, 2016d).

En coherencia con la distribución de los centros educativos a nivel departamental, para 2015 la cantidad de docentes también está concentrada. No obstante, en este caso la concentración es mayor que la de los centros escolares. Los docentes de 4 departamentos: San Salvador, La Libertad, San Miguel y Santa Ana, constituyen el 55% del total de la planta docente.

Adicional al Sistema Regular, MINED también reporta para 2015 una cantidad de 258 docentes de educación especial, de los cuales 249 imparten clases en el sector público y 9 en el sector privado.

El eje principal de cualquier sistema educativo es su planta de docentes. Si éstos no son suficientes y si no cuentan con la formación y constante actualización, los procesos educativos son limitados para las niñas, niños y adolescentes, en detrimento de su derecho a la educación, que como lo establece la LEPINA en el Art. 81, debe ser integral y estar dirigida al pleno desarrollo de la personalidad, aptitudes y capacidades mentales y físicas hasta su máximo potencial.

En este sentido, es necesario desarrollar un sistema de formación docente que articule la formación inicial con la actualización permanente y la especialización, para superar algunas brechas, tales como:

- El 73% de la planta docente tiene solamente nivel de profesorado; 13.7% cuenta con licenciatura y 11.5% tiene Bachillerato Pedagógico.
- 1.6 % de la planta docente ha recibido un curso sobre pedagogía.
- El 0.2% del total de docentes en servicio cuentan con Maestría o Doctorado.
- La Evaluación de Competencias Académicas y Pedagógicas (ECAP) para docentes recién egresados desde su implementación ha sido sistemáticamente reprobada.
- Un 70 % de las y los docentes que trabajan en escuelas que poseen computadoras saben utilizarla. Por otro lado, 48% de los y las docentes trabajan en escuelas que no cuentan con esta herramienta educativa.
- Del total de docentes especialistas en las áreas de matemáticas (4,054), ciencias naturales (3,454), educación especial y educación física (1,453), solo el 8.6% tiene plaza oficial. (GOES, 2015, p. 118).

En materia de cobertura educativa 1, 556,710 estudiantes se matricularon en el Sistema Regular de Educación para 2015. De éstos, 1, 553,262 (99.78%) eran niños, niñas y adolescentes. El 51.2% lo conforman los niños y adolescentes hombres y el 48.7% las niñas y adolescentes mujeres.

Dentro de la matrícula un 1.12% (14,071) eran estudiantes con discapacidad atendidos por secciones de educación especial dentro del Sistema Regular (MINED, 2016e); y 2,741 fueron atendidos por centros de educación especial (MINED, 2016c).

Dentro de la matrícula 2015 también se identificaron 64,839 (5.2%) niñas, niños y adolescentes

pertenecientes a grupos indígenas. Esta población estaba compuesta principalmente por el grupo indígena Nahuatl (42.9%) y Lenca (25.7%). En cuanto a su composición por sexo, el 51.2% eran niños y adolescentes hombres y el 47.9% niñas y adolescentes mujeres. La mayor cobertura está en el sector privado (95.4%) y el 52.3% asisten a centros educativos de la zona urbana (MINED, 2016f).

Es importante analizar la situación del ejercicio de este derecho por niveles educativos. A nivel de educación inicial, se incluye un eje específico para la primera infancia dentro de los nueve ejes estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación, el cual comprende la atención del nivel inicial y de Parvularia.

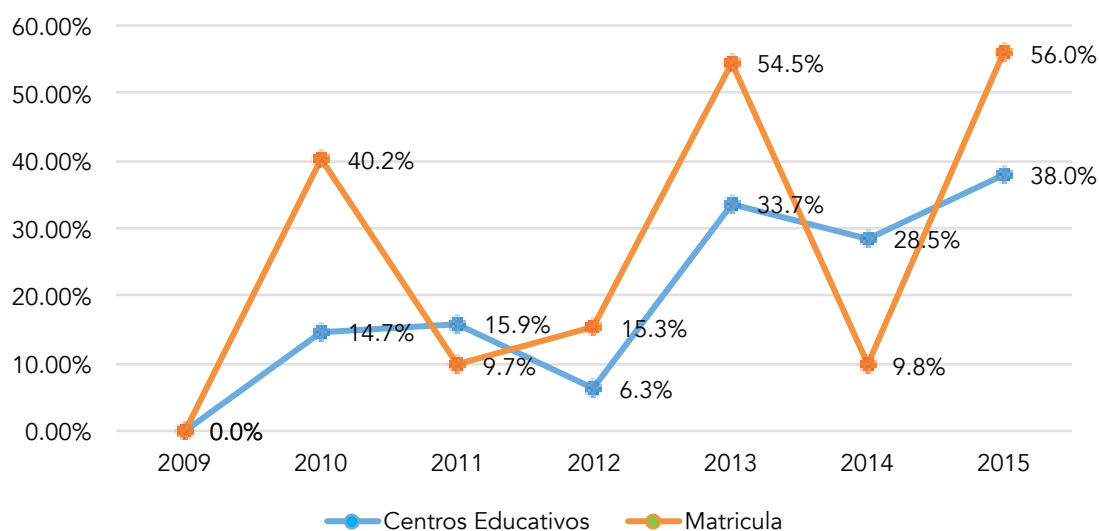
El eje No. 2 “Desarrollo Educativo de la primera infancia”, plantea para este quinquenio la realización de las siguientes acciones:

1. Ampliación de la tasa neta de cobertura de educación inicial (0 a 3 años) en un 10% por la vía familiar comunitaria y en un 6% la tasa neta de cobertura de la Educación Parvularia (4 a 6 años).
2. Despliegue en el marco del Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público de la especialización y actualización de los docentes de Parvularia y los agentes de la vía familiar comunitaria.
3. Establecimiento del sistema nacional de evaluación del desarrollo de la primera infancia y el sistema de indicadores intersectorial del modelo de atención de la primera infancia (salud, nutrición, protección y educación).
4. Fortalecimiento de los municipios en la atención intersectorial e interinstitucional a la primera infancia, en el marco de la política educativa nacional y la Ley de desarrollo y protección social.
5. Incremento gradual del presupuesto para la primera infancia, en el marco del Programa de Financiamiento para la Educación (anteproyecto de ley).
6. Sistema de acreditación de las instituciones públicas y privadas que atienden los servicios integrales de la primera infancia.

El modelo de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia se ha venido desarrollado por medio de dos vías: la vía familiar comunitaria y la vía institucional. La vía familiar comunitaria comprende las estrategias que se desarrollan a nivel familiar o en espacios alternos y que reúnen condiciones básicas para la atención directa de niñas y niños por medio de personal capacitado; mientras que la vía institucional es la que se implementa a través del Sistema Educativo formal, por medio de personal calificado para la atención diaria del proceso educativo (MINED, 2016g, p.16).

En un periodo de seis años, la oferta de centros educativos que ofrecían el nivel de educación inicial se incrementó en un 235%, pasando de 143 centros en 2009 a 419 en 2015. Si bien este crecimiento ha sido continuo, se observa un mayor incremento a partir de 2012, principalmente en los centros escolares públicos en donde actualmente se encuentra el 63% de la oferta. De forma complementaria la atención educativa brindada a la población de 0 a 3 años ha mostrado también un crecimiento exponencial, pasando de 2,881 niños y niñas matriculados en 2009 a 13,510 en 2015 (368% de crecimiento acumulado).

Gráfico 50. Tasa de crecimiento de oferta de centros escolares y matrícula en educación inicial, 2009-2015

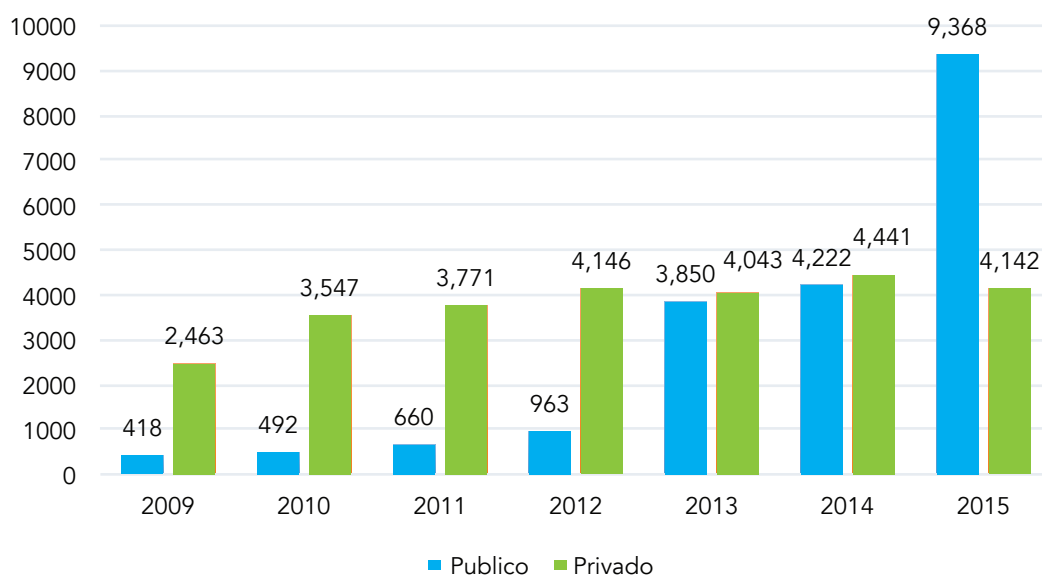


Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED (2015a) y (2016)

Asimismo, la matrícula de atención inicial en el sector público ha venido creciendo hasta compararse a la del sector privado en 2014 y llegar a duplicarla en 2015. Como resultado, la mayor concentración de la

matrícula inicial se encuentra en este sector (69.3%). El 60% de la matrícula se encuentra en la zona urbana, el 49% son niñas y el 51% niños.

Gráfico 51. Matrícula inicial en el nivel de Educación Inicial por sector,



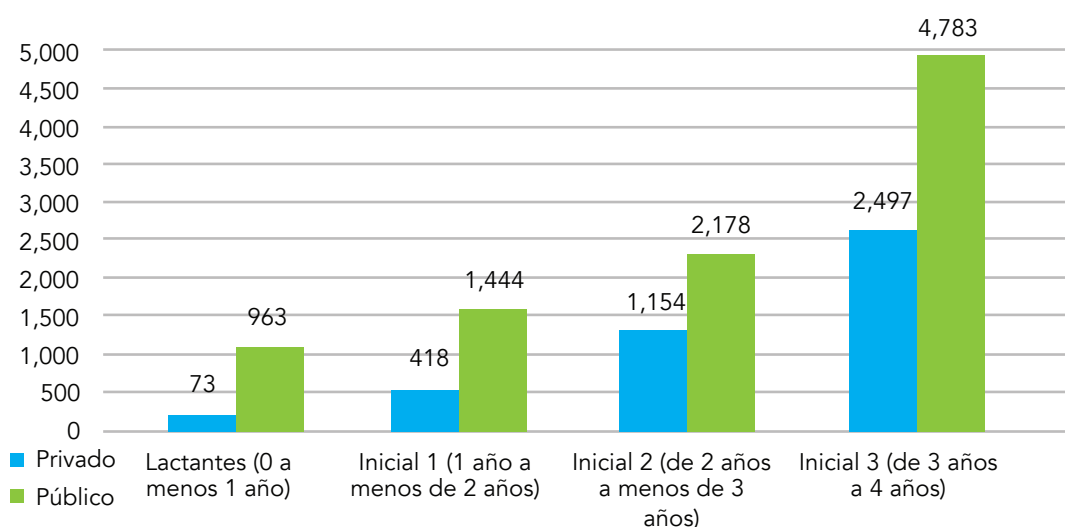
Fuente: Elaborado con base en datos del MINED(2015a) y (2016).

La atención en educación especial incluyó en el sistema regular a 94 niños y niñas con diversas discapacidades (principalmente ceguera y multidiscapacidades o retos múltiples); a 122 niños y niñas en centros de educación especial con discapacidades (principalmente discapacidad intelectual). Asimismo, se reporta la presencia de 722 niños y niñas pertenecientes a grupos indígenas

(principalmente náhuatl).

La educación inicial de 0 a 3 años comprende la atención de cuatro sub niveles por edades: lactantes (0 a 1 año), inicial 1 (1 año a menos de 2 años), inicial 2 (2 años a menos de 3 años) e inicial 3 (3 años a menos de 4). De estos cuatro niveles la mayor matrícula se registra en el sub nivel inicial 3 con el 54%.

Gráfico 52. Matrícula en el nivel de educación inicial por subniveles y sector, 2015



Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED (2016)

La tasa neta de cobertura de educación inicial por la vía institucional ha mostrado una tendencia creciente entre 2009 y 2015, pasando del 0.4% al 2.1%. No obstante, este crecimiento continúa siendo una tasa muy baja con relación al total de niñas y niños en esas edades y en comparación a los otros niveles educativos.

Por otra parte, el MINED reportó para 2015 que a través de la vía familiar se atendieron a 9,377 niñas y niños (MINED, 2016g) y el ISNA un total de 1,232 niños y niñas entre 0 y 3 años en 191 Centros de Bienestar Infantil (CBI) y 449 en 15 Centros de Desarrollo Integral (CDI) (ISNA, 2016).

En cuanto a la Educación Parvularia, la Ley General de Educación establece en su Art. 18 que "Comprende normalmente tres años de estudio y los componentes

curriculares propiciarán el desarrollo integral en el educando de cuatro a seis años, involucrando a la familia, la escuela y la comunidad. La acreditación de la culminación de Educación Parvularia, aunque no es requisito para continuar estudios, autoriza, en forma irrestricta, el acceso a la Educación Básica."

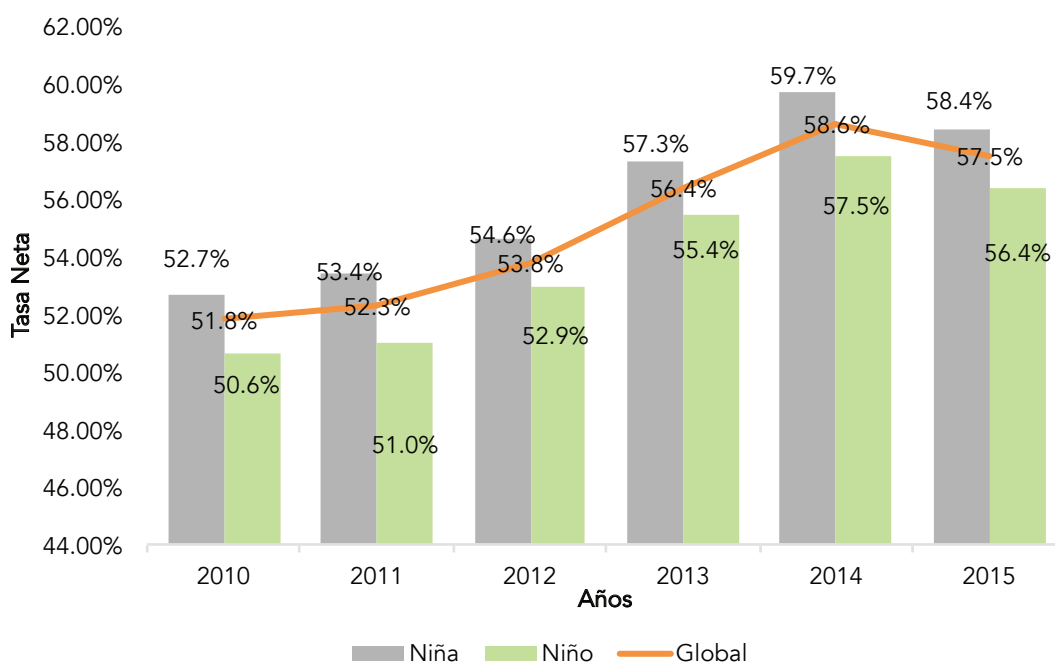
En 2015, la matrícula de Educación Parvularia fue de 230,143 estudiantes con una mayor concentración en Parvularia de 6 años (43%). La mayor parte de esta población es atendida por el sector público (83%), provienen principalmente de las áreas urbanas (52.3%) y está conformada casi de manera equitativa por niños (50.4%) y niñas (49.4%)⁴² (MINED, 2016).

42 La suma de los porcentajes no es 100%, debido a que en los formularios de recolección de datos del Censo Inicial de MINED no se identificó el sexo de 479 estudiantes que se reportan como No especificado.

Como parte de los esfuerzos en la educación de la primera infancia, la tasa neta de cobertura de Educación Parvularia (estudiantes de 4 a 6 años) también ha mostrado una tendencia creciente, pasando de 51.8% en 2010 a 57.5% en 2015. Únicamente entre 2014 y 2015 se presentó una leve reducción alrededor de un punto porcentual.

Al considerar la tasa neta por sexo, se observa el mismo comportamiento creciente tanto en la tasa de niñas como en la de niños, no obstante, para todo el período, la tasa neta de Educación Parvularia para niñas ha sido superior en 2 puntos porcentuales en relación con los niños.

Gráfico 53. Tasas netas de cobertura de Educación Parvularia según sexo, 2010-2015



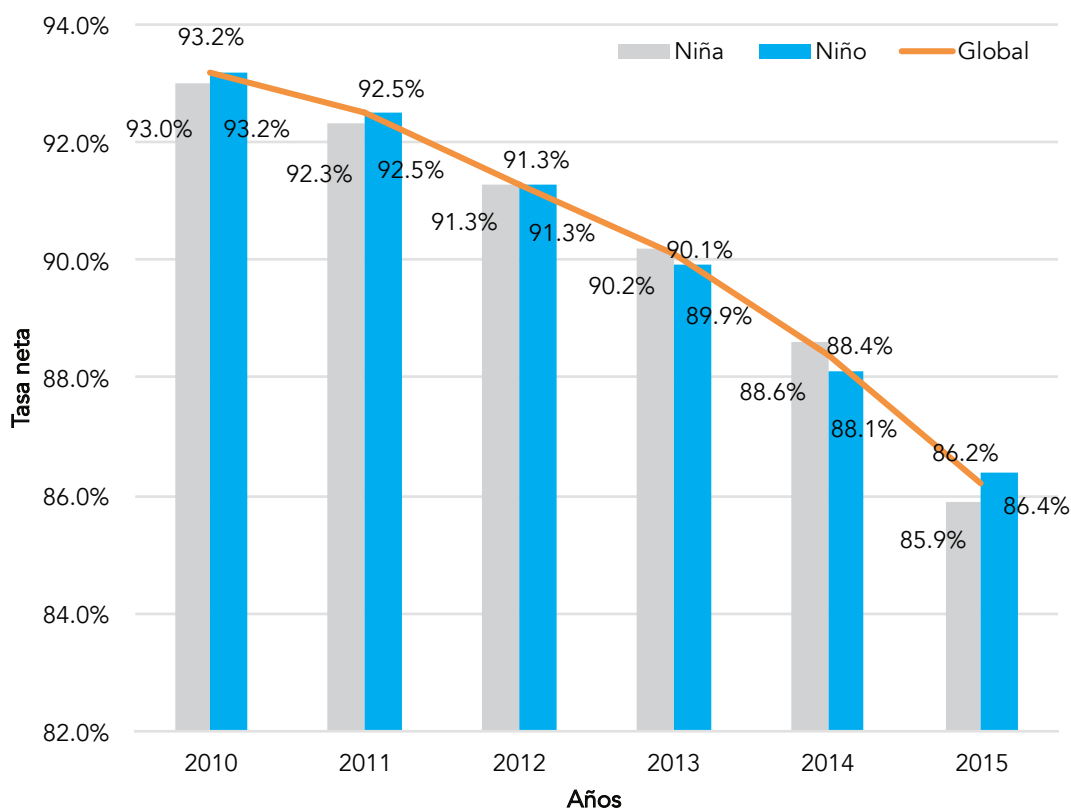
Fuente: Elaborado con base en tasas calculadas por MINED para todos los años.

La Ley General de Educación establece en el Art. 20 que: "La Educación Básica comprende regularmente nueve años de estudio del Primero al Noveno Grado y se organiza en tres ciclos de tres años cada uno, iniciándose normalmente a los siete años de edad. Será obligatoria y gratuita cuando la imparta el Estado. Se podrá admitir a niños y niñas de seis años en Primer Grado, siempre y cuando muestren madurez y aptitud apropiadas, de acuerdo con los criterios y mecanismos de evaluación establecidos por el Ministerio de Educación."

Para 2015, la matrícula escolar de educación básica ascendió a 1, 098,653 estudiantes, 61,514 menos

que en 2014. Esta matrícula es la más baja reportada para este nivel educativo durante el periodo 2010 - 2015, con un decrecimiento de -17.2% con relación a la matrícula de 1, 326,223 reportada en 2010.

La matrícula se concentra de manera homogénea en los tres ciclos con alrededor del 33% y 34% en cada ciclo y al igual que en el caso de Parvularia, alrededor del 87% fue atendida por el sector público. La composición de la matrícula de básica para 2015, muestra una participación paritaria entre niños y adolescentes de las áreas rurales (50.1%) y de las áreas urbanas (49.9%). De igual manera, se evidencia un leve predominio de participación del sexo masculino con 51.7%.

Gráfico 54. Tasas netas de cobertura de Educación Básica según sexo, 2010-2015

Fuente: Elaborado con base en cálculos de MINED para todos los años.

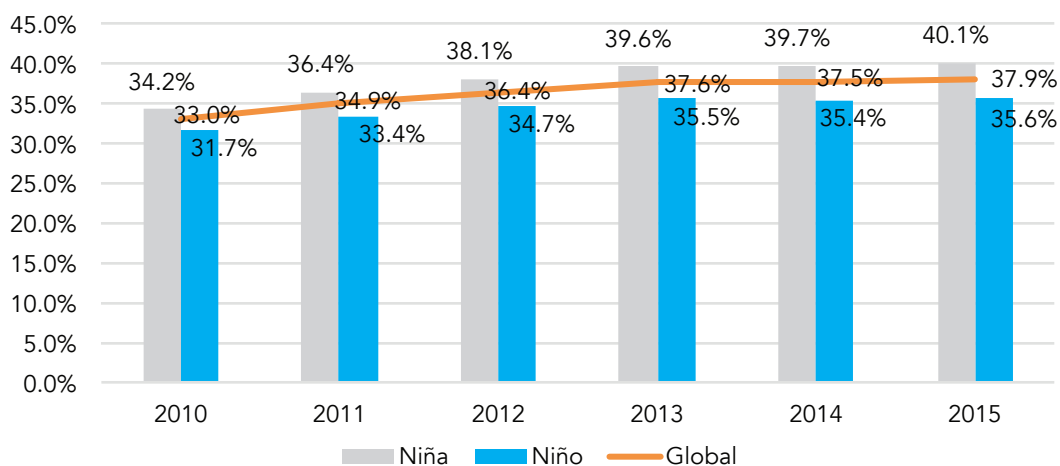
A diferencia del comportamiento de la Educación Parvularia, las tasas netas de cobertura de Educación Básica han mostrado una tendencia decreciente en el periodo de 2010 a 2015, pasando de 93.2% a 86.2%, lo que representa una reducción de 7 puntos porcentuales. En el caso de las tasas netas por sexo, se evidencia un predominio de cobertura para las mujeres, sin embargo, la disminución de coberturas ha ocurrido en ambos sexos, con mayor incidencia en el caso de las mujeres.

El artículo 22 de la Ley General de Educación estipula lo siguiente: "La educación media ofrecerá la formación en dos modalidades educativas: una general y otra técnico-vocacional, ambas permitirán continuar con estudios superiores o incorporarse a la actividad laboral."

Según la misma Ley, los estudios de educación media culminarán con el Grado de Bachiller, el cual se acredita con el título correspondiente. El Bachillerato General tiene una duración de dos años de estudio y el técnico vocacional de tres. El Bachillerato en jornada nocturna tiene una duración de tres y cuatro años respectivamente.

La matrícula de Educación Media para 2015 fue de 210,956 estudiantes; 107,749 en Bachillerato Técnico (51%) y 103,207 (49%) para el Bachillerato General. El 75% de la atención de Educación Media fue prestada por el sector público y a diferencia de la Educación Parvularia y Básica, alrededor del 87% de los estudiantes fueron atendidos por centros escolares de la zona urbana, predominando estudiantes del sexo femenino con un 51% (MINED, 2016).

Gráfico 55. Tasas netas de cobertura en Educación Media, según sexo, 2010-2015

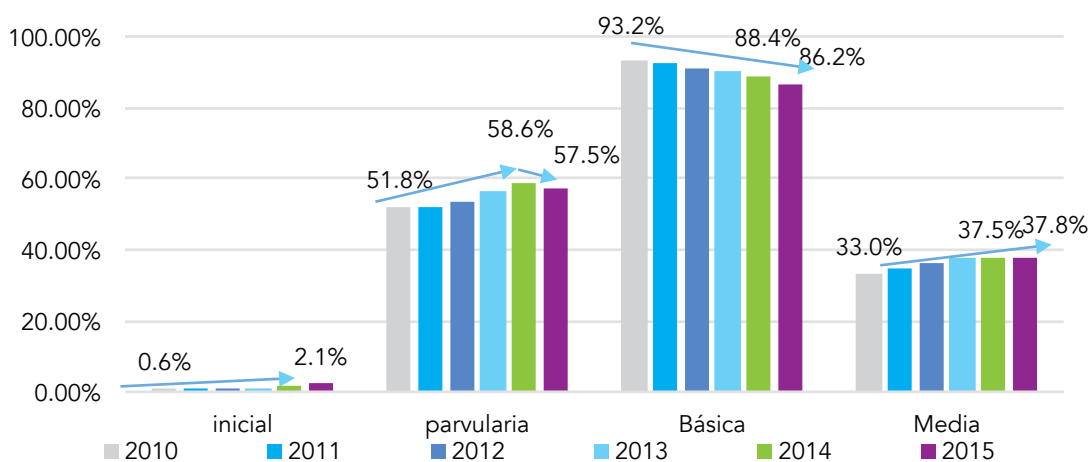


Fuente: Elaborado con base en cálculos de MINED para todos los años.

La tasa neta de cobertura a nivel de Educación Media ha evolucionado de manera positiva en el periodo 2010 a 2015. En 2010 la tasa neta fue de 33% y para 2015 de 37.9%, mostrando un incremento de más de 4 puntos porcentuales. En este periodo también se observa que la tasa neta de cobertura de adolescentes mujeres fue superior a la tasa neta global para todos los años y que este grupo fue el que presentó un mayor crecimiento, pasando de 34.2% a 40.1%.

En términos generales las tasas netas de cobertura para la mayor parte de los niveles educativos han mostrado una tendencia creciente para el periodo 2010 y 2015, a excepción de la tasa de Educación Básica, las cuales han tenido una disminución considerable, especialmente en los dos primeros ciclos de Básica (de 1° a 6° Grado). Asimismo, las niñas y adolescentes mujeres han tenido durante el periodo una mayor participación dentro de la cobertura de los diferentes niveles.

Gráfico 56. Tasas netas de cobertura por nivel educativo, 2010-2015



Fuente: Elaborado con base en cálculos de MINED para todos los años.

Otro aspecto importante a evaluar dentro de la garantía al derecho a la educación es la calidad de la oferta educativa. La calidad educativa es la pertinencia de los conocimientos, competencias y habilidades transferido a la población estudiantil para hacer frente a las exigencias que el mundo profesional, laboral y de convivencia social hace a los jóvenes para su integración exitosa; ello requiere una continua formación docente, directivos y asistentes técnicos, así también mantener la infraestructura y los espacios recreativos adecuados y en el mejor estado, además de material y equipo educativo adecuados y actualizado. (MINED, 2015b, p. 3).

La Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media, PAES, es uno de los indicadores para determinar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes de Educación Media. (MINED, 2015b, p. 63), y su equivalente para los grados inferiores es la Prueba de Logros de Aprendizajes en Educación Básica.

En 2015, se evaluaron 81,633 estudiantes de Educación Media en la PAES en periodo ordinario.

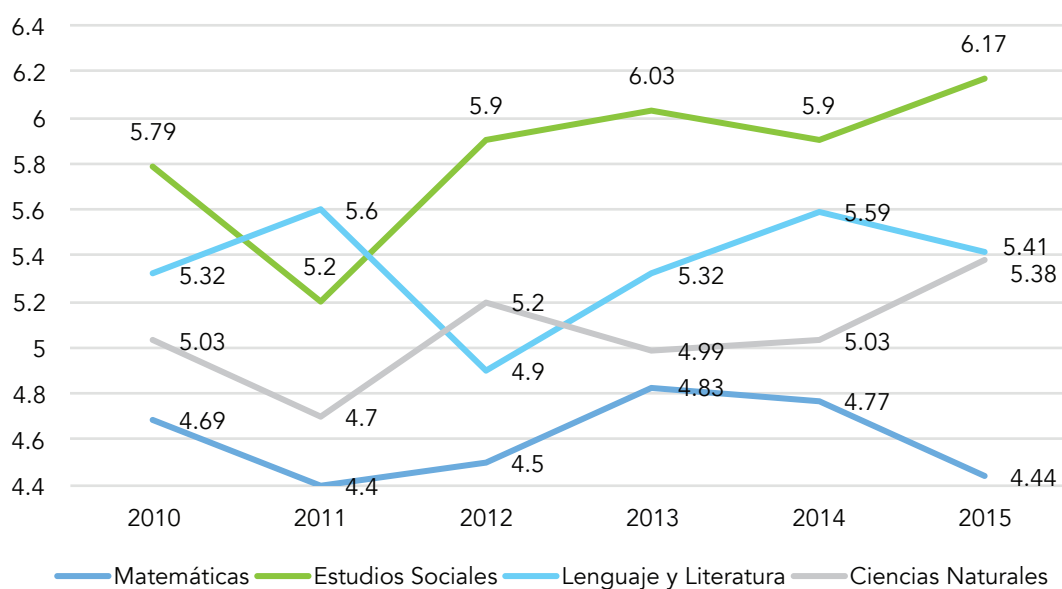
De éstos el 52% fueron adolescentes mujeres y el 48% adolescentes hombres. La mayor parte de los evaluados provenían de centros escolares del sector público (63.7%). Dentro de este grupo se evaluaron 144 estudiantes con necesidades educativas especiales⁴³. Adicionalmente, 2,000 estudiantes fueron evaluados por primera vez en la PAES en periodo extraordinario⁴⁴.

Desde 2010 la tendencia en los promedios de la PAES por asignatura refleja un mejor resultado en Estudios Sociales y Cívica al alcanzar un 6.17 en 2015. Caso contrario es el de las matemáticas, el cual evidencia un déficit en el análisis lógico matemático, con resultados por debajo del 5 para todos los años y especialmente para 2015 con 4.4 (MINED, 2016g). En el gráfico 58, también es posible identificar una leve mejora en la asignatura de Ciencias Naturales, la cual paso de 5.03 en 2010 a 5.38 en 2015.

43 Estudiantes sordos, no videntes, con espectro autismo, hipoacusia, entre otros.

44 De los 81,633 evaluados en periodo ordinario, 15,153 hicieron prueba de reposición de una o más asignaturas en periodo extraordinario.

Gráfico 57. Promedio de notas de la PAES por asignatura, 2010-2015



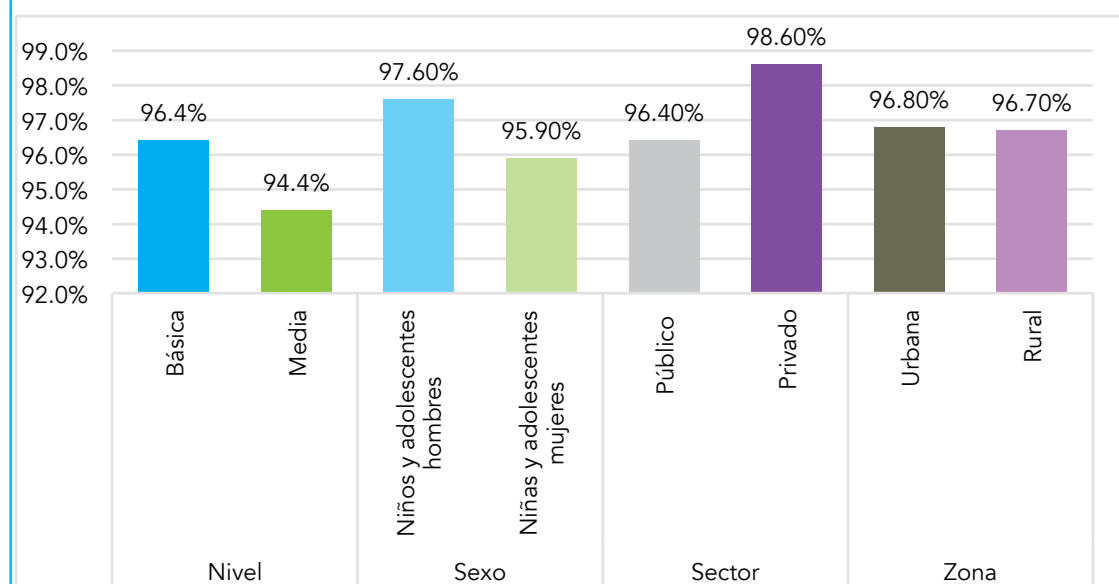
Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED, Informe de resultados de PAES para todos los años.

Otro aspecto relacionado con la calidad educativa es el porcentaje de alumnos aprobados por nivel educativo. Reprobar un grado puede constituirse en un factor de frustración y atraso en el desarrollo educativo de las niñas, niños y adolescentes y, de volverse una constante, es un factor de sobreedad y hasta de deserción del sistema educativo.

En 2015, la cantidad de niñas, niños y adolescentes aprobados fue de 1, 418,931 equivalente a un 96.7% de la matrícula final. En el caso de Educación

Inicial y Parvularia, el 100% de las y los alumnos de la matrícula final se consideran aprobados; en el caso de Básica y Media 47,756 reprobaron el año escolar (MINED, 2016h). Vale la pena mencionar que el número de estudiantes aprobados para el nivel de Educación Básica y Media se ha incrementado considerablemente en comparación a lo reportado para el periodo 2010 - 2014, en el cual la proporción de aprobados osciló entre el 90.1% y 92.8% para Educación Básica y entre el 86.5% y el 89.1% para Educación Media.

Gráfico 58. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes aprobados en Básica y Media por sexo, sector y zona, 2015.



Fuente: Elaboración propia con base en datos del MINED (2016h)

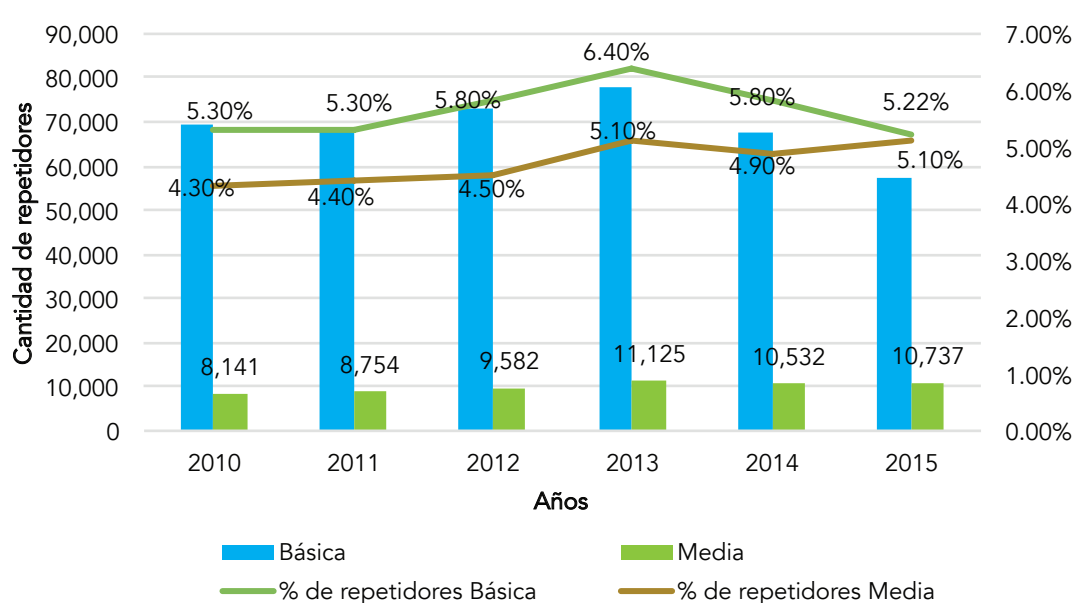
El gráfico 59 evidencia que el mayor porcentaje de aprobados se obtuvo en Educación Básica siendo en su mayoría niños y adolescentes hombres. Asimismo, se observa el predominio de aprobados en el sector privado y la similitud de proporción entre los centros en las zonas rurales y urbanas.

La repitencia escolar consiste en repetir el mismo nivel de desafío haciendo que las y los estudiantes cursen el año nuevamente. La fundamentación de esta práctica no suele cuestionarse. La repitencia y el abandono durante el año escolar son las manifestaciones más evidentes de una sucesión de

pequeños fracasos en la experiencia escolar de las niñas y los niños. (UNICEF, 2007, p. 15).

En 2015, los estudiantes que repitieron grado en Educación Básica y Media fueron 68,095, lo que representa el 5.2% del total de la matrícula. En el nivel de Educación Básica el porcentaje de estudiantes reprobados mostró una tendencia creciente entre 2012 y 2013, luego una reducción de alrededor de 10,000 alumnos menos repitiendo en 2015. La repitencia en el caso de la Educación Media ha mostrado una tendencia entre el 4.3% y el 5.1% del total de la matrícula inicial.

Gráfico 59. Cantidad y porcentaje de estudiantes repitentes en Básica y Media, 2010-2015



Fuente: Elaborado con base en MINED (2015a) y (2016)

Por otro lado, existen diversos factores en el entorno educativo, familiar y comunitario que conllevan a que las niñas, niños y adolescentes abandonen el centro escolar en el que fueron registrados inicialmente. Factores que pueden ocasionar que el estudiante cambie de un centro escolar a otro o que termine desertando del sistema educativo en el año lectivo en el que se matriculó.

Entre 2010 y 2015 más del 28% de los estudiantes abandonaron el centro educativo en el que inicialmente se matricularon por cambio de domicilio, siendo esta la principal causa de abandono para el período. En términos generales, podría afirmarse que este motivo explica el abandono en casi tres de cada diez estudiantes. Otras causas de abandono que han ido adquiriendo importancia son: la delincuencia, otras causas, abandono del país e irse a otra escuela, tal como se muestra en la tabla 9.

La delincuencia se presenta como una razón que va en aumento. En 2010 ésta representaba el 5.9% y se

incrementó hasta el 13.5% en 2015. Dicha estimación podría estar subvalorada, dado que el cambio de domicilio, el abandono del país y el cambio a otra escuela también están asociados a los niveles de inseguridad y delincuencia que enfrenta la familia en el ámbito comunitario.

De igual forma, el porcentaje de alumnos que abandonan el país ha venido creciendo. En 2012, el 4.8% de los que abandonaron el centro educativo lo hicieron porque se iban del país, en 2014 este porcentaje alcanzó el 13.3% y en 2015 oscila en el 11%. En el caso de irse a otra escuela los porcentajes han disminuido a lo largo del tiempo, pasando de un 10.1% en 2010 a un 8.6% en 2015. Llama la atención que esta causa presente valores menores en cada año, ya que implica que el estudiante no se incorpora a otro establecimiento educativo, sino que posiblemente deserta del sistema escolar.

Tabla 9. Porcentaje de estudiantes por causas de abandono del centro educativo, 2010-2015.

Causa	2010	2012	2013	2014	2015
Cambio de domicilio	30.5	29.9	29.5	28.6	28.5
Delincuencia	5.9	7.4	8.1	11.5	13.5
Otra causa	14.5	11.8	14	11.7	12.3
Abandonó el país	5.3	4.8	6.2	13.3	11.3
Se fue a otra escuela	10.1	9.4	9.2	7.8	8.6
Los padres no quieren que asistan a la escuela	6.3	5.3	5	5.1	5.2
Bajo rendimiento académico	4.2	5.7	5.4	4.4	4.2
Trabajo agrícola	4.8	6.7	5.1	3.9	3.5
Dificultades económicas	5.5	5	4.9	3.6	3.3
Otro trabajo de estudiante	3.4	4	3.5	2.8	2.4
Trabajo labores domésticas	2.8	3.8	3	2.4	2.0
Enfermedad	2.3	2.3	2.1	1.7	1.6
El centro educativo está muy lejos	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6
Embarazo	1.6	1.1	1.4	1.0	1.1
Emigró al sistema EDUCAME	0.8	0.6	0.6	0.4	0.5
Muerte del estudiante	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3
Tiene alguna discapacidad física	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
Accidente	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1

Fuente: Elaboración propia con datos de MINED. Censos finales de cada año.

Al intentar agrupar en categorías algunas de las razones, se identifica que las dificultades económicas, el trabajo en labores domésticas, el trabajo agrícola y otro trabajo del estudiante están asociadas como "razones económicas". En 2014 el 13% de los estudiantes abandonó el centro educativo por estos motivos.

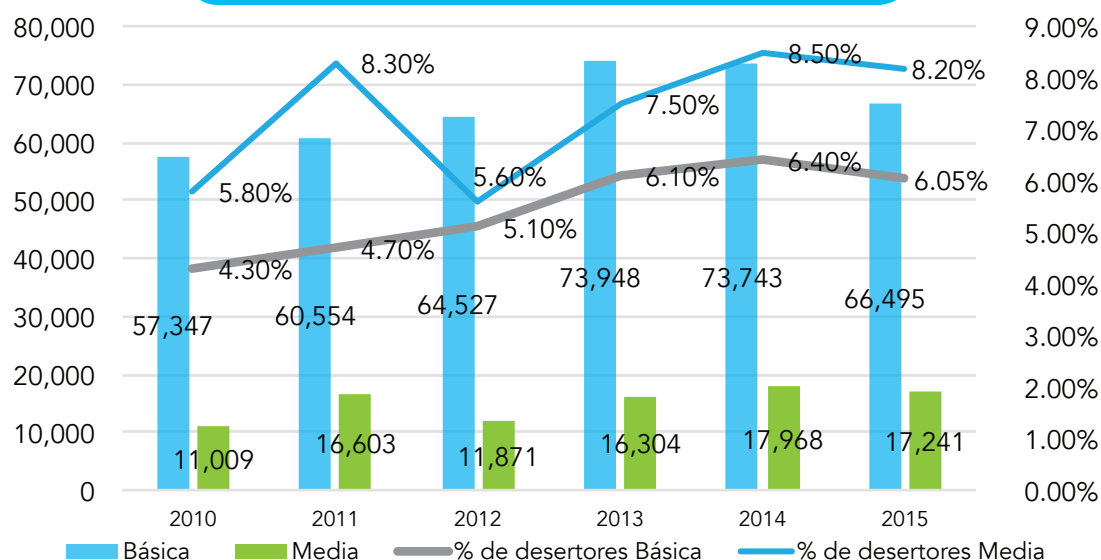
La causa de abandono relacionada a que los padres no quieren que asista a la escuela ha mostrado leves disminuciones, no obstante, esto significó el abandono de 6,366 niñas, niños y adolescentes en 2014 y de 5,912 en 2015. Esta causa está principalmente presente en los niños y adolescentes hombres a nivel de educación básica (34.6% de abandono por esta causa).

La deserción escolar se produce cuando el niño, niña o adolescente sale completamente del sistema de

educación formal sin haber terminado los estudios exigidos del año escolar en que se matriculó. Históricamente los mayores niveles de deserción se encuentran en Educación Básica y Media. Dicha deserción tuvo un comportamiento creciente en el periodo 2010 – 2015.

En 2010, fueron 57,347 estudiantes de Educación Básica que desertaron del sistema educativo, incrementándose hasta 73,948 en 2013. No obstante, en términos porcentuales la mayor proporción de estudiantes desertores se encuentran en Educación Media, reportándose en el periodo hasta un 8.5% en 2014. Para el año de 2015, las deserciones en estos dos niveles muestran una leve reducción en comparación a 2014. El porcentaje de desertores de Básica, pasó de 6.4% en 2014 a 6.1% en 2015 y en el caso de la Educación Media, pasó de 8.5% a 8.2% en el mismo periodo.

Gráfico 60. Deserción escolar en Educación Básica y Media, 2010-2015 (Total y en porcentaje)



Fuente: Elaborado con base en cálculos de MINED para todos los años.

A pesar de los avances que se tienen en la cobertura educativa, el porcentaje de niñas, niños y adolescentes que no asisten a la escuela sigue siendo relativamente alto. Para 2015 el porcentaje de inasistencia era de 16.3% de la población entre 0 a 17 años (DIGESTYC, 2016). Esta situación sucede

principalmente en los rangos de edad entre los 4 y menos de 7 años (33.4%) y en los adolescentes entre 16 y menos de 18 (31.7%), coincidente con los esfuerzos anteriores del MINED concentrados en la Educación Básica.

Tabla 10. Asistencia escolar de niñas, niños y adolescentes según rango de edad, 2015

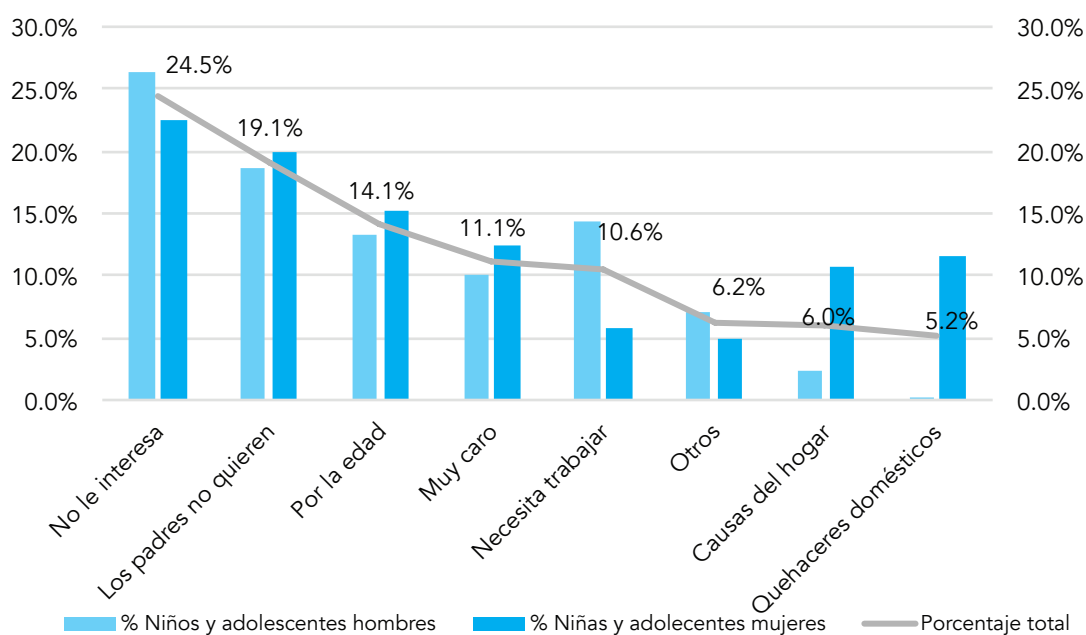
Edad	Total	Asistencia escolar			
		Sí	Porcentaje	No	Porcentaje
4 a menos de 7	331,585	220,713	66.6%	110,872	33.4%
7 a menos de 10	316,050	305,460	96.6%	10,590	3.4%
10 a menos de 13	361,011	348,831	96.6%	12,180	3.4%
13 a menos de 16	409,288	355,570	86.9%	53,718	13.1%
16 a menos de 18	282,239	192,880	68.3%	89,359	31.7%
Total	1,700,173	1,423,454	83.7%	276,719	16.3%

Fuente: Elaboración con base en datos de DIGESTYC (2016).

La inasistencia escolar es mayor para los niños y adolescentes hombres en los rangos de 4 a menos de 16 años (correspondientes a los niveles de Parvularia y Básica), pero entre los 16 y menos de 18, la inasistencia escolar es mayor para las adolescentes mujeres.

Las principales razones brindadas para explicar por qué las personas de 4 a 17 años no estudiaron el 2015, fueron: no le interesa (24.5%), los padres no quieren (19.1%), por la edad (14.1%), muy caro (11.1%) y necesita trabajar (10.6%).

Gráfico 61. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes entre 4 a 17 años que no asisten a la escuela según sexo, 2015



Fuente: Elaborado con base en DIGESTYC (2016)

Una de las principales causas que la EHPM identifica para la inasistencia escolar es la falta de interés de las niñas, niños y adolescentes. Esto llama la atención porque significa que aproximadamente 85 mil niños y niñas no están estudiando por dicha razón, principalmente niños y adolescentes hombres. De igual forma, la falta de responsabilidad de los padres y responsables como garantes del derecho de la educación, también tiene una razón de peso en el conjunto, especialmente para las niñas y adolescentes mujeres y para los rangos entre los 4 y 6 años.

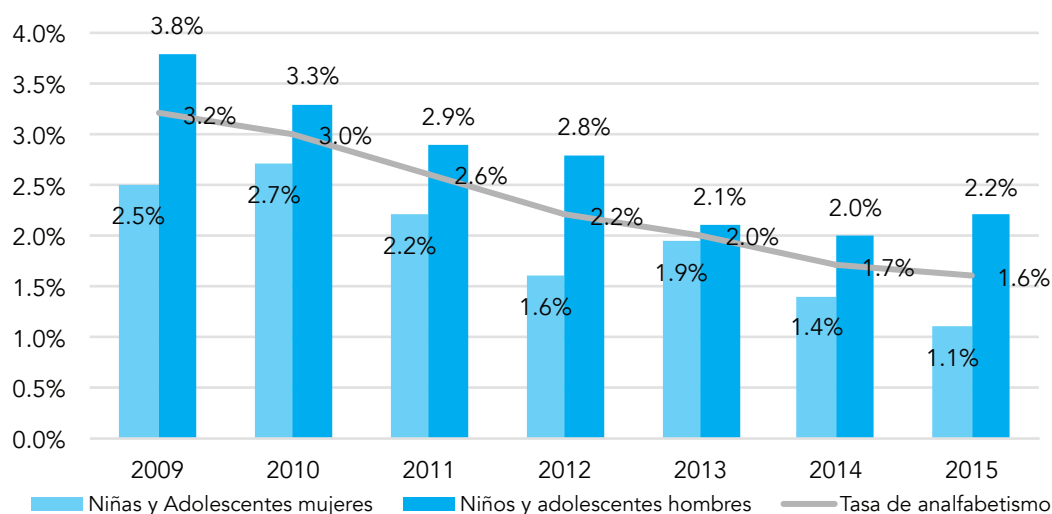
Es importante considerar que las razones difieren con la edad y el sexo. El porcentaje de personas que señala la razón "necesita trabajar" crece a medida aumenta la edad, concentrándose la mayor cantidad de personas que no estudian entre los 16 y 17 años y en mayor medida en los adolescentes hombres. Un comportamiento similar se identifica en causas del hogar y quehaceres domésticos, razones que predominan en la inasistencia de las adolescentes

mujeres, evidenciando así, patrones culturales que refuerzan que las tareas del cuidado y del hogar son de exclusiva responsabilidad de las mujeres.

En materia de analfabetismo, este ha sido definido por la UNESCO como "La situación de una persona que no posee las habilidades para leer, escribir y comprender una frase simple y corta" (DIGESTYC, 2016, p. 5). La DIGESTYC a través de la EHPM mide el analfabetismo considerando a la población de 10 años y más que responde no saber leer ni escribir. (DIGESTYC, 2016).

De acuerdo con la EHPM, en 2015 la tasa nacional de analfabetismo era de 10.8% y en el caso de la población de 10 a 17 años del 1.6% (DIGESTYC, 2016). Este valor muestra una considerable reducción en relación con la tasa de 3.2% para 2009. Relativo al sexo, se identifican mayores niveles de analfabetismo en niños y adolescentes hombres y un leve incremento de la tasa para este grupo etario entre 2014 y 2015 de 0.2%.

Gráfico 62. Tasa de analfabetismo de niñas, niños y adolescentes por sexo, 2009-2015

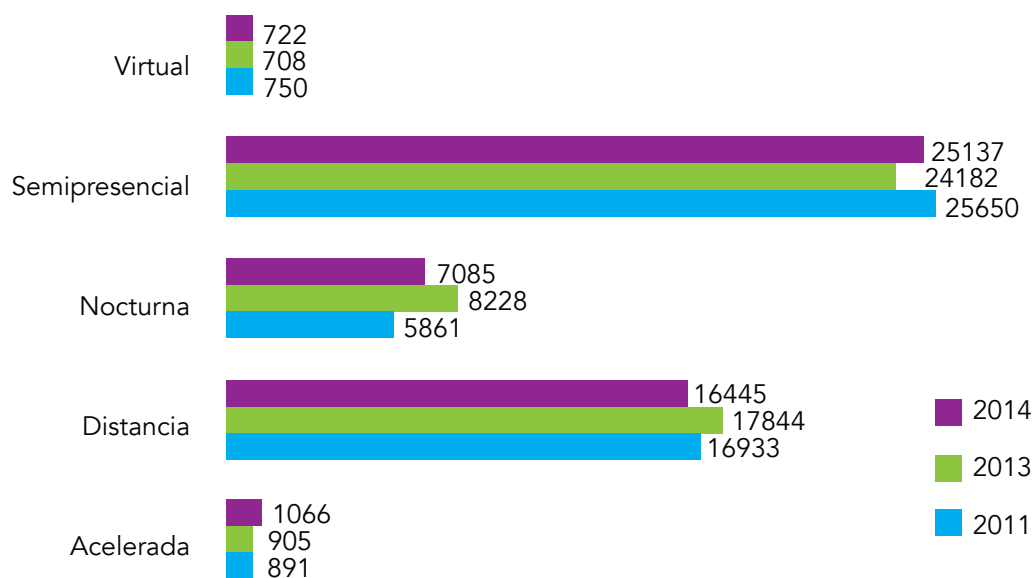


Fuente: Elaborado con base en MINEC-DIGESTYC, EHPM para cada año

Las modalidades flexibles de educación son un servicio educativo gratuito orientado a jóvenes y adultos que abandonaron sus estudios en forma

temprana y desean completar el Tercer Ciclo de Educación Básica y Bachillerato en general.

Gráfico 63. Matrícula final por modalidad educativa flexible, (2011, 2013-2014)



Fuente: Elaborado con base en MINED, memorias de labores 2011-2012, 2013-2014 y 2014-2015

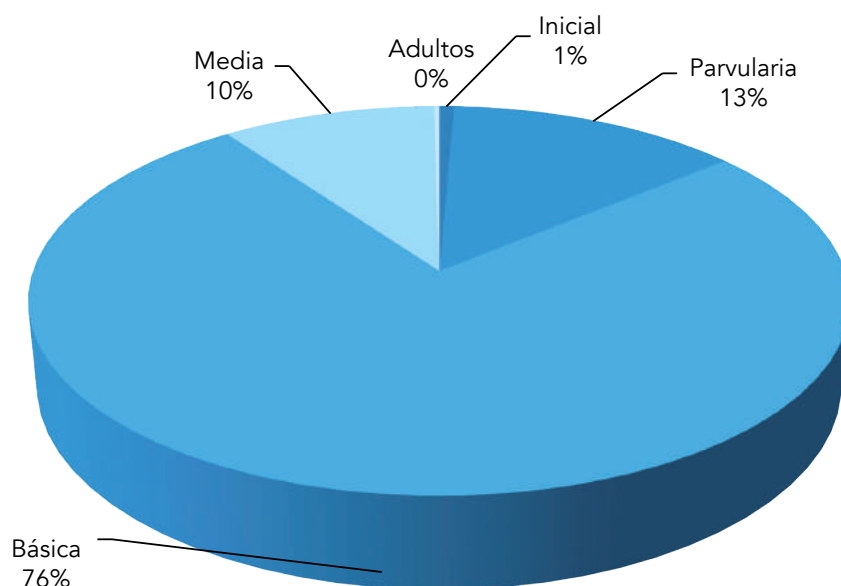
Durante 2011 se atendieron a 50,085 estudiantes en las modalidades de educación flexibles; en 2013 la población se incrementó a 51,867 y en 2014 se redujo a 50,455 estudiantes. En general, cerca del 50% realiza sus estudios en modalidad semipresencial con una disminución en la modalidad nocturna y acelerada de 2014 respecto a 2013. La mayoría de estudiantes cursan el Bachillerato.

La educación constituye un elemento esencial para el desarrollo y la realización personal y social, adquiriendo especial relevancia en personas con algún tipo de discapacidad a las que se les debe

garantizar la igualdad real de oportunidades. La atención de las personas con discapacidad se brinda a través del sistema regular en secciones especiales y a través de centros especializados de Educación Especial.

En 2015, la matrícula de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el sistema regular de educación fue de 14,071 estudiantes; 506 menos que en 2014. Dicha matrícula se concentra el 76% en el nivel de Educación Básica y el 13% en Educación Parvularia (MINED, 2016e).

Gráfico 64. Porcentaje de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Sistema Regular de Educación por nivel educativo, 2015

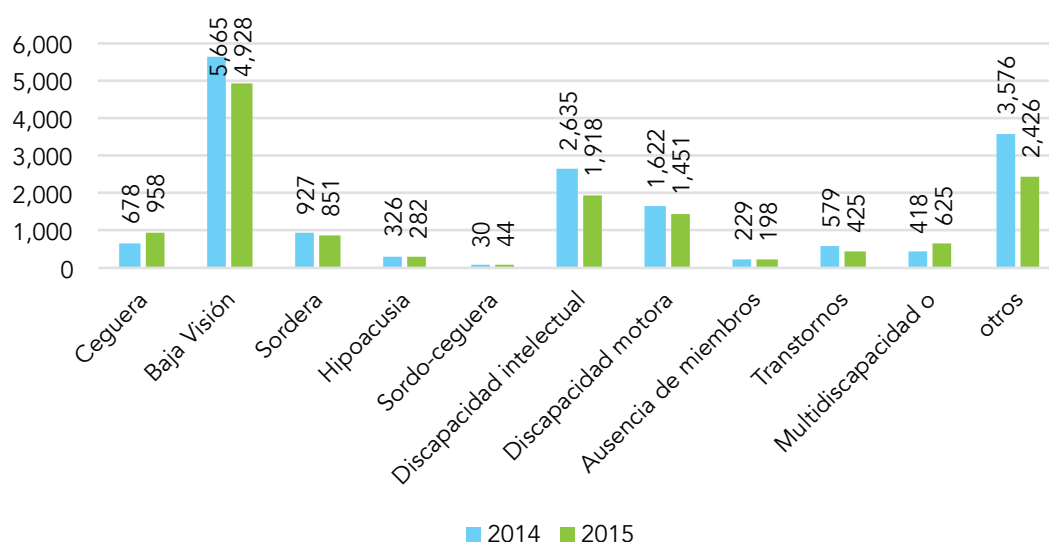


Fuente: Elaboración propia con base en MINED (2016e)

En términos generales, los tipos de discapacidad que más se atiende en el sistema regular son baja visión (34.9%), discapacidad intelectual (13.6%),

discapacidad motora (10.29%) y otros problemas no especificados con un 17.2% (MINED, 2016e).

Gráfico 65. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad en el Sistema Regular de Educación por tipo de discapacidad, 2015

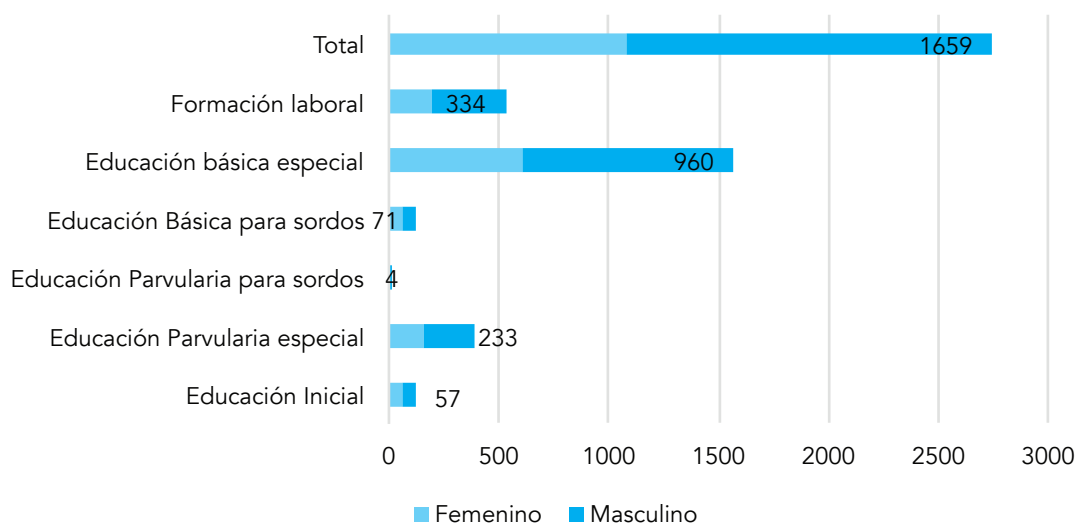


Fuente: Elaboración propia en base en MINED (2015a) y (2016e)

Adicionalmente 2,741 estudiantes con discapacidad fueron atendidos en centros de Educación Especial, siendo un 97% en el sector público (MINED, 2016i).

La mayor parte de esta matrícula está concentrada en la Educación Básica Especial (57.2%) y en la formación laboral un 19.3%.

Gráfico 66. Distribución de estudiantes con discapacidad en el Sistema de Educación Especial por nivel y sexo, 2015



Fuente: Elaboración propia con base en MINED (2016i).



4.2. Acciones de política pública en favor del cumplimiento de los derechos al desarrollo

Cabe mencionar en esta sección los programas y proyectos que en el último quinquenio han favorecido el cumplimiento de los derechos al desarrollo.

- a) El Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (SI-EITP) constituye un modelo educativo en construcción y expansión iniciado con el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” y se sustenta en la Política de Educación Inclusiva. Centra su atención en el mejoramiento de la calidad pedagógica, asegurando el acceso y continuidad educativa de las niñas, niños y adolescentes mediante la articulación de escuelas cercanas, las cuales conforman un Sistema Integrado en un territorio velando por la permanencia del estudiante.

Dicho proceso requiere el rediseño de la escuela, aulas por disciplina, metodologías activas en tiempo pleno mediante la extensión de la jornada. Los principales

avances a la fecha han sido la elaboración del Plan de Formación Certificada sobre el Modelo Pedagógico de EITP para 103 sistemas integrados; implementación de 98 proyectos de transporte en el mismo número de centros educativos con la participación de 6,242 estudiantes y 2,880 atendidos con alimentación en jornada extendida con una inversión de US\$518,400. La entrega de materiales de arte, cultura, recreación y deporte para 94 centros educativos con una inversión de US\$1, 414, 613, los cuales incluyen kits de material deportivo y recreativo para talleres de artes plásticas, set de danza, kit de laboratorio de Biología y Química, material para bibliotecas escolares y equipo informático; 106 centros escolares se han beneficiado con transferencias para reparaciones menores y 409 centros escolares dotados de mobiliario (MINED, 2016).

- b) El Programa de paquetes escolares ha garantizado el acceso y la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo, apoyando especialmente a las familias de menores ingresos económicos. Dicho programa consiste en la entrega de uniformes, zapatos y paquetes de útiles escolares a las y los estudiantes de Parvularia hasta el Bachillerato de los centros escolares públicos e institutos nacionales. En total, se han beneficiado 1,4 millones de estudiantes con una inversión que ascendió a US\$ 80 millones de dólares (MINED, 2016j).
- c) El Programa de Alimentación y Salud Escolar (PASE) ha mejorado el estado nutricional de las y los estudiantes y a su vez las condiciones de aprendizaje. Este programa consiste en la entrega de un refrigerio diario incidiendo de manera positiva en la asistencia y permanencia en el sistema escolar, volviéndolo un incentivo para que padres y madres envíen a sus hijos a las escuelas e institutos (MINED, 2015b, p. 50). De igual forma, involucra a docentes, padres y madres de familia en las acciones complementarias del Programa creando conciencia sobre la importancia de una alimentación adecuada y de hábitos alimenticios saludables.

Como parte de este Programa se entrega al 100% de la matrícula: frijol, arroz, azúcar, aceite, bebida fortificada y leche en polvo, ésta última para aquellos centros escolares que aún no reciben leche líquida, beneficiando a 5,377 centros escolares con una inversión de US\$30.9 millones de dólares. Los huertos escolares se implementan como recurso pedagógico y fortalecimiento al PASE, en 700 escuelas a nivel nacional con una inversión de US\$500 mil. En los huertos se producen verduras y hortalizas tales como cilantro, tomate, pepino, rábano, repollo, berenjenas, entre otras (MINED, 2016k).

El Programa presidencial “Vaso de leche”

forma parte del PASE y constituye un aporte a la comunidad educativa al ofrecer un alimento nutritivo a las y los estudiantes. Este programa busca garantizar el consumo de al menos 2 vasos de leche fluida de producción nacional a las y los estudiantes de Educación Parvularia y Básica de todos los centros educativos públicos en 10 Departamentos: Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, La Paz, San Vicente, La Libertad, San Salvador, Cabañas y Cuscatlán. En total son un millón de estudiantes de 2,918 centros escolares que reciben leche líquida a nivel nacional (MINED, 2015b, p. 13).

- d) Mejoramiento de los ambientes escolares y recursos educativos, este programa ha dotado a los centros escolares instalaciones seguras y funcionales que cumplan con los requisitos pedagógicos de infraestructura, mobiliario y equipo, para tener ambientes seguros y motivadores. En 2014, se llevaron a cabo 748 proyectos de infraestructura, 118 proyectos de diseño y levantamientos topográficos y 518 proyectos de dotación de mobiliario escolar por un monto de \$24, 933,398.53 US. Favoreciendo en infraestructura a 299,686 niñas y niños en 695 centros escolares y se ha dotado de mobiliarios escolar a 105,016 niñas y niños de 305 centros escolares (MINED, 2014).
- e) Educación en Derechos Humanos. La Educación en Derechos Humanos consiste en un modelo curricular que contiene Educación Integral de la Sexualidad (EIS), Educación en Derechos Humanos y Género para la formación integral y la prevención de riesgos.

Entre junio de 2014 y mayo de 2015 el programa de Educación Integral de la Sexualidad favoreció a 636 centros escolares y 3,173 docentes; el programa de Educación

en Derechos Humanos se desarrolló con 40 centros escolares; el programa de Prevención de Violencia de Género desarrolló la socialización del Protocolo de actuación para el abordaje de la violencia sexual en 657 centros, llegando a 2,436 docentes y 315 estudiantes y el desarrollo de un modelo de educación comunitaria para la prevención de la violencia de género en 17 centros, beneficiando a 42 maestros y 2,152 estudiantes (MINED, 2015b).

- f) Recreación y deporte, arte y cultura. Mediante este programa, el sistema educativo fomenta la incorporación de la recreación, el deporte, el arte y la cultura a la vida diaria de la comunidad educativa en 2,374 centros escolares. En 94 centros educativos de los Sistemas Integrados de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, se dotó de recursos para desarrollar estrategias educativas de arte, cultura, recreación y deporte escolar, en los cuales se involucraron 740,400 estudiantes de todo el país. Los Juegos Deportivos Estudiantiles alcanzó la participación de 117,250 estudiantes (MINED, 2015b, pp. 51-52).
- g) Programa de Educación Inclusiva. Este programa ofrece oportunidades equitativas de acceso, permanencia y aprendizaje efectivo en todos los niveles educativos a estudiantes con discapacidad o en situación de riesgo social. La inclusión de la diversidad en la educación supone la eliminación de las barreras institucionales, pedagógicas, curriculares y culturales que excluyen o discriminan. Entre junio 2014 y mayo 2015, recibieron apoyo y acompañamiento técnico 888 centros escolares regulares y escuelas de Educación Especial para la implementación de acciones educativas inclusivas, por medio de capacitación, formación a directores, docentes y asistentes técnicos (MINED, 2015b, p. 59).
- h) Programa Una niña, un niño, una computadora. El objetivo de este programa es que todos los centros escolares tengan acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y que los docentes cuenten con una herramienta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno de los ejes que contempla el programa es la formación y actualización del personal docente, así como, la generación de sistemas de apoyo y asistencia técnico-pedagógica. (MINED, 2016l). Entre 2014 y 2015 se entregaron 23,278 computadoras con una cobertura de 278,525 estudiantes. Se ha instalado un Planta de ensamblaje en Zacatecoluca con capacidad de producir 24,000 computadores anuales (GOES, 2016, p. 3).

Este programa se suma a otros ejecutados por el MINED a través del Viceministerio de Ciencia y Tecnología, los que contribuyen a la disminución de la brecha digital, tales como: ENSANCHE del Acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación y su Uso Responsable y el Programa Cerrando la Brecha del Conocimiento (CBC).

- i) Centro de Desarrollo Infantil de la Granja Penitenciaria para Mujeres de Izalco. En 2014 se creó el Centro de Desarrollo Infantil para dar cobertura a un total de 110 niños y niñas entre los 0 y 5 años de edad que viven con sus madres en condición de privación de libertad (MJSP, 2014, p.26). Con ello, la DGCP ha buscado proporcionar espacios adecuados para el desarrollo educativo y social de los niños y niñas que viven con sus madres.
- j) Plan Nacional de Formación Docente en Servicio en el Sector Público. Con el propósito de avanzar en la construcción de un sistema educativo de calidad, el MINED inició en octubre de 2014 la creación de núcleos de expertos y especialistas para implementar el



Plan Nacional de Formación de Docentes. En diciembre del mismo año se realizó la inducción a dichos núcleos y en enero de 2015 inició el proceso de formación. A finales del mismo año, 20,290 docentes estaban en formación, cifra que equivale a casi la mitad de la planta docente nacional. Este grupo incluyó a 7,436 docentes de I y II Ciclo; 3,571 docentes de III Ciclo y Educación Media; 300 especialistas de inglés; 300 especialistas de Educación Inicial y Parvularia y 300 especialistas de Arte, Cultura, Recreación y Deportes. Se incluye además la formación de 8,383 docentes en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para uso pedagógico, lo cual contribuye a la implementación del Programa “Una niña, un niño, una computadora” (MINED, 2016m).

Sin duda, las medidas de política pública antes descritas han contribuido con la garantía del derecho a la educación, la cultura, el arte y recreación de las niñas, niños y adolescentes y, por lo tanto, en una mejoría en sus condiciones de desarrollo. De igual forma, la inversión por mantener la cobertura y ampliación de los programas ha sido sistemática en los últimos cinco años. Sin embargo, factores asociados al contexto nacional como violencia social y delincuencia, el nivel y la calidad de vida de las familias mediada por la falta de empleo y oportunidades y el fenómeno de la migración son condicionantes que inciden directamente en el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes.



4.3. Principales retos y desafíos para el cumplimiento de los derechos al desarrollo

Tomando en consideración la importancia que los derechos al desarrollo tienen para la construcción de la personalidad y máximo potencial de las niñas, niños y adolescentes como seres humanos, así como los avances en materia de políticas sociales y educativas, las adecuaciones normativas y la implementación de programas, se identifica que los actores del Sistema Nacional de Protección y otras instituciones garantes enfrentan retos y desafíos considerables, dentro de los que cabe mencionar:

- a. Garantizar el acceso universal al registro de nacimientos.

Garantizar el derecho a la identidad e identificación para el ejercicio de la ciudadanía acercando los servicios del registro de nacimiento a grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, tales como, las hijas e hijos de madres y padres privados de libertad, personas con discapacidad y la población salvadoreña que viven en zonas fronterizas y de difícil acceso.

- b. Fomentar una cultura de responsabilidad de los padres en el cuidado y protección de sus hijas e hijos.

Fomentar patrones de crianza que promuevan la responsabilidad paterna, asumiendo prácticas orientadas a la convivencia familiar, la participación activa en las tareas reproductivas del hogar, cuidado y formación de sus hijas e hijos, modificando en forma progresiva las actitudes y relaciones parentales propias de una cultura machista. A fin de reducir el número de niñas, niños y adolescentes que viven sin su padre por razón de abandono y contribuir al derecho que tienen a mantener relaciones personales con este.

- c. Fortalecer la calidad y desempeño del personal docente

La ejecución del Plan Nacional de Formación Docente para el sector público, constituye un avance para la mejora de la calidad de la educación. En este sentido, el MINED como garante de los

procesos educativos, tiene la responsabilidad de coordinar la formación y especialización de la planta docente de acuerdo a las necesidades de cada nivel educativo y a las nuevas realidades sociales presentes en el entorno de las niñas, niños y adolescentes, generando capacidades en los docentes para el uso de metodologías y herramientas para la prevención y disminución de la violencia en el entorno educativo, comunitario y familiar, así como el desarrollo de habilidades para la vida.

Además, se requiere implementar un sistema de supervisión, seguimiento y evaluación del desempeño docente; el fortalecimiento de las prácticas pedagógicas; el manejo de las tecnologías de información y la incorporación del enfoque de derechos en la tarea educativa.

- c. Acelerar la ampliación progresiva de la cobertura y el acceso a la educación con énfasis en niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad.

La incorporación del 100% de niñas, niños y adolescentes a la educación formal requiere de un esfuerzo diferenciado, enfocado principalmente, en los niveles de Educación Inicial y Media por ser los que presentan tasas de cobertura más bajas. Por otra parte, es necesario elevar las tasas de cobertura en educación primaria dada su disminución en los últimos años, como la universalización progresiva de la educación primaria de las niñas y niños en situación de trabajo infantil, con discapacidad y minorías étnicas.

La baja cobertura en Educación Media se explica principalmente por la concentración de su oferta en las zonas urbanas y las restricciones de acceso a las modalidades flexibles, por lo que es conveniente una ampliación de las modalidades educativas en los territorios considerando la demanda, la tendencia demográfica y vocación productiva a nivel local. Los gobiernos municipales, también desarrollan acciones complementarias para garantizar el derecho a la educación, tales

como: las becas, los pagos de educadoras, la habilitación de infraestructura, apoyos en transporte, alimentación y especies; iniciativas que merecen ser fortalecidas y ampliadas.

Particular atención requiere la niñez con discapacidad, principalmente, las adecuaciones a nivel de infraestructura educativa; la dotación de recursos tecnológicos y didácticos acordes al tipo de discapacidad y la formación especializada de docentes para la atención a la discapacidad desde un enfoque de derechos humanos e inclusión.

- d. Incrementar la inversión en educación inicial

Adicional a la baja cobertura en Educación Inicial, ésta demanda incrementos sustanciales en inversión, no solo para la ampliación de la oferta de servicios educativos, sino además para consolidar modelos de atención a la primera infancia con enfoque de integralidad, tanto por la vía comunitaria familiar como por la vía institucional.

Independiente del modelo educativo utilizado en la atención a la primera infancia, ampliar la cobertura a nivel nacional requiere de inversión en instalaciones y materiales en condiciones adecuadas para el desarrollo de las niñas y niños; en la formación de equipos de docentes o educadores para la atención en educación inicial; en la instalación de equipos de profesionales que atiendan las necesidades de este grupo poblacional (terapistas de lenguaje, fisioterapeutas, nutricionistas, pediatras, personal materno infantil, entre otros). La niñez y particularmente la que vive la etapa de vida que requiere de mayor cuidado y protección en su desarrollo, merece programas y espacios propios que se adecuen a sus necesidades.

- e. Apostar por la calidad de la educación

Elevar la calidad de la educación requiere esfuerzos diferenciados para cada asignatura, especial énfasis en la enseñanza de las matemáticas, el razonamiento lógico y la lectura comprensiva. De igual manera, la revisión y ajuste del currículo

educativo nacional es una acción estratégica para fortalecer los aprendizajes significativos, el desarrollo de habilidades y competencias para la vida, así como la promoción de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

A su vez, la mejora de la infraestructura en los centros educativos en condiciones más críticas, el equipamiento con recursos tecnológicos y científicos que fomenten el conocimiento y la investigación, instalaciones para desarrollar actividades recreativas, deportivas y culturales y la formación docente son prioridades establecidas en el Plan estratégico de educación que requieren del apoyo de la cooperación internacional.

- f. Fortalecer y adaptar la estrategia de educación familiar para un mayor involucramiento de padres, madres y tutores en el proceso educativo de sus hijos e hijas.

La familia juega un rol en el proceso educativo de las niñas y los niños, en tanto es el espacio natural del aprendizaje de los hábitos básicos de la vida y el apoyo material y humano para el cumplimiento de sus actividades escolares. En este sentido la Estrategia de Educación Familiar que desarrolla el MINED es una oportunidad para fortalecer las capacidades de las familias en el ejercicio de este rol. Es fundamental que este instrumento fortalezca el conocimiento sobre los derechos de la niñez y adolescencia, la adopción de prácticas de crianza en forma positiva que mejoren las relaciones familiares, la formación del afecto, el diálogo y la cultura de paz, entre otros.

- g. Hacer de los centros educativos lugares libres de toda forma de violencia.

En el contexto de violencia social y delincuencia que enfrenta El Salvador, es necesario generar una dinámica social donde la comunidad se integre y propicie un entorno positivo que favorezca el crecimiento de la niña, niño y adolescente, mediante la participación de la comunidad educativa, las municipalidades y otros actores claves en el territorio, para la formulación y ejecución de planes de protección escolar articulados a la ENPV y el PESS. Asimismo, fortalecer y ampliar los programas culturales, recreativos y deportivos que fomenten la convivencia y la cultura de paz, es una estrategia idónea para tal fin.

Es importante que el convenio entre MINED y PNC para la “Prevención de la Violencia y Seguridad en las Escuelas para el fortalecimiento de una Cultura de Paz” no se reduzca a la seguridad perimetral y ruta segura para los estudiantes, sino que se implemente en el marco del respeto al derecho de la integridad personal de las niñas, niños y adolescentes.

Por otro lado, el Sistema Educativo Nacional debe de utilizar los mecanismos ya establecidos para promover la denuncia de todas las formas de violencia, con énfasis en el acoso sexual, así como promover la salud mental de la comunidad educativa.



Derechos de Participación

Con relación a los derechos de participación, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) introduce un cambio de paradigma, ya que establece que las personas menores de 18 años son sujetas de derechos, protagonistas de su propia vida y en este sentido deben participar en las decisiones que les afectan.

La participación de niños, niñas y adolescentes se encuentra consagrada como uno de los cuatro principios rectores que conforman el marco de la CDN. La participación es una responsabilidad y obligación para todos los estados, dado que su cumplimiento contribuye a asegurar el ejercicio de todos los demás derechos establecidos.

El artículo 12 de la CDN establece la obligación de los estados a garantizar que las opiniones de los niños, niñas y adolescentes sean solicitadas y consideradas en todos los asuntos que afecten sus vidas: “Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante..., en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional”.

Por un lado, se contempla la participación del niño, niña y adolescente en los procesos judiciales que incluyen diversas situaciones relativas a la familia como son: los procesos de divorcio de los padres, el cuidado personal y la adopción, como también los penales: condición de privación de libertad, refugio, o problemas de nacionalidad; en procedimientos administrativos como la toma de decisiones en cuanto a los programas educativos, de salud, higiene y saneamiento, los relacionados a la seguridad social, entre otros.

El artículo 13 establece el derecho de niñas, niños y adolescentes a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que les afecten: “El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño”.



Es por ello, que en la CDN se considera necesario el acceso de niños, niñas y adolescentes a la información y comprensión sobre sus derechos como condición para el desarrollo y ejercicio del derecho a la participación.

Otro aspecto fundamental, vinculado al concepto de participación que se promueve en la CDN, es el que se recoge en su Art.15: “Los estados partes reconoce los derechos del niño a la libertad de asociación y a la libertad de celebrar reuniones pacíficas”. Junto con los artículos 12 y 13, éste derecho promueve la participación de niños, niñas y adolescentes como miembros activos de la sociedad. Es decir, que el artículo 12 establece el derecho individual de la niñez a expresar sus puntos de vista libremente, mientras que el 15 agrega derechos para la participación colectiva. La participación, como medio que permite el ejercicio activo de las capacidades de comunicación y de decisión, conduce a la construcción de la ciudadanía, si habilita y garantiza el derecho a la asociación y a la organización, dos de los pilares para la construcción de la red social.

El reconocimiento del derecho de niños, niñas y adolescentes a la participación también está considerado en el artículo 14 de la CDN, que establece el

derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, y en los artículos 9, 16 y 29, que promueven “La consideración de sus puntos de vista en diversas situaciones a nivel social, familiar y escolar”.

La LEPINA también considera a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos, es decir, como sujetos activos en el ejercicio de los mismos, que deben participar en la toma de decisiones referidas al cumplimiento de sus derechos, según su desarrollo progresivo. Estos derechos se contemplan en los artículos 92 al 100 de la LEPINA, e incluye entre otros, el derecho de petición, la libertad de expresión, el derecho a opinar y ser oído, acceso a la información, la libertad de pensamiento, conciencia y religión, reunión y asociación.

Para llegar a niveles verdaderos de participación es conveniente tener presente que la opinión de las niñas, niños y adolescentes sobre los temas que les afectan es un derecho y, por tanto, no es un favor o concesión que hacen las personas adultas. Ello requiere un diálogo abierto, una actitud de escucha, realizar preguntas adecuadas de forma directa sobre sus intereses, sus conocimientos y experiencias, tomando en cuenta su edad y madurez, según lo establecido en el Artículo 94 de la LEPINA.

Ilustración 1 El derecho de participación de las niñas, niños y adolescentes en la LEPINA.



Fuente: Elaboración propia con base en la LEPINA.



5.1 Avance en el cumplimiento de los derechos de participación

a) Derecho de petición

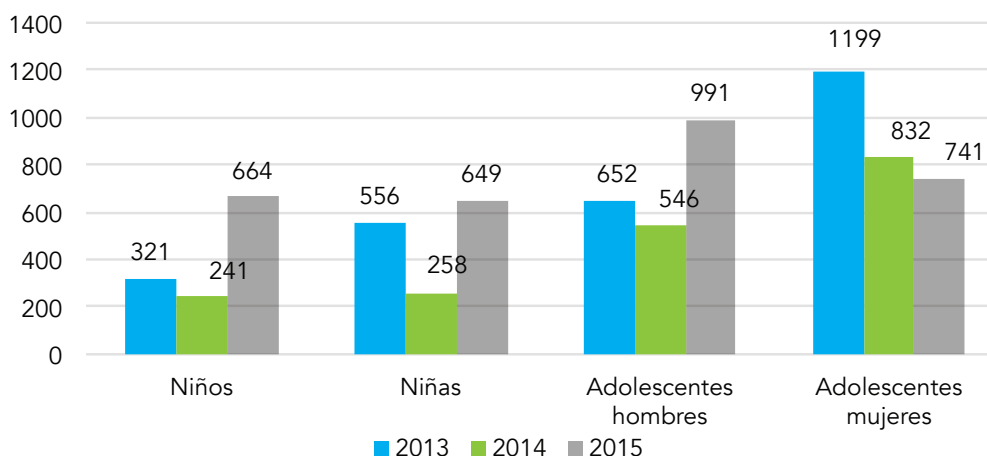
El Artículo 92 de la LEPINA reconoce el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a dirigir y presentar peticiones ante cualquier autoridad legalmente constituida. El ejercicio de este derecho supone un cambio de visión en las autoridades acerca de cuál debe ser la actitud y cuáles son las capacidades de las niñas, niños y adolescentes frente a las instituciones públicas, dado que ahora tienen derecho a peticionar y las autoridades tienen el deber de atender dichas peticiones, respondiendo de forma oportuna y congruente. (Buaiz, 2013)

Dentro de estas peticiones, las niñas, niños y adoles-

centes pueden solicitar su representación, asistencia y defensa de sus intereses ante la PGR. Según datos de esta institución, en 2015 la Unidad de Defensa de la Familia Niñez y Adolescencia recibió 3,045 solicitudes de asistencia por parte de niñas, niños y adolescentes (PGR, 2015a), lo que representa un 9.5% del total de solicitudes recibidas durante ese año. En comparación a 2013 y 2014, el número de solicitudes presentadas a mostrado un incremento considerable.

En congruencia con el ejercicio progresivo de los derechos, el mayor número de peticiones en los tres años fueron presentadas por adolescentes, principalmente mujeres.

Gráfico 67. Número de solicitudes realizadas por niñas, niños y adolescentes a la PGR, por sexo y rango de edad, 2013-2015

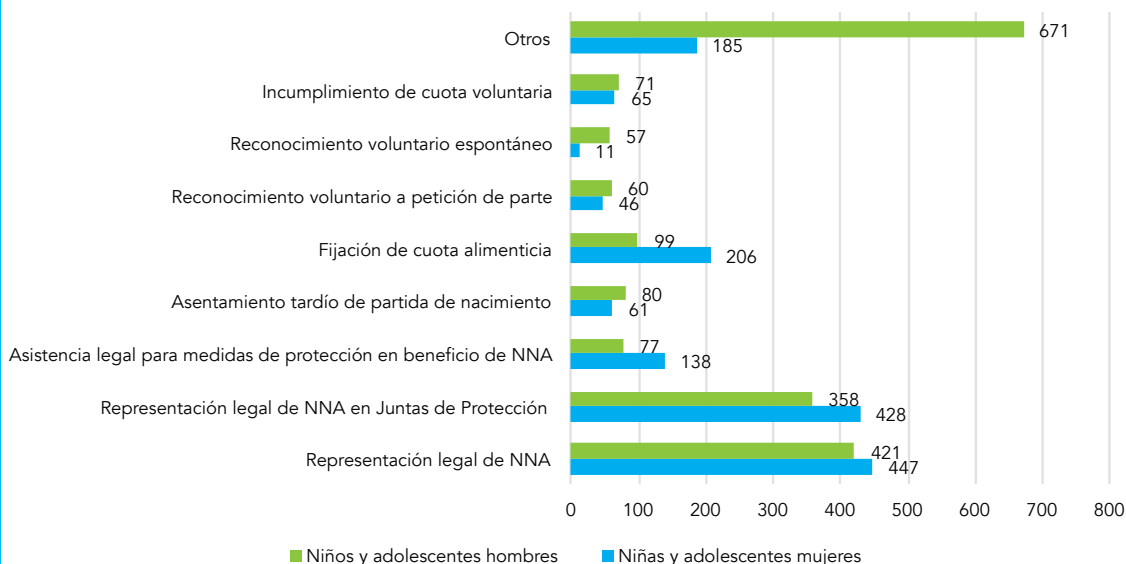


Fuente: Elaboración con base en datos de la PGR para cada año.

En 2015, las principales solicitudes hechas ante la PGR por niñas, niños y adolescentes, requerían de su representación legal en Juntas de Protección (26%),

la representación legal (14.0%), la fijación de cuota alimenticia (10%) y la asistencia legal para medidas de protección (7%).

Gráfico 68. Solicitudes realizadas por niñas, niños y adolescentes a la PGR, por tipo de solicitud y según sexo, 2015



Fuente: elaboración propia con base en datos de la PGR (2015a).

b) Derecho a opinar y ser oído

Según el Artículo 94 de la LEPINA, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a opinar y a ser oídos, y pueden ejercerlo ante cualquier entidad pública o privada, las que en sus decisiones deberán hacer constar las consideraciones y valoraciones expresadas por aquéllos. Una iniciativa que ha contribuido a la generación de espacios de expresión a la niñez y adolescencia ha sido el proyecto “Voces de la niñez construyendo ciudadanía”, implementado por el CONNA y Plan Internacional⁴⁵ a finales de 2013.

En el marco de dicho proyecto se creó en 2014, el Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia (CCNA), integrado por 14 niñas y adolescentes mujeres y 14 niños y adolescentes hombres, como representantes de diversos espacios de organización social de los 14 departamentos del país. La conformación de este Consejo implicó un proceso de elección democrática y participativa mediante jornadas desarrolladas a nivel departamental con grupos de niñas, niños y adolescentes líderes de organizaciones estudiantiles, de asociaciones infanto-juveniles y participantes en programas impulsados por entidades de atención y organizaciones no gubernamentales.

El CCNA ha sido concebido como una organización que representa a la niñez y la adolescencia del país, para ejercer ciudadanía activa, promoviendo el ejercicio pleno del derecho de participación, incidiendo en la toma de decisiones de los integrantes del Sistema Nacional de Protección, especialmente en el Consejo Directivo del CONNA, de forma que las propuestas relativas a niñez y adolescencia sean recibidas, evaluadas y tomadas en consideración para la toma de decisiones.

El Consejo Consultivo se ha posicionado como organismo de consulta y de opinión en temas relacionados con la niñez y la adolescencia, participó en la Consulta sectorial para la formulación del PQD 2014-2019; en el conversatorio público con el Sr. Presiden-

⁴⁵ Organización internacional de desarrollo que promueve los derechos de la niñez para terminar con la pobreza infantil.

te de la República en el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño; y como parte de la delegación de El Salvador en el II Foro Panamericano del Niño, la Niña y Adolescente, desarrollado en Brasil en el mes de diciembre de 2014 (CONNA, 2015a, p. 65).

La niñez y adolescencia también ejerció su derecho de participación en el proceso de formulación del PQD, como parte de una metodología que elaboró el CONNA a solicitud de la Secretaría Técnica y Planificación de la Presidencia. Dicha metodología se implementó en 14 consultas territoriales en 2014. Adicionalmente, participaron las y los adolescentes de los programas de participación comunitaria de ISNA. Como resultado, se incorporó, en al menos 9 de los 11 objetivos del PQD, líneas de acción que guardan total coherencia con las prioridades establecidas en la PNPNA (CONNA, 2015a, pág. 37).

En diciembre de 2015, el CCNA en representación de la niñez y adolescencia recibió de parte de las autoridades del CONNA -en forma simbólica- los compromisos adquiridos por las instituciones del Estado establecidos en el Plan Nacional de Acción 2014-2017 de la PNPNA.

En febrero de 2016, el CCNA en conjunto con las Unidades Juveniles de la PDDH, participó en el proceso de consulta coordinado por el CONNA y el MR-REE, en el marco de la elaboración del V y VI informe de país sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño y es parte del Consejo Consultivo Ciudadano de Seguimiento al PQD (CONNA, 2016a).

c) Acceso a la información

Como parte fundamental de los derechos de participación, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a acceder a la información. Éste incluye la facultad para acceder a las diferentes formas de información como a decidir por cual medio se obtendrá.

En este sentido, la LEPINA en su Art. 95, reconoce el derecho a “Buscar, recibir y utilizar información a través de los diferentes medios, bajo la debida dirección y orientación de la madre, padre, representante o responsable y de acuerdo con su desarrollo evolutivo, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes”.

Este derecho genera una obligación en la familia, el Estado y la sociedad por realizar acciones que garanticen que la niñez y adolescencia obtenga información que sea relevante, pertinente y adecuada en su contenido a sus necesidades de información y que ésta les permita a su vez, el desarrollo de sus capacidades cognitivas, sus destrezas sociales y un mejor ejercicio de su ciudadanía social.

En el marco de este derecho, el Estado ha venido desarrollando una serie de acciones que promueve diferentes servicios públicos de información para la niñez y adolescencia. Dentro de las cuales se destacan las siguientes:

- a. Los programas televisivos desarrollados por la Secretaría de Gobernabilidad y Comunicaciones de la Presidencia, transmitidos por Canal 10 de señal abierta y TVES en línea⁴⁶. En estos medios se transmiten los programas “La Hora del niño”, “El Cipitío” y El Salvador Joven⁴⁷” en los cuales se desarrollan temáticas orientadas a fomentar valores, la participación y en respuesta a las necesidades de formación de la niñez y adolescencia en El Salvador.
- b. La Dirección de Innovación Tecnológica e Informática de la Presidencia (ITIGES) ha diseña-

do una página web dirigida a la promoción de derechos de la niñez salvadoreña, denominada “CIPOTADA”⁴⁸. Este sitio web constituye una herramienta para facilitar la difusión de información, el aprendizaje, el entretenimiento, así como un espacio de expresión artística para la niñez a través de dibujos, pinturas y otras formas de expresión artística (CAPRES, 2015).

d) Protección frente a información nociva o inadecuada

Dada la importancia de la información en la formación socio-educativa de la niñez y adolescencia, la LEPINA establece en su Art. 96 la necesaria protección de las niñas, niños y adolescentes ante la información que pueda ser nociva o inadecuada. Según este artículo, la información nociva o inadecuada son los “Materiales que contengan apologías de la discriminación, la violencia, la pornografía, el uso de alcohol y drogas, así como también aquellos que exploten el miedo o la falta de madurez de niñas, niños y adolescentes, para inducirles a comportamientos perjudiciales o peligrosos para su salud y seguridad personal”.

El Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBTD), a través de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión (DEPRT), realiza una clasificación, monitoreo y verificación de contenidos de los programas de radio, televisión, espectáculos públicos y cine, elaborando informes que exhortan a los diferentes medios y promotores de espectáculos a la autorregulación en la difusión de contenidos que contengan lenguaje e imágenes que sea nocivas o amenacen la integridad de la niñez y adolescencia.

46 <http://www.tves10.com/live/>

47 <https://www.youtube.com/playlist?list=PLSvAhW9BWJm9I-voApVarmuKYmMy-PmKpB>

48 <http://cipotada.presidencia.gob.sv/>

Tabla 11. Acciones de prevención realizadas por la DEPRT, por tipo de medio y periodo, 2011-2016

Tipo de medio	Acción	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	Total
Radio	Monitoreos	5,223	5544	4,748	6,039	5,152	26,706
	Informes	n.e.	414	447	489	367	1,717
Televisión	Monitoreos	463	624	737	616	465	2,905
	Evaluación de contenido	450	600	495	425	437	2,407
	Informes	n.e.	n.e	n.e	n.e	17	17
Espectáculos públicos	Monitoreos	33	29	501	417	32	1,012
	Autorizaciones	106	71	87	101	130	495
Cine	Supervisiones	557	473	501	417	463	2,411
	Autorizaciones	194	236	223	317	297	1,267

Fuente: Elaboración con base en datos de DEPRT, memorias de labores del Ministerio de Gobernación para cada periodo reportado.
Nota: n.e: no especificado para dicho año.

Entre junio 2011 a mayo 2016, la DEPRT realizó 26,706 monitoreos radiofónicos y remitió 1,717 informes a corporaciones, asociaciones y medios radiofónicos, exhortando a la autorregulación de los programas radiales.

De igual manera, realizó 2,905 monitoreos de contenidos de programas televisivos de señal abierta y 2,407 evaluaciones de contenido de obras audiovisuales, dando como resultado ediciones de materiales que por su contenido sexual, lenguaje discriminatorio, peyorativo y violento vulnera los derechos de la niñez y adolescencia (MIGOB, 2016, pág. 37).

Se realizaron también 495 autorizaciones de clasificaciones de contenido de espectáculos públicos internacionales y 1,012 monitoreos del contenido expuesto en el escenario con el fin de verificar que se cumpla el contenido de la clasificación y con el objetivo de proteger a la niñez y adolescencia de la exposición a espectáculos no aptos para su edad, de acuerdo con lo estipulado en la LEPINA (MIGOB, 2015).

e) Libertad de reunión y de asociación

En el Art. 99 de la LEPINA se establece que: “Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a reunirse pública o privadamente con fines lícitos y pacíficos,

dentro de los límites establecidos por las leyes”. En el Art. 100 se reconoce también la libertad de asociación y define condiciones para su ejercicio adecuándolo a sus particularidades.

Las Unidades Juveniles de la PDDH es una organización conformada por adolescentes y jóvenes voluntarios/as de todo el país, cuyas edades oscilan entre los 15 y 24 años. Dichos espacios fomentan actividades diversas, como la formación en Derechos Humanos, multiplicación de los conocimientos adquiridos y la creación de la plataforma de la niñez y la juventud 2009-2014. Esta última constituyó un ejercicio democrático, en el cual las personas adolescentes demandaron el cumplimiento de sus derechos a las autoridades del Ejecutivo y Legislativo para dicho periodo.

Las Unidades Juveniles buscan el establecimiento de compromisos de las autoridades con las demandas de la niñez y de la adolescencia y colaboran en la observación de procesos electorales. De igual forma, son espacios de participación en los que las personas adolescentes se involucran y generan oportunidades de diálogo para incidir en las políticas públicas.

Las Unidades Juveniles tienen presencia en 13 departamentos; la mayor participación se registra en

los departamentos de Santa Ana, Cabañas, San Salvador, San Miguel, Usulután y Morazán.

En cuanto a acciones en el marco de este derecho es importante referirse a la labor del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), institución de reciente creación que surge con la entrada en vigencia de la Ley General de Juventud el 14 de febrero del 2012. En el Art. 2 de dicha Ley se establece que “Se considera joven a la persona comprendida en el rango de edad de los 15 a los 29 años, sin distinción de nacionalidad, etnia, género, religión, discapacidad, situaciones de vulnerabilidad o cualquier otra condición particular”, en esta definición de juventud se incluyen personas adolescentes comprendidas entre los 15 y 17 años, quienes conforman y participan en diversas organizaciones juveniles que promueve el INJUVE en programas a nivel local.

INJUVE ha promovido la participación plena de la población joven en el campo cívico, político, social, económico, cultural y artístico. En ese sentido, se ha brindado atención a organizaciones y redes de adolescentes y jóvenes fortaleciéndoles a través de capacitaciones y asesoría técnica para la elaboración y puesta en marcha de planes de trabajo.

Con la finalidad de facilitar la legalización de las organizaciones juveniles se han disminuido los tiempos para la realización de los trámites, los cuales no implican costo alguno. Entre 2014 y mayo de 2015, 36 organizaciones juveniles fueron asesoradas y legalizadas. (INJUVE, 2015, p. 18).

Se ha conformado el Consejo de Juventud de la zona paracentral, el cual es un espacio de participación, articulación y fortalecimiento organizativo con adolescentes y jóvenes de la zona. En 2014, INJUVE brindó asesoría técnica a la Alcaldía Municipal de Apastepeque, departamento de San Vicente, para la realización del Plan Municipal de Juventud, proceso en el que participaron alrededor de 70 jóvenes representantes de diferentes iniciativas y organizaciones, jóvenes de centros educativos, y técnicos de instituciones gubernamentales y no gubernamentales identificadas en el territorio.

De igual forma, brindó asesoría técnica para la actualización de la Política Municipal de Niñez, Adolescencia y Juventud del municipio de San Rafael Cedros (departamento de Cuscatlán), proceso en el que participaron instituciones públicas y privadas del territorio. Se ha iniciado el proceso de constitución de la Coordinadora Nacional de Juventudes por organizaciones juveniles legalizadas y no legalizadas de los 14 departamentos, con el objetivo de ser un ente contralor del INJUVE y del Consejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) e incidir en los territorios. Este proceso es acompañado por las gobernaciones departamentales.

Adicionalmente, existe otro esfuerzo organizativo que constituye un espacio de asociación y participación, como la Red Nacional de la Niñez y Adolescencia (RENAES), un esfuerzo promovido por la Red para la Infancia y la Adolescencia (RIA) en alianza con seis de sus organizaciones no gubernamentales miembros⁴⁹.

RENAES tiene por visión, “Ser un movimiento nacional amplio y representativo de niños, niñas y adolescentes con una participación activa en la demanda, promoción, defensa y cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño” y ha establecido como misión, “Contribuir al desarrollo del protagonismo de los niños, niñas y adolescentes elaborando propuestas en la construcción de políticas integrales y velar para que se cumplan nuestros derechos que demanda la convención” (RENAES, 2016).

f) Obligación de los medios de comunicación

La LEPINA en su Art. 97 establece que “Los medios de comunicación tales como la televisión, radio y prensa escrita, deben destinar espacios para la difusión de los derechos, las garantías y deberes de las niñas, niños y adolescentes. Asimismo, tienen la obligación de difundir programas y mensajes dirigidos exclusivamente a la niñez y adolescencia, atendiendo a sus necesidades informativas, entre ellas,

49 Plan Internacional, Aldeas Infantiles SOS, Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (ANADES), Asociación Salvadoreña Pro-Salud Rural (ASAPROSAR), Asociación Demográfica Salvadoreña (ADS), Promoción Humana-Caritas Arquidiócesis de El Salvador, Comunidad Oscar Arnulfo Romero-Villa de niños y Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño (CCNIS).

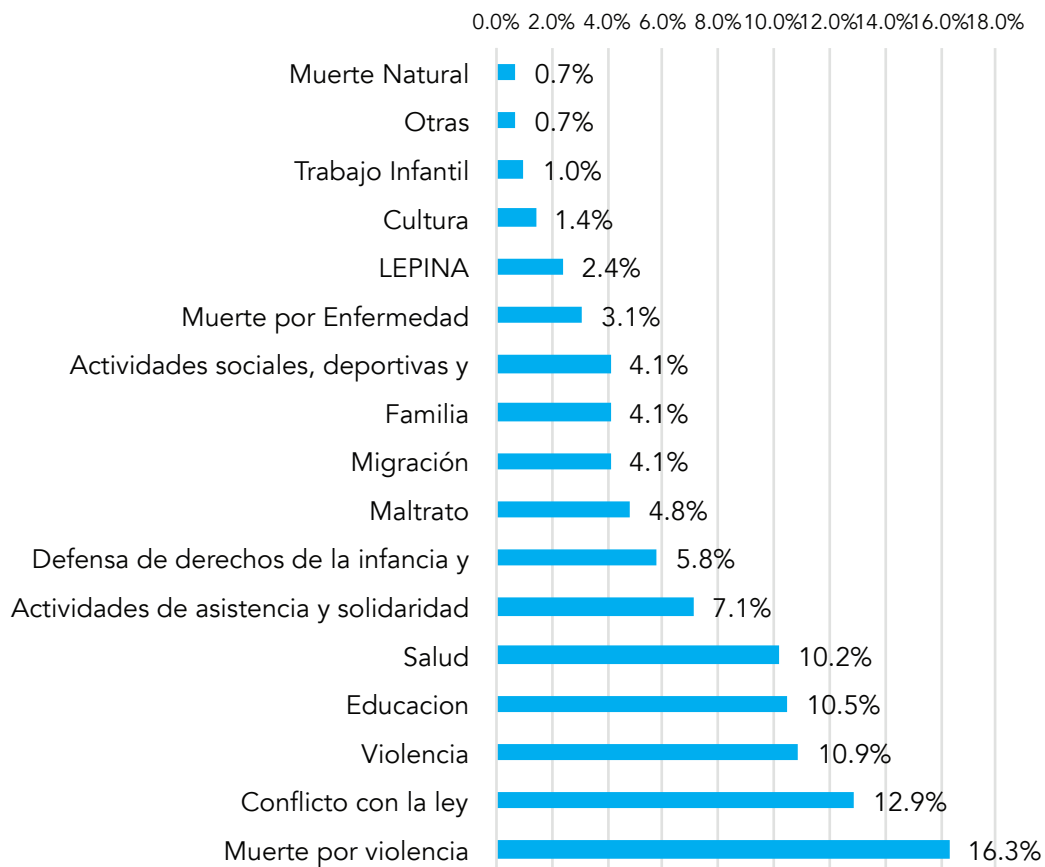
educativas, culturales, científicas, artísticas creativas y deportivas”.

En este sentido, el estudio “Infancia y adolescencia en la prensa escrita, radio y televisión salvadoreña” realizado entre junio y julio de 2012, basado en un monitoreo de diversos medios de comunicación para determinar el tipo de información que publican relacionada con niñez y adolescencia, determinó, que en su mayoría los espacios noticiosos presentan

temas afines con la violencia. El 44.9% de las noticias están relacionadas a la violencia (muertes y maltrato) y adolescentes en conflicto con la ley.

Los espacios de promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia alcanzan sólo el 8.2% de los espacios. Las noticias relacionadas con las actividades sociales, deportivas, entretenimiento y cultura están representadas en un 5.5% (Calles y Mayorga, 2012, p. 33).

Gráfico 69. Temas periodísticos de los medios salvadoreños en torno a la niñez y la adolescencia.



Fuente: Elaboración con base en Calles y Mayorga (2012)



5.2 Acciones de política pública en favor del cumplimiento de los derechos de participación

En este apartado se hace una recopilación de algunas acciones vinculadas a políticas públicas, programas y proyectos que desarrollan las instituciones garantes y que constituyen un avance en el cumplimiento de los derechos de participación.

- a) Modernización de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Con el apoyo financiero de la República de China Taiwán, el Ministerio de Gobernación inauguró la modernización tecnológica de la Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ello permite ejecutar labores de monitoreo y evaluación del contenido de materiales audiovisuales, lo cual contribuye a la salud mental de la población salvadoreña, especialmente de la niñez, la promoción de valores y la autorregulación de los medios de comunicación.
- b) Elaboración del Código de Ética Publicitaria de El Salvador. Documento formulado por el Consejo Nacional de la Publicidad. Dicho Consejo es una organización sin fines de lucro que representa a la industria de la publicidad, agencias de publicidad y anunciantes. Este código vela por la autorregulación publicitaria y el apego a las leyes, estableciendo normas de conductas generales y específicas. En el título III, capítulo I establece las normas que se deben seguir en la publicidad dirigida a niñas, niños y adolescentes, considerando un enfoque de respeto a los derechos de este grupo etario.
- c) Establecimiento de criterios para el cumplimiento de los derechos de participación, honor, imagen, vida privada e intimidad de niñas, niños y adolescentes en procesos electorales. En el marco de los comicios presidenciales de 2014 en El Salvador, el CONNA, atendiendo a su facultad de velar por la defensa efectiva de los derechos, estableció criterios y recomendaciones para el cumplimiento de los derechos de participación, honor, vida privada e intimidad de las niñas, niños y adolescentes en procesos electorales. Adicionalmente, formó a 194 representantes de 9 partidos políticos sobre el contenido del libro

I de la LEPINA, PNPNA, y ha realizado conversatorios sobre la incorporación del enfoque de derechos en la labor periodística con diversos medios de comunicación.

- d) Realización del 5to Certamen Nacional de Investigación sobre Niñez y Adolescencia: El derecho de participación. El ISNA, en coordinación con el MINED y con el asocio de la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (CFDL) realizó durante 2015 el 5°. Certamen Nacional de Investigación sobre Derechos de la Niñez y Adolescencia, denominado “Entre Adolescentes Miramos y Cambiamos Nuestro Entorno”.

El objetivo del certamen fue sensibilizar y posicionar sobre el conocimiento de los Derechos Humanos; participaron 762 estudiantes de diferentes centros educativos a nivel nacional y fueron presentados 116 ensayos. En esta edición del certamen la temática de investigación fue “Sensibilización de la Violencia de Género en las Relaciones Sociales de las y los adolescentes”. En diciembre de 2015 fueron premiados las y los

autores de los 3 ensayos ganadores y 11 ensayos finalistas.

- e) Integración de Consejos Directivos Escolares (CDE). En los centros escolares existen los CDE, una instancia al interior del centro educativo, que según el Art. 67 de la Ley General de Educación se integra con representación de personal docente, estudiantes y padres de familia. En el CDE debe haber dos representantes estudiantiles (y sus respectivos suplentes), cuyo único requisito es ser mayores de 12 años. En el CDE, se toman decisiones escolares y las personas adolescentes ejercen su derecho a opinar y ser escuchados, buscando que sus propuestas y demandas sean apoyadas por el resto de los integrantes.

En 2015, se gestionaron 2,076 cambios de organismos de administración escolar de Asociaciones Comunes para la Educación (ACE), que funcionaban en el modelo EDUCO a CDE en el Sistema de Legalización de Centros Educativos (SILCE).

5.3 Principales retos y desafíos para el cumplimiento de los derechos de participación

Considerar a las niñas, niños y adolescentes en los procesos de formulación de política pública, planificación y en la toma de decisiones, a nivel nacional y local, aun es incipiente. Sin embargo, iniciativas como las descritas en el apartado anterior constituyen avances hacia una mayor conciencia de sus derechos y responsabilidades como ciudadanas y ciudadanos. En este sentido, las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección y otros garantes enfrentan retos y desafíos importantes:

- a. Adecuar y facilitar mecanismos institucionales para el ejercicio del derecho de petición de niñas, niños y adolescentes

Proceso que implica la adecuación institucional para facilitar espacios y mecanismos que permitan a las niñas, niños y adolescentes presentar denuncias y peticiones, expresar su opinión so-

bre temas que les afectan y ejercer contraloría social de la gestión pública. Las instituciones a través de las Unidades de Acceso a la Información Pública (UAIP) y las Oficinas de Información y Respuesta (OIR), deben adecuar las normativas, procedimientos e instrumentos acordes a los intereses de esta población para darles respuestas oportunas y congruentes.

- b. Fomentar prácticas de crianza que motiven a niñas, niños y adolescentes a expresar sus opiniones

Patrones adulto céntricos y autoritarios que aún persisten en las relaciones familiares, limitan el ejercicio de la libertad de expresión de las niñas, niños y adolescentes. Predominantemente son las personas adultas quienes toman las

decisiones y las comunican. En este sentido se requiere sensibilizar a las familias sobre los derechos de participación de las niñas, niños y adolescentes y fortalecerles con prácticas y modelos de crianza que permitan establecer relaciones de diálogo y respeto entre las niñas, niños y las personas adultas. En particular, que se promueva la libertad para expresar sus pensamientos y emociones, sin temor al castigo y la humillación por emitirlos; sino más bien, que experimenten tolerancia y respeto hacia las opiniones manifestadas e incluidos como parte del núcleo familiar.

- c. Crear y fortalecer espacios para la participación de las niñas, niños y adolescentes en las organizaciones comunitarias, las directivas comunales y otras entidades a nivel local.

La participación de las niñas, niños y adolescentes no surge en forma espontánea, sino parte de un proceso intencionado de los actores locales para promover espacios para el ejercicio de la ciudadanía y la implementación de metodologías que contribuya a identificar sus propias visiones, propuestas, intereses y sentires, sobre temas de su interés integrados al desarrollo comunitario. En este sentido las organizaciones comunitarias constituyen espacios prioritarios para la participación activa de las niñas, niños y adolescentes integrándolos a procesos de consulta, planificación, elaboración de presupuestos y contraloría social a nivel comunitario y municipal.

Siguen vigentes los desafíos de la ampliación de programas y proyectos que promuevan los derechos de participación de las niñas,

niños y adolescentes a nivel nacional y local; la creación de las Asociaciones de Promoción y Asistencia a los Derechos de Niñez y Adolescencia (APA), según lo establecido en la LEPINA; y el fortalecimiento de los Consejos Directivos Escolares con la participación de la población estudiantil.

- d. La adopción de medidas efectivas para la protección de las niñas, niños y adolescentes frente a la información nociva o inadecuada.

En la actualidad predomina la difusión sistemática de antivalores y patrones de violencia que se transmiten a través de los medios de comunicación, los cuales inciden negativamente en la forma en cómo las niñas, niños y adolescentes perciben la realidad, definen su sistema de valores y establecen relaciones con otras personas y su entorno. Todo esto es contrario a la cultura de paz, fomento de valores, así como la protección y defensa del medio ambiente que el actual contexto social requiere para construir una sociedad más segura y solidaria.

Se vuelve necesario hacer efectiva la normativa que regule y sancione actividades tales como: espectáculos públicos, programas, videos, publicaciones, comercio de producto y servicios de internet, que generen efectos nocivos para su desarrollo integral; y desarrollar medidas para que las niñas, niños y adolescentes accedan a las tecnologías de información de forma segura con una adecuada supervisión y orientación de su familia y las autoridades locales.

Conclusiones

Conclusiones

El Estado salvadoreño, mediante la aprobación y entrada en vigencia de la LEPINA, cuenta con avances significativos en adecuaciones normativas, programáticas, institucionales y presupuestarias necesarias para el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia en consonancia con el compromiso adquirido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

La instalación del CONNA, la aprobación de la Política Nacional de Niñez y Adolescencia (PNPNA) 2013-2023 y su Plan Nacional de Acción 2014-2017; la instalación progresiva de las instancias como de los mecanismos de protección a derechos; el registro de entidades que integran el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y el desarrollo de diferentes mecanismos para su coordinación y articulación; han contribuido a la incorporación del enfoque de derechos y el paradigma de la protección integral.

La incorporación del enfoque de derechos en el modelo de planificación ha orientado la actuación gubernamental hacia poblaciones excluidas, incorporando en el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019 a la niñez y adolescencia como una de las poblaciones prioritarias. Acción que reafirma la voluntad política del Estado salvadoreño, respalda la orientación de la política pública siendo coherente con los lineamientos establecidos la PNPNA y los compromisos asumidos por las instituciones en el primer Plan Nacional de Acción 2014-2017.

El Sistema de Protección Social Universal se ha consolidado mediante la aprobación de la Ley de Desarrollo y Protección Social, garantizando la continuidad del financiamiento de los programas sociales, dentro de los cuales, adquiere relevancia el Programa de Comunidades Solidarias Rurales y Urbanas con sus incentivos a la matrícula, asistencia y permanencia educativa, diversificación de los servicios de educación, salud y el mejoramiento de la infraestructura social básica.

Por otra parte, los esfuerzos de diálogo y coordinación del Consejo Nacional de Educación (CONED), se concretaron en la construcción del “Plan El Salvador Educado: Por el Derecho a una educación de calidad”, instrumento de política pública que establece las líneas de acción para superar los principales desafíos en la materia: una escuela libre de violencia y eje central de la prevención; docentes de calidad; atención al desarrollo integral de la primera infancia; doce grados de escolaridad universal; educación superior para un país productivo, innovador y competitivo; e infraestructura acorde a una educación integral y de calidad; así como otras condiciones que deben de conseguirse para llegar a una escuela integral, inclusiva y transformadora. Este esfuerzo integra y profundiza los ejes estratégicos establecidos por el MINED en el Plan Nacional de Educación en Función de la Nación.

La Política de Seguridad Ciudadana y Convivencia está implementándose a través del Plan El Salvador Seguro (PESS), el que desde una visión más integral de la seguridad ciudadana, incluye acciones de prevención de la violencia y de atención a víctimas como ejes de intervención. En este marco, se organizaron los Comités Municipales de Prevención de la Violencia; el desarrollo de acciones para la recuperación de los espacios públicos; se ampliaron las oportunidades educativas y de emprendedurismo, y a nivel institucional la instalación de unidades especializadas para la atención de víctimas de violencia.

En este marco, el análisis de los principales indicadores relacionados con los derechos de la niñez y adolescencia y las acciones de política pública revelan que la inversión de recursos por el Estado, han contribuido principalmente al equipamiento de infraestructura, el incremento de la oferta de servicios y mayores coberturas en áreas claves, tales como: la atención prenatal, el parto institucional, la atención posparto, la atención de la prematuridad, la lactancia materna, la inscripción de niños y niñas menores de un año, la inmunización de menores de cinco años y la atención de la salud sexual y reproductiva; lo que a su vez está incidiendo en la reducción de la

mortalidad materna, la prevención de enfermedades inmunoprevenibles y la reducción de la desnutrición.

En materia educativa los esfuerzos se han focalizado en la ampliación de la oferta para la primera infancia, obteniendo incrementos en las tasas netas de educación inicial y parvularia; la mejora de la nutrición de los estudiantes a través del Programa de Alimentación y Salud Escolar y la reforma a la Ley General de la Educación para la regulación de los cafetines escolares; el fortalecimiento de capacidades de la planta docente a través del Plan Nacional de Formación Docente; el desarrollo de las redes integradas de Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno; la incorporación curricular de los derechos humanos y la Educación Integral de la Sexualidad; la dotación de paquetes escolares; y la provisión de recursos tecnológicos a través del Programa Una niña, un niño, una computadora, con el fin de incorporar las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso educativo.

Otros avances relacionados con el acceso a los servicios básicos de los hogares han contribuido a mejorar las condiciones de vida de las familias; el incremento de niñas y niños inscritos en el registro de nacimiento también ha contribuido a garantizar el derecho a la identidad y a la identificación, reduciendo así el subregistro en El Salvador.

No obstante, estos avances, en nuestro país persisten patrones culturales arraigados en la familia y la comunidad que conciben a las niñas, niños y adolescentes como propiedad de los padres, madres o responsables; personas que por su edad no tienen capacidad para opinar y participar en las opiniones sobre asuntos que les conciernen. Estos patrones adultocéntricos no contribuyen al ejercicio de una paternidad y maternidad responsable, predomina un comportamiento autoritario en el que prima el castigo físico, los gritos y la humillación como formas de disciplina y corrección.

En este sentido, para que las familias puedan ejercer el rol de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, es indispensable el desarrollo de programas que fortalezcan sus competencias, de

tal manera que cumplan con sus responsabilidades en el cuidado de la salud y nutrición, la permanencia en el sistema educativo, la adopción de patrones de crianza positivos que motiven a niñas y niños a expresar libremente sus opiniones, la educación integral de la sexualidad, el respeto de los derechos y la convivencia pacífica como la conservación del medio ambiente en el que se desarrollan.

La situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en El Salvador requiere del fortalecimiento de los programas sociales y servicios con la finalidad de ampliar las coberturas y la universalización de los mismos, reduciendo así las condiciones de vulnerabilidad y por ende las amenazas y vulneraciones de sus derechos. Esto requiere, sin duda, una mayor inversión en niñas y niños mediante asignaciones presupuestarias incrementales a las instituciones garantes de derechos básicos y universales, tales como: salud, educación, vivienda, protección social, seguridad ciudadana, cultura, recreación y deporte, entre los principales.

De igual forma, el presente estado de situación de los derechos de las niñas, niños y adolescentes orienta las intervenciones del Estado salvadoreño sobre cuatro desafíos: los homicidios, la violencia sexual, el embarazo a temprana edad y la migración irregular, los cuales requieren de respuestas efectivas por las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia como adecuaciones normativas y programáticas.

En términos de la violencia y la inseguridad ciudadana, la apuesta nacional del Plan El Salvador Seguro representa una estrategia de abordaje integral de la violencia de forma interinstitucional e intersectorial a nivel nacional y local. Su implementación y desarrollo está iniciando una dinámica de organización territorial a través de los Comités Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) y la movilización de recursos encaminados a la prevención, lo que se vislumbra como una oportunidad para disminuir los niveles de inseguridad y violencia que afectan de manera directa a la niñez y adolescencia y contribuya a la reducción de la cantidad de homicidios de adolescentes.

En este marco, reforzar los programas orientados a la utilización del tiempo libre, el arte, la cultura, los deportes, la promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, el desarrollo de habilidades para la vida y el emprendedurismo son acciones estratégicas. De igual forma, las acciones de recuperación y dinamización de los espacios públicos. En este mismo esfuerzo, es necesario llegar a consensos políticos para la reforma de la Ley de Regulación y Control de Armas de fuego y Explosivos y Artículos Similares, con el fin de limitar el acceso y portación de armas de fuego, principal arma para el cometimiento de los homicidios en el país.

Por otra parte, se identifica la prevalencia de la violencia sexual y de los embarazos a temprana edad como una de las mayores afectaciones sobre la integridad personal de las niñas y las adolescentes y sobre su proyecto de vida. En respuesta a este fenómeno, el Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia requiere: fortalecer y ampliar los programas y servicios articulados que favorezcan entornos de protección (familia, escuela y comunidad); promover la Educación Integral de la Sexualidad; el desarrollo de campañas de concientización y sensibilización para la prevención de la violencia y la provisión de una mayor oferta de servicios de atención integral de la salud sexual y reproductiva.

Es de alta prioridad para el Sistema Nacional de Protección a Niñez y Adolescencia, crear programas y reforzar los programas especializados para la atención y protección de víctimas de los diferentes tipos de violencia que enfrentan las niñas, niños y adolescentes, estableciendo rutas de articulación para la atención y orientación de las víctimas, revisando la implementación de los ya existentes y especializando a los equipos técnicos que prestan dichos servicios.

Otro desafío para el Sistema Nacional de protección es la atención de la migración irregular. Este fenómeno históricamente presente en la dinámica de población salvadoreña ha incorporado en forma creciente a las niñas, niños y adolescentes, exponiéndolos a condiciones de riesgo y vulnerabilidad durante la

ruta migratoria. Atender esta situación requiere la implementación de políticas públicas que desalienten la migración mediante la generación de los medios de vida para las familias, oportunidades para el desarrollo y crecimiento de las niñas, niños y adolescentes en el ámbito comunitario así como el esfuerzo conjunto de diversos actores para garantizar las condiciones de respeto de sus derechos en la detención y acogida en los países de tránsito como en el retorno a su país de origen.

Si bien estas situaciones priorizadas, reclaman una acción inmediata y oportuna de prevención y protección debido a su magnitud y afectación en los derechos de la niñez y adolescencia, también existen otros garantías en las que el Estado salvadoreño debe avanzar para el cumplimiento de los derechos: continuar con la reducción de la mortalidad infantil y las afectaciones a la salud provocadas por la nutrición inadecuada (desnutrición y sobrepeso), el acceso universal al registro de nacimientos, la mejora de la calidad educativa, la erradicación de niñas y niños en las diferentes formas de trabajo infantil, la inclusión de la niñez y adolescencia con discapacidad como la generación de condiciones más dignas para las y los adolescentes sujetos a responsabilidad penal.

Adicionalmente, las mayores limitaciones se encuentran en las garantías para ejercer los derechos de participación. Son pocos los avances que se registran en las adecuaciones y mecanismos institucionales que permitan el ejercicio de petición y la incorporación de la opinión de niñas, niños y adolescentes en los espacios de participación ciudadana y en el ciclo de políticas públicas. Asimismo, es necesario avanzar en la promoción de la organización y libre expresión de la niñez y adolescencia y en el fortalecimiento de la institucionalidad que permita la protección de la niñez y adolescencia frente a la información nociva o inadecuada.

La atención de todas estas situaciones revela la necesidad de continuar en el proceso de conformación del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia y que este logre un funcionamiento coordinado y articulado a nivel nacional y local, fortalecer las capacidades técnicas

de sus operadores, completar la instalación y funcionamiento de los Comités Locales de Derechos, generar herramientas y mecanismos que faciliten su actuación y respuesta coordinada ante amenazas y vulneraciones a derechos de la niñez y adolescencia.

En esta última línea, es necesario mejorar los sistemas de captura, procesamiento y recolección de información unificando criterios de registro y procesamiento estadístico como el establecimiento de metodologías y herramientas que permitan compartir la información entre las instituciones que recolectan información sobre los derechos de la niñez y adolescencia ya sea a través de censos, encuestas o registros administrativos.

En este sentido, el CONNA está trabajando en la definición de un Sistema de información de niñez y adolescencia que promueva la coordinación y articulación institucional para la provisión de información relevante y oportuna para la toma de decisión de los actores del Sistema Nacional de Protección. Como parte de este Sistema, es necesario el análisis sobre los comportamientos de los indicadores de derechos y desarrollar investigaciones específicas que puedan ayudar a comprender la relación entre fenómenos como el embarazo y el suicidio en niñas y adolescentes.

Haciendo un balance sobre la situación de los derechos de niñez y adolescencia, por una parte, el Estado salvadoreño cuenta con avances en las garantías

relacionadas con los derechos de supervivencia, crecimiento y desarrollo, sin embargo enfrenta una serie de desafíos para garantizar los derechos de protección y participación. Ambas manifestaciones de la realidad de la niñez y adolescencia en El Salvador requieren de la voluntad y la disponibilidad política de los actores nacionales y tomadores de decisión para: fortalecer la institucionalidad del Sistema Nacional de Protección; continuar con las adecuaciones al marco legal y programático; mayores asignaciones presupuestarias para el diseño e implementación de programas especializados y servicios como el fortalecimiento de las capacidades técnicas de los operadores del Sistema para que las niñas, niños y adolescentes puedan gozar de manera integral y plena sus derechos.

Esta voluntad política debe ser producto de un acuerdo nacional explícito y sostenible con base en una reflexión sobre las condiciones de vida de la niñez y adolescencia en la dinámica social, el reconocimiento como personas sujetas de derechos y sobre el tipo de desarrollo que como país se pretende alcanzar. Implica revisar el nivel de compromiso que el Estado, la familia y la sociedad en su conjunto están asumiendo en la garantía de los derechos, la coherencia de dicho compromiso en los planes, programas y presupuestos públicos y privados, la evaluación sobre la pertinencia y eficacia de los esfuerzos que se han venido realizando, y la toma de decisión para cambiar lo que no contribuya para tal fin.

Bibliografia

Bibliografía

- Asamblea Legislativa,
17 de octubre de 2014, Ley Especial contra la Trata de Personas, D.L. N° 824, publicado en el Diario Oficial N° 213, Tomo N° 405 del viernes 14 de noviembre de 2014.
- 9 de abril de 2014, Ley de Desarrollo y Protección Social, D.L. N° 647, publicado en Diario Oficial N° 68, Tomo N° 403, del martes 9 de abril de 2014.
- 9 de agosto de 2013, Ley de Promoción, Protección y apoyo a la Lactancia Materna, D.L. N° 404, publicado en el Diario Oficial N° 145, Tomo N° 400 del lunes 12 de agosto de 2013.
- 25 de enero de 2012, Ley General de Juventud, D.L. N° 910, publicado en el Diario Oficial N° 24, Tomo N° 3945 del lunes 6 de febrero de 2012.
- 26 de marzo de 2009, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA, D.L. N° 839, publicado en el Diario Oficial N° 68, Tomo N° 383, del jueves 16 de abril de 2009.
- 1 de julio de 1999, Ley de Regulación y Control de Armas de fuego, Explosivos y Artículos Similares, D.L. N° 655, publicado en Diario Oficial N° 139, Tomo N° 344 del lunes 26 de julio de 1999.
- 19 de diciembre de 1996, Ley General de Educación, D.L. N° 917, publicado en el Diario Oficial N° 242, Tomo 333, del sábado 21 de diciembre de 1996.
- 27 de abril de 1994, Ley Penal Juvenil, D.L. N° 863, publicado en el Diario Oficial N° 106, Tomo 323, del miércoles 8 de junio de 1994.
- Buaiz Valera, Y.E. (2013). *Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia comentada de El Salvador*. Libro Primero (1ª. Reimpresión). San Salvador, El Salvador: Consejo Nacional de la Judicatura, Unidad Técnica del Sector de Justicia.
- Calles, M y Mayorga, M. (2012). Infancia y adolescencia en la prensa escrita, radio y televisión Salvadoreña. San Salvador, El Salvador: Universidad Tecnológica.
- Casa Presidencial de El Salvador (CAPRES). (2015). Cipotada el nuevo sitio web de El Salvador. <http://www.presidencia.gob.sv/cipotada-el-nuevo-sitio-web-para-la-ninez-de-el-salvador/>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2015). Violencia, Niñez y Crimen Organizado. Washington, D.C., Estados Unidos. Organización de Estados Americanos. Recuperado de: <http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/ViolenciaNinez2016.pdf>
- Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). (2006). *Código Penal de El Salvador Comentado*. Tomo 1. San Salvador, El Salvador: Unidad de Producción Bibliográfica y Documentación, Consejo Nacional de la Judicatura, Escuela de Capacitación Judicial. Recuperado de: http://www.cnj.gob.sv/images/documentos/pdf/publicaciones/codigopenal_tomoi.pdf
- Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA).
(2016). Responsabilidad penal adolescente: ¿Por qué un tratamiento diferenciado entre personas adultas y adolescentes? San Salvador, El Salvador: Recuperado de: http://www.conna.gob.sv/?page_id=1383#
- (2016a). *Memoria de Labores 2015-2016*. San Salvador, El Salvador: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y Unidad de Comunicaciones. Recuperada de: <http://api.gobiernoabierto.gob.sv/documents/141834/download>

(2015). *Manual de Calificación de Amenazas y Violaciones de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes*. San Salvador, El Salvador. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Recuperado de: <http://www.conna.gob.sv/?wpdmpo=manual-de-calificacion-de-amenazas-y-violaciones-de-derechos-humanos-de-ninos-ninas-y-adolescentes#>

(2015a). Memoria de Labores 2014-2015. San Salvador, El Salvador: Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional y Unidad de Comunicaciones. Recuperada de: <http://api.gobiernoabierto.gob.sv/documents/101197/download>

(2014). Política Nacional de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia 2013-2023. San Salvador El Salvador, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia.

(2013). Informe sobre el derecho de acceso a la justicia de niñez y adolescencia en El Salvador.

Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA) y Comité Técnico Coordinador del Sistema Nacional de Protección (CTC). (2016). *Orientaciones para el funcionamiento coordinado del Sistema de Protección Integral ante amenazas y vulneraciones de derechos a niñez y adolescencia por la violencia generada por maras y pandillas*. San Salvador, El Salvador: Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Secretaría Técnica del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia.

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC). (2015). *Plan El Salvador Seguro*. Resumen Ejecutivo. Recuperado de: <http://www.presidencia.gob.sv/wp-content/uploads/2015/01/El-Salvador-Seguro.pdf>

Constitución de la República, 1983. Decreto No. 38, publicado en el Diario Oficial el 16 de diciembre de 1983.

Corte Suprema de Justicia (CSJ). (2016). Movimiento ocurrido en las instancias con Competencia Penal Menores. Enero a diciembre 2015. San Salvador, El Salvador: Dirección de Planificación Institucional, Unidad de Información y Estadística. Recuperado de: <http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/6912/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20-%20A%C3%B1o%202015.pdf>

(2015). Movimiento ocurrido en las instancias con Competencia Penal Menores. Enero a diciembre 2014. San Salvador, El Salvador. Dirección de Planificación Institucional, Unidad de Información y Estadística. Recuperado de: [http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/5432/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20\(A%C3%B1o%202014\).pdf](http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/5432/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20(A%C3%B1o%202014).pdf)

(2014). Movimiento ocurrido en las instancias con Competencia Penal Menores. Enero a diciembre 2013. San Salvador, El Salvador. Dirección de Planificación Institucional, Unidad de Información y Estadística. Recuperado de: [http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/4435/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20\(A%C3%B1o%202013\).pdf](http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/4435/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20(A%C3%B1o%202013).pdf)

(2013). Movimiento ocurrido en las instancias con Competencia Penal Menores. Enero a diciembre 2012. San Salvador, El Salvador. Dirección de Planificación Institucional, Unidad de Información y Estadística. Recuperado de: [http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/4435/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20\(A%C3%B1o%202012\).pdf](http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/4435/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20(A%C3%B1o%202012).pdf)

ado de: [http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/3521/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20\(A%C3%B1o%202012\).pdf](http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/3521/Movimiento%20Ocurrido%20en%20Instancias%20con%20Competencia%20en%20Materia%20Penal%20Menores%20%20(A%C3%B1o%202012).pdf)

Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC). (2016). *Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples 2015*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://www.digestyc.gob.sv/index.php/temas/des/ehpm/publicaciones-ehpm.html?download=578%3Apublicacion-ehpm-2015>

(2016a). El Salvador. Situación del Trabajo Infantil 2015. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://www.digestyc.gob.sv/index.php/servicios/descarga-de-documentos/category/64-presentaciones.html?download=573%3Ael-salvador-situacion-del-trabajo-infantil-2015>

Fiscalía General de la República (FGR). (2014). *Alerta Ángel Desaparecido*. ¿Quiénes Somos? Sitio Web. <http://alertaangeldesaparecido.fgr.gob.sv/quienes-somos/>

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL). (2015). *Memoria de Labores 2014*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://api.gobiernoabierto.gob.sv/documents/98183/download>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

(2015). *Una mirada al sistema penal juvenil desde las estadísticas*.

(2014). *Informe de Situación de la niñez y adolescencia en El Salvador*. Transformando inequidades en oportunidades para todas las niñas, niños y adolescentes. San Salvador. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

(2012) *¿Qué es un sistema penal juvenil?* Argentina: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Recuperado de: https://www.unicef.org/argentina/spanish/que_es_el_sistema_penal_juvenil.pdf

(2008). *Declaración de UNICEF contra la violencia en niños, niñas y adolescentes en América Latina y El Caribe*. Recuperado de: [http://www.unicef.org/republicadominicana/UNICEF_Declaracion__contra__violencia\(1\).pdf](http://www.unicef.org/republicadominicana/UNICEF_Declaracion__contra__violencia(1).pdf)

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Asociación Civil Educación para todos (2007). *Propuestas para superar el fracaso escolar*. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: http://files.unicef.org/argentina/spanish/PROPUESTA_web.pdf

Gobierno de El Salvador (GOES).

(2015). *Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019*. El Salvador Productivo, educado y seguro. La Libertad, El Salvador: Gobierno de El Salvador, Secretaría Técnica y de Planificación.

(2016). *Gabinete de Gestión Social e Inclusión*. Informe segundo año de gobierno. <http://www.salud.gob.sv/download/informe-2-anos-de-gobierno-gabinete-de-gestion-social-e-inclusion/#>

Instituto de Medicina Legal (IML). (2016). *Reconocimientos realizados por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, practicados a personas fallecidas en hechos de violencia (homicidios), ocurridos en El Salvador, en el año 2015*. San Salvador, El Salvador: Corte Suprema de Justicia. Instituto de Medicina Legal. Recuperado de: <http://www.transparencia.oj.gob.sv/Filemaster/InformacionGeneral/documentacion/c-40/7065/HOMICIDIOS%20A%C3%91O%202015.pdf>

(2016b.) *Homicidios diciembre 2015*. Homicidios acumulados año 2015. San Salvador, El Salvador: Corte Suprema de Justicia,

Instituto de Medicina Legal. Recuperado de: [http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2016/01_ENERO/boletines/PRESENTACION_IML%20\(1\).pdf](http://www.csj.gob.sv/Comunicaciones/2016/01_ENERO/boletines/PRESENTACION_IML%20(1).pdf)

Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE). (2015). Rendición de cuentas junio 2014-mayo 2015. Recuperado de: http://www.injuve.gob.sv/wp-content/uploads/2016/04/Informe_Rendicion_final.pdf

Instituto Salvadoreño de Desarrollo Integral de la Niñez y Adolescencia (ISNA).

(2016). *Prontuario Estadístico Diciembre 2015*. San Salvador, El Salvador. <http://www.isna.gob.sv/ISNANEW/?wpdmpo=prontuario-estadistico-diciembre-2015>

(2015). Informe de rendición de cuentas. Junio 2014-mayo 2015. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://www.isna.gob.sv/ISNA/phocadownload/informe%20de%20rendicin%20de%20cuentas%2030.07.15.2.pdf>

(2014). *Informe de Rendición de Cuentas del ISNA*. Del período Junio 2009-Febrero 2014. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://api.gobiernoabierto.gob.sv/attachments/1439/download>

Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). (2015). *Informe de labores 2014-2015*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://api.gobiernoabierto.gob.sv/documents/104309/download>

(2012). *Política Nacional del Medio Ambiente*. San Salvador, El Salvador: Aprobada por Consejo de Ministros. Recuperada de: http://www.marn.gob.sv/descarga/politica-nacional-del-medio-ambiente-2012-3/?wpdmdl=16094&ind=Fz5nzwJUNucTtOMSaJbt4CcUBBdReOK2W38Zy-5UmMGUCnz3P0LicELDnxtZMNxSRzhAdTW7_AfnKlfxCYoeQ

Ministerio de Educación (MINED).

(2016). *Matrícula Inicial, estudiantes repetidores y con sobreedad; por grado, y sexo según centro educativo Año 2015*. Censo Escolar Inicial 2015 del Sistema Regular. San Salvador, El Salvador: Gerencia de Monitoreo y Evaluación, Departamento de Estadísticas Educativas. Recuperado de: https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/Bases%20de%20Censos/Matr%C3%ADcula_Repetidores_Sobreedad_2015.xlsx

(2016a). *Boletín Estadístico No.1. Centros Educativos de El Salvador*. Centros educativos que reportaron información al Censo Escolar Inicial 2015. San Salvador El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%201.pdf>

(2016b). *Boletín Estadístico No.10. Secciones Educativas*. Centros educativos que reportaron información al Censo Escolar Inicial 2015. San Salvador El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%2010.pdf>

(2016c). *Boletín Estadístico No.23. Educación Especial año 2015*. San Salvador El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%2023.pdf>

(2016d). *Boletín Estadístico No.4.Planta Docente*. Centros educativos que reportaron información al Censo Escolar Inicial 2015. San Salvador El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%204.pdf>

- (2016e). *Boletín Estadístico No.5.Estudiantes con discapacidad*. Centros educativos que reportaron información al Censo Escolar Inicial 2015. San Salvador El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%205.pdf>
- (2016f). *Boletín Estadístico No.8.Estudiantes pertenecientes a grupos indígenas*. Centros educativos que reportaron información al Censo Escolar Inicial 2015. San Salvador El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%208.pdf>
- (2016g). *Informe de Rendición de Cuentas, periodo junio de 2015 a mayo de 2016*. San Salvador El Salvador. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/index.php/descargas/send/715-informes-de-rendicion-de-cuentas/6258-informe-de-rendicion-de-cuentas-junio-2015-mayo-2016>
- (2016h). *Boletín Estadístico No. 12. Estudiantes aprobados y reprobados*. Centros educativos que reportaron información al Censo Escolar Final 2015. San Salvador, El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%2012.pdf>
- (2016i). *Boletín Estadístico No. 23. Educación Especial año 2015*. San Salvador, El Salvador: Coordinación de Servicios de Información y Divulgación. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/EstadisticaWeb/boletines/Boletin%20Estad%C3%ADstico%20N%C2%B0%2023.pdf>
- (2016j). Sitio Web del MINED. <https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/paquete-escolar>
- (2016k). Sitio Web del MINED. <https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-sociales/item/5480-programa-de-alimentacion-y-salud-escolar>
- (2016L). Sitio Web del MINED. <https://www.mined.gob.sv/index.php/noticias/item/8290-programa-presidencial-una-nina-un-nino-una-computadora-llega-a-11-mil-estudiantes-mas>
- (2016m). Sitio Web del MINED. <https://www.mined.gob.sv/index.php/programas-educativos/formacion-docente>
- (2015). *Ejes Estratégicos del Plan Nacional de Educación en Función de la Nación*. Educar para el desarrollo de capacidades productivas y ciudadanas. San Salvador, El Salvador.
- (2015a). *Educación de El Salvador en cifras 2009-2014*. San Salvador, El Salvador: Dirección de Planificación, Gerencia del Sistema de Estadísticas Educativas.
- (2015b). *Memoria de labores 2014-2015*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <https://www.mined.gob.sv/jdownloads/Memorias%20de%20Labores/2014%20-%202015%20Memoria%20de%20Labores%20MINED%202014-2015.pdf>
- (2014). Informe de rendición de cuentas institucional 2009-2014. Recuperado de: <http://www.transparencia.gob.sv/institutions/16/documents/79180/download>
- Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGOBTD) (2016). *Memoria de Labores 2015-2016*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://www.gobernacion.gob.sv>

sv/wp-content/uploads/2016/07/MEMORIA-DE-LABORES-MIGOBTD-2015-2016.pdf

gob.sv/archivos/vigi_epide2015/edad_consolidado522015.pdf

Ministerio del Interior Uruguay, UNFPA. (2012). *Protocolo Gestión de Información de Violencia Doméstica*. Uruguay: Informe de Consultoría realizado en el marco del proyecto firmado entre el Ministerio del Interior y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Recuperado de: https://www.minterior.gub.uy/genero/images/stories/protocolo_violencia_domestica.pdf

Ministerio de Salud (MINSAL).

(2016). *Informe de Labores 2015-2016*. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud. Recuperado de: <http://www.salud.gob.sv/download/informe-de-labores-2015-2016/#>

(2016a). *Boletín Epidemiológico Semana 52 2015*. San Salvador, El Salvador: Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Recuperado de: https://www.salud.gob.sv/archivos/vigi_epide2015/boletines_epidemiologicos2015/Boletin_epidemiologico_SE522015.pdf

(2016b). *Plan para la prevención del embarazo en adolescentes*. Inscripciones maternas por edad 2015. San Salvador, El Salvador. Ministerio de Salud. Recuperado de: https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/telesalud_2016_presentaciones/presentacion22042016/Plan-prevencion-Embarazo-Adolescentes-El-Salvador-2016.pdf

(2015). *Informe de Labores 2014-2015*. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud. Recuperado de: <http://w2.salud.gob.sv/servicios/descargas/documentos/func-start-down/1082/>

(2015a). *Datos epidemiológicos consolidados por grupos de edad y sexo*. Semana 52 2015. San Salvador, El Salvador: Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Recuperado de: https://www.salud.gob.sv/archivos/vigi_epide2015/edad_consolidado522015.pdf

(2014). *Informe de Labores 2013-2014*. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud. Recuperado de: <http://w2.salud.gob.sv/servicios/descargas/documentos/func-start-down/825/>

(2014a) *Datos epidemiológicos consolidados por grupos de edad y sexo*. Semana 1 a semana 53 de 2014. San Salvador, El Salvador: Dirección de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud. Recuperado de: http://www.salud.gob.sv/archivos/vigi_epide2014/edad_consolidado532014.pdf

(2014b). *Plan de Respuesta a la enfermedad febril de Chikungunya*. San Salvador, El Salvador: Dirección de Enfermedades Infecciosas del Ministerio de Salud. Recuperado de: https://www.salud.gob.sv/archivos/pdf/chikv/CHIKV_Plan-MINSAL.pdf

(2013). *Datos epidemiológicos consolidados por grupos de edad y sexo*. Semana 1 a semana 52 de 2013. San Salvador, El Salvador: Dirección de Vigilancia Sanitaria, del Ministerio de Salud. Recuperado de: http://www.salud.gob.sv/archivos/vigi_epide2013/edad_consolidado522013.pdf

(2012). *Lineamientos técnicos para el abordaje del dengue*. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud. Recuperado de: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/lineamientos/Lineamientos_tecnicos_para_el_abordaje_del_dengue_agosto_2012.pdf

(2011). *Política de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna*. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud. Recuperado de: http://asp.salud.gob.sv/regulacion/pdf/politicas/politica_proteccion_promocion_lactancia_materna.pdf

- Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto Nacional de la salud (INS). (2015). *Maternidad y Unión en niñas y adolescentes: Consecuencias en la vulneración de sus derechos El Salvador 2015*. Primera Lectura de datos. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud.
- Ministerio de Salud (MINSAL), Instituto Nacional de la Salud (INS), Dirección General de Estadística y Censos (DIGESTYC) y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2015). *Encuesta Nacional de Salud, 2014*. Resultados principales. San Salvador, El Salvador: Ministerio de Salud, Instituto Nacional de la Salud. Recuperado de: <http://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2780/download/39531>
- Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP).
- (2014). *Memoria de labores 2013-2014*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://www.seguridad.gob.sv/download/memoria-de-labores-2013-2014/#>
- (2013). *Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia*. San Salvador, El Salvador. Gabinete de Gestión para la Prevención de la Violencia.
- Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).
- (2015). *Estadísticas de trabajo relacionadas a niñez y adolescencia 2012-2015*. San Salvador. Oficina de Estadística e Informática
- (2015a). *Hoja de ruta para hacer de El Salvador un país libre de trabajo infantil y sus peores formas*. Programación 2015-2017. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: http://white.lim.ilo.org/ipec/documentos/hoja_ruta_els.pdf
- (2014). *Acuerdo N°241. Listado de actividades y trabajos peligrosos en los que no podrán ocuparse niños, niñas y adolescentes*. San Salvador, El Salvador.
- Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE).
- (2014). *Informe de El Salvador, dirigido a la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer sobre comunicación presentada por IPAS Centroamérica*. San Salvador, El Salvador.
- (2011). *Migración Internacional, Niñez y Adolescencia en El Salvador*. San Salvador, El Salvador: Viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior. Afán Consultores Internacionales y FUNDAUNGO. Recuperado de: <http://www.fundaungo.org.sv/pdf/2012/migracioninternacional.pdf>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). (2010). *El Derecho a la alimentación adecuada*. Folleto informativo N°34. Ginebra, Suiza. Recuperado de: <http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet34sp.pdf>
- Organización Internación del Trabajo (OIT).
- (2013). *Protocolo interinstitucional para el retiro y prevención de niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil, incluyendo mecanismos de referencia y Coordinación entre el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y otros actores clave*. San Salvador, El Salvador: Proyecto Erradicación del Trabajo Infantil en El Salvador a través del empoderamiento económico y la inclusión social ELS/10/50/USA.
- (1999). Convenio N° 182 sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Ginebra.
- (1999^a). Recomendación No. 190.
- (1976). Convenio N° 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo. Ginebra.
- (1973). Recomendación N° 146.

Organización Mundial de la Salud (OMS).

(2014). Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014. Ginebra, Suiza. Recuperado de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/131953/1/9789240692695_spa.pdf

(2000). *Prevención del suicidio un instrumento para médicos generalistas*. Ginebra, Suiza. Departamento de Salud Mental y Toxicomanías de la Organización Mundial de la Salud. WHO/MNH/MBD/00.1. Recuperado de: http://www.who.int/mental_health/media/general_physicians_spanish.pdf

(2001). *Prevención del suicidio un instrumento para docentes y demás personal institucional*. Ginebra, Suiza. Departamento de Salud Mental y Toxicomanías de la Organización Mundial de la Salud. WHO/MNH/MBD/00.3. Recuperado de: http://www.who.int/mental_health/media/en/63.pdf

Organización de las Naciones Unidas (ONU)

(2010). *Directrices sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños*. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución de la Asamblea General 64/142 (A/RES/64/142). Recuperado de: <http://www.unicef.org/spanish/videoaudio/PDFs/100407-UNGA-Res-64-142.es.pdf>

(1990). *Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad*. Asamblea General de las Naciones Unidas. Resolución General 45/113 de diciembre de 1990. Recuperado de: <http://www.isna.gob.sv/ISNA/phocadownload/28.%20Reglas%20NU%20para%20los%20Menores%20Privados%20de%20Libertad.pdf>

(1989). *Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)*, Resolución 44/25 de la Asamblea General, 20 de noviembre. Ginebra, Suiza.

(1986). *Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo*.

(1985). *Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de Menores*. Ginebra: Asamblea General de las Naciones Unidas. Recuperado de: <https://www.unicef.org/panama/spanish/7972.htm>

(1966). *Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales*. Asamblea General de las Naciones Unidas.

Organización Panamericana de la Salud (OPS).

(2012). Familias Fuertes: prevención de conductas de riesgo de adolescentes. San Salvador, El Salvador. Organización Mundial de la Salud. Oficina Regional para las Américas. Organización Panamericana de la Salud en El Salvador. Sitio Web: http://www.paho.org/els/index.php?option=com_content&view=article&id=502:familias-fuertes-prevencion-conductas-riesgo-adolescentes-&Itemid=291

(2003). *Informe mundial sobre la violencia y la salud*. Washington, D.C. Estados Unidos: Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud. Recuperado de: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112670/1/9275315884_spa.pdf

Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ACCESS, BASICS, CORE Group y SNL/Save The Children/USA. (2007) *Reducción de la Mortalidad y Morbilidad Neonatal en América Latina y el Caribe*. Un consenso estratégico interinstitucional. Guatemala: Organización Panamericana de la Salud, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, ACCESS, BASIC, Core Group y la Iniciativa Salvando la Vida de las y los Recién Na-

cidos. Recuperado de: <http://publicaciones.ops.org.ar/publicaciones/piezas%20comunicacionales/cdcofesa/pdf/iaiepiRedMMNALyC.pdf>

Procuraduría General de la República (PGR)

(2015). Estadísticas de niñez beneficiada en fase administrativa. San Salvador, El Salvador: Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia. Recuperado de: <http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/descargables/gestion-estrategica/estadisticas/cfm/2015/Ni%C3%B1esBeneficiada-Meses.pdf>

(2015a). Solicitudes recibidas en fase administrativa por sexo y edad de solicitante. San Salvador El Salvador: Unidad de Defensa de la Familia, Niñez y Adolescencia. Recuperado de: <http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/descargables/gestion-estrategica/estadisticas/cfm/2015/SesoEdadSolicitante-Meses.pdf>

Policía Nacional Civil (PNC).

(2015). *Estadísticas de delitos contra niñas, niños y adolescentes 2015*. San Salvador: Subdirección General, Centro de Operaciones y Servicios Central.

(2015a). *Informe de resultados de la gestión policial durante el periodo: junio 2014-mayo 2015*. Recuperado de: http://www.transparencia.pnc.gob.sv/portal/page/portal/transparencia/gestion_estrategica/memoria/Informe%20de%20resultados%20PNC%20jun%202014%20may%20202015_0.pdf

(2013). *Informe de rendición de cuentas junio 2009 a mayo 2013*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: http://www.transparencia.pnc.gob.sv/portal/page/portal/transparencia/gestion_estrategica/informes/Informe%20rendicion%20cuentas%20Jun%202009%20-%20May%202013.pdf

Red Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en El Salvador (RENAES). (2016). Página Web de la

Red Nacional de la Niñez y Adolescencia. <http://renaesenaccion.org/>

Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN).

(2016). *Informe de Rendición de cuentas junio 2015-mayo 2016*. San Salvador, El Salvador: Registro Nacional de las Personas Naturales, Unidad de Comunicaciones. Recuperado de: <https://www.rnpn.gob.sv/download/informe-rendicion-cuentas-junio-2015-mayo-2016-formato-pdf/#>

(2015). *Informe de Rendición de Cuentas junio 2014-mayo 2015*. San Salvador, El Salvador.. Recuperado de: <https://www.rnpn.gob.sv/download/informe-de-rendicion-de-cuentas-junio-2014-mayo-2015-pdf/#>

Saad, P., Miller, T., Martínez, C. y Holz, M. (2012). *Juventud y Bono Demográfico en Iberoamérica*. (2ª. Edición). Madrid, España: Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ) y el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Disponible en: http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/1495/1/S2012103_es.pdf

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP). (2015). *Informe Ejecutivo de Gobierno 2015*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <http://www.secretariatecnica.gob.sv/Descargar/6448/>

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) y Ministerio de Economía, Dirección General de Estadística y Censos (MINEC-DIGESTYC) (2015). *Medición multidimensional de la pobreza*. El Salvador. San Salvador. Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia y Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Estadística y Censos.

Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia (STPP) y Fondo de las Naciones Unidas para

la Infancia (UNICEF). (2014). *La niñez y la adolescencia en El Salvador frente a sus garantías sociales de ciudadanía. Un análisis multidimensional de sus privaciones*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: https://www.unicef.org/elsalvador/Privaciones_en_la_NNA.pdf

(2014a). *Protección social de la niñez y la adolescencia en El Salvador: avances, desafíos y oportunidades para la construcción de un sistema integrado*. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: https://www.unicef.org/elsalvador/Proteccion_social_NNA.pdf

(2015). *Medición Multidimensional de la Pobreza en El Salvador*. Una mirada a las familias con niñas, niños y adolescentes. San Salvador, El Salvador. Recuperado de: <https://>

www.unicef.org/elsalvador/Medicion_multidimensional_de_la_pobreza_compressed1.pdf

Tamargo, M. (2014). *El Sub-registro de nacimientos: Logros y desafíos*. Exposición en el Foro Regional de Buenas Prácticas para la Gestión de la Identidad. El Salvador, 29 de octubre de 2014. Recuperado de: <http://myslide.es/documents/el-sub-registro-de-nacimientos-logros-y-desafios-mg-maria-del-carmen-tamargo-el-salvador-29-de-octubre-de-2014.html>

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). (2016). *Mapa de Embarazos en Niñas y Adolescentes en El Salvador 2015*. (1era. Edición), San Salvador, El Salvador.

Impreso en El Salvador por:
Editorial e Impresora Panamericana



WWW.CONNA.GOB.SV



Tel. 2511-5400



[/CONNA.EL.SALVADOR](https://www.facebook.com/CONNA.EL.SALVADOR)



[@CONNA_ES](https://twitter.com/CONNA_ES)